

La seguridad jurídica

Los derechos humanos en la jurisprudencia mexicana

Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
M É X I C O

RIGOBERTO GERARDO ORTIZ TREVIÑO

LA SEGURIDAD JURÍDICA. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA JURISPRUDENCIA MEXICANA



MÉXICO, 2004

Primera edición: octubre, 2004
ISBN: 970-644-398-3

© **Comisión Nacional**
de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469,
esquina Luis Cabrera,
Col. San Jerónimo Lídice,
C. P. 10200, México, D. F.

Diseño de portada:
Flavio López Alcocer

Impreso en México

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

La tradición judicial y las garantías constitucionales 9

CAPÍTULO
JURISPRUDENCIA, DERECHOS HUMANOS
Y GARANTÍAS INDIVIDUALES

I. El derecho de los tribunales 17
II. La interpretación judicial 21
III. Los derechos humanos 34
IV. Derechos humanos y garantías individuales 44
V. La jurisprudencia como fuente formal del derecho en el derecho positivo mexicano 51
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la "Jurisprudencia" en el derecho positivo mexicano 68
b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre el concepto de "Garantías individuales" en el derecho positivo mexicano 89

CAPÍTULO 2
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES
DE SEGURIDAD JURÍDICA

I. La seguridad jurídica in género 125
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica in género 128
II. La garantía de legalidad in género 142
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Legalidad in género 142
III. La garantía de legalidad, fundamentación y motivación del acto de autoridad 150

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Legalidad; "Los actos de molestia in género" 154
b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Legalidad concretada en las debidas Fundamentación y Motivación 156
IV. IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES 173
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de irretroactividad de la ley 179
V. GARANTÍA DE LEGALIDAD, LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY 213
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Garantía de legalidad, "la exacta aplicación de la ley" 217
VI. GARANTÍA DE AUDIENCIA 231
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Garantía de Audiencia 233
VII. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL DERECHO PENAL 240
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en materia penal, "el auto de formal prisión" 244
b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la garantía de non bis in idem 273
c) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en los juicios penales 288
d) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en materia penal internacional 315
e) *Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en materia de Órdenes de aprehensión o detención* 340
VIII. LAS GARANTÍAS DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, CASOS DEL EJERCICIO DE LAS ÓRDENES DE CATEO Y LAS VISITAS DOMICILIARIAS 373
a) Selección de tesis y jurisprudencia sobre inviolabilidad del domicilio; órdenes de cateo 374
b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Seguridad Jurídica en materia de visitas domiciliarias 383
IX. INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS 393
a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre inviolabilidad de las comunicaciones privadas 394
X. LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LA SEGURIDAD JURÍDICA 397
a) Selección de la Doctrina Jurisprudencial en torno a la Suspensión de Garantías Constitucionales 399

EPÍLOGO 407
BIBLIOGRAFÍA 417

INTRODUCCIÓN

LA TRADICIÓN JUDICIAL Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

A diferencia de otras tradiciones y sistemas constitucionales, la historia del derecho público en México ha contando como hilo conductor la defensa de los derechos humanos (en sus diversas acepciones como derechos individuales, derechos del hombre, garantías individuales, etcétera).[1] Este itinerario se ha dado a través de la consagración de diversas garantías constitucionales y de una tortuosa búsqueda de la definición del sistema de control constitucional más idóneo. Salvo el periodo de vigencia de las Siete Leyes constitucionales y las Bases Orgánicas de 1843, el constituyente mexicano siempre ha tendido a conceder al poder judicial el papel protagónico como órgano controlador de la constitucionalidad. En consecuencia, se ha convertido en un natural defensor de los derechos individuales y eventualmente sociales, tarea que se fortaleció con la maduración del juicio de amparo. En efecto, aquél ha sido el procedimiento paradigmático para hacer valer los derechos del gobernado cuando éstos se han visto vulnerados por leyes o actos de autoridad. El juicio de amparo ha sido el resultado de una fusión histórica

[1] Elder Witt sostiene, respecto del papel de la Suprema Corte de Justicia y los derechos individuales en los Estados Unidos de América que: "El papel de la Suprema Corte de Justicia como guardiana de los derechos y libertades del individuo es nuevo, es una responsabilidad que adoptó en el siglo XX.

Durante la mayor parte de su historia, la Suprema Corte tuvo muy poco que decir acerca de las garantías a la libertad individual que otorga la Constitución. En su preocupación por definir las relaciones entre la nación y los estados y entre el gobierno y el comercio, la Corte tuvo pocas oportunidades y menos razones para ocuparse de los derechos individuales". Elder Witt, *La Suprema Corte de Justicia y los derechos individuales*. 2a. ed. México, Gernika, 1995, p. 7. Historia muy diferente es la del constitucionalismo francés, en el que son los *Droits de l'Homme et du citoyen* los que fundamentan el surgimiento de modelo de Estado moderno.

de importantes subtradiciones jurídicas.[2] El genio de Crescencio Rejón radicó en saber integrar la figura del amparo virreinal con el control constitucional moderno, el cual, en virtud del criterio doctrinal contenido en la histórica resolución Marbury *vs.* Madison de 1803 de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, establecía tal función en los órganos jurisdiccionales.[3] Crescencio Rejón, como jurista de su tiempo, había estudiado las Partidas del siglo XIII castellano, la Recopilación de las Leyes de los Reinos de las Indias de 1680 y, desde luego, una considerable cantidad de fuentes de derecho comparado, como la ya mencionada resolución de Marshall. Cuando redactó el artículo 53[4] del proyecto constitucional yucateco de 1840 había sintetizado con admirable perfección la fórmula jurídica del amparo, además de retomar el concepto francés de garantías individuales, aquel que se explicitó en 1789 en el artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.[5] En la breve vigencia que tuvo la renovada Constitución Federal de 1824 de la mano del Acta de Reformas de 1847, el amparo veía la luz a nivel federal,[6] la invasión estadounidense impidió que se generasen aportaciones en materia de interpre-

---

[2] En este sentido, es de obligatoria consulta el excelente trabajo de José Luis Soberanes Fernández y Faustino Martínez Martínez titulado *Apuntes para la historia del juicio de amparo*. México, Porrúa, 2002, 383 pp.

[3] *Vid.* Luis Sánchez Agesta, *Curso de derecho constitucional comparado*. 7a. ed. rev. (reimp.). Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1988, p. 190.

[4] "Corresponde a este Tribunal (la Suprema Corte de Justicia): 1o. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución; o contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas" Cit. por Emilio Rabasa, *El artículo 14. Estudio constitucional y el juicio constitucional, orígenes, teoría y extensión*. 6a. ed. México, Porrúa, 1993, p. 345.

[5] "Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución". Cit. por Javier Hervada, Javier Zumaquero y José María Zumaquero, *Textos internacionales de derechos humanos*, t. 1 (1776-1976). Pamplona, EUNSA, 1992, p. 52.

[6] Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de mayo de 1847.

"Artículo 25. Los tribunales de la federación ampararán a cualquiera habitante de la república en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motive". Cit. por E. Rabasa, *op. cit.*, p. 350.

tación judicial constitucional. La Constitución de 1857, de nuevo consagra el juicio de amparo, puliendo las aristas necesarias para dejar la obra concluida.[7] Sobre todo, a partir de 1869 comenzará a cultivarse la doctrina judicial tras la histórica resolución del caso de amparo promovido por Miguel Vega.[8] La ejecutoria del 20 de julio de 1869 sentó muchos precedentes. En principio, conseguir la implícita inconstitucionalidad del artículo octavo de la ley de amparo vigente, aquel que contundentemente decía que "no es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales". Era la Ley de Amparo de 1869,[9] que fue objeto de tanto aprecio por Ignacio Vallarta. Otro precedente (y para nuestros propósitos es el más importante) fue decantar doctrina judicial, producto de la interpretación de la constitución por parte del máximo tribunal de la nación. La ley de amparo de 1882[10] establecerá ya un sistema para organizar las sentencias judiciales que pudieran servir como precedentes de otros juicios. Es decir, se asimila en nuestro derecho el concepto de jurisprudencia como aquel conjunto de resoluciones judiciales con fuerza obligatoria. Ahora bien, tales sentencias (ejecutorias) eran la culminación de los juicios de amparo, en otras palabras, resoluciones a conflictos suscitados por actos o leyes de autoridad violatorios de garantías individuales. Con la Constitución de 1917 y sus subsecuentes leyes de amparo, la jurisprudencia logrará su forma definitiva, amén de que, en su con-

---

[7] "Artículo 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados.

III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.

Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que motivare". Cit. por E. Rabasa, *op. cit*., p. 353.

[8] Manuel González Oropeza, "El amparo en negocios judiciales. El caso de Miguel Vega", en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, t. X. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 385-397.

[9] *Vid.* José Barragán Barragán, *Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869*. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987, pp. 314-318.

[10] *Vid.* José Barragán Barragán, *Proceso de discusión de la ley de amparo de 1882*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, 653 pp.

tenido textual, podrá notarse una considerable cantidad de doctrina jurisdiccional en torno a la protección de las garantías individuales. Prácticamente, una vez en vigor la constitución de 1917, podemos hallar en la Quinta Época jurisprudencial, tesis y jurisprudencias que, de alguna manera, apuntalan la interpretación conceptual fundada en los artículos 1o., 103 y 107 de la ley fundamental, quedando claro, así, que el objeto del juicio de amparo son las garantías individuales. Eso fue el disparo de salida de una larga trayectoria jurisprudencial, misma que ha transcurrido de hacer meras precisiones conceptuales sobre normas jurídicas, ya fundamentales o secundarias, hasta alcanzar una anhelada meta en la historia jurisdiccional contemporánea: devolverle al juez la capacidad de crear derecho a través de la sentencia, y por consiguiente, romper, de una vez por todas, con el juez autómata que había propuesto Montesquieu en el siglo XVIII.[11] Difícil anhelo, pues debía alcanzarse sin quebrantar, a su vez, el principio de legalidad, punto de partida, sencillamente, del moderno Estado de Derecho. En efecto, de éste su raíz se encuentra precisamente en la constitución, norma suprema que persigue limitar el ejercicio del poder mediante la explícita definición de facultades y competencias de los órganos públicos y la garantía de proteger los derechos individuales así como promover los sociales.

El juzgador no debe ser un sujeto arbitrario, de hecho su capacidad de discernimiento debe partir de la legalidad, su resolución no sólo debe ser motivada, sino fundamentada. Empero, esto no obsta para que se pueda desarrollar cierta capacidad argumentativa, más creativa por ende. Basta pensar en los casos en que se interpreta una norma secundaria o algún instrumento de derecho internacional que violentan la constitución. Aun así, tal tarea sería limitada. Bien definía Celso al derecho como el *ars boni et aequi*.[12] Por ello el adecuado ejercicio del *arbitrium* judicial va más allá de una aplicación acrítica de la ley, so pretexto del rígido mandato de la virtud cardinal de la justicia. La misericordia, la liberalidad, la equidad, la epiqueya, etcétera, son otras virtudes que le pertenecen al juzgador en razón de su grave tarea. Cuando Von Ihering criticaba a sus antecesores practicantes de la jurisprudencia conceptual propuso que el juez indagase en los

[11] "En los Estados despóticos no hay leyes: el juez es su propia regla. [...] En el gobierno republicano es propio de la naturaleza de la constitución que los jueces sigan la letra de la ley. No hay ciudadano contra el cual se pueda interpretar ninguna ley cuando se trata de sus bienes, de su honor o de su vida". Montesquieu, *Del espíritu de las leyes*. Trad. de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Barcelona, Altaya, 1993, Primera Parte, Libro IV, Capítulo III, p. 64.

[12] Dig, I, 1.

intereses en conflicto, dando así un salto cualitativo.[13] Sin embargo, la jurisprudencia, que como virtud del saber hacer conforme a Derecho, fue enfrentándose con más problemas complejos, como la realidad misma suele ofrecerlos, fue requiriendo e incorporando más riqueza doctrinal. Así la tópica ha sido rememorada por Theodor Viehweg,[14] la argumentación jurídica por Robert Alexy[15] y un gran número de autores han resaltado el valor de los principios generales del derecho en materia de la integración de la ley. Desde la Quinta Época de la jurisprudencia mexicana puede notarse cierta evolución, aunque el giro copernicano se dio con la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de las cruciales reformas constitucionales de diciembre de 1994. De ahí que explorar el tratamiento jurisprudencial en torno a la protección de los derechos humanos no sólo sea una tarea de gran trascendencia para aquel que se involucra en la defensa de tales derechos, sino que también sea un quehacer apasionante para el estudioso.

[13] *Vid.* Philipp Heck, *El problema de la creación del derecho*. Trad. de Manuel Atienza. Granada, Comares, 1999, p. 21.

[14] *Vid.* Valentín Petev, *Metodología y ciencia jurídica en el umbral del siglo XXI*. Trad. de Luis Villar Borda. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, 156 pp.

[15] *Vid.* Hernando Nieto, *Deconstruyendo la legalidad, ensayos de teoría legal y teoría política*. 2a. ed. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002, 289 pp.

CAPÍTULO 1
JURISPRUDENCIA, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES

I. El derecho de los tribunales

El derecho vivo es el que se palpa en el foro. Uno de los actos de justicia por excelencia es el que se concreta en la sentencia.[1] Decía Rodolfo Luis Vigo: "Desde el constituyente al juez, en un tiempo y en un espacio determinados, el derecho se va poniendo, ajustando relaciones y definiendo conductas como obligatorias, prohibidas o permitidas jurídicamente".[2] La sentencia ajusta relaciones jurídicas específicas dentro de un tiempo y espacio determinados. El romanista Álvaro d'Ors bien afirma: "La función del juez es la de declarar el *ius* [...] (*iu-dicare, iudicium*)".[3] Por ende, la sentencia no es el resultado de una operación mecánica. Nada más lejos que el accionar de aquel juez autómata del que hablaba Montesquieu.[4] La sentencia se in-

---

[1] Los sistemas jurídicos vigentes en Iberoamérica, herederos de la tradición del *civil law*, han implicado una serie de limitaciones graves respecto al estudio del derecho. La doctrina se ha constreñido (con honrosas excepciones) a la exégesis de la letra de la ley, a la manera de aquella escuela cuya actividad se ceñía a la lectura y análisis conceptual de los artículos del Código Civil de Napoleón (1804). "En los países latinoamericanos con sistemas legales derivados del derecho romano y europeo continental, donde la ley es la principal fuente de derecho, persiste la idea de que el juez es un agente instrumental cuya función consiste simplemente en aplicar la norma 'objetiva, apolítica y neutral' a un caso concreto. En esta cultura legal tradicional en América Latina, el estudio del derecho se ha llevado a cabo principalmente a través del estudio de las normas escritas". Centro de Derechos Reproductivos, *Cuerpo y derecho, legislación y jurisprudencia en América Latina*. Bogotá, Temis, 2001, p. 1.

[2] Rodolfo Luis Vigo, *Los principios jurídicos*. Buenos Aires, Depalma, 2000, p. IX.

[3] Álvaro d'Ors, *Derecho privado romano*. 3a. ed. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1991, p. 43.

[4] *Vid*. Gustav Radbruch, *Introducción a la filosofía del derecho*. 7a. Reimp. México, FCE, 2000, p. 75.

tegra, en parte, mediante la coincidencia de lo fáctico y lo previsto en la ley. Hemos dicho en parte, ya que la naturaleza del razonamiento judicial (una específica *ratio iuris*), genera un considerable contenido doctrinal. En este sentido, Abelardo Torré precisa:

> [...] puede afirmarse que doctrina jurisdiccional es el conjunto de argumentos científico-jurídicos invocados por el juzgador en la sentencia, para fundar una determinada interpretación de la norma o normas aplicadas al caso, o bien para fundar, cuando no haya norma que prevea la situación planteada, la integración del ordenamiento jurídico, mediante una norma que se creará con esa finalidad.[5]

En este orden de ideas, de manera muy general, comprendemos a la jurisprudencia como el derecho derivado de las sentencias emitidas en los tribunales.[6] Es, en consecuencia, una fuente formal del derecho, que además posee una gran riqueza doctrinal. Esta última, desafortunadamente poco explorada, en el caso de nuestro sistema jurídico.[7] Walter Frisch Philipp comentaba que: "La doctrina mexicana no se contactó con la práctica de la jurisdicción mexicana para que hubiera descrito y analizado sus resoluciones con objeto de deducir de las mismas, rasgos metodológicos característicos. Falta, por lo tanto, la cercanía de la doctrina a la vida jurídica real..."[8] Opinión semejante, ya concretada a la interpretación de la Constitución a cargo del Poder Judicial de la Federación, es la siguiente de Jorge Ulises Carmona Tinoco:

> Es lamentable que en nuestro país sean muy pocos los juristas que se percaten de la trascendencia de la interpretación de la Constitución, y más grave aún, quienes sabiendo esto confían interpretándola como si fuera cualquier tipo de normas, siendo la norma de normas, la ley fundamental. Esto, auna-

---

[5] Abelardo Torré, *Introducción al derecho*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1999, p. 384.

[6] O, en síntesis el "precedente jurisdiccional obligatorio para la resolución de casos futuros..." Miguel Carbonell, "Sobre el concepto de jurisprudencia en el Sistema Jurídico Mexicano", en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, p. 771.

[7] "El estudio de la jurisprudencia como fuente del derecho y como norma jurídica plenamente aplicable dentro del ordenamiento jurídico, ha quedado relegado hasta hace muy pocos años a los manuales y tratados que se dedican a estudiar el juicio de amparo y a algunas obras de introducción al estudio del derecho". *Idem*.

[8] Walter Frisch Philipp y José Arturo González Quintanilla, *Metodología jurídica, en jurisprudencia y legislación*. 3a. ed. México, Porrúa, 2000, p. 146.

> do a la censurable costumbre de acudir al procedimiento "dificultado" de reforma cada vez que se pretende adecuar la Constitución a la realidad, ha provocado que nuestro país sea un desierto por cuanto a estudios sobre interpretación constitucional se refiere; sin embargo, se debe reconocer el esfuerzo de aquellos que no se han dejado llevar por la inercia imperante y han hecho importantes aportaciones.[9]

En efecto, el panorama no es tan sombrío. De manera reciente fue publicado con muy felices resultados el libro *Las garantías individuales en México* del maestro Ariel Alberto Rojas Caballero. Obra extraordinaria, que ya aporta un análisis minucioso a la jurisprudencia que ha interpretado el contenido y alcance de las garantías individuales. Tal trabajo se ha visto enriquecido con el punto de vista propio de un investigador que además de su experiencia académica es también Juez de Distrito, luego de un remarcable trayecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el presente trabajo se trata de conocer la doctrina de los derechos humanos contenida en la jurisprudencia reconocida como fuente formal del derecho positivo mexicano. Sin dejar de admitir que esta modesta aportación será deudora de la referencia metodológica que generosamente ha publicado el maestro Rojas Caballero.[10]

En principio se abordarán los aspectos teóricos más relevantes sobre la garantía objeto de estudio (que en esta ocasión se ceñirá a la seguridad jurídica) haciendo referencia a los conceptos doctrinales de mayor importancia que ha aportado el Poder Judicial de la Federación. A cada estudio breve se le adicionará una selección de la doctrina jurisprudencial considerada por nuestro modesto criterio como más trascendente.[11] Ya se ha precisado líneas arriba que se parte de una determinada acepción respecto del

---

[9] Jorge Ulises Carmona Tinoco, *La interpretación judicial constitucional*. México, CNDH / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, p. 16.

[10] Ariel Rojas Caballero, *Las garantías individuales en México, su interpretación por el Poder Judicial de la Federación*. México, Porrúa, 2002, p. 668.

[11] Es difícil aproximarse al análisis argumentativo del juzgador. La jurisprudencia mexicana la podemos conocer a través de las tesis sintetizadas, o, en el mejor de los casos, contaremos con el texto de las ejecutorias. Pero el conocimiento del expediente, implica sortear una considerable cantidad de obstáculos. Amén de la extensión de muchos expedientes, en algunos casos, para solicitar el material archivado, había que justificar el interés jurídico sobre el juicio específico. Sin embargo, el análisis conceptual y su itinerario es posible, de ahí que en ello nos concentremos. Al respecto, Raúl Plascencia Villanueva comenta: "la información disponible a nivel de resoluciones de nuestro máximo tribunal resulta peculiar en com-

término "jurisprudencia", es decir, ésta consiste en "el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales".[12] La materia objeto de análisis corresponde a las "tesis" y "jurisprudencias"[13] que reúnen, por tanto, los requisitos explicitados en los artículos 192[14] y correlativos de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, recopilados a su vez en el *Semanario Judicial de la Federación* en el periodo 1917-2003.[15] Desde luego, en virtud de la naturaleza del presente estudio,

---

paración con lo que sucede en otras latitudes; en el estado actual de cosas, lo único que resulta factible de revisar es una breve síntesis que bajo el calificativo de *sumario* publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su órgano de difusión, situación que origina problemas a nivel del análisis de la jurisprudencia en México, en virtud de no ser posible profundizar en la resolución adoptada por ésta y ni siquiera analizar con profundidad la técnica que se utiliza en la resolución de controversias". Raúl Plascencia, *Jurisprudencia*. México, MacGraw-Hill / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. IX-X.

[12] Eduardo García Máynez, *Introducción al estudio del derecho*. 52a. ed. México, Porrúa, 2001, p. 68.

[13] La doctrina distingue entre *jurisprudencia* y *tesis* aislada: "siendo claro el distintivo de una tesis y una jurisprudencia el grado de evolución de la resolución, es decir, si es sólo una tesis aislada, o bien, si existen cinco precedentes que puedan conformar una jurisprudencia, o también si es la resultante de una solución de contradicción de tesis y por ende puede configurar una jurisprudencia". R. Plascencia, *op. cit.*, p. 8.

[14] "La jurisprudencia obligatoria del Poder Judicial de la Federación se crea de tres modos: mediante reiteración de criterios de la Suprema Corte, en sus salas y de los tribunales colegiados; mediante las resoluciones que dicte la Corte en procedimientos para dirimir las contradicciones de tesis entre los tribunales colegiados; y mediante los considerandos que funden los puntos resolutivos de las sentencias que pronuncie la Suprema Corte respecto de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias a que se refiere el artículo 105 constitucional". Héctor Fix-Zamudio y Héctor Fix Fierro, *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada*. 16a. ed. México, Porrúa / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, t. IV, p. 9. No obstante que en el apartado final de este capítulo se profundizará al respecto, por lo pronto, véase también el artículo 94 constitucional:

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. [...] La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación.

[15] El Apéndice ha sido recientemente publicado en CD-ROM por la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, tenemos acceso al paquete *IUS* 2001, CD-ROM Jurisprudencia y tesis

el análisis se concentrará a partir del 1 de junio de 1917,[16] es decir, desde la Quinta Época, ya que esto permitirá contar con una visión generalizada sobre las tendencias ideológicas o doctrinales de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, como intérpretes de la Constitución vigente. Con objeto de facilitar el trabajo de consulta del amable lector, al término de cada selección de material jurisprudencial se hará una breve sinopsis de las aportaciones doctrinales más importantes. Valga aquí hacer una mención de gratitud al doctor Luis García López-Guerrero por su oportuna sugerencia.

II. La interpretación judicial

En palabras de Demófilo de Buen, la interpretación jurídica es la actividad "consistente en las operaciones necesarias para averiguar el sentido jurídico del texto de una norma y obtener las disposiciones contenidas explícita

---

aisladas IUS, publicado en mayo de 2001, también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, de ninguna manera excluye la consulta de fuentes impresas, o doctrinales, con el propósito de especificar terminología y desentrañar el espíritu del texto de las tesis materia de análisis. Al respecto del Apéndice, precisamos que: "Esta obra se elaboró recopilando la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito, desde el 1ro. de junio de 1917 [...] La obra se integra en dos partes, la primera compuesta por las tesis jurisprudenciales vigentes y, la segunda, por las tesis obsoletas, consideradas así porque han cambiado las disposiciones que interpretan o porque se ha modificado el criterio interpretativo de los órganos judiciales federales, tesis que tienen importancia histórica por la trascendencia jurídica de su contenido. [...] se compone de siete tomos, seis por materia y el séptimo contiene el índice general:

Tomo I. Materia Constitucional.
Tomo II. Materia Penal.
Tomo III. Materia Administrativa.
Tomo IV. Materia Civil.
Tomo V. Materia del Trabajo.
Tomo VI. Materia Común.
Tomo VII. Índice General" (Miguel Acosta Romero y Alfonso Pérez Fonseca, *Derecho jurisprudencial mexicano*. 2a. ed. México, Porrúa, 2000, pp. 321-322).

[16] Se trata de la Quinta Época, que se ocupa, por vez primera, de la Constitución vigente (*Vid*. M. Acosta Romero y A. Pérez Fonseca, *op. cit.*, p. 300). Sin embargo, en diversas ocasiones acudiremos a épocas anteriores, sobre todo para comprender, con la adecuada visión de conjunto, la evolución tanto sustantiva como respecto de su tratamiento jurisprudencial en torno a determinadas garantías individuales. El caso más interesante suele ser el tratamiento a la garantía de exacta aplicación de la ley, donde, entre otras históricas interpretaciones jurisprudenciales, encontramos el "Amparo Vega", insoslayable en un estudio de esta naturaleza.

o implícitamente en él".[17] O, en palabras de Ricardo Zorraquín Becú: "Interpretar las normas jurídicas significa desentrañar su verdadero sentido y alcance. La interpretación constituye una tarea técnica que tiende a investigar la inteligencia que debe darse a una norma, determinando así su campo de aplicación".[18] La interpretación jurídica es tarea de todo jurista, sin embargo, ésta tendrá efectos vinculantes cuando es practicada por el juez, titular de la *iuris-dictio*. La interpretación practicada por los juristas *in genere* produce doctrina, en el sentido de aportar opiniones jurídicas. En este orden de ideas, resulta muy interesante la precisión que hace María Concepción Gimeno Presa, estudiosa a su vez del pensamiento de Ricardo Guastini: "la diferencia entre la interpretación doctrinal y la judicial recae en que los jueces no pueden limitarse a describir los significados actuales o posibles de los enunciados legislativos, deben elegir un significado determinado, desechando los otros".[19] Así las cosas, los jueces, en el ejercicio de su función, es decir, al resolver la controversia ante ellos planteada, no opinan sin más, sino que producen efectos jurídicos, vinculan. De ahí que no puedan sentenciar de manera arbitraria, sino que en la legalidad en sí encuentran su obligada fundamentación. *Grosso modo*, "la legalidad consiste en la conformidad del poder con un modelo jurídico preconstituido".[20] En consecuencia, las resoluciones judiciales deben sujetarse al ordenamiento jurídico vigente.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, con razón, afirma que la interpretación constitucional posee un tratamiento especial, es decir, distinto al que son objeto otros ordenamientos jurídicos.[21] Empero, Jorge Carpizo es bastante claro al señalar que la Constitución mexicana "no posee reglas de interpretación sobre cómo se deben interpretar sus preceptos, tal y como acontece con otras Constituciones".[22] Sin embargo, en tal sentido, Carmona Tinoco

---

[17] Demófilo de Buen, *Introducción al estudio del derecho civil. Ideas generales, fuentes históricas del derecho civil español, codificación, normas jurídicas.* 2a. ed. México, Porrúa, 1977, p. 383.

[18] Carlos Mouchet y Ricardo Zorraquín Becú, *Introducción al derecho*. 11a. ed. actualizada. Buenos Aires, Emilio Perrot, 1987, p. 252.

[19] María Concepción Gimeno Presa, *Interpretación y derecho. Análisis de la obra de Ricardo Guastini*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 137.

[20] Jerónimo Betegón Carrillo *et al.*, *Lecciones de teoría del derecho*. Madrid, McGraw-Hill, 1997, p. 299.

[21] *Cf.* J. Ulises Carmona Tinoco, *op. cit.*, p. 73.

[22] Véase Jorge Carpizo, "La interpretación constitucional", en Miguel Carbonell, coord., *Diccionario de derecho constitucional*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas / Porrúa, 2002, p. 319.

reconoce una metodología *ad hoc* en el derecho constitucional mexicano, sosteniendo lo anterior con una tesis aislada emanada de Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del 7 de junio de 1989, cuyo rubro se intitula: "INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS".[23] El texto del sumario, determina lo siguiente:

> El exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del derecho), entiende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende básicamente una labor de creación del Derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el campo de las normas constitucionales, las que difieren esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la jurisprudencia —pasada la época del legalismo—, se ha convertido en una fuente del Derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación, para el efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del Derecho vivo, el Derecho eficaz que resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de lo métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales del Derecho.

---

[23] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III Segunda Parte-1; Página: 419; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 553/89. Perfiles Termoplásticos, S. A. 7 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

Con coherencia, Carpizo concluye:

> La Constitución de un país es también su ideario y como tal la disciplina que la estudia, como una de sus partes, tiene que tomar en cuenta estos aspectos.
>
> La finalidad última de la interpretación constitucional debe ser proteger y defender lo más valioso que existe para cualquier hombre: su libertad y su dignidad.
>
> La interpretación constitucional reviste especial importancia porque a través de ella se puede cambiar el significado gramatical de la ley suprema. La interpretación puede modificar, anular o vivificar la Constitución, o puede hacer que el sistema agonice o resplandezca.[24]

Estas palabras, que pudieran sonar poéticas, han sido felizmente ratificadas por el pleno de la Suprema Corte en 1998 en la siguiente tesis intitulada: INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.[25]

> El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que

---

[24] J. Carpizo, *op. cit*., p. 320.

[25] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, abril de 1998 Tesis: P. XXVIII/98 Página: 117 Materia: Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

> constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico.

Como ya se verá en su oportunidad, el espacio donde se plasma la interpretación constitucional natural es el que reconoce la propia ley fundamental en sus artículos 94, octavo párrafo,[26] y 107, fracción XIII,[27] es decir, la jurisprudencia.

Sin embargo, Carpizo precisa que:

> Ahora bien, existen como excepción algunos casos en que la instancia última de interpretación de la C[onstitución] mexicana es el Poder Legislativo, como acontece en los asuntos de naturaleza política, como cuando el Senado declara que han desaparecido todos los poderes en una entidad federativa y en los problemas de elecciones populares...[28]

A manera de conclusión parcial se puede afirmar que, no obstante el hecho de que en el texto de la Constitución mexicana no se tengan previstos parámetros expresos para su interpretación, ha sido resultado, precisa-

---

[26] "Artículo 94. [...] La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación".

[27] "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...]

XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; [...]"

[28] J. Carpizo, *op. cit*., 320.

mente, de la propia interpretación judicial que ésta deba analizarse y eventualmente aplicarse de manera espiritual, es decir, atendiendo a la voluntad del constituyente.

Sólo resta aquí responder una interrogante, ¿por qué son los jueces los intérpretes más relevantes de la Constitución? O, en otras palabras, ¿por qué el control de la constitución es ejercido por órganos jurisdiccionales?

De alguna manera, el artículo 133, en su parte segunda, funda tal facultad: "Artículo 133. [...] Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados". Esto es lo que se conoce como sistema de control difuso constitucional. Sistema en desuso, ya que el medio de control constitucional por excelencia ha sido el juicio de amparo, y éste es monopolio de los tribunales federales, de acuerdo con los artículos 103 y 107 constitucionales. Además, subsiste el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante tesis aislada del 14 de marzo de 1989, cuyo rubro es el que sigue: CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.[29] En el sumario se establece el siguiente razonamiento:

> Del artículo 133 de la Carta Magna, se deriva el principio de supremacía constitucional, según el cual una norma secundaria contraria a la ley suprema, no tiene posibilidad de existencia dentro del orden jurídico. Asimismo, se desprende de dicho numeral, el llamado control difuso del Código Político que implica el que todo juzgador, federal o local, tiene el indeclinable deber de preferir la ley de leyes a cualquier otra aplicación de normas secundarias que la contraríen; es decir, toda vez que la Constitución es la ley suprema, ningún precepto puede contradecirla y como a los juzgadores les corresponde interpretar las leyes para decir el derecho, a la luz de ese numeral cimero, éstos tienen el inexcusable deber de juzgar de conformidad o inconformidad de la ley secundaria con la fundamental, para aplicar o no aquélla, según que al código político le sea o no contraria. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes, no ha sido aceptado por la doctrina jurisprudencial. Los Tribunales de Amparo se han orientado por sostener que, en nuestro régimen de derecho debe estarse al sistema de competencias que nos

[29] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III Segunda Parte-1; Página: 228; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 1157/85. Offset e Impresos, S. A. 14 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

rige, según el cual sólo el Poder Judicial de la Federación puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad y no tiene intervención alguna la justicia local en la defensa jurisdiccional de la Constitución aun en el caso del artículo 133 de la misma, en relación con el 128 del propio ordenamiento, que impone a los juzgadores la obligación de preferir a la Ley Suprema, cuando la ley del estado o local la contraría, ya que, de acuerdo con los artículos 103 de la ley suprema y primero de la Ley de Amparo, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, es de la competencia exclusiva de los Tribunales Federales de Amparo, y los tribunales locales carecen en absoluto de competencia para decidir controversias suscitadas con ese motivo. Ahora bien, aun cuando el Tribunal Fiscal de la Federación, no sea un tribunal local; sin embargo, también carece de competencia para decidir sobre cuestiones constitucionales, ya que es un tribunal sólo de legalidad, en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que, de conformidad con el artículo 104 del precepto cimero, sólo compete al Poder Judicial Federal juzgar de las controversias que surjan contra los actos de los demás Poderes de la Unión y si bien el mismo precepto prevé la existencia de Tribunales Administrativos, pero cuyas resoluciones o sentencias pueden ser revisadas, en último extremo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iría contra la división de poderes que establece el artículo 49 constitucional, que el Tribunal de Anulación en México tuviese competencia para conocer de la constitucionalidad de una ley expedida por el Poder Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo, a través de "su tribunal", estaría juzgando actos emitidos por el Poder Legislativo. En estas condiciones, no le asiste razón a la quejosa en el sentido de que, en los términos del artículo 133 multicitado, el Tribunal Contencioso Administrativo debió examinar el concepto de nulidad donde planteaba el argumento relativo a la "ineficacia" de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por carecer del refrendo de los Secretarios de Estado, a que se refiere el artículo 92 de la Carta Magna ya que el Tribunal Fiscal carece de competencia para pronunciarse sobre tales cuestionamientos porque el argumento de mérito no es, en absoluto, de contenido meramente legal, aun cuando el requisito del refrendo también se encuentre contemplado en una ley ordinaria, sino que alude a la constitucionalidad de dicha ley, pues si se sostuviera que la misma es "ineficaz" por carecer del refrendo, como pretende la quejosa, la consecuencia seria su no aplicabilidad en el caso concreto por ser contraria a la Ley Suprema, cuestionamiento que, lógicamente, es de naturaleza constitucional, sobre el cual el Tribunal Contencioso Administrativo no puede pronunciarse.

En efecto, si bien es cierto que el control difuso constitucional ha resultado inviable, empero la pregunta subsiste, ya que el amparo es un juicio de

constitucionalidad, y tras la reforma de la ley suprema de diciembre de 1994, la Suprema Corte tiende a transformarse en un tribunal constitucional a través de los procedimientos instaurados en el artículo 105, a saber, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.[30]

---

[30] Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b) la Federación y un municipio;

c) el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d) un Estado y otro;

e) un Estado y el Distrito Federal;

f) el Distrito Federal y un municipio;

g) dos municipios de diversos Estados;

h) dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i) un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j) un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y

k) dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;

b) el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) el Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

La respuesta no es sencilla. El itinerario constitucional, sobre todo durante el siglo XIX, no fue llano ni estable. Se trató de una larga búsqueda por la precisión del órgano controlador de la constitucionalidad y la determinación de sus facultades y competencias. Tal itinerario ha quedado espléndidamente descrito por José Luis Soberanes Fernández y Faustino Martínez Martínez en el trabajo ya referido, que modestamente intitularon *Apuntes para la historia del juicio de amparo*. A su vez, Soberanes Fernández, con fines didácticos redactó unas notas sencillas, pero sólidas en su *Historia del derecho mexicano*.[31] Así las cosas, éstas serán las fuentes principales en las que nos basaremos, sin embargo algunos matices técnicos son obligados.

La primera parte de la respuesta puede plantearse en los siguientes términos: desde que lo que ahora es México recibió el *ius commune* a través del derecho castellano, fue consecuentemente un heredero de una gran tradición judicial. Uno de los méritos mayores de los *Apuntes para la historia del juicio de amparo* radica en el extraordinario capítulo primero que se intitula "Antecedentes castellanos: los amparamientos".[32] La historiografía jurídica del amparo de mayor raigambre había seguido la hipótesis de que tal juicio encontraba sus orígenes en el derecho aragonés, a través de la admirable figura del Justicia mayor de Aragón.[33] De alguna manera, importantes investigadores como José Barragán Barragán y Andrés Lira se habían aproximado a la defensa del derecho castellano como aquel que dejó la im-

---

d) el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano;

e) el equivalente al treinta y tres por ciento de las integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y

f) los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. [...]

[31] José Luis Soberanes Fernández, *Historia del derecho mexicano*. 9a. ed. rev. México, Porrúa, 2002, 228 pp.

[32] Consúltese en J. L. Soberanes Fernández y F. Martínez Martínez, *op. cit.*, pp. 69-73.

[33] Ignacio Burgoa, *El juicio de amparo*. 38a. ed. México, Porrúa, 2001, pp. 52-57.

pronta amparista. El trabajo conjunto de Soberanes Fernández y Martínez Martínez no sólo consigue atar los cabos sueltos en los trabajos anteriores, sino que va más allá al profundizar en el derecho castellano y el eventual ordenamiento indiano en sí mismo. Es importante señalar que el ordenamiento vigente en América era el castellano, en razón de que fue Isabel la Católica la patrocinadora de la empresa colombina. Por otro lado, Castilla-León también se vio beneficiada como titular del dominio americano, por la promulgación de las bulas dictadas por el papa Alejandro VI. En dichos documentos, el Pontífice católico llevaba a cabo un acto jurídico, que interpretado a la luz de ciertas ideas medievales constituía una auténtica donación de las tierras del Nuevo Mundo en favor de la reina Isabel, además de haber sido confirmado por un acuerdo entre Castilla y Portugal en 1494.[34] Esto se refuerza con una Real Cédula dictada por Carlos V, en la que las leyes de Castilla constituyen el derecho supletorio del especial indiano:

> *Ordenamos y mandamos que en todos los casos, negocios y pleitos en que no estuviere decidido, ni declarado lo que se debe proveer por las leyes de esta Recopilación, o por cédulas, provisiones u ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, y las que por nuestra orden se despacharen, se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a la de Toro*.[35]

En principio, cabe enfatizar que en el derecho castellano la administración de justicia era una actividad capital. De hecho, ser juez es la función más trascendente para el ejercicio del gobierno de un rey, como ha quedado sentado en las Partidas:

> Rey quiere decir como regidor, y sin falla a él pertenece el gobierno del reino, y según dijeron los sabios antiguos, señaladamente Aristóteles en el libro que se llama *Política*, en el tiempo de los gentiles el rey no solamente era guiador y caudillo de las huestes y juez sobre todos los del reino, más aún era señor sobre las cosas espirituales...[36]

Lo que aquí nos ocupa es esta concepción del poder, es decir, del rey como juez supremo respecto de todos los del reino. Esto incidió en la Nueva

---

[34] J. M. Ots Capdequí. *El Estado español en las Indias*. 8a. reimp. México, FCE, 1993, pp. 9-10.

[35] Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias, Mandadas imprimir y publicar por Carlos II. En Madrid, año de 1681; Libro II, título 1, ley 2.

[36] Alfonso X, *2a. Partida*. Madrid: Publicaciones Españolas, 1961, título. 1. ley 6.

España en que la administración de la justicia fue la actividad toral en las funciones gubernativas españolas. La doctrina historiográfica indiana ha precisado cuatro grandes funciones en la administración de la América española, a saber: gobierno, justicia, hacienda y guerra. En una organización monárquica, carente de la moderna división de poderes, muchas instituciones podían concentrar el ejercicio de todas las funciones. Sin embargo, es notable la organización judicial, tanto en instancias como en órganos de competencia especializada. Así podemos hablar del Juzgado General de Bienes de Difuntos, el Protomedicato y, sobre todo, el Juzgado General de Indios.[37] Este último era presidido por el virrey en virtud de una Real Cédula fechada el 9 de abril de 1591:

> Porque nuestra voluntad es que en quanto fuere posible se procure encaminar el breve y buen despacho de los negocios tocantes a los indios y que zessen las dificultades y diferencias que sobre ello suele haber entre los nuestros virreyes y Audiencias en razón de cassos de corte en primera instancia, mandamos que los nuestros virreyes puedan conocer en primera instancia de los pleitos que en cualquier manera se ofrecieren entre los mismos indios unos con otros y también entre españoles e indios...[38]

La razón de esta jurisdicción especializada obedecía al carácter proteccionista del virrey respecto del natural americano. Algo que le era delegado por el propio rey. Es de llamar la atención que la protección al indio se concretice en una jurisdicción especial, lo cual es explicado por Soberanes Fernández y Martínez Martínez con gran claridad:

> En el virreinato de Nueva España y sobre el modelo romano de los interdictos y el canónico del despojo, se fue desarrollando un remedio procesal rápido y sumario, tremendamente expeditivo, a través del cual se trataron de proteger los más relevantes derechos de los súbditos, tanto españoles como naturales. Se trata [...] de un estilo procesal creado por la Audiencia, una práctica protectora orientada a la defensa de los intereses más relevantes. Nace este mecanismo por la costumbre jurídica al irse resolviendo los casos de tutela a las personas de acuerdo con los principios generales que inspiraron la legislación indiana. Este remedio fue denominado “amparo”, por ser

---

[37] *Vid*. José Luis Soberanes Fernández, *Los tribunales de la Nueva España*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980, 367 pp.

[38] León Pinelo, L IV, T II, l 77 “Que conozcan en primera instancia de causas de indios con apelación a sus Audiencias”, Felipe II, 9 abril 1591.

> ésta la finalidad primera que perseguía (amparar), o bien "interdicto de amparo", al compartir muchas de las características que presentaban los antiguos interdictos del derecho romano, sabiamente conservados en el derecho castellano de las Partidas.[39]

Se puede concluir que este amparo colonial fue una adaptación para responder a la realidad americana, de la propia tradición castellana, una tradición fundada en el *ius-commune* y el canónico. Su carácter especial radicó en el proteccionismo que la Monarquía hispánica decidió conceder a los naturales, de ahí que el efecto de los juicios ventilados ante la jurisdicción especial haya sido el amparo. Juez y amparo constituirán un binomio que dejará impronta en el itinerario jurídico decimonónico.

La otra pieza pendiente a colocar en este "rompecabezas" es la influencia del derecho angloamericano. Hay muchas tesis sobre cómo la tradición jurídica del *common law* fue recibida en el naciente México. No nos ocupará aquí esa compleja temática. Es lógico que la vecindad tenía que influir de alguna manera. A su vez, su doctrina judicial, generada de la Suprema Corte, fue estudiada por muchos juristas mexicanos, sobre todo de inclinación liberal. El carácter del más alto tribunal en México, como órgano controlador de la constitución, será un producto de tales influencias. En principio, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como bien lo precisa Radbruch: "Vela por la integridad de esta Constitución (la federal) la Suprema Corte de Washington, que es, probablemente, el más poderoso tribunal de justicia de la tierra. En sus fallos manifiéstase el poder espiritual de la Constitución, pero también la gradual transformación de ésta".[40]

Esto no se dio ni de manera espontánea, ni a través de facultad expresa en la Constitución de 1787, sino que fue el producto de la histórica sentencia del caso "Marbury *vs.* Madison" de 1803, que en síntesis de Daniel E. Herrendorf concluye lo siguiente:

> 1) La Constitución es superior a todas las demás normas;
> 2) por tanto, ninguna norma puede oponerse a ella;
> 3) las normas que se opusieron a ella deben ser sustraídas del ordenamiento jurídico por "inconstitucionales";
> 4) los funcionarios habilitados para realizar la declaración de inconstitucionalidad son los jueces, porque son los únicos funcionarios que están habilitados para "interpretar" la Constitución.

---

[39] J. L. Soberanes Fernández y F. Martínez Martínez, *op. cit.*, p. 180.
[40] G. Radbruch, *op. cit.*, p. 73.

Sucintamente, son dos ideas-fuerza: la supremacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad.[41]

En este orden de ideas, Luis Sánchez Agesta concluye:

> El razonamiento de Marshall es bien simple: de una parte se basa en la facultad conferida al Tribunal Supremo de resolver todos los casos suscitados bajo la Constitución...; de otra, en esta cláusula de supremacía que define la Constitución como el derecho supremo del país. Al Tribunal Supremo corresponderá, por consiguiente, la facultad y el deber de aplicar la Constitución, declarando la inconstitucionalidad de las leyes que la puedan contradecir. Con ello, el Tribunal Supremo transfiere en su propio beneficio la supremacía constitucional, definiéndose a sí mismo como intérprete y defensor de la Constitución.[42]

---

[41] Daniel E. Herrendorf, *El poder de los jueces. Cómo piensan los jueces que piensan*. 3a. ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, p. 25.

[42] L. Sánchez Agesta, *op. cit.*, p. 190. El texto constitucional establece en su artículo tercero: "Primera Sección.

Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán en periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo de su encargo.

Segunda Sección.

El Poder Judicial entenderá en todas las controversias, tanto de derecho escrito como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; en todas las controversias que se relacionen con embajadores, otros ministros públicos y cónsules; en todas las controversias de la jurisdicción de almirantazgo y marítima; en las controversias en que sean parte los Estados Unidos; en las controversias entre dos o más Estados, entre un Estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de Estados diferentes, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o los ciudadanos del mismo y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.

En todos los casos relativos a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado, el Tribunal Supremo poseerá jurisdicción en única instancia. En todos los demás casos que antes se mencionaron el Tribunal Supremo conocerá en apelación, tanto del derecho como de los hechos, con las excepciones y con arreglo a la reglamentación que formule el Congreso.

Todos los delitos serán juzgados por medio de un jurado excepto en los casos de acusación por responsabilidades oficiales, y el juicio de que se habla tendrá lugar en el Estado en que el delito se haya cometido; pero cuando no se haya cometido dentro de los límites de ningún Estado, el juicio se celebrará en el lugar o lugares que el Congreso haya dispuesto por medio de una ley". *Cf.* A. Hamilton, J. Madison y J. Jay, *El Federalista*. 2a. ed. México, FCE, 2001, p. 393.

La sentencia "Marbury *vs*. Madison", cuyo criterio fue producto del Jefe de Justicia Marshall, implicó un nuevo paradigma de control constitucional. Soberanes Fernández y Martínez Martínez concluyen así lo siguiente:

> Pero la importancia del nuevo modelo creado por Marshall a partir de los antecedentes conocidos no se ciñó al territorio de los Estados Unidos. La difusión se producirá entre los países del entorno más cercano. Esta forma de verificación de la constitucionalidad de leyes y demás actos del poder público halló inmediato eco en México. De hecho, las primeras propuestas sobre la creación del amparo mexicano beben de manera directa de este precedente estadounidense, como se puede ver en el "reclamo" propuesto por el diputado Ramírez en 1839 o en el voto de la minoría de 1842, obra de Mariano Otero, que después cristalizaría en el Acta de Reformas (1847). Con anterioridad, a nivel estatal, la Constitución de Yucatán de 1841 había consagrado un modelo de amparo que adaptaba a México el sistema estadounidense, y así lo hacía constar su principal impulsor, Manuel Crescencio Rejón, en el proyecto presentado al Congreso Constituyente.[43]

Históricamente, los jueces mexicanos estaban "predestinados" para practicar la interpretación constitucional. No obstante, el juicio de amparo se constriñó a determinados tribunales del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, las reformas de diciembre de 1994 han impulsado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir un carácter más específico: ser un tribunal constitucional más de acuerdo con las instituciones de tradición europea. También esto ha ocasionado nuevas formas de generar jurisprudencia, de ahí que lo que implique una aportación para los fines de este estudio no será soslayada.

III. Los derechos humanos

Ahora pasemos, aunque de forma breve, a abordar el tema de los derechos humanos. De manera general se puede decir que son aquellos que el ser humano tiene por el sólo hecho de ser persona y no porque el Estado los otorgue. Como bien lo apunta Antonio Truyol y Serra:

> Es preciso también recordar qué se entiende por "derechos humanos" o "derechos del hombre". La expresión se emplea aquí en el sentido estricto que

[43] J. L. Soberanes Fernández y F. Martínez Martínez, *op. cit*., p. 150.

> hoy ha adquirido. Decir que hay "derechos humanos" o "derechos del hombre" en el contexto histórico-espiritual que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados.[44]

Aunque esta postura enfatiza el fundamento (desde cierta perspectiva *ius*-filosófica) de los derechos humanos, es decir, los derechos naturales. Éstos son definidos por Javier Hervada como "aquel sector del orden jurídico constituido por normas, derechos y relaciones cuyo origen y fundamento es la naturaleza del hombre".[45] Es decir, un orden jurídico metapositivo.

Otra postura concibe a los derechos humanos como derechos subjetivos de todo gobernado.[46] Su validez estaría supeditada a la positivación hecha por parte de quien ejerce la *potestas legislativa*. Desde tal perspectiva, también se les denomina "derechos fundamentales" es decir, "aquellos derechos subjetivos que, por su definición en la norma primera del ordenamiento, se imponen incluso al legislador".[47] En realidad, los derechos humanos implican ambas posiciones. Desde luego, si se trata de derechos inherentes a la naturaleza humana, no son producto de ninguna modificación o declaración positiva, siempre han existido. Sin embargo, han ido hermanados en cuanto su existencia formal y su protección, con el itinerario histórico del derecho constitucional. Básicamente, los derechos humanos se han concebido como los medios jurídicos de los que es titular una persona, en su posición de gobernado, para defenderse contra los abusos de quien ejerce el poder.[48]

---

[44] Antonio Truyol y Serra, *Los derechos humanos, Declaraciones y Convenios internacionales*. 4a. ed. Madrid, Tecnos, 2000, p. 71.

[45] Javier Hervada, *Historia de la ciencia del derecho natural*. 2a. ed. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1996, p. 31.

[46] *Vid.* Ignacio Burgoa, *Las garantías individuales*. 33a. ed. México, Porrúa, 2001, p. 51.

[47] Javier Jiménez Campo, *Derechos fundamentales. Concepto y garantías*. Madrid, Trotta, 1999, p. 17.

[48] "Los derechos humanos, en el sentido objetivo, son normas de derecho público constitucional, es decir, de la más alta jerarquía jurídica, que protegen ciertos bienes jurídicos fundamentales que se consideran inherentes a la personalidad humana y cuya identificación y precisión son producto histórico del desarrollo de la conciencia humana y la organización social. Sujetos, titulares o derechohabientes de esa clase de derechos son los seres humanos, sin otras distinciones que las que el desarrollo de la conciencia humana y las formas de organización social imponen, sus asociaciones civiles, políticas, profesionales y laborales y los propios Estados. Obligados, deudores o sujetos del deber jurídico son los Estados y las or-

Así lo explica Karl Loewenstein: "Entre todos los límites impuestos al poder del Estado se considera que el más eficaz es el reconocimiento jurídico de determinados ámbitos de autodeterminación individual en los que el Leviatán no puede penetrar".[49] Enunciar los derechos humanos implica, por tanto, delimitar los alcances de los actos de los órganos gubernamentales. En cuanto sus características, explica Leah Levin:

> Los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Éstos son derechos morales inalienables e inherentes que, por el mero hecho de ser hombres, poseen todos los seres humanos. Estos derechos se articulan y formulan en lo que hoy llamamos derechos humanos y se han plasmado en derechos legales, establecidos de conformidad con los procesos legislativos de las sociedades, tanto nacionales como internacionales.[50]

Al respecto de su formalidad, Jesús González Amuchástegui señala a su vez que "los derechos humanos son los derechos que los seres humanos tienen atribuidos en un sistema normativo ideal construido por la teorías de los derechos humanos".[51] No podemos estar totalmente de acuerdo con esta definición. Lo que sería "ideal" son los juicios hipotético-normativos estipulados en las declaraciones o instrumentos jurídicos de derechos, pues suelen ser un marco referencial para el derecho positivo real de un estado o individuo determinados, es decir, la manera como son enunciados o formulados tales derechos. Por ello, tenemos que encontrar una definición más equilibrada. Antonio Enrique Pérez Luño propone la siguiente: "conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional".[52] Asimismo, Jesús Rodríguez y Rodríguez precisa que son el "Conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones

---

ganizaciones internacionales. La finalidad de estos derechos es impedir los abusos de poder por parte de los titulares de las funciones estatales y garantizar la vigencia del derecho". Luis E. Arévalo Álvarez, *El concepto jurídico y la génesis de los derechos humanos*. 2a. ed. Puebla, Universidad Iberoamericana Puebla / Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2001, p. 57.

[49] Karl Loewenstein, *Teoría de la Constitución*. 2a. ed. Barcelona, Ariel, 1982, p. 390.

[50] Leah Levin, *Derechos humanos, preguntas y respuestas*. 2a. ed. México, Librería Correo de la UNESCO, 1998, p. 15.

[51] J. González Amuchástegui, *Ética y derechos humanos*. México, CNDH, 2000, p. 14.

[52] Antonio E. Pérez Luño, *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*. 6a. ed. Madrid, Tecnos, 1999, p. 48.

de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente".[53] Nos quedaremos con estas últimas definiciones, puesto que abarcan las características fundamentales generalmente aceptadas doctrinal y prácticamente sobre los derechos humanos.[54]

Ahora bien, estos últimos (los derechos humanos), en cierta forma, han sido los signos de una lucha omnipresente a lo largo de la historia: la del débil contra el poderoso. De ahí que coincidamos con Ferrajoli, quien precisa que: "Los derechos fundamentales se afirman siempre como leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regía y regiría en su ausencia".[55] En un sentido más preciso, podemos decir que del gobernado frente al gobernante. Así, encontramos una considerable cantidad de ejemplos elevados al rango de derecho positivo en la defensa de los súbditos frente al ejercicio arbitrario del poder. Muchos autores consideran a la *Magna Charta Libertatum* de 1215 como un punto de partida.[56] Esto no es del todo exacto. En realidad, encontramos desde la evolución del tratamiento jurídico de la esclavitud en Roma[57] (por mencionar un ejemplo), un importante precedente sobre la defensa del derecho a la libertad. En el derecho visigótico, en razón de la influencia cristiana, existió un considerable pro-

---

[53] Jesús Rodríguez y Rodríguez, "Derechos humanos", en *Nuevo diccionario jurídico mexicano*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas / Porrúa, 1998, t. D-H, p. 1268.

[54] De cualquier manera, nos parece muy interesante la explicación que da Bartolomé Clavero sobre este tema: "Derechos humanos son los derechos subjetivos mínimos que corresponden a cualquier persona por el solo hecho de serlo, de ser individuo, según el sentir común de la humanidad civilizada, conforme al entendimiento de la organización que la representa. El término que ahora intencionalmente se difunde para el concepto de los *iura innata*, los derechos naturales, es de procedencia inglesa, pero no es el inglés tradicional. La expresión correspondiente, aun no equivalente, a *human rights*, derechos humanos, que antes predominara, era la de *rights of man*, derechos del Hombre; *droits de l´homme* también era la expresión tradicional francesa, entendiendo ya por tradición la generada por la revolución". Bartolomé Clavero, *Institución histórica del derecho*. Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1992, p. 145.

[55] Luigi Ferrajoli, *Derechos y garantías. La ley del más débil*. 2a. ed. Madrid, Trotta, 2001, p. 54.

[56] Desde luego, no podemos omitir mencionar a la Carta de Neuchatel en Suiza, de 1214.

[57] En el derecho romano, no obstante el reconocimiento de la figura de la esclavitud, esta situación jurídica se ve menguada por los derechos civil y honorario, existiendo entre otras grandes construcciones jurídicas la *manumissio*. Asimismo, es notable como Gayo, jurista clásico, en las *Institutas* no pierde de vista que el esclavo es hombre y no objeto: "*Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*".

greso en materia del derecho de audiencia y por tanto en las garantías de seguridad jurídica, como bien lo ha demostrado Rafael Gibert:

> En esta esfera el Concilio XIII (683) estableció una innovación que ha podido ser llamada el *Habeas Corpus* visigótico: que ningún miembro del Oficio Palatino, obispo o gardingo (personas unidas al rey por un juramento especial de fidelidad), pudiera ser, por mandato del rey o de otra potestad, y excepto en caso de culpa evidente, apresado, encadenado, desposeído ni castigado para arrancarle por fuerza una confesión —como había ocurrido— sino que, conservando sus prerrogativas, fuera presentado a la pública deliberación de obispos, señores y gardingos y esta asamblea de sus pares lo declarase culpable o inocente. También las restantes personas libres, sin oficio palatino, acusadas de traición, serían juzgadas por igual procedimiento. En este concilio el rey perdonó todos los tributos de los años anteriores.[58]

Puede notarse, hasta el momento, que los derechos reconocidos en estos textos jurídicos no se referían al individuo como miembro del género humano, sino al integrante de una clase o estamento social determinados.[59] Ejemplo de ello se dio en 1119, cuando el rey Alfonso I de Aragón dictó una Carta en la que se reconocieron los derechos de los moros de Tudela, documento sorprendente en el contexto de la llamada Reconquista.[60] En 1188 se dieron los Pactos entre Alfonso IX de León y sus súbditos. Será durante la Edad Moderna cuando se reconocerán los derechos individuales en sentido estricto. De la mano de tal elemento hay que considerar la valoración de la libertad y la igualdad como otros requisitos *sine qua non*. Así las cosas, aunque no de manera absoluta, ya que prevalecen privilegios jurídicos,

---

[58] Rafael Gibert, *Elementos formativos del derecho en Europa. Germánico, Romano, Canónico*. Granada, Imprenta de Francisco Román, 1975, pp. 38-39.

[59] Con precisión explica Antonio Truyol y Serra: "Al tratar de evocar la trayectoria histórica de los derechos humanos, no podemos prescindir de un dato inicial en el que demasiadas veces no se repara, a saber: que la conciencia clara y universal de estos derechos es propia de los tiempos modernos.

Ello no supone evidentemente que el hombre medieval no tuviera tales derechos. Lo que ocurre es que la Edad Media, e incluso la Edad Moderna durante el llamado 'Antiguo Régimen' (que en determinadas zonas, movimientos y corrientes se prologó hasta bien entrado el siglo XIX, en espera de intentar resurgir bajo nuevas formas en el XX), conoce 'derechos estamentales', derechos propios de los estamentos, de los 'estados' u 'órdenes' en que aparece estratificada la sociedad feudal". Antonio Truyol y Serra, *op. cit.*, pp. 22-23.

[60] José Sánchez-Arcilla Bernal, *Historia del derecho*. Madrid, Instituciones Políticas y Administrativas, Dikinson, 1995, pp. 205-215.

encontramos en Inglaterra el *Petititon of Rights* de 1628, que tenía por objeto proteger los derechos individuales y patrimoniales. En 1679 se da el *Habeas Corpus Act*, en cuyo contenido se establece la garantía de seguridad jurídica, consistente en que en el caso de detención, ésta no puede hacerse sin previo mandamiento judicial y que el aprehendido debe ponerse a disposición del juez ordinario dentro de un plazo de 20 días. Al concluir la Revolución Gloriosa de Inglaterra, el 13 de febrero de 1689 se firmó el *Bill of Rights*.[61] En este histórico documento los lores, eclesiásticos y comunes apelaron a los reyes de Orange el reconocimiento de los derechos y libertades de los súbditos:

> VI. En cumplimiento de tales premisas, los lores espirituales y temporales y los comunes, reunidos en el Parlamento, a fin de ratificar, confirmar y establecer la citada declaración, y los artículos cláusulas, cuestiones y cosas que contienen, con la fuerza de una ley realizada conforme al procedimiento debido por la autoridad del Parlamento, ruegan que se declare y estatuya que todos y cada uno de los derechos y libertades afirmados y declamados en esta declaración constituyen los verdaderos, antiguos e indubitados derechos y libertades del pueblo de este Reino, y así habrá de ser estimados, permitidos, juzgados y considerados; y que todos y cada uno de los particulares mencionados los guardarán y observarán, firme y estrictamente, tal y como se expresan en esta declaración; y que todos los oficiales y ministros servirán a sus Majestades y a sus sucesores en los tiempos venideros de acuerdo con los mismos.

Para entender mejor este enfoque individualista tenemos que abordar el aspecto ideológico que hay detrás de los textos posteriores al siglo XVII. Se trata, en gran parte, de la doctrina denominada Liberalismo.[62] Para esta corriente "el totalitarismo es algo más que una degeneración de lo político: es casi una tendencia natural. De ahí que el reconocimiento de la dignidad humana lo presente siempre en forma de una defensa del individuo frente a la polis, es decir, en la forma de derechos individuales".[63]

---

[61] En general, para profundizar al respecto, *vid*. L. Sánchez Agesta, *op. cit*., pp. 109-156.

[62] "La doctrina que asume la defensa y la realización de la libertad en el campo político. Tal doctrina nace y se afirma con la edad moderna y puede considerarse como dividida en dos fases: 1) la fase del siglo XVIII, caracterizada por el individualismo; 2) la fase del siglo XIX, caracterizada por el estatalismo" voz "*liberalismo*", Nicola Abbagnano, *Diccionario de filosofía*. México, FCE, 2000, p. 737.

[63] Alfredo Cruz Prados, "Derechos humanos. ¿Qué derechos? ¿De qué humanos?", en *Nuestro Tiempo*. Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, marzo, 1998, p. 103.

Sin ser de manera estricta un individualismo radical, encontramos precedentes teóricos sobre los derechos individuales en autores escolásticos como Juan de Salisbury (1115 aprox.-1180), quien en su *Policratus* había criticado la tiranía. No se puede omitir la doctrina tomista de la ley injusta, cuya máxima expresión llegará con Francisco de Vitoria (1483-1546) en sus relecciones (conferencias solemnes), destacando la *Relectio Prima* de *Indis* aproximadamente de 1538 o 1539.[64] De Vitoria era ya un gran defensor de la libertad religiosa y la autodeterminación política, temas que hasta el siglo XX llegarán a su consagración jurídica casi definitiva. El pensamiento de Vitoria se gestó en el seno del llamado Debate Indiano, es decir la discusión jurídica sostenida en la Monarquía hispánica del siglo XVI, sobre la legitimidad del dominio hispánico en Indias. Es claro que las aportaciones doctrinales en torno a la libertad de los nativos americanos y la legitimidad y justicia de las encomiendas, entre otros, constituyeron un importante precedente sobre la defensa de los derechos humanos.[65]

Sin embargo, como ya se apuntaba, la doctrina tratante de estos derechos, consiguientemente sistematizada de manera adecuada, es un producto del *ius-naturalismo* moderno. Merryman se refiere a este movimiento como una subtradición jurídica *per se* denominada "La Revolución":

> Una de las principales fuerzas intelectuales impulsoras de la Revolución fue lo que desde entonces se ha llamado el derecho natural secular... Se basaba en ciertas ideas acerca de la naturaleza del hombre que encuentran expresión en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. De acuerdo con este razonamiento, todos los hombres han sido creados iguales. Tienen ciertos derechos naturales a la propiedad, la libertad, la vida. El gobierno debe reconocer y asegurar estos derechos, así como la igualdad entre los hombres.[66]

Estos planteamientos encuentran sus raíces en el "contractualismo" y el presupuesto "estado de naturaleza" del hombre. Como es conocido, se trata de tesis cuyos orígenes son remotos, pero que en Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) encontraron su más estructurada manifestación. De manera próxima Rousseau fue influenciado por Hugo Grocio (1583-1645) y por

---

[64] *Vid.* J. L. Soberanes Fernández, *Historia del derecho mexicano*, p. 53.

[65] *Cf.* Jean Dumont, *El amanecer de los derechos del hombre, la Controversia de Valladolid*. Madrid, Ediciones Encuentro, 1992, pp. 45-57.

[66] J. H. Merryman, *La tradición jurídica romano-canónica*. 2a. ed. 5a. reimp. México, FCE, 2000, pp. 39-40.

Thomas Hobbes (1588-1679). Pero, a diferencia del segundo, Rousseau sostuvo que el hombre era bueno en su estado natural, el *bon savage* y no el tan citado *Lupus est homo homni, non homo*.[67] Y superando a Grocio, el autor de *El contrato social* (1762) no vio tal pacto como un acontecimiento histórico, sino como una mera justificación racional. Según estas ideas, el hombre ve comprometida su natural bondad cuando convive en sociedad, pues antes vivía de manera pacífica:

> Esta situación de paz se vio perturbada por la introducción del cultivo de la tierra, pues con ese acto nació también la propiedad privada: el primero que cercó un pedazo de tierra y declaró que "aquello era suyo" y encontró personas que aceptaron su dicho sin oposición alguna, debe ser tenido por fundador de la sociedad civil y creador de las desigualdades entre los hombres.[68]

Lo cual provocó la diferencia entre poderosos y débiles, entre ricos y pobres, perdiendo, en consecuencia, la paz común. Problema que Rousseau planteaba de la siguiente manera:

> Parto de considerar a los hombres llegados a un punto en el que los obstáculos que dañan a su conservación en el estado de naturaleza logran superar, mediante su resistencia, la fuerza que cada individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Desde ese momento tal estado originario no puede subsistir y el género humano perecería si no cambiase de manera de ser.[69]

La alternativa que propone Rousseau es el contrato social:

> Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y gracias a la cual cada uno, en unión de todo los demás, solamente se obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. Éste es el problema fundamental que resuelve el contrato social.

En éste, los hombres depositaron sus derechos, en virtud de la soberanía popular, que les era esencial y originaria. Pero conservan la voluntad general.

---

[67] La obra de Plauto es *Asinaria* en su párrafo 495.

[68] Alfred Verdross, *La filosofía del derecho del mundo occidental*. Trad. De Mario de la Cueva. 2a. ed. México, UNAM, 1983, p. 196.

[69] Juan Jacobo Rousseau, *El contrato social o principios de derecho político*. Est. prel. y trad. de María José Villaverde. Madrid, Tecnos, 1988, Libro 1, capítulo 6.

Este pensamiento impactó particularmente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Veamos algunos fragmentos de este documento:

> Artículo 1o. Los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones sociales no pueden fundarse más que en su utilidad común.
>
> Artículo 2o. El objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
>
> Artículo 3o. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo ni corporación puede ejercitar autoridad que no emane expresamente de ella. [...]
>
> Artículo 6o. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de concurrir a su formación personalmente o por representantes. Debe ser la misma para todos, sea que proteja o sea que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o su talento...[70]

En la calificada opinión de Maurizio Fioravanti "la gran novedad llevada a cabo por la Revolución francesa [...] fue la de hacer aparecer de improviso sobre la escena, en su autonomía, una sociedad civil unificada en la perspectiva de la voluntad política constituyente, como pueblo o nación".[71] Ahora bien, el peso radicará en el individuo, de ahí que Merryman concluya: "La teoría de los derechos naturales generó un énfasis exagerado en los derechos individuales de propiedad y de contrato, así como una distinción demasiado marcada entre el derecho público y el derecho privado".[72] A modo de muestra, basta considerar lo redactado en el artículo 544 del *Codé* Civil Francés de 1804, o como popularmente se le conoce, Código de Napoleón: "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos".[73]

---

[70] Cit. por J. Hervada, J. Zumaquero y J. M. Zumaquero, *Textos internacionales de derechos humanos*, t. 1 (1776-1976), pp. 38-53.

[71] Maurizio Fioravanti, *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*. 3a. ed. Madrid, Trotta, 2000, p. 61.

[72] J. H. Merryman, *op. cit.*, p. 46.

[73] De hecho Radbruch precisa que: "Otra de las finalidades del Código civil napoleónico era plasmar en la legislación los resultados políticos de la Revolución francesa". G. Radbruch, *op. cit.*, p. 74.

El individualismo exagerado de los inicios de la Edad Moderna se fue mermando, sobre todo a raíz de sucesos de trágicas consecuencias para la humanidad, como lo han sido las dos guerras mundiales:

> El año 1945 suponía sin lugar a duda uno de esos hitos mayores de la historia universal que obligan a la humanidad a pensar sobre las bases últimas de su existencia. Pues bien, el punto de mira, el centro de esa reflexión, fue una conciencia aguda de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona. A su violación y olvido se debía en la óptica e los vencedores, la tragedia que la humanidad acababa de vivir; en consecuencia, su aceptación como base última de la sociedad sería la mejor garantía para iniciar una larga, y por qué no, definitiva era de paz universal.[74]

Hasta el momento se puede afirmar que la formalización de los derechos humanos ha sido objeto de una notoria evolución. Tal progresión ha sido descrita por la doctrina mediante generaciones. La primera surge mediante los derechos enunciados en la Declaración de Virginia de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Eran los derechos de la libertad individual, tales como la integridad física, la seguridad y la propiedad. Con la constitución francesa de 1848 y con mayor solidez en la mexicana de 1917 surgieron los derechos de segunda generación o derechos sociales. Se trata ahora de obligaciones estatales consistentes en prestar servicios, como la educación, la vivienda digna o la salud. Finalmente existe una tercera generación conocida como los derechos de solidaridad, principalmente el derecho al medio ambiente, a la paz o al desarrollo.[75]

El 10 de diciembre de 1948, la joven Organización de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Efectivamente, en su fundamento —la dignidad de la persona humana— encontramos una piedra angular que será presente en prácticamente toda declaración, conve-

---

[74] Nazario González, *Los derechos humanos en la historia*. México, Alfaomega Grupo Editor, 2001, p. 170.

[75] *Vid.* Ignacio Ara Pinilla, *Las transformaciones de los derechos humanos*. Madrid, Tecnos, 1994, pp. 96-117. Cabe apuntar que se habla ya acerca de una cuarta y quinta generación. Por ejemplo, los llamados derechos reproductivos, cuya naturaleza aún no es muy clara, constituirían la cuarta generación, respecto de la quinta, encontramos, entre otros, los derechos correspondientes a los progresos científicos biogenéticos. Nuevamente, cabe especificar, que este estudio se ceñirá al alcance jurisprudencial en torno a los derechos humanos de las dos primeras generaciones.

nio, convención o protocolo internacional que tenga por objeto la protección de determinados derechos humanos. En su Preámbulo, la Declaración precisa lo siguiente:

> Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana...
>
> Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; [...]
>
> La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.[76]

Como puede verse, hay una actitud muy distinta a la que se asumió durante el siglo XIX y, por supuesto, la primera mitad del siglo XX. Ahora bien, los derechos humanos no son sólo fuentes cuya validez se constriñe al ámbito territorial de un Estado-nación. La declaración de 1948 lega una concepción universalista de los derechos humanos y, por ende, constituye la base de la existencia de un sistema de protección de carácter internacional.[77]

IV. Derechos humanos y garantías individuales

Con lo anterior, estamos en posibilidad de afirmar que el término "garantía individual" guarda un estrecho vínculo con los derechos humanos, ya que

---

[76] Cit. por J. Hervada, J. Zumaquero y J. M. Zumaquero, *Textos internacionales de derechos humanos*, t. 1 (1776-1976), pp. 135-139.

[77] *"Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".* Cit. por J. Hervada, J. Zumaquero y J. M. Zumaquero, *Textos internacionales de derechos humanos*, t. 1 (1776-1976), p. 140.

se trata de "la relación jurídica fundada en la Constitución, en virtud de la cual los gobernados tienen la facultad de exigir a las autoridades estatales el respeto a los derechos fundamentales del hombre".[78] De ahí que las garantías individuales presentan un carácter técnico específico. Como bien lo abunda Efraín Polo Bernal:

> Son derechos públicos, porque estando incorporados a la Constitución, se instituyen para beneficio de las personas y como limitaciones en el ejercicio de la actividad de los órganos del Estado, implican necesariamente una relación entre el titular de ellos, esto es, todo gobernado, y el obligado a acatarlos, es decir, todo órgano del Estado.[79]

Asimismo, Polo Bernal concretiza que las garantías individuales: "Son derechos subjetivos, porque dan una acción personal a las personas para lograr que los órganos del Estado respeten esos derechos garantizados, cuando han sido violados o desconocidos".[80] Lo anterior se encuentra fundamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo es el instrumento procesal mediante el cual se protegen los derechos fundamentales, y por consiguiente, la procedencia de tal juicio se da en virtud de leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales.[81] En este sentido, resulta de interés la siguiente tesis:

---

[78] Tarcisio Navarrete, Salvador Abascal y Alejandro Laborie, *Los derechos humanos al alcance de todos*. México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal / Diana, 2000, p. 212. Jorge Carpizo a su vez concluye que "mientras los derechos del hombre son ideas generales y abstractas, las garantías, que son su medida, son ideas individualizadas y concretas". Voz "Garantías individuales", en *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, t. D-H, p. 1796.

[79] Efraín Polo Bernal, *Breviario de garantías constitucionales*. México, Porrúa, 1993, p. 13.

[80] *Idem*. A su vez, resulta de gran valía ver la siguiente tesis: GARANTÍAS INDIVIDUALES. Son objeto del amparo y protección constitucionales; en tanto que están consignadas en la Carta Fundamental de la Nación, siempre que esté en observancia y haya Poderes electos para su estricto cumplimiento. T. I. p. 72, Amparo Penal directo, Rivera G. José Antonio, 25 de agosto de 1917, mayoría de 7 votos.

[81] "[...] debe tomarse en consideración que el propio juicio de amparo surgió con el propósito esencial de proteger los derechos de la persona humana consagrados constitucionalmente, contra su violación por parte de las autoridades públicas". H. Fix-Zamudio y H. Fix Fierro, "Amparo", en *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, t. A-C, p. 180.

> Los derechos que bajo el nombre de garantías individuales consagra la Constitución, constituyen limitaciones jurídicas, que en aras de la libertad individual y en respeto a ella se oponen al poder o soberanía del Estado, quien, por su misma naturaleza política y social, puede limitar la libertad de cada individuo, en la medida necesaria para asegurar la libertad de todos; y la limitación de que se habla, debe ser en la forma misma en que se precisan o definen en la Constitución las citadas garantías individuales, siendo las leyes generales y particulares, el conjunto orgánico de las limitaciones normales que el poder público impone a la libertad del individuo, para la convivencia social, dentro de las mismas garantías individuales, so pena de indeferencia absoluta, en caso de rebasarlas, porque entonces, dado el régimen de supremacía judicial que la Constitución adopta, se consigue la protección de las mismas garantías, por medio del juicio de amparo.[82]

Para definir con la mayor precisión posible a las garantías individuales, hay que echar la vista atrás, concretamente a la Constitución de 1857. El respectivo constituyente precisó en el artículo primero del texto final que: "El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución". En la ley suprema vigente, la redacción original del artículo primero no hacía la distinción entre derechos del hombre y garantías individuales, lisa y llanamente decía así: "Art. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". Sin embargo, en lo sustancial el sentido del término "garantía individual" coincide con el texto decimonónico.[83] Para apuntalar lo anterior, veamos el

---

[82] GARANTÍAS INDIVIDUALES, T. XL, p. 3639, Amparo administrativo en revisión 3044/33, Cía. Cigarrera Mexicana, S. A., 19 de abril de 1934, mayoría de tres votos.

[83] Haciendo frente a las críticas de diversos autores, Carpizo precisa: "Además, en el Congreso Constituyente de 1916-17 no se negó la idea de los derechos del hombre. Su concepción, aunque evolucionada, es la misma que ya la teoría y práctica constitucional mexicana habían aceptado. Para confirmar nuestra aseveración, bástenos enterarnos de uno de los discursos de Múgica quien dijo: 'la Comisión juzgará que esas adiciones que se le hicieron al artículo son las que pueden ponerse entre las garantías individuales que tienden a la conservación de los derechos naturales del hombre... tomó la Comisión lo que creyó más conveniente bajo el criterio de que en los derechos del hombre deben ponerse partes declarativas, o al menos, aquellas cosas que por necesidad social del tiempo vinieren a constituir ya una garantía de los derechos del hombre'..." Jorge Carpizo, *La constitución mexicana de 1917*. 12a. ed. México, Porrúa, 2000, p. 141.

artículo segundo de la Constitución de la República Italiana de 1947:[84] "La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social". Es clara, pues, la distinción entre el fundamento (los derechos humanos) y la tutela jurídica de los mismos (garantías). De hecho, este artículo ha dado pie a fortalecer la doctrina del *garantismo jurídico*. Su representante más importante es Luigi Ferrajoli, quien enfatiza el carácter fundamental del principio de legalidad, como formulación de los medios de protección de los derechos humanos, es decir, las garantías:

> [...] la esencia del constitucionalismo y del garantismo reside en la sujeción a la ley de todos los poderes, públicos y privados, y en el conjunto de límites y vínculos idóneos para impedir su degeneración en poderes salvajes. Y consecuentemente postula una concepción de la democracia como sistema frágil y complejo de separación y de equilibrio entre poderes, de límites de forma y de sustancia a su ejercicio, de garantía de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación contra sus violaciones. Un sistema en el cual la regla de la mayoría y la del mercado valen solamente para aquella que podemos llamar la esfera de lo discrecional, circunscrita y condicionada por la esfera de lo obligatorio y que está precisamente formada por los derechos fundamentales de todos: los derechos de libertad, que ninguna mayoría puede violar, y los derechos sociales —a la salud, a la escuela, a la prevención y a la subsistencia— que toda mayoría está obligada a satisfacer.[85]

Así las cosas, una garantía individual, como señala Ignacio Burgoa, implica la concurrencia de cuatro elementos:

> 1. Relación jurídica de *supra* a subordinación entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos).
>
> 2. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado (objeto).
>
> 3. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo (objeto).

---

[84] L. Sánchez Agesta, *op. cit.*, pp. 347-349.

[85] Luigi Ferrajoli, *Garantismo y la filosofía del derecho*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000, p. 144.

4. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley Fundamental (fuente).[86]

Lo que lleva al citado autor a concluir que "los derechos del hombre constituyen, en términos generales, el contenido parcial de las garantías individuales, considerando a éstas como meras relaciones jurídicas entre los sujetos de que hemos hablado: gobernados, por un lado, y Estado y autoridades, por el otro".[87] O, en otras palabras, "es indudable que la fuente de nuestras garantías individuales es la idea de los derechos del hombre".[88]

Dentro de la doctrina de los derechos humanos, las garantías individuales parecen quedar insertas en la llamada primer generación.[89] Esto es apreciado así por José Luis Soberanes, Víctor Martínez y Elisa Badillo. En el apartado "Derechos y garantías individuales" de su libro *Los derechos humanos (breve introducción)* señalan:

---

[86] *Cf.* I. Burgoa, *Las garantías individuales*, p. 187.

[87] *Idem*. Sin embargo, resulta muy interesante la siguiente reflexión de Héctor Fix-Zamudio, quien considera la denominación de "garantías individuales y sociales" como anacronismos: "En nuestro país, no obstante que en el lenguaje tradicional de la legislación, la jurisprudencia y un sector de la doctrina, se mantiene esa imagen histórica del juicio de amparo como instrumento para la tutela de los derechos humanos, estos últimos con la denominación anacrónica de 'garantías individuales y sociales' la realidad es diversa, ya que después de una evolución que ya debe considerarse irreversible, con independencia de su calificación positiva o negativa, se ha transformado en una institución sumamente compleja, que además de la protección de los propios derechos fundamentales, también tutela prácticamente todo el ordenamiento jurídico nacional, desde las elevadas disposiciones de la Carta Federal hasta los modestos preceptos de un reglamento municipal". Héctor Fix-Zamudio, *Justicia constitucional,* Ombudsman *y derechos humanos*. 2a. ed. México, CNDH, 2001, p. 484.

[88] J. Carpizo, "Garantías individuales", en M. Carbonell, coord., *op. cit*., p. 263.

[89] "La constitución de 1917 contiene los principios fundamentales para la vida pública en México. De éstos, los más importantes son las garantías individuales. Concebidas por el legislador como 'elementos propios y consubstanciales de la naturaleza del hombre', no podríamos imaginar una vida libre y digna sin ellas. [...] Conforme a nuestra organización política, todo individuo que reside en México disfruta de las garantías individuales que el código Fundamental de la República —la Constitución— otorga y entre las cuales figuran, en primer término, la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica y otras de menor envergadura. [...] La situación jurídica de los individuos, en todo el país, es el goce de tales derechos, y cuando alguna de las autoridades constituidas conforme a la propia Constitución, dicta una orden o ejecuta un acto que viola cualquiera de dichas garantías, comete una violación de la Constitución". F. J. Paege, *La constitución de 1917, las garantías individuales en fallos de la Suprema Corte de Justicia*. México, [s. e.], 1960, pp. 7-9.

> Dentro de este rubro se incluyen los derechos humanos llamados de primer generación, derechos de carácter individual que tienen como finalidad generar para cada individuo un ámbito libre de interferencias por parte de la autoridad, para el desarrollo pleno del marco de respeto a la dignidad personal. Como puede verse en la casi totalidad de los casos, los derechos aquí contenidos se satisfacen con no acciones por parte del Estado; esto es, se trata de derechos y libertades personales que inhiben la acción de la autoridad y constituyen por tanto límites a la acción estatal.[90]

Complementando lo anterior, y no obstante tratarse de doctrina argentina, nos parece bastante acertada la siguiente acepción:[91]

> Con idéntica jerarquía que las "garantías del derecho de la Constitución", la esencia misma de las "garantías constitucionales, o garantías de los derechos constitucionales" queda constituida por la técnica jurídica especializada para dotar efectividad a los derechos y/o al normal desenvolvimiento de la vida institucional. Desde otro ángulo, pueden ser definidas como las herramientas de naturaleza reactiva y defensista que se ofrecen a los habitantes para que, en cada caso singular o general en que se repute producida una vulneración o amenaza de lesión de un derecho fundamental o del estatuto de los poderes, puedan acudir a ellas y obtener la preservación del derecho o reestablecimiento del equilibrio de los poderes.[92]

---

[90] Elisa Badillo, Víctor Martínez y José Luis Soberanes, *Los derechos humanos. (Breve introducción)*. México, Porrúa / CNDH, 2001, p. 17. A su vez, opina Ignacio Ara Pinilla, respecto del carácter de los derechos humanos, como meras garantías individuales, lo siguiente: "Así, la función de los derechos humanos, se ve, por consiguiente, disminuida en su aspecto transformador, para asumir un sesgo prioritariamente garantista. Se conjugan de esta forma las pretensiones más relevantes de la lógica burguesa que requería para posibilitar la buena marcha de sus intercambios comerciales la recreación de la sociedad en un marco de paz y de seguridad estables con el elogio racionalista que ve cómo se produce, finalmente, la anhelada ecuación entre el Derecho y la justicia, sin que se llegue, en realidad, a cuestionar si los métodos democráticos que se están utilizando son susceptibles de ser reinterpretados cualitativamente, dotándolos de un sentido diferente que no tenga ya un carácter simplemente formal". I. Ara Pinilla, *op. cit*., p. 97.

[91] Resulta bastante interesante la siguiente consideración de Luis Bazdresch: "Como las garantías no están ya restringidas a los individuos, sino que ahora comprenden también a las personas morales de Derecho privado y aun en ciertos casos a las de Derecho público, que propiamente no son individuos, ya no deben ser designadas como garantías individuales, sino más bien como garantías constitucionales o de derecho público". Luis Bazdresch, *Garantías constitucionales. Curso introductorio actualizado*. 3a. reimp. México, Trillas, 1996, p. 19.

[92] Raúl Gustavo Ferreira, *Notas sobre derecho constitucional y garantías*. Buenos Aires, EDIAR, 2001, p. 140.

Ahora bien:

> En términos generales "Las Garantías Individuales" pueden clasificarse atendiendo a dos criterios fundamentales. Uno desde el punto de vista formal que es la obligación del Estado surgida en la relación jurídica, y la otra es la relación que se da hacia el sujeto activo; por lo que en nuestro sistema jurídico se han clasificado en garantías de: igualdad, libertad, seguridad jurídica y propiedad.[93]

Así coincidimos desde nuestra modesta óptica. Por ello consideramos la propuesta hecha por Jorge Carpizo y Rodolfo Lara Ponte,[94] de la que podemos distinguir tres géneros de derechos individuales: igualdad, libertad y seguridad jurídica, agregando los de propiedad. Sólo a manera de introducción, tomemos algunos conceptos de Jorge Carpizo:

> Las garantías de igualdad tienen como fundamento la idea de que todo hombre es persona, es decir, sujeto jurídico de derechos y obligaciones y que lo desigual por naturaleza debe ser igual ante la ley.
>
> Las libertades de la persona humana en el aspecto físico consisten en asegurar al hombre primordialmente su vida y su libertad de locomoción.
>
> Las libertades de la persona humana en el aspecto espiritual garantizan al hombre su aspiración a intervenir en la cultura y en la historia. [...] Las garantías de seguridad jurídica tienen como finalidad proteger la realización de la libertad y de la igualdad. Son el instrumento protector por medio del cual se reglamenta la observancia de la igualdad y de la libertad.[95]

Empero, para nuestro análisis, adoptaremos el criterio seguido por Luis Ernesto Arévalo Álvarez, veamos su explicación:

> Los derechos humanos individuales fundamentales son aquellas normas que garantizan a los seres humanos, en cuanto individuos, el goce de los bienes jurídicos básicos de la persona humana, esto es la vida, la libertad, la igual-

---

[93] A. Rojas Caballero, *op. cit*., pp. 58-59.

[94] *Vid.* Jorge Carpizo, *Estudios constitucionales.* 6a. ed. México, Porrúa, 1994, pp. 484 y ss.; Rodolfo Lara Ponte, *Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano.* 2a. ed. México, Porrúa, 1997. En este orden de ideas, véase el siguiente pasaje de Jorge Carpizo: "Una declaración de derechos o garantías individuales generalmente puede ser subdividida en garantías de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica". En José Luis Soberanes y Héctor Fix-Zamudio, comps., *El derecho en México*. México, FCE, 1996, p. 163.

[95] J. L. Soberanes y H. Fix-Zamudio, comps., *op. cit*., pp. 163 y 165.

> dad, la propiedad y la seguridad. Se les llama también [...] derechos humanos de primera generación.
>
> Estos derechos pueden ser agrupados o clasificados de la manera siguiente: a) derechos a la libertad; b) derechos a la igualdad; c) derechos a la propiedad; d) derechos a la seguridad y e) derechos de soberanía.[96]

V. La jurisprudencia como fuente formal del derecho en el derecho positivo mexicano

Procede ahora abordar el concepto de Jurisprudencia como fuente formal del derecho. La palabra "Jurisprudencia" ha admitido diversas acepciones en la historia del pensamiento jurídico. En la doctrina romano-medieval fue una virtud definida, *in genere*, como "la disposición del intelecto que habilita para determinar el contenido cierto del derecho, tanto en su expresión normativa, como en su determinación singular".[97] En este orden de ideas, decía Álvaro d'Ors:

> La decisión en justicia de una controversia sobre lo que pertenece a las personas incumbe a un juez, que es la persona imparcial que declara su opinión o sentencia respecto al derecho: el que declara el derecho [...] La Jurisprudencia es así la ciencia que debe ilustrar a los jueces para dar sentencias justas.[98]

En principio, la prudencia es "la virtud que pone el justo medio de la razón en los actos de las demás virtudes..."[99] Por ello: "Las dotes de buen gobierno se reducen a las que, según Santo Tomás, que sigue en esto a Aristóteles, son actos integrantes de la prudencia..."[100] Luego entonces, se trata de una virtud fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional (de "jurisdecir"). Sin embargo, el juez practica una prudencia especial, la *iuris prudentia*. Definida por Álvaro d'Ors, como la virtud "que sabe distinguir

---

[96] L. E. Arévalo Álvarez, *op. cit*., p. 67.

[97] Carlos I. Massini, *Sobre el realismo jurídico*. Buenos Aires Abeledo-Perrot, 1978, p. 100.

[98] Álvaro d'Ors, *Elementos de derecho privado romano.* 3a. ed. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992, p. 13.

[99] Antonio Peinador Navarro, *Tratado de moral profesional*. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1969, p. 206.

[100] *Idem.*

lo que se debe hacer", la prudencia es una de las virtudes de mayor relevancia, si es que no la más importante que debe practicar el jurista.[101] Para el caso del juez, quien específicamente, *iuris* dice, se trata de una virtud que por excelencia, practica el juzgador. Carlos Ignacio Massini, haciendo referencia a la prudencia *in genere* concluye que se trata de "una virtud intelectual, concretamente del intelecto práctico, que tiene por objeto establecer y prescribir lo que es recto en el obrar propiamente humano".[102] En lo estrictamente jurídico, "El oficio de jurista es una arte o ciencia práctica —pues *ars* o arte no es otra cosa que un conocimiento práctico—, es un saber, que comporta discernir: el discernimiento de lo justo y de lo injusto, el discernimiento del derecho y de la lesión del derecho".[103] Y ese hábito de discernir, es precisamente la prudencia jurídica. Así las cosas, podemos afirmar que tal virtud es "la disposición del intelecto que habilita para determinar el contenido cierto del derecho, tanto en su expresión normativa, como en su determinación singular".[104] De ahí que la justicia no sería posible si no es asistida por la *iuris prudentia*, así lo apunta d'Ors:

> Hay que recordar asimismo que la virtud de la Justicia es como ciega si no se ve asistida por la Jurisprudencia; y que muchas veces se incurre en resultados injustos, aun queriendo hacer justicia, por falta de Jurisprudencia, y que tantos desmanes que se perpetran en nombre de la justicia se deben a la ignorancia del Derecho [...] Jurisprudencia y Justicia deben mantenerse unidas, porque no basta saber, si luego no se quiere realizar lo que se sabe que se debe hacer, pero tampoco sirve querer, si antes no se sabe lo que se debe querer.[105]

El juez, es pues, un examinador prudente de lo justo y hecho esto se encuentra ya en posición de sentenciar. Desde luego, esta sentencia debe contar con fuerza vinculante por ello "Así, donde no pueden intervenir jueces, no hay tampoco derecho. De ahí que podamos definir el derecho como aquello que aprueban los jueces".[106]

---

[101] Á. d'Ors, *Elementos de derecho privado*, p. 11.

[102] Carlos I. Massini, *La prudencia jurídica, introducción a la gnoseología del derecho*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1990, p. 34.

[103] Javier Hervada, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992, p. 75.

[104] C. I. Massini, *La prudencia jurídica, introducción a la gnoseología del derecho*, p. 100.

[105] Álvaro d'Ors, *Una introducción al estudio del derecho*. Madrid, Rialp, 1989, p. 29.

[106] *Ibid*., p. 32.

Sin embargo, como ya lo hemos comentado, el fenómeno codificador logró transformar a la ley como la fuente jurídica por excelencia, por tanto, prácticamente el derecho se transformó en sinónimo de la ley. Con cierto dramatismo, pero no sin razón Bernardino Bravo Lira reflexiona sobre lo anterior:

> Así pues, lo que desapareció con la codificación no fue propiamente el Derecho Común, sino esa corriente viva de autores y obras que lo mantenía al día. En lugar de esta jurisprudencia dinámica se impuso, sobre las demás fuentes del derecho, la ley, la más rígida de ellas, la única que es incapaz de adaptarse por sí misma a las mudables condiciones de la vida social.[107]

No obstante, Radbruch, comenta que la ley no se transformó en un código con pretensiones de abarcar las instituciones jurídicas con un carácter absoluto, omnipotente. Durante la redacción del propio *Codé* Napoleón, Etienne Portalis ya lo había remarcado:

> El *Codé* civil no tiene una redacción casuística, pero no se halla tampoco dominado por la quimera de resolver de antemano, mediante exageradas abstracciones, todos los casos jurídicos imaginables. Renuncia conscientemente a la pretensión de reglamentarlo todo, sin omisiones ni lagunas. Lo decía el mismo Portalis: "Saber que no es posible preverlo todo, es una sabia previsión". Sin embargo, el Art. 4 exige que el juez, si no quiere incurrir en las penas previstas para la denegación de justicia, resuelva todos los casos jurídicos que ante él se presenten, sin que pueda excusarse alegando que la ley es oscura o insuficiente en cuanto al caso de que se trata. Por oposición a Montesquieu, para quien el juez no es más que el instrumento automático e inanimado de la justicia, llamado a juzgar —según una frase de Portalis— como si los legisladores fuesen dioses y los jueces no llegasen siquiera a la categoría de hombres, el Código civil francés admite, pues, la posibilidad de una creación libre de Derecho por la vía judicial. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, en Francia los fallos judiciales sólo tienen efectividad para el caso concreto, pero no fuerza de ley para casos futuros. Pero la "jurisprudencia", aunque no tenga fuerza de ley, aparece, de hecho, revestida de gran autoridad.[108]

---

[107] Bernardino Bravo Lira *et al*., *Homenaje a Ismael Sánchez Bella*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992, p. 169.

[108] G. Radbruch, *op. cit*., p. 75. A pie de página, Radbruch hace una aclaración que me parece pertinente incluirla: "En Francia (al igual que en España y en algunos países de Hispanoamérica) se llama 'jurisprudencia', en la terminología judicial, al Derecho decantado

En consecuencia el significado de jurisprudencia sufrió una importante evolución:

> Ese conocimiento acertado de lo que era derecho en cada situación singular —llamado *iuris prudentia*— dio posteriormente el nombre, por una derivación lingüística, a la ciencia del derecho y a las normas que tienen su origen en las sentencias de los tribunales. Pero con el transcurso del tiempo, el uso de la palabra se fue restringiendo a estas dos acepciones derivadas, sobre todo la última, sin que el conocimiento de lo justo concreto conservara el clásico apelativo de prudencia.[109]

La jurisprudencia como ciencia jurídica es, sobre todo, un producto del fenómeno codificador alemán. Para esta nación la adopción del modelo de código francés resultó frustrada luego de la polémica suscitada entre Federico Carlos de Savigny y Antonio Federico J. Thibaut en 1814. Savigny logró imponer su postura. El derecho alemán debía buscar su identidad histórica.[110] Así surgió una importante escuela que adoptó una admirable metodología para el conocimiento de los derechos romano y germánico. "El Derecho científico alemán, que en la primera mitad del siglo XIX dio origen a la doctrina pandectista [...], tuvo su culminación hacia la mitad de aquel siglo, dando lugar a la que fue llamada *Begriffsjurisprudenz* o jurisprudencia de conceptos".[111] Creada por Bernhard Windscheid (1817-1892), la jurisprudencia conceptual es aquella que se ocupa de resolver cuestiones jurídicas deduciendo lógicamente la respectiva conclusión del mismo sistema jurídico, con exclusión de cualquier consideración finalista. O como bien lo ha explicado Philipp Heck: "El juez tenía que limitarse a subsumir el caso bajo el concepto jurídico, y se

---

en las sentencias de los tribunales; en Inglaterra se da este nombre a la fase suprema y más general de la ciencia del Derecho, a algo semejante a lo que la llamada Teoría general del Derecho es entre los alemanes".

[109] C. I. Massini, *La prudencia jurídica, introducción a la gnoseología del derecho*, p. 21.

[110] "La Escuela Histórica admite que la materia del derecho está dada por el pasado de la nación; pero no de una manera arbitraria y de tal modo que pudiera ser ésta o la otra accidentalmente, sino como procedimiento de la íntima esencia de la nación misma y de su historia. Después, cada tiempo deberá encaminar su actividad a examinar, rejuvenecer y mantener fresca esta materia nacida por una necesidad interna". F. K. von Savigny, "Sobre el fin de la *Revista de la Escuela Histórica*", en Pompeu Cassanovas y José Juan Moreso, eds., *El ámbito de lo jurídico. Lecturas de pensamiento jurídico contemporáneo*. Barcelona, Crítica, 1994, p. 25.

[111] Norberto Bobbio, *El positivismo jurídico*. Madrid, Debate, 1993, p. 133.

le negaba toda actividad creadora de derecho".[112] Esto es consecuencia de una postura *ius*-positivista, que derivará en el llamado dogmatismo jurídico:

> El positivismo jurídico, creación de profesores o teóricos, descansa en una función intelectual, que es el concepto, el cual no atiende a un caso concreto, con lo que la pandectística se aleja del Derecho Romano, nacido de la casuística. La nueva jurisprudencia o jurisprudencia de conceptos despoja a las relaciones jurídicas de su carácter humano y las eleva despersonalizadas al mundo de los conceptos, en el que se estudian como objetos científicos. Las leyes se otorgan teniendo en cuenta los avances de la ciencia jurídica en su perfeccionamiento de los casos ideales o figuras jurídicas y el juez decide científicamente, prescindiendo de las circunstancias que no estén incluidas en los conceptos jurídicos.[113]

Sin embargo, el pensamiento de Rudolf von Ihering (1818-1892) permitirá que se suscite un cierto grado de evolución, con la llamada jurisprudencia de intereses, que como bien lo afirma Alfred Verdross:

> Sin género [...] de duda, la jurisprudencia de intereses significó un indudable progreso respecto de la jurisprudencia conceptual, ya que mediante la pura deducción lógica de las normas abstractas no puede realizarse la justicia del caso concreto, para alcanzar este resultado es en todo caso indispensable tener a la vista el fin de cada una de las instituciones jurídicas.[114]

En efecto, en palabras de Heck se trata de "una nueva tendencia que subraya la conexión del derecho con los intereses de la vida, o dicho de otro modo, la finalidad en el derecho, colocando en primer término el elemento teleológico".[115] Esta *iuris prudentia* constituyó un paso considerable en permitirle al juez recobrar su papel como creador del derecho, en este sentido Heck opina que "La consecuencia fundamental de esta tendencia es que el juez completa según criterios teleológicos las lagunas del derecho, esto el, que

---

[112] P. Heck, *op. cit.*, p. 21.

[113] Jesús Lalínde Abadía, *Iniciación histórica al derecho español*. Barcelona, EUB, 1998, pp. 424-425.

[114] A. Verdross, *op. cit.*, 1983, p. 272. "En el campo del Derecho privado, las nuevas corrientes se reflejan en la jurisprudencia de intereses, cuya iniciación corresponde al romanista alemán Rodolfo Ihering, en virtud de la cual se trata de que el concepto como inspirador de la decisión del juez sea sustituido por la ponderación de intereses de las partes en litigio, abandonando la abstracción para acudir a la vida y sus realidades concretas". J. Lalínde Abadía, *op. cit.*, p. 425.

[115] P. Heck, *op. cit.*, p. 21.

su misión no consiste exclusivamente en subsumir bajo normas jurídicas, sino también en crear subsidiariamente estas últimas".[116] Heck había dicho estas palabras en 1912. Por ello resulta preocupante encontrar opiniones sobre la ley y las resoluciones jurisdiccionales como la siguiente: "La interpretación no consiste en encontrar, bajo la fórmula legal, un gran número de significaciones, sino en descubrir la norma que ha de aplicarse al caso".[117] Es difícil encontrar una ley que lo pueda prever todo, de ahí que podamos afirmar que el razonamiento judicial, no puede ser un simple silogismo, casi automático, más bien: "Se trata de un modo de razonar en el que se introducen constantemente los fines prácticos, las apreciaciones de justicia, los conflictos de bienes o valores. Nada tiene que hacer aquí el razonamiento de tipo teórico, necesario y uniforme".[118]

Por consiguiente, el juez elabora un juicio práctico:

> [...] determinando qué es derecho en un caso concreto, no se detiene allí; no sólo dice qué es derecho sino que lo prescribe; no sólo especifica la solución del caso, sino que manda que sea concretada en los hechos; no sólo establece qué es lo suyo de cada cual, sino que impera que le sea dado... En este aspecto, la doctrina de la prudencia representa una perfecta síntesis superadora de las opuestas posiciones del conceptualismo y del voluntarismo. Entre la posición de los exegetas, para quienes la sentencia era el resultado de una deducción puramente racional y de Kelsen, quien sostiene que la decisión del juez es un acto de pura voluntad inmotivada, siempre que lo sea dentro del marco de posibilidades establecido por la norma, se encuentra la doctrina de la prudencia; para ésta, la decisión judicial es un acto formalmente de la razón, pero transido de voluntariedad; implica una determinación racional de lo que es justo, pero no sólo una determinación sino también una valoración y un mandato, actos que no pueden realizarse sin el concurso de la voluntad, que quiere aquello que la razón presenta como recto.[119]

Pudiera parecer que para algunos iusnaturalistas radicales, la ley es una némesis de lo puramente jurídico. Es claro que en sí, la ley no es algo malo, todo lo contrario. Pero no debe perderse de vista su carácter mediato:

> [...] la ley determina lo justo. Villey tiene, realmente, razón: el arte jurídico consiste en decir lo justo. Más aún, no solamente el legislador, el juez, el procurador, el abogado, el notario, el funcionario, en suma, todo jurista debe buscar y decir el derecho porque es una tarea... Pero nadie puede pronunciarse

---

[116] *Ibid*., 22.

[117] E. García Máynez, *op. cit*., p. 365.

[118] C. I. Massini, *Sobre el realismo jurídico*, p. 134.

[119] *Ibid*., pp. 135-136.

> sobre lo justo y lo injusto sin referirse a la ley, a la regla divina o humana, natural o positiva, escrita o consuetudinaria, la cual establece el derecho. Esta regla es siempre exterior porque emana de un legislador. Ella es también en la mayoría de los casos, general, en tanto que lo justo es concreto. Es necesario, entonces, que la prudencia de todo hombre enuncie para sus necesidades del momento la regla interior y concreta de lo justo por hacer.[120]

Visto el itinerario, aunque de manera somera, en coherencia con los propósitos de este estudio, debemos concentrarnos en la jurisprudencia como una de las fuentes formales del derecho. Eduardo García Máynez define éstas como "los procesos de creación de las normas jurídicas".[121] En nuestra opinión, es más precisa la definición de Abelardo Torré, las fuentes formales del derecho: "Son los distintos modos de manifestación del derecho positivo, o si se quiere, de las normas jurídicas enfocadas con relación a su origen".[122] En este orden de ideas, las fuentes formales del derecho son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.[123] Aunque esta última, carente de fuerza vinculante. Ya referíamos como García Máynez precisa a la jurisprudencia con el carácter de fuente formal del derecho, apuntando que es "el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales".[124] Su carácter vinculante radica en ser una resolución emitida por un órgano revestido de potestad constitucional. Sin embargo, en el derecho positivo mexicano, no todos los tribunales decantan jurisprudencia. Esto fue producto de un interesante proceso.

Los juristas que diseñaron la jurisprudencia como fuente formal del derecho positivo mexicano, fueron Ignacio Mariscal y el célebre Ignacio Vallarta. En opinión de Walter Frisch Philipp y José Arturo González Quintanilla,[125] la doctrina aportada por las resoluciones de los juicios de amparo se manifestaron visiblemente a través de su recopilación en el *Semanario Judicial*. Éste fue publicado mediante decreto del 8 de diciembre de 1870, que a la sazón establecía:

> Artículo 1o. Se establece un periódico con el nombre de "Semanario Judicial de la Federación" en que se publicarán:

---

[120] Georges Kalinowski, *Concepto, fundamento y concreción del derecho*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1982, p. 23.

[121] E. García Máynez, *op. cit*., p. 51.

[122] A. Torré, *op. cit.*, p. 326.

[123] E. García Máynez, *op. cit*., p. 51.

[124] *Ibid*., p. 68.

[125] W. Frisch Philipp y J. A. González Quintanilla, *op. cit.*, p. 116.

> Todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales federales desde el restablecimiento del orden legal en 1867, y las que se pronunciaren en lo sucesivo.
>
> Los pedimentos del Procurador General de la Nación, del Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia y de los Promotores Fiscales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y las actas de acuerdo pleno de la Suprema Corte, y los informes pronunciados ante ella, cuando acuerden la publicación.[126]

El decreto anterior, era insuficiente para que la jurisprudencia contase con carácter de obligatoriedad. Como bien lo explica Ignacio Burgoa:

> El órgano judicial, en efecto, no legisla al formular tesis jurisprudenciales; se concreta o debe concretarse a interpretar o desentrañar el sentido de una norma legal, por más que las consideraciones de interpretación e integración correspondientes asuman los caracteres propios de una ley. [...] En otras palabras, no puede haber jurisprudencia sin ley en los sistemas de derecho escrito como el nuestro...[127]

La solución llegó con la "Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857", publicada el 14 de diciembre de 1882.[128] La naciente jurisprudencia vinculante encuentra su origen en las ideas de Mariscal principalmente. Sin embargo:

> Vallarta, por su parte, ideó el sistema de formación de la jurisprudencia a través de cinco precedentes, en vez de uno, como lo proponía Mariscal. Esto último fundamentado en la razón de que con la reiteración del criterio, éste se vería necesariamente madurado merced del análisis respectivo, robusteciéndolo y pesándolo cabalmente para obtener de él su mayor profundidad.[129]

Así las cosas, la nueva ley de amparo[130] disponía lo siguiente:

---

[126] Cit. por M. Acosta Romero y A. Pérez Fonseca, *op. cit*., p. 118.

[127] I. Burgoa, *El juicio de amparo*, p. 826.

[128] "El establecimiento de la jurisprudencia obligatoria se debió al pensamiento de Ignacio Luis Vallarta inmerso en el proyecto de Ley de Amparo aprobado en 1882, en relación con el criterio expresado por la corte sobre la base de cinco resoluciones pronunciadas en el mismo sentido, fuese obligatoria para los tribunales federales, tal como lo consagró posteriormente el Código de Procedimientos Federales en 1897 y el Código de Procedimientos Civiles de 1908". R. Plascencia, *op. cit*., p. 31.

[129] M. Acosta Romero y A. Pérez Fonseca, *op. cit*., p. 33.

[130] Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Historia del amparo en México*. México, Ley de Amparo de 1982, 1989, t. 4, pp. 625-630.

> [...] 34. Las sentencias pronunciadas por los jueces, serán en todo caso fundadas en el texto constitucional de cuya aplicación se trate. PARA SU DEBIDA INTERPRETACIÓN SE ATENDERÁ AL SENTIDO QUE LE HAYAN DADO LAS EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE Y LAS DOCTRINAS DE LOS AUTORES. [...]
>
> 41. Las sentencias de la suprema corte deben ser fundadas, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE CONSIDERE BASTANTES EL TRIBUNAL PARA FUNDAR LA INTERPRETACIÓN QUE HACE DE LOS TEXTOS DE LA CONSTITUCIÓN, y resolviendo, con la aplicación de éstos las cuestiones constitucionales que se traten en el juicio. CUANDO ESAS SENTENCIAS NO SE VOTEN POR UNANIMIDAD, LA MINORÍA MANIFESTARÁ TAMBIÉN POR ESCRITO LOS MOTIVOS DE SU DISENSIÓN. [...]
>
> 47. Las sentencias de los jueces de distrito, las ejecutorias de la suprema corte y los votos de la minoría de que habla el Art. 41, SE PUBLICARÁN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. Los tribunales, para fijar el derecho público, tendrán como regla suprema de conducta la Constitución federal, las ejecutorias que la interpreten, las leyes emanadas de ellas y los tratados de la República con naciones extranjeras. [...]
>
> 70. La concesión o denegación del amparo contra texto de la Constitución o contra su interpretación, fijada por la suprema corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo, y con prisión de seis meses a tres años, si el juez ha obrado dolosamente; y si sólo ha procedido por falta de instrucción o descuido, quedará suspenso de sus funciones por un año.

A la par que la historia nacional, la jurisprudencia pasó momentos difíciles. En 1897, Porfirio Díaz promulgó un "Código de Procedimientos Federales",

> [...] desapareciendo ya completamente a la institución de la jurisprudencia. Así el artículo 826 del citado código decía: "Las sentencias de amparo sólo favorecen a los que hayan litigado en el juicio, y no podrán alegarse por otros como ejecutorias para dejar de cumplir las leyes o providencias que las motivaren" [...] En el texto del mismo código, puede verse que habiendo sido suprimida la jurisprudencia, sólo sobrevivió el precepto que ordenaba la publicación de las ejecutorias en el *Semanario*.[131]

Con el "Código Federal de Procedimientos Civiles", del 26 de diciembre de 1908, se retoma la figura en comento. "Para entonces la institución se

[131] M. Acosta Romero y A. Pérez Fonseca, *op. cit.*, pp. 39-40.

encontraba estructurada y consolidada cabalmente".[132] De cualquier manera, la estabilidad político-institucional no era la idónea y realmente, para hablar de una auténtica consolidación, debe hablarse, ya con la constitución vigente, de la ley publicada el 10 de enero de 1936, es decir, la actual Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Aquí encontramos la verdadera madurez de la jurisprudencia con carácter de norma general vinculante.

El artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, fundamenta de manera genérica el carácter de la jurisprudencia como fuente formal en nuestro derecho positivo. El mencionado artículo dice a la letra:

> La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
>
> Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.
>
> También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados.

Ya se ha citado el importante artículo 192, perteneciente al Título Cuarto, "De la Jurisprudencia de la Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito", en el seno de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, nos han quedado pendientes algunas problemáticas propias de la jurisprudencia reconocida como tal por el derecho positivo. En principio, vale la pena retomar cuáles son los órganos facultados para general tal fuente. En segundo lugar, es conveniente analizar cuáles son los alcances de la jurisprudencia. A su vez, veremos como se forma esta fuente del derecho, el caso de que sea interrumpida y su obligatoriedad. Respecto de su publicidad ya hemos hablado de ello.

---

[132] José R. Padilla, *Sinopsis de amparo (con formularios y jurisprudencia)*. 6a. ed. México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 2001, p. 128.

De acuerdo a la legislación vigente, los órganos facultados para crear jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en Pleno o por Salas. A su vez, los Tribunales Colegiados de Circuito en lo que les competente.

En cuanto su alcance, la jurisprudencia del Pleno obliga a éste, a las Salas, a las Tribunales Colegiados de Circuito, Jueces de Distrito, y en general a todo órgano que desempeñe una función jurisdiccional. La jurisprudencia creada por los Tribunales Colegiados de Circuito obliga a éstos, a los Jueces de Distrito y órganos jurisdiccionales que operen dentro de la jurisdicción del Colegiado de Circuito.[133]

La jurisprudencia ha considerado que la obligatoriedad de la misma obedece al principio de legalidad consagrado en el artículo 16. Así lo podemos ver en la siguiente tesis cuyo rubro se titula: "JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL".[134] El texto señala lo siguiente:

> Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma

---

[133] A su vez, véase el texto del artículo 193 de la ley de amparo vigente: "La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal colegiado".

[134] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, diciembre de 1998 Tesis: XIV.1o.8 K Página: 1061 Materia: Común Tesis aislada. Revisión fiscal 27/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 1o. de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos.

> definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos enunciados, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión, todas las autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el principio de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO.

Continuando con la interpretación generada por las resoluciones del Poder Judicial Federal sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia, resulta bastante interesante la tesis titulada: "JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE LOS JUZGADORES ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS QUE LA DIFUNDEN",[135] que establece:

> La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo octavo de su artículo 94, la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación y remite a la ley la determinación de los términos de dicha obligatoriedad, lo que se regula en el capítulo único, del título cuarto, del libro primero, artículos 192 a 197-B. En el referido artículo 192 se establece la obligatoriedad de las jurisprudencias para todos los órganos jurisdiccionales de la República conforme al orden lógico descendente que se da entre el Pleno y las Salas de la Suprema Corte, los Tribunales Colegiados de Circuito, facultados para establecerla y los restantes órganos que imparten justicia. De acuerdo con ello, es indiscutible que

[135] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: 2a. CV/2000 Página: 364 Materia: Constitucional, Común Tesis aislada. Incidente de inejecución 45/2000. Armando Herrera Corona. 7 de julio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

> los Jueces de Distrito tienen el deber de cumplir con las jurisprudencias sustentadas por los órganos mencionados y si no lo hacen incurren en responsabilidad cuando, lógicamente, existen elementos suficientes para tener por demostrado que tuvieron conocimiento de ellas. Al respecto es indispensable, por una parte, que los órganos que establecen jurisprudencia cumplan celosamente con lo dispuesto por el artículo 195 del ordenamiento citado en cuanto a la aprobación del texto y rubro de las tesis jurisprudenciales, así como de su remisión a la dirección responsable de la publicación del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta* y a los órganos jurisdiccionales que no intervinieron en su integración. Además, deberá hacerse la publicación oportuna de ese órgano informativo y las partes en los juicios de amparo deberán invocar específicamente las jurisprudencias que consideren aplicables. Lo anterior debe complementarse por todos los miembros de los órganos obligados a cumplir con la jurisprudencia, por un lado, con el especial cuidado en el análisis de los documentos aportados por las partes para determinar si pretenden que se aplique al caso alguna tesis jurisprudencial y, por otro, estableciendo con sus colaboradores profesionales un sistema riguroso de consulta, análisis y seguimiento del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, así como de los oficios que al efecto se les remitan, a fin de estar oportunamente informados de las tesis jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación que deben cumplir.

La interpretación jurisprudencial también se ha referido a los alcances de la obligatoriedad de esta fuente formal, tanto en el ámbito competencial como en su alcance exegético. Veamos la siguiente tesis bajo el rubro: "JURISPRUDENCIA DE TRIBUNALES COLEGIADOS, SÓLO PUEDE ESTABLECERSE EN MATERIA DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA":[136]

> La interpretación teleológica del artículo 193 de la Ley de Amparo, conduce a la convicción de que la jurisprudencia que forman los tribunales colegiados resulta obligatoria para los jueces de Distrito en tanto se concrete a los aspectos de su competencia exclusiva, ya que de otro modo se introduce anarquía en la interpretación jurisprudencial por parte de los tribunales federales, en vez de dar coherencia y armonía al sistema legal. De ahí que, cuando no se trate de asuntos de competencia exclusiva de los tribunales colegiados, las tesis o criterios emitidos por éstos, carecen de fuerza obligatoria.

---

[136] Instancia: Tercera Sala; Época: Octava Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIV-noviembre; Tesis: 3a. LVI/94; Página: 42. Amparo en revisión 2069/93. Banca Promex, S. N. C., hoy S. A., Sucursal Los Mochis. 29 de agosto de 1994. Cinco votos. Ponente: Carlos Sempé Minvielle. Secretario: Francisco J. Sandoval López.

En cuanto el alcance del contenido vinculante de la jurisprudencia como fuente formal, define la tesis rubricada "JURISPRUDENCIA, SU ALCANCE",[137] lo siguiente:

> Si bien es cierto que la jurisprudencia que establecen los tribunales federales, tiene el carácter de obligatorio; también lo es que dicha jurisprudencia no deja de ser más que la interpretación que de la ley hace el órgano jurisdiccional federal, por lo que no puede tener el alcance de derogar la ley, ni siquiera equipararse a ésta. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

La jurisprudencia obligatoria del Poder Judicial de la Federación se genera por tres procedimientos: La reiteración de criterios de la Suprema Corte, de sus salas, y de los tribunales colegiados; en segundo lugar, a través de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte ante los casos de contradicciones de tesis de diversos tribunales colegiados; y dentro de "los considerandos que funden los puntos resolutivos de las sentencias que pronuncie la Suprema Corte respecto de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias a que se refiere el artículo 105 constitucional".[138]

La reiteración de tesis es explicada por la siguiente tesis (valga la redundancia), cuyo rubro dice: "JURISPRUDENCIA. CUANDO SE ESTABLECE POR REITERACIÓN, SE CONSTITUYE POR LO RESUELTO EN CINCO EJECUTORIAS COINCIDENTES NO INTERRUMPIDAS POR OTRA EN CONTRARIO, POR LO QUE LAS OBLIGACIONES DE REDACCIÓN, CONTROL Y DIFUSIÓN SÓLO PRODUCEN EFECTOS PUBLICITARIOS".[139] Veamos el texto:

---

[137] Época: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*.

Parte: X-septiembre; Página: 293; Amparo directo 352/92. Mario Dávila Moreno. 8 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Véase: Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1988, Segunda Parte, Tesis relacionada con la Jurisprudencia 1062, página 1695.

[138] Héctor Fix-Zamudio y Héctor Fix Fierro, "Artículo 94", en Miguel Carbonell, coord., *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada*. 16a. ed. México, Porrúa / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, t. IV, p. 9.

[139] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, mayo de 1997 Tesis: P. LXIV/97 Página: 166 Materia: Común; Amparo en revisión 1921/96. Inmobiliaria Mobimex, S. A. de C. V., y otros. 31 de octubre de 1996. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Veláz-

> El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo séptimo, previene que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo dispone que "Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario..." y señala en seguida los requisitos de votación, los que actualiza el artículo decimoquinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (*Diario Oficial* de 26 de mayo de 1995), en el sentido de que tratándose del Pleno se requiere que "lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros". Por otro lado, el artículo 195 de la Ley de Amparo señala las reglas relativas a la aprobación del texto y rubro de las tesis jurisprudenciales, así como los requisitos para su publicidad y control. De lo anterior se sigue que, con rigor técnico, la jurisprudencia por reiteración se forma por lo resuelto en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros, cuando se trate de las establecidas por el Pleno, lo que lleva a concluir que las obligaciones de redacción, control y difusión previstas en el artículo 195 del invocado ordenamiento, sólo tienen efectos publicitarios, mas no son elementos necesarios para la formación de los criterios de observancia obligatoria.

Así pues, la reiteración no se logra cuando se da el caso de interrupción, es decir, si se emite un criterio o ejecutoria contraria, como lo establece el artículo 194 de la Ley de Amparo:

> Artículo 194. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito. En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para establecer la jurisprudencia relativa. Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formación.

---

quez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de abril en curso, aprobó, con el número LXIV/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

Sin embargo, Eduardo García Máynez hace una importante precisión:

> La expresión *se interrumpe*, empleada en el precepto trascrito, no es correcta, ya que al dictarse una ejecutoria discrepante la jurisprudencia no se *interrumpe* ni se *modifica*, sino se deroga. A esto equivale, en efecto, la extinción de su obligatoriedad general. Una nueva tesis no puede surgir si no vuelven a cumplirse los requisitos que condicionaron la formación de la derogada.[140]

Al respecto, Ignacio Burgoa da una explicación más conciliadora:

> La interrupción de la jurisprudencia implica la cesación de la vigencia de las tesis que la constituyen, sin que éstas sean sustituidas en su observancia jurídica por la ejecutoria o ejecutorias interruptoras. Empleando un símil, podemos afirmar que la interrupción de la jurisprudencia equivale a la abrogación de una ley, es decir, a la relevación de los efectos obligatorios de la misma.[141]

No obstante, la interpretación concedida por el Poder Judicial de la Federación, maneja la terminología legal. Por ejemplo veamos la tesis titulada "JURISPRUDENCIA. FACULTAD PARA INTERRUMPIRLA":[142]

> De conformidad con el artículo 194 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito; Por lo tanto, tratándose de Jurisprudencia sustentada por el pleno o por las Salas del Máximo Tribunal de la República, la facultad para interrumpirla no corresponde a los Tribunales Colegiados, pues tal facultad únicamente se da cuando se trata de jurisprudencia propia.

A su vez, se ha interpretado que no obstante la interrupción de una serie de ejecutorias en orden a sentar una tesis jurisprudencial, el criterio puede ser invocado de manera aislada:

---

[140] E. García Máynez, *op. cit*., p. 71.

[141] I. Burgoa, *El juicio de amparo*, p. 830.

[142] Amparo en revisión 141/88. Héctor Domínguez Cortés. 28 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López. Véase: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*, número 80, p. 14, tesis por contradicción P./J.26/94.

> JURISPRUDENCIA. SI ES INTERRUMPIDA POR UNA EJECUTORIA EN CONTRARIO DEJA DE SER OBLIGATORIA, PERO ELLO NO IMPIDE QUE SE SIGA EL CRITERIO DE AQUÉLLA NI TAMPOCO OBLIGA A QUE SE APLIQUE EL DE LA EJECUTORIA AISLADA.[143]
>
> El artículo 192 de la Ley de Amparo establece la obligación para todos los órganos jurisdiccionales de aplicar la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, o sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda, mientras que el artículo 194 del propio ordenamiento previene que la jurisprudencia se interrumpe por una ejecutoria en contrario. De ambos dispositivos se sigue, que hay libertad para aplicar el criterio jurídico que se estime adecuado.

El artículo 196, como bien lo señala Ignacio Burgoa, "Con el objeto de expeditar la depuración de tesis contradictorias que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito...",[144] establece lo siguiente:

> Artículo 196. Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia establecida por otro, el tribunal del conocimiento deberá: I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada; II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial. En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de conocimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción.

---

[143] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: 2a. CVI/2000 Página: 365 Materia: Común Tesis aislada. Incidente de inejecución 45/2000. Armando Herrera Corona. 7 de julio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

[144] I. Burgoa, *El juicio de amparo*, p. 837.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la "Jurisprudencia" en el derecho positivo mexicano

1. JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE.[145]

> La jurisprudencia tiene facultades integradoras y va más allá de la norma, es decir, la verdadera jurisprudencia es aquella complementaria o integradora de las situaciones que no previó el legislador, adecuando la norma al caso concreto, toda vez que en muchas ocasiones las circunstancias de hecho están dando opciones distintas a lo establecido en un precepto legal. La Suprema Corte y los tribunales, al fijar un criterio en una tesis jurisprudencial, estudia aquellos aspectos que el legislador no precisó, e integra a la norma los alcances que, no contemplados en ésta, se producen en una determinada situación. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO.

2. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.[146]

> De la interpretación relacionada de los artículos 94 y 107, fracciones V y XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 158, 166, fracción IV, 193 y 197-A, de la Ley de Amparo, se desprende que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de

---

[145] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: VII-enero; Página: 296; Precedentes: Amparo directo 399/90. María Lourdes Monroy y otro. 7 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Ignacio Patlán Romero. Secretaria: Ma. del Carmen Prado Carrera.

[146] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, septiembre de 1998 Tesis: P. LX/98 Página: 56 Materia: Común Tesis aislada. Precedentes: Contradicción de tesis 2/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de agosto en curso, aprobó, con el número LX/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.

amparo directo en los que se formulen consideraciones sobre la inconstitucionalidad de alguna ley, tratado o reglamento, tienen efectos limitados que sólo se traducen, de ser concesorias de la protección de la Justicia Federal, en dejar insubsistente la resolución reclamada, sin hacer pronunciamiento en los resolutivos sobre los preceptos aplicados, pero estas peculiaridades no bastan para advertir que los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los juicios de amparo directo y pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, en realidad, emiten tesis, las que no son sino el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, por sus características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos, criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto esta naturaleza la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos iniciales enunciados. Sin embargo, tales tesis no integran jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad, en principio, porque la jurisprudencia sólo puede ser emitida por el tribunal legalmente encargado de resolver en última instancia sobre la temática relativa, esto es, por los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, ya sea por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, las Salas de la misma o los Tribunales Colegiados de Circuito; éstos, sólo en cuanto a tópicos de legalidad pero no cuando en amparo directo efectúan consideraciones sobre constitucionalidad de leyes, porque de estos asuntos incumbe conocer en última instancia a esta Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, no obstante que las tesis que los Tribunales Colegiados de Circuito emiten en los juicios de amparo directo, respecto de la constitucionalidad de normas generales, no son susceptibles de integrar jurisprudencia, es aconsejable y pertinente, en términos de lo establecido por el artículo 195 de la Ley de Amparo, que esas tesis sean redactadas de manera sintética, controladas y difundidas a través de los medios previstos en la ley, aunque señalándose que no resultan obligatorias ni aptas para integrar jurisprudencia, pues la satisfacción de la seguridad jurídica garantiza al gobernado el conocimiento de los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales, a efecto de que prevengan su posible aplicación, ya sea en favor o en contra de sus pretensiones jurídicas y, en esta tesitura, por más que los criterios externados por los Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo directo sobre constitucionalidad de leyes no sean aptos para integrar jurisprudencia por reiteración, lo cierto es que es factible su aplicación por el mismo órgano emisor o por otro; por ello, es útil que sean conocidos por los gobernados para que puedan solicitar u objetar su aplicación y, ante la eventual discrepancia con otro criterio, sea posible denunciar la contradicción de tesis y, desde luego, resolverla.

3. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA NO SE AFECTA POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA DETERMINACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ADOPTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SE SUSTENTE EN JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.[147]

> En la reforma del artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se eliminó como requisito de procedencia del recurso de revisión en contra de sentencias de amparo directo, el que la decisión sobre constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución General de la República no estuviera fundada en jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que constituye una expresión clara de la voluntad del legislador de no condicionar la procedencia del referido medio de defensa a ese preciso requisito; por lo que, ante ello, debe concluirse que en la actualidad han perdido aplicación criterios aislados como el sostenido por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, en la tesis que lleva por rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO CUANDO EN LA SENTENCIA SE HACE UNA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. DEBE DESECHARSE SI SE FUNDA, SIN CITARLA, EN UNA TESIS DE LA CORTE QUE YA ERA JURISPRUDENCIA", visible en el tomo I, primera parte-1, página 341, de la octava época, del *Semanario Judicial de la Federación*; máxime que, aun cuando exista una tesis jurisprudencial que sea exactamente aplicable al caso, el correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o bien, esta Suprema Corte de Justicia, deben analizar si los conceptos de violación en materia de constitucionalidad de leyes resultan operantes, pues de no ser así —verbigracia cuando se actualiza una circunstancia respecto de la ley impugnada, que en amparo indirecto provocaría la improcedencia del juicio respecto de ella—, el órgano de control estará impedido para realizar la aplicación de la jurisprudencia, por no reunirse los requisitos procesales que permiten abordar la cuestión de constitucionalidad planteada.

---

[147] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, junio de 2000 Tesis: P. LXXVIII/2000 Página: 41 Materia: Constitucional Tesis aislada. Precedentes: Reclamación 130/99. Constructora Erma, S. A. de C. V. 21 de septiembre de 1999. Mayoría de siete votos. Disidentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número LXXVIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

4. JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO.[148]

> Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional.

5. JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[149]

> La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una de-

---

[148] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, septiembre de 2000 Tesis: P./J. 88/2000 Página: 8 Materia: Común Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 17/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de junio de 2000. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl García Ramos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número 88/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

[149] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, diciembre de 2000 Tesis: P./J. 145/2000 Página: 16 Materia: Constitu-

terminada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.

6. CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO EXISTE VÁLIDAMENTE ENTRE UN CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUANDO SE TRATA DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES ELECTORALES.[150]

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que exista contradicción de tesis es necesario que dos o más

---

cional, Común Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 145/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

[150] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, junio de 2002 Tesis: P./J. 24/2002 Página: 5 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 24/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.

órganos jurisdiccionales sustenten criterios divergentes al resolver asuntos de cualquier naturaleza que sean de su competencia, esto es, constituye un requisito de procedencia de la contradicción de tesis que los criterios discrepantes deriven de resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales que estén facultados para pronunciarse sobre el punto a debate. Acorde con lo antes expuesto, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncia sobre la interpretación de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivada de un análisis de la inconstitucionalidad de una norma general en materia electoral que está fuera de su competencia, en sentido diverso al sustentado por este Máximo Tribunal, es evidente que no puede existir válidamente contradicción de tesis entre lo sostenido por dichos tribunales, ya que el órgano reformador de la Constitución le confirió la facultad exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de conocer sobre la inconstitucionalidad de normas generales en esa materia, por lo que no procede jurídicamente enfrentar un criterio sustentado por un órgano jurisdiccional competente para conocer sobre inconstitucionalidad de una ley, con un criterio sustentado por un órgano que carece de esa atribución, aun a título de aplicación del artículo 133 constitucional; sostener lo contrario, en lugar de crear certeza y seguridad jurídica, que es la finalidad del sistema implantado para resolver la discrepancia de criterios de órganos jurisdiccionales terminales del Poder Judicial de la Federación, se fomentaría la inseguridad al dar a entender, implícitamente, que procede aquella contradicción entre tribunales que constitucionalmente actúan en diversos ámbitos de competencia.

7. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI RESUELVE RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA ELECTORAL O SE APARTA DE UN CRITERIO JURISPRUDENCIAL SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, INFRINGE, EN EL PRIMER CASO, EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EN EL SEGUNDO, EL ARTÍCULO 235 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.[151]

Los preceptos constitucional y legal mencionados establecen, respectivamente, que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución es la acción de inconstitucionalidad, de la que conoce y resuelve sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y que la jurispru-

[151] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, junio de 2002 Tesis: P./J. 26/2002 Página: 83 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 2/2000-PL. Entre las sustentadas por la

dencia del Pleno de ésta, cuando se refiere a la interpretación directa de un precepto de la Constitución, es obligatoria para el Tribunal Electoral. A éste únicamente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 constitucional, resolver sobre la constitucionalidad de actos o resoluciones emitidos por las autoridades electorales. Por tanto, dicho Tribunal Electoral no está facultado para hacer consideraciones ni pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma general electoral, por ser una atribución exclusiva de este Alto Tribunal. Ahora bien, si dicho órgano jurisdiccional al resolver sobre un asunto sometido a su consideración aborda cuestiones relativas a la constitucionalidad de una norma general, así sea con la única finalidad de determinar su posible inaplicación, o establece la interpretación de un precepto constitucional distinta a la contenida en una jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que ya se haya determinado el sentido y alcance respectivos, es evidente que incurre, en el primer caso, en inobservancia al mencionado artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, y en el segundo, infringe el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en consecuencia, su actuación afecta la seguridad jurídica que se busca salvaguardar. En tal virtud, las tesis que se han sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o que llegaran a sustentarse sobre inconstitucionalidad de leyes electorales, no constituyen jurisprudencia.

8. JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY.[152]

De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional refe-

---

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 23 de mayo de 2002. Unanimidad de nueve votos. En cuanto al criterio contenido en esta tesis el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo formuló reserva. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diez de junio en curso, aprobó, con el número 26/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil dos.

[152] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: P./J. 38/2002 Página: 5 Materia: Común Juris-

rido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a sí el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación.

9. CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO DERIVA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA.[153]

La aparición de leyes, la reforma o adición a las existentes, puede ocasionar que los supuestos comprendidos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de

---

prudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 6/2002. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero del decimocuarto Circuito y Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 26 de agosto de 2002. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de agosto en curso, aprobó, con el número 38/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de agosto de dos mil dos.

[153] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, julio de 1999 Tesis: 1a. X/99 Página: 62 Materia: Común Tesis aislada. Precedentes: Contradicción de tesis 86/98. Entre las sustentadas por los Tribunales

Justicia de la Nación se vean modificados, reflejándose en las resoluciones judiciales. Si a virtud de ello un Tribunal Colegiado de Circuito emite un criterio en aplicación de la ley que se aparta de una jurisprudencia y otro de esos tribunales se pronuncia en términos diferentes sobre la misma cuestión, surge contradicción de tesis que deberá ser resuelta por el Máximo Tribunal del país, para evitar la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios opuestos.

10. CONTRADICCIÓN DE TESIS. RESULTA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA SI EL PUNTO JURÍDICO SOBRE EL QUE VERSA YA FUE RESUELTO EN JURISPRUDENCIA DEFINIDA.[154]

Si se plantea un conflicto de contradicción de tesis sustentadas entre Tribunales Colegiados de Circuito y se advierte que sobre el punto jurídico a debate ya existe una jurisprudencia definida, la denuncia debe declararse improcedente toda vez que no ha lugar a fijar el criterio que debe prevalecer, pues el mismo ya está determinado.

Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto del Cuarto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal.

[154] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: 1a. /J. 7/2000 Página: 175 Materia: Común Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 3/85. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de abril de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ernesto Díaz Infante. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda Martínez González. Contradicción de tesis 63/97. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 15 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Germán Martínez Hernández. Contradicción de tesis 51/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 22 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga. Contradicción de tesis 53/97. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del decimonoveno Circuito. 9 de junio de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Carreón Hurtado. Contradicción de tesis 49/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del decimocuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del decimoquinto Circuito. 17 de noviembre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Juan José Olvera López. Tesis de jurisprudencia 7/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de julio de dos mil, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto Román Palacios.

11. TESIS DE LA SUPREMA CORTE QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA. ES CORRECTO APOYARSE EN LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN ELLAS.[155]

> La circunstancia de que las tesis de la Suprema Corte de Justicia invocadas no tengan el carácter de jurisprudencia, no las hace inaplicables sólo por esa razón, ya que no existe precepto legal alguno en el sentido de que únicamente deban citarse tesis jurisprudenciales, máxime que es un principio reconocido el de que los tribunales pueden adecuar su criterio a los de mayor jerarquía. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

12. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. SUBSANA LAGUNAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO.[156]

> La jurisprudencia es fuente del derecho, por tanto no hay razón para pensar que la Suprema Corte no pudiera ejercer la función de suplir las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo, al fijar, por omisión de la ley, en la tesis jurisprudencial 75 de la Cuarta Parte del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* de 1917 a 1985, el término de diez días para que el arrendador se oponga a la continuación del arrendamiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

13. CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI LA JURISPRUDENCIA QUE RESOLVIÓ EL PUNTO CONTRADICTORIO DENUNCIADO SE EMITIÓ ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE DENUNCIA, DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE Y NO SIN MATERIA.[157]

> En efecto, procede declarar improcedente la contradicción de tesis, entre otros motivos, cuando la denuncia se realice con posterioridad a la fecha en que este Alto Tribunal ha resuelto el punto contradictorio sobre el que versa dicha denuncia; en cambio, de haberse denunciado con anterioridad a que

---

[155] Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*: Parte: IX-enero; Página: 266; Precedentes: Amparo en revisión 238/90. Sedería La Moderna Emilio Yitani, S. A. 16 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas. Amparo en revisión 313/88. Pedro Muñoz Pérez. 13 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.

[156] Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: V Segunda Parte-2; Página: 593; Precedentes: Amparo directo 793/89. Mayela González Luna. 23 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia.

[157] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: 1a. LXI/2002 Página: 254 Materia:

este Alto Tribunal resolviera el tema en contradicción propuesto, se debe declarar sin materia.

14. JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS QUE NO REFLEJEN EL VERDADERO SENTIDO JURÍDICO PLASMADO EN LAS EJECUTORIAS QUE LES DIERON ORIGEN. FACULTAD DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PARA CORREGIR SU REDACCIÓN.[158]

La facultad conferida en la fracción I del artículo 195 de la Ley de Amparo, relativa a que los órganos jurisdiccionales correspondientes aprobarán "el texto y rubro" de las tesis jurisprudenciales, comprende también la posibilidad de corregir la redacción de la jurisprudencia y tesis aisladas emitidas por ese Alto Tribunal, cuando se percate de que la publicación no sea el fiel reflejo de los criterios jurídicos sustentados en las ejecutorias que les dieron origen, desentrañando el verdadero sentido que se plasmó en ellas. No entender así la facultad comprendida en el precepto legal citado, motivaría la aplicación errónea de la jurisprudencia o de la tesis aislada, en tanto que no correspondería al criterio que efectivamente se sustentó, sino al erróneo de la que se publicó.

15. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, AUN EN SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ESTÁ SUJETA A QUE EN EL CASO CONCRETO SEA PROCEDENTE SU APLICACIÓN.[159]

La obligatoriedad que el artículo 192 de la Ley de Amparo dispone en la aplicación de las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justi-

---

Común Tesis aislada. Precedentes: Contradicción de tesis 99/2000-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el antes Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 29 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.

[158] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, abril de 1998 Tesis: 2a. LII/98 Página: 251 Materia: Común; Precedentes: Competencia 349/97. Suscitada entre la Junta Especial Número Catorce de la Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: José Ángel Máttar Oliva.

[159] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, marzo de 1999 Tesis: 2a. XXV/99 Página: 316 Materia: Común Tesis

cia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y aun en suplencia de la deficiencia de la queja en los juicios de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por dichas jurisprudencias, conforme al artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, está supeditada a que en el caso concreto sea procedente su aplicación, hipótesis que no se presenta cuando la constitucionalidad de la ley no puede ser analizada en el juicio de amparo, como cuando el tema relativo no formó parte de la litis ante la responsable.

16. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A SI ES APLICABLE O NO UNA JURISPRUDENCIA.[160]

La contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, puede suscitarse cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es.

17. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO PUEDE EXIGIRSE SU APLICACIÓN A LOS TRIBUNALES, SINO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL *SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN* Y SU *GACETA*, O ANTES, SI DE ELLA TUVIERON CONOCIMIENTO POR OTRA DE LAS VÍAS PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO.[161]

De la interpretación adminiculada y armónica de los artículos 192 y 195 de la Ley de Amparo, se obtiene que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para

---

aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 2730/98. Roberto Cortés Rojano. 15 de enero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

[160] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999 Tesis: 2a. LXIX/99 Página: 503 Materia: Común Tesis aislada. Precedentes: Contradicción de tesis 28/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 23 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón, en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no resuelve el tema de fondo.

[161] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: 2a. LXXXVI/2000 Página: 364 Materia: Común Tesis aislada. Precedentes: Incidente de inejecución 179/99. Comercial Mexicana, S. A. de C. V. 9 de junio del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

los tribunales y que aprobado el texto de la tesis jurisprudencial, se remitirá al *Semanario Judicial de la Federación* y a los tribunales de amparo, para su publicidad y difusión. Por tanto, aunque la jurisprudencia es obligatoria en cuanto se integra, sólo puede exigirse de los tribunales su aplicación a partir de su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, o antes si tuvieron conocimiento de ella por otros medios, entre ellos, los previstos por los artículos 195, fracciones III y IV, y 197-B, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si al momento de resolver una cuestión jurídica aún no se había dado a una jurisprudencia aplicable al caso concreto la debida difusión por los medios señalados, ni existen datos que demuestren su conocimiento previo por los tribunales de amparo, no puede, válidamente, imputárseles su inaplicación.

18. JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SOSTUVO EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, LE DIO UN ALCANCE INDEBIDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE CORREGIRLO, ESTABLECIENDO, CON EL MISMO VALOR, LA TESIS CORRESPONDIENTE.[162]

Cuando existe una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, de acuerdo con lo establecido por la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución y 197-A de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir la tesis que prevalezca como jurisprudencia. Ahora bien, si al tomar esa decisión advierte que el tribunal que sostuvo el criterio correcto le dio un alcance equivocado debe hacer la corrección pertinente, con el mismo valor jurisprudencial, ya sea en la propia tesis o en una distinta, si la claridad lo recomienda, pues de lo contrario no sólo se afectaría la seguridad jurídica que se busca salvaguardar al resolver este tipo de asuntos sino también la justicia, al no definirse un problema que podría dar lugar a la aplicación incorrecta de la tesis jurisprudencial y de las normas jurídicas interpretadas en ella.

---

[162] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, febrero de 2002 Tesis: 2a. V/2002 Página: 72 Materia: Común Tesis aislada. Precedentes: Contradicción de tesis 105/2001-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 25 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

19. JURISPRUDENCIA. LOS NUEVOS CRITERIOS SON APLICABLES A LOS CASOS AÚN NO DECIDIDOS POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE.[163]

El artículo 197, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, sustancialmente contiene una regla general de aplicación de la jurisprudencia para casos en que existan modificaciones a los criterios judiciales, al establecer que: "El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada". Lo anterior significa que si el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifican una jurisprudencia, los cambios de criterio serán válidos para resolver exclusivamente casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas en los precedentes, pues por seguridad jurídica de la cosa juzgada el nuevo criterio no puede cambiar los casos ya resueltos; sin embargo, los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, sí deben ser ajustados al nuevo criterio jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado. Así, conforme al criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 145/2000 que se publica en la página 16 del tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, de la novena época del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, la jurisprudencia no está sujeta a los principios de retroactividad típicos en las leyes; además, si no se hiciera la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría la regla de obligatoriedad que deriva de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la cual vincula a todas las autoridades que desarrollan actividades jurisdiccionales.

---

[163] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, marzo de 2002 Tesis: 2a. XIV/2002 Página: 428 Materia: Común Tesis aislada. Precedentes: Inconformidad 555/2001. Excursiones El Dorado, S. A de C. V., y otras. 25 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel Rosales Guerrero. NOTA: La tesis P./J. 145/2000 citada, aparece publicada con el rubro: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY".

20. JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS.[164]

> La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisprudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales.

21. JURISPRUDENCIA. SU INVOCACIÓN SIN QUE SE IDENTIFIQUE, LA HACE INATENDIBLE.[165]

> No es suficiente que el quejoso exprese que el criterio sustentado por la autoridad responsable esté en contradicción con la jurisprudencia, pues es

---

[164] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, mayo de 2002 Tesis: 2a./J. 38/2002 Página: 175 Materia: Común Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 40/2001-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del decimocuarto Circuito. 26 de abril de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar. Tesis de jurisprudencia 38/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de mayo de dos mil dos.

[165] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, enero de 1998 Tesis: I.5o.T. J/17 Página: 1010 Materia: Laboral; Precedentes: Amparo directo 3125/89. Secretario de Educación

menester que proporcione los datos necesarios para su identificación, como son el número asignado, el rubro y texto, en acatamiento al artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que si no se cumple con esta disposición legal, la afirmación por sí sola es inatendible. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

22. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA. ES APLICABLE CUANDO LA VIOLACIÓN ALEGADA SE HAYA COMETIDO DURANTE SU VIGENCIA.[166]

Si bien es cierto que en contra de la resolución que dirime la cuestión de personalidad previamente al fondo, procede el amparo indirecto, acorde al criterio que sobre el particular sostiene el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número P. CXXXIV/96, aprobada en sesión privada celebrada el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicada en las páginas 137, 138 y 139 del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, novena época, tomo IV, noviembre de 1996, bajo el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO..." La cual interrumpió parcialmente la diversa número P.J. 6/91, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA

Pública. 29 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas González. Amparo directo 11025/94. Heraclio Javier Romero Ugalde. 7 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretario: Martín Borrego Dorantes. Amparo directo 11825/95. Rafael Heriberto Morales Reyes. 11 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretaria: María Isabel Haruno Takata Gutiérrez. Amparo directo 9955/97. Instituto Mexicano del Seguro Social. 16 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas González. Amparo directo 10025/97. Jefe del Departamento del Distrito Federal. 16 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma De la Llata Valenzuela. Secretario: Erubiel Arenas González. Véase: Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 867, página 594, de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SU INVOCACIÓN POR LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO".

[166] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, octubre de 1997 Tesis: XXI.1o.82 K Página: 762 Materia: Común; Precedentes: Amparo directo 258/97. Maricela Delgado Peralta. 30 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Dzib Núñez. Secretario: Dionicio O. Ramírez Avilés. NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 5/97, pendiente de resolver en el Pleno.

DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA"; la que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo deja de tener carácter obligatorio por haber sido superada. Sin embargo, tal violación procesal puede ser examinada en amparo directo siempre y cuando aquélla se haya cometido con antelación a la aprobación de la tesis en cuestión, por ser materia de impugnación ordinaria en esa vía, al reclamarse la sentencia definitiva, pues jurídicamente no podía aplicarse lo que aún no existía. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

23. JURISPRUDENCIA. ES SUFICIENTE COMO ELEMENTO DE FUNDAMENTACIÓN, EL QUE SE TRANSCRIBA EL TEXTO DE AQUÉLLA Y SE CITEN LOS DATOS DE SU PUBLICACIÓN, PARA QUE SE CUMPLA CON LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL RELATIVA.[167]

La circunstancia de que en una sentencia el juzgador, para apoyar los fundamentos de su fallo, sólo transcriba el texto de una jurisprudencia, pero no los precedentes que la integran, no es óbice para que se considere cumplido el requisito de la garantía constitucional relativa, máxime si en la resolución reclamada se citan con exactitud los datos del *Semanario Judicial de la Federación* donde fue publicada, por ser este órgano de carácter oficial. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

24. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. APLICABILIDAD DE LA TESIS "DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE

---

[167] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, octubre de 1997 Tesis: I.6o.C.129 C Página: 762 Materia: Civil; Precedentes: Amparo directo 6546/97. Desiderio Montiel Cuéllar y otra. 18 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis García Vasco. Secretario: Jaime Aurelio Serret Álvarez. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, página 501, de rubro: "TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN ÍNTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN".

LA FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN", AUN CUANDO SE HAYA APOYADO EN UN PRECEPTO QUE POSTERIORMENTE FUE REFORMADO.[168]

> El hecho de que el criterio sustentado por la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis número 52/90, bajo el rubro: "DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN", se haya emitido a la luz del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previamente a la reforma que éste sufrió mediante decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, no implica que deje de tener aplicabilidad en casos análogos, pues entre uno y otro de los textos del precepto legal en cuestión, la única diferencia estriba en que, mientras en su anterior redacción disponía en general que las resoluciones anulatorias respectivas tendrían el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, en el actual, especifica que será la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, la que lo restituya en el goce de los derechos correspondientes; en tal circunstancia, tales aspectos no se contraponen con el sentido o consideraciones en que se apoyó el máximo tribunal del país en la tesis de referencia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

25. TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA, APLICADAS POR LOS TRIBUNALES JUDICIALES DEL ORDEN COMÚN.[169]

> El que los tribunales de instancia invoquen una ejecutoria aislada de la Suprema Corte de Justicia para apoyar el sentido de su fallo, no implica con-

---

[168] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, marzo de 1997 Tesis: XXI.1o.59 K Página: 818 Materia: Común; Precedentes: Amparo directo 3/97. Olga Hernández Espíndola. 30 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretario: Fernando Rodríguez Escárcega.

[169] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, febrero de 1997 Tesis: VI.2o. J/90 Página:

travención a lo preceptuado por el artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo que establece dicho dispositivo es que los tribunales del orden común de los Estados deben someterse a la jurisprudencia obligatoria del alto tribunal, pero no prohíben orientar o basar un criterio en los precedentes de la propia Corte. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

26. JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO NO CONSTITUYE EL MEDIO LEGAL PARA COMBATIRLA.[170]

Es jurídicamente inoperante el concepto de violación dirigido a combatir la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta habida de que, en primer lugar, su observancia es de carácter obligatorio para todo tipo de tribunales federales o locales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo y, en segundo lugar, debido a que sólo el órgano que la estableció es quien puede interrumpirla o

---

678 Materia: Común; Precedentes: Amparo directo 42/90. Pascual Lima Romero. 13 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 448/91. Compañía Arrocera Valencia, S. A. de C. V. 19 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo directo 527/92. Mauro Vázquez Hernández y otra. 2 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares. Amparo directo 577/96. Inmobiliaria Bárcena Arreola, S. A. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretaria: Hilda Tame Flores. Amparo directo 741/96. Miguel Blancas Mejorada. 29 de enero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Justino Gallegos Escobar.

[170] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: VIII.2o. J/15 Página: 933 Materia: Común; Precedentes: Amparo directo 642/94. Daniel Carrera e Hijos, S. A. 9 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa. Amparo directo 351/97. Afianzadora Insurgentes, S. A. de C. V. 9 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretaria: Arcelia de la Cruz Lugo. Amparo directo 420/97. Afianzadora Insurgentes, S. A. de C. V., Grupo Financiero Serfín. 2 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretaria: Arcelia de la Cruz Lugo. Amparo directo 533/97. Afianzadora Insurgentes Serfín, S. A. de C. V., Grupo Financiero Serfín. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental. Amparo directo 534/97. Fianzas Fina, S. A., Institución de Fianzas, Grupo Financiero Fina Value. 8 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.

modificarla en términos del diverso numeral 194 del ordenamiento legal aludido. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

27. ANALOGÍA, PROCEDE LA APLICACIÓN POR, DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.[171]

Es infundado que las tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o sus Salas, no puedan ser aplicadas por analogía o equiparación, ya que el artículo 14 constitucional, únicamente lo prohíbe en relación a juicios del orden criminal, pero cuando el juzgador para la solución de un conflicto aplica por analogía o equiparación los razonamientos jurídicos que se contienen en una tesis o jurisprudencia, es procedente si el punto jurídico es exactamente igual en el caso a resolver que en la tesis, máxime que las características de la jurisprudencia son su generalidad, abstracción e impersonalidad del criterio jurídico que contiene. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

28. JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL. INTERPRETACIÓN DE LA LEY CON EFECTOS EXTENSIVOS Y DE EXCEPCIÓN.[172]

La jurisprudencia en materia penal, además de interpretativa, da a la ley cuando se requiere, efectos extensivos y casos de excepción en beneficio del acusado, como es el caso de que el quejoso esté en aptitud de aportar prue-

---

[171] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, junio de 1999 Tesis: VIII.2o. J/26 Página: 837 Materia: Administrativa Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 236/93. Comisariado Ejidal del Poblado J. Guadalupe Rodríguez, Municipio de Nazas, Durango. 2 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretario: Alberto Caldera Macías. Amparo en revisión (improcedencia) 521/95. Sara Martha Ramos Aguirre. 7 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodríguez Olmedo. Secretario: Hugo Arnoldo Aguilar Espinosa. Amparo en revisión 431/97. Manuel Fernández Fernández. 15 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León. Amparo directo 466/98. Laura Esther Pruneda Barrera. 18 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretaria: Martha Alejandra González Ramos. Amparo en revisión 661/98. Ricardo Garduño González. 18 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.

[172] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: I.3o.P.1; Página: 863; Precedentes: Amparo en revisión 27/95. María Emilia Yarza Díaz. 28 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle.

bas en el juicio de garantías promovido contra la orden de aprehensión, aun aquellas que no tuvo a la vista la autoridad responsable cuando la pronunció, sustentándose la necesidad de la excepción, en el sentido de que el afectado en la generalidad de los casos no tiene conocimiento del procedimiento que se sigue en su contra, siendo pertinente estimar que lo que se pretende es hacer justicia y no seguir métodos ciegos e inquisitivos. Por consiguiente, no existe violación de lo que dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, en el sentido de que en las sentencias que se pronuncien en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable; ahora bien, la tesis de jurisprudencia número 88, visible a fojas 138, Novena Parte, del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación*, correspondiente al lapso de 1917 a 1985, establece el caso de excepción de tal precepto de la Ley de Amparo, que sólo contiene una regla general. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

29. IMPROCEDENCIA, AL EXISTIR UNA CAUSAL DE, NO PUEDE COBRAR APLICACIÓN, POR MÁS FUERZA OBLIGATORIA QUE TENGA, UNA JURISPRUDENCIA QUE SE REFIERE A CUESTIONES DE FONDO.[173]

Cuando un recurrente reconoce la omisión en la que incurrió al dejar de preparar adecuadamente el juicio de garantías por no interponer el recurso idóneo, procede confirmar la sentencia que se revisa ante la insuficiencia de agravios, sin que importe el hecho de que sea obligatoria la observancia de la jurisprudencia que cita el inconforme, habida cuenta que como el contenido de la misma sólo podía servir para decidir el fondo del asunto en lo tocante al acuerdo mencionado (o sea, si legalmente era factible substituir o no el embargo por una fianza), ese problema no fue posible examinarlo en el caso debido a la presencia de la causal de improcedencia invocada por el juzgador. Dicho de otra forma: por más fuerza obligatoria que tenga una jurisprudencia no puede ésta ser aplicada si se refiere a cuestiones de fondo que no se analizan por existir causas de improcedencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

---

[173] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, abril de 1996; Tesis: III.3o.C.11 K; Página: 399; Precedentes: Amparo en revisión 986/95. Banco de Crédito Rural de Occidente, S.N.C. 23 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Roberto Macías Valdivia.

30. JURISPRUDENCIA. VIGENCIA DE LA.

No por el hecho de que la jurisprudencia que invoca el juez federal en la sentencia recurrida aluda al artículo 95 del Código de Comercio, que se encuentra derogado por el 4o. transitorio de la Ley General de Sociedades Mercantiles, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación, el cuatro de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, ello no implica que la mencionada tesis de jurisprudencia haya perdido vigencia, toda vez que el referido precepto encuentra su correlativo en el sexto de la citada ley de sociedades mercantiles. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Sinopsis:

a) La jurisprudencia en el derecho positivo mexicano, es una fuente formal del derecho producida por determinados tribunales de la Fedreración.

b) La jurisprudencia obligatoria del Poder Judicial de la Federación se genera por tres procedimientos:

1) La reiteración de criterios de la Suprema Corte, de sus salas, y de los tribunales colegiados (cinco tesis ininterrumpidas cuya materia corre en el mismo sentido).
2) A través de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte ante los casos de contradicciones de tesis de diversos tribunales colegiados.
3) Dentro de los considerandos donde se fundan los puntos resolutivos de las sentencias que dicta la Suprema Corte respecto de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias a que se refiere el artículo 105 constitucional.

b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre el concepto de "Garantías individuales" en el derecho positivo mexicano

1. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL QUEJOSO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ CONSTITUCIONAL LA LEY QUE IMPUGNÓ EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, A PESAR DE QUE SE LE HAYA

OTORGADO EL AMPARO POR CUESTIONES DE LEGALIDAD, SI TAL CONCESIÓN NO COMPRENDE LA RESTITUCIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE RECLAMÓ COMO INFRINGIDAS.[174]

> La regla general indica que otorgada la Protección Federal por motivos de legalidad de la sentencia o resolución reclamada en el amparo directo, a un declarada constitucional la ley impugnada en los conceptos de violación de la demanda, el quejoso no tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en contra de tal fallo, puesto que no obtendría ningún beneficio si al resolverse ese medio de impugnación se considerara inconstitucional la ley respectiva, pero cuando esa concesión no comprende todas las reclamaciones constitucionales, porque el precepto legal impugnado involucra la procedencia o improcedencia de diversas prestaciones materia del juicio natural, que la declaración en comento dejó fuera del otorgamiento del amparo, es inconcuso que sí cuenta con legitimación para interponer el referido recurso en contra de la parte que declaró la constitucionalidad de la ley, pues de llegarse a una conclusión contraria en la revisión, la Protección Constitucional abarcaría también las otras reclamaciones.

2. GARANTÍAS INDIVIDUALES. CONCEPTO DE VIOLACIÓN GRAVE DE ELLAS PARA LOS EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL.[175]

> Las violaciones graves de garantías a que se refiere dicho artículo, son hechos generalizados consecuentes a un "estado de cosas", acaecidos en una

---

[174] Instancia: Pleno, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996, Tesis: P. LXXXV/96, Página: 104; Precedentes: Amparo directo en revisión 735/95. Pasta, S. A. de C. V. 14 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el Ministro Juan Díaz Romero. Secretaria: Marta Leonor Bautista de la Luz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXV/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis.

[175] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: P. LXXXVI/96; Página: 459; Precedentes: Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis.

entidad o región determinados, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.

3. GARANTÍAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACIÓN). VIOLACIÓN GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTÚAN DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACIÓN Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTÍCULO 6o. TAMBIÉN CONSTITUCIONAL.[176]

El artículo 6o. constitucional, in fine, establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información

[176] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: P. LXXXIX/96; Página: 513; Precedentes: Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número LXXXIX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.

manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.

4. GARANTÍAS INDIVIDUALES. DIFERENCIAS DEL PROCEDIMIENTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL, SOBRE LA VIOLACIÓN GRAVE DE ELLAS Y EL DEL JUICIO DE AMPARO.[177]

Uno de los principales propósitos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es garantizar los derechos fundamentales del hombre, para lo cual propone procedimientos tendientes a evitar la infracción a esos derechos fundamentales, mediante el juicio de amparo, o bien, en el caso de una violación grave y generalizada de garantías individuales, la intervención de este alto tribunal en la averiguación de los hechos, para precisar esas infracciones, y con la intención de que cese la violencia y alarma y se propicie el regreso al respeto a las garantías individuales. Las diferencias de estos procedimientos son, básicamente las siguientes: a) el juicio de amparo procede a petición del agraviado; en el procedimiento del 97, por el contrario, se actúa de oficio, por propia decisión de la Suprema Corte de Justicia, o a petición del Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado; b) en el amparo se trata de un juicio o proceso y, el artículo 97 constitucional se refiere a una averiguación de hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales; c) en el juicio de amparo se concluye con una sentencia, pero que admite sobreseimiento por razones técnicas o materiales; en el 97, con un informe sobre los hechos averiguados y una consecuente decisión de si constituyen,

---

[177] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: P. LXXXVIII/96; Página: 514; Precedentes: Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVIII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis.

o no, una grave violación de garantías individuales; d) en el juicio de amparo se conoce de violación de garantías que sólo afectan a una o varias personas, sin trascendencia social; en el caso del artículo 97, las violaciones deben ser generalizadas, es decir, que se trate de violaciones graves; y, e) en el amparo se pretende evitar que la violación de garantías se consume para restituir al gobernado en el goce de la garantía violada, o en caso de estar consumado irreparablemente el acto reclamado sobreseer, mientras que la averiguación del 97 versa sobre hechos consumados.

5. GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL, DEBE HACERSE DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES QUE SE ESTIMEN COMPETENTES.[178]

La interpretación literal del párrafo segundo del artículo 97 no es operante para estimar que una vez concluida la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, después de informar al Pleno de la Suprema Corte, proceda el archivo del informe respectivo como asunto concluido, bajo el argumento que el precepto citado no establece cuál deberá ser el destino de ella. En efecto, los párrafos segundo y tercero del artículo 97 constitucional prevén la facultad extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para averiguar: en el primer caso, la existencia de una violación grave y generalizada de las garantías individuales; y en el segundo, la violación al voto público, pero sólo en el caso de que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el procedimiento de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Sin embargo, en el segundo párrafo se señala quiénes deben llevar a cabo la averiguación, y los designa como "comisionados"; en el tercer párrafo no se hace tal precisión. Por ello, si en el segundo párrafo no se indica el manejo de los resultados de la averiguación, debe entenderse que es aplicable lo dispuesto en el tercero, el cual indica que se hará llegar oportunamente el informe a los órganos competentes. Estas diferencias permiten establecer la necesidad de interpretar conjunta y sistemáticamente ambos párrafos, pues no podría

[178] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: P. XC/96; Página: 515; Precedentes: Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de junio en curso, aprobó, con el número XC/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y seis.

decirse que por la sola circunstancia de que en el párrafo tercero no se precisa la designación de comisionados para llevar a cabo la averiguación, ésta no pudiera efectuarse, sino que, entendiéndose de manera concordante con el ejercicio de igual facultad a la que alude el párrafo segundo resulta inconcuso que para su desarrollo debe la Suprema Corte comisionar a alguno o algunos de sus miembros. Consecuentemente, por identidad de razón, y bajo el mismo sistema de interpretación, aun cuando en el párrafo segundo no se precise el destino final del resultado de la averiguación, esa omisión ha de interpretarse a la luz del párrafo tercero, en el sentido que los resultados del mismo deberán hacerse llegar oportunamente a los órganos que en principio pudieran resultar competentes.

6. GARANTÍAS INDIVIDUALES. MARCO LEGAL DE LA INTERVENCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN LA AVERIGUACIÓN DE LA GRAVE VIOLACIÓN DE AQUÉLLAS.[179]

El segundo párrafo del artículo 97 constitucional establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. De lo anterior se advierte que la averiguación de hechos que puedan constituir grave violación de garantías individuales, no es una competencia jurisdiccional. Por tanto, este alto tribunal, no conoce, en esos casos, de una acción procesal, ni instruye o substancia un procedimiento jurisdiccional y, por ello, no puede concluir dictando una sentencia que ponga fin a un litigio. Igualmente, no procura, ante otro tribunal, la debida impartición de justicia y tampoco realiza lo que pudiera denominarse una averiguación previa a la manera penal, pues ello constituiría un traslape de la tarea investigadora con una averiguación ministerial, y además podría originar duplicidad o una extensión de las funciones encomendadas constitucionalmente a las Procuradurías de Justicia. Su misión es: averiguar un hecho o hechos y

[179] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: P.LXXXVII/96; Página: 516; Precedentes: Solicitud 3/96. Petición del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Federal. 23 de abril de 1996. Unanimidad de once votos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de junio en curso, aprobó, con el número LXXXVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de junio de mil novecientos noventa y seis.

si tales hechos constituyen violación grave de alguna garantía constitucional. Atendiendo a este fin, y ante la ausencia de reglamentación del ordenamiento en comento, la actuación del máximo tribunal del país se circunscribe únicamente a inquirir la verdad hasta descubrirla, sin sujetarse a un procedimiento judicial.

7. SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.[180]

El análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa

[180] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, marzo de 1996; Tesis: P. XXVI/96; Página: 471; Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de marzo en curso, aprobó, con el número XXVI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a once de marzo de mil novecientos noventa y seis.

que la propia Constitución previene para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.

8. GARANTÍAS INDIVIDUALES, NO HA LUGAR A LA INVESTIGACIÓN DE UNA POSIBLE GRAVE VIOLACIÓN A ELLAS, CUANDO UN ORGANISMO DE LOS PREVISTOS EN EL APARTADO "B" DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN SE HAYA AVOCADO A SU AVERIGUACIÓN Y SE ATIENDAN SUS RECOMENDACIONES.[181]

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima inoportuno dictaminar sobre la posible violación de garantías individuales, cuando otro organismo de los previstos en el Apartado "B" del artículo 102 de la Carta Magna, facultado para la investigación de los hechos denunciados ha practicado esa averiguación y sus recomendaciones se hayan acatado, o estén en proceso de cumplimentación, pues resulta inconcuso que al aceptarse dichas recomendaciones, las situaciones de hecho que generaron la petición de investigación

[181] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: II, octubre de 1995; Tesis: P. LXXV/95; Página: 102; Precedentes: Expediente varios 451/95. Consulta respecto del trámite que procede darle al escrito presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. 18 de septiembre de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cinco de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número LXXV/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

podrían variar sustancialmente. Por ello, esta Suprema Corte establece que cuando, a petición de parte legitimada o discrecionalmente de oficio, decrete su intervención para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, tomará las determinaciones conducentes sin importar la denuncia posterior a otros organismos. Pero cuando previamente a la denuncia ante ella ya se hubiere producido una similar ante los organismos del Apartado "B" del artículo 102 constitucional, y se haya producido o esté por manifestarse una recomendación que se esté cumplimentando o permita cumplimentarlo, produciéndose así un cambio sustancial en las reacciones frente a esa posible grave violación de garantías individuales, para evitar que se produzcan conclusiones contradictorias o contrapuestas, que en nada disuelven la alarma social sino que la agudizan; o bien la duplicación de investigaciones entre dos organismos disímbolos en su naturaleza. Lo anterior no implica que este máximo tribunal desatienda las altas funciones constitucionales que de manera extraordinaria le son conferidas por la Carta Magna, pues deberá de ejercerlas cuando a su prudente juicio el interés nacional así lo reclame, buscando siempre el bienestar común y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

9. GARANTÍAS INDIVIDUALES. QUIENES TIENEN LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LA AVERIGUACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL.[182]

Del análisis del segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la investigación de violaciones a las garantías individuales puede ser de oficio, cuando este máximo tribunal de la República lo estime conveniente, o a petición de parte, pero no de

[182] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: II, octubre de 1995; Tesis: P. LXXIV/95; Página: 114; Precedentes: Expediente varios 451/95. Consulta respecto del trámite que procede darle al escrito presentado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. 18 de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el cinco de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número LXXIV/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a cinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

cualquier sujeto indeterminado, sino exclusivamente cuando lo solicite el titular del Poder Ejecutivo o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado.

10. PROPIEDAD PRIVADA. EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO VIOLA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE LA PROTEGEN.[183]

El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León establece que "vía pública es todo inmueble del dominio público, de utilización común, que por disposición de la ley, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, o por razón del servicio, se destine al libre tránsito, o bien, que de hecho está ya afecto a utilización pública en forma habitual y cuya función sea la de servir de acceso a los predios y edificaciones colindantes o para el alojamiento de cualquier instalación, destinada a satisfacer un servicio público". Este precepto legal sólo se refiere a los inmuebles del dominio público mas no incluye a los de propiedad privada y, por ende, no viola las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada, pues no permite a las autoridades administrativas expropiarla o afectarla sin cumplir con las garantías de referencia.

11. AUDIENCIA DE VISTA. NO SE INFRINGEN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL PROCESADO SI SE LE CITÓ PERSONALMENTE A ÉL Y A SU DEFENSOR PARA COMPARECER A LA.[184]

Los artículos 373 y 382 del Código Federal de Procedimientos Penales en vigor, que a la letra dicen: "Art. 373. Recibido el proceso, el duplicado

---

[183] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: II, julio de 1995; Tesis: P. XXXVIII/95; Página: 25; Precedentes: Amparo en revisión 940/94. Dolores Vergara viuda de Zepeda y otros. 6 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintinueve de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número XXXVIII/95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, D. F., a veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco.

[184] Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: II, diciembre de 1995; Tesis: 1a./J. 19/95; Página: 269; Precedentes: Contradicción

autorizado de constancias o el testimonio en su caso, el tribunal lo pondrá a la vista de las partes por el plazo de tres días; y si dentro de ellos no promovieren prueba, se señalará día para la vista, que se efectuará dentro de los treinta siguientes a la conclusión del primer plazo, si se tratare de sentencias definitivas y dentro de cinco días si se tratare de autos. Para ella serán citados el Ministerio Público, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado. Si no se hubiere nombrado a éste para la instancia, el tribunal lo nombrará de oficio". "ART. 382. El día señalado para la vista comenzará la audiencia haciendo el secretario del tribunal una relación del asunto; en seguida hará uso de la palabra el apelante y a continuación las otras partes, en el orden que indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o más los apelantes, usarán de la palabra en el orden que designe el mismo funcionario que presida". De lo antes transcrito, se advierte que no impone a la autoridad de alzada la obligación de ordenar que para la audiencia de vista del asunto se mande traer al recinto del tribunal en que se efectuará, al procesado detenido, sino sólo la circunstancia de que sea debidamente notificado él y su defensor para la audiencia de vista. Por tanto, el tribunal de alzada no tiene porqué asegurar la comparecencia del inculpado en esa etapa procesal, pues del texto de los artículos en comento no se impone esa obligación a esa autoridad por lo que no se violan las garantías individuales del quejoso.

12. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. LA ACEPTACIÓN DE SUS RECOMENDACIONES NO EXIME A LAS AUTORIDADES DE RESPETAR LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL FUNCIONARIO INVOLUCRADO.[185]

Las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en caso de ser aceptadas por las autoridades, deben atenderse en forma

---

de tesis 26/95. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Cuarto Circuito. 24 de noviembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Cruz Hernández. Tesis de Jurisprudencia 19/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos, de los Ministros: Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

[185] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, mayo de 1996; Tesis: XXII.10 K; Página: 603; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO; Precedentes: Amparo en revisión 34/96. Jorge Jiménez Vega. 28 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Mauricio Torres Martínez.

que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal; pero si tales autoridades, argumentando que aceptan una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ordenan la destitución del funcionario involucrado del cargo que venía desempeñando, sin que previamente se instruyera un procedimiento en el que se siguieran todas las formalidades establecidas en la ley respectiva, es claro que con ello infringen en perjuicio del amparista, las garantías de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna; por lo que debe otorgársele el amparo y protección que solicita, para que previamente a decretar cualquier sanción en contra del funcionario, las autoridades instruyan el procedimiento respectivo, en el que se cumplan todas y cada una de las formalidades legales.

13. GARANTÍAS INDIVIDUALES. SU FALTA DE SEÑALAMIENTO EN LA DEMANDA DE AMPARO, OCASIONA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO.[186]

Si en la demanda de amparo no se señalan los preceptos de la Constitución Federal que consagran las garantías individuales que, en concepto de la quejosa hayan sido violadas en su perjuicio por la autoridad responsable, con los actos que reclama, es evidente que, la referida parte incumple con el requisito esencial que para interponer una demanda de amparo señala la fracción VI del artículo 166 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; y siendo esto así, debe estimarse improcedente la demanda, con apoyo en lo prevenido por la fracción XVIII del artículo 73 de la citada ley, en relación con lo que establece el precepto antes invocado. Lo anterior es conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, que textualmente expresa: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda”; pues de su interpretación también

[186] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIV-agosto; Tesis: XVII. 2o. 26 K; Página: 615; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO; Precedentes: Amparo directo 40/94. Baldomero y Bernardo Sandoval Carmona. 24 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. Secretaria: Olga Cano Moya. Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo III-febrero de 1996, pág. 107, tesis por contradicción P./J.2/96.

se desprende la obligación procesal a cargo del promovente del juicio constitucional, de señalar expresamente las garantías individuales que considere violadas por el acto que reclama de la autoridad responsable, por lo que acorde con lo dispuesto por el pretranscrito artículo, se evidencia que sólo en caso de error en la cita de los preceptos constitucionales que se consideren violados, los Tribunales de amparo deberán corregir dicha confusión, rectificación que no es posible llevar a cabo en el supuesto de que se trata, en atención a que el promovente, según se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, no mencionó el o los preceptos constitucionales que estimó violados y tampoco se refiere a argumento alguno del cual pudiera desprenderse a qué garantía individual quiso referirse. No resulta óbice, lo establecido por el artículo 178 de la ley de la materia, ya que la cita de las garantías individuales que se consideren violadas es requisito sine qua non, por ser precisamente el objeto del juicio constitucional, para que el Tribunal de amparo se encuentre en aptitud de examinar y, por lo mismo, determinar respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y si tal cita no existe en la demanda de garantías, esa precisa cuestión impide materialmente llevar a cabo el estudio relativo.

14. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE SI EN LA DEMANDA NO SE INDICAN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES VIOLADAS NI SE PRECISAN CONCRETAMENTE CUÁLES SON ÉSTAS.[187]

Si del examen integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente no menciona ni indica los preceptos constitucionales que contienen la o las garantías individuales violadas en la sentencia reclamada y tampoco se precisan concretamente cuáles son las garantías que se estiman infringidas, se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la susodicha demanda no satisface el requisito que señala el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento, que es indispensable para que el tribunal de amparo esté en aptitud de examinar y, por lo mismo, de determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que la omisión de que se trata impide materialmente el estudio relativo, que es precisamente el objeto del juicio de garantías.

---

[187] Instancia: Tercera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 175-180 Cuarta Parte; Página: 71; Precedentes: Amparo directo 9286/82. C. D. Inmuebles, S. A. y coagraviados. 3 de agosto de 1983. 5 votos. Ponente: Jorge Olivera Toro.

15. JUEZ DE AMPARO. NO INCURRE EN VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES, AL NO ACTUAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.[188]

> La manifestación del recurrente en el sentido de que el Juez Federal violó lo dispuesto en diversos preceptos constitucionales en la sentencia impugnada, no es atendible por no constituir una expresión concreta de agravios; y además dicho juzgador no puede incurrir en tal violación al actuar como resolutor de amparo, ya que jurídicamente es inadmisible que el órgano jurisdiccional facultado para tutelar garantías individuales, lleve a cabo la aludida violación, dado que no actúa como autoridad responsable, sino que está encargado de dilucidar si el acto reclamado es o no inconstitucional.

16. GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL NO PUEDE VIOLARLAS.[189]

> Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, no pueden violar garantías individuales, puesto que el Tribunal respectivo se limita a determinar si existe o no la violación de dichas garantías o bien a sobreseer en el juicio cuando concurra alguna causa de improcedencia.

17. GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIONES DIRECTAS DE LAS.[190]

> Para determinar si el acto reclamado viola directamente una garantía individual, basta que el juzgador examine si formalmente aquél satisface los requi-

---

[188] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 175-180 Sexta Parte; Página: 119; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO; Precedentes: Amparo en revisión 159/83. Armando Oliveros Martínez. 21 de septiembre de 1983. Ponente: José Martínez Delgado.

[189] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 109-114 Sexta Parte; Página: 289; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 786/77. Florencio Velázquez Delgadillo y coagraviados. 8 de diciembre de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Liévana Palma.

[190] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 87 Sexta Parte; Página: 43; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 6/76. Empresas Jaguar, S. A. 25 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Liévana Palma.

sitos que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para todo acto de autoridad, por lo que no es necesario que tal examen se supedite al análisis de la infracción de leyes secundarias.

18. GARANTÍAS INDIVIDUALES. RECURSOS ORDINARIOS Y JUICIO DE AMPARO.[191]

Es cierto que este Tribunal ha establecido la tesis de que, cuando se alegan substancial y directamente violaciones a las garantías constitucionales y no a las leyes secundarias, al través de la llamada garantía de legalidad, puede el afectado ocurrir directamente al juicio de amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios en los que no pueden hacer valer los conceptos de violación de dichas garantías con toda la eficacia con que puede invocarlos en el juicio de amparo, destinado a tutelar esas garantías, lo cual se explica por el alto interés que el orden constitucional pone en el respeto a las garantías individuales, y por el hecho de que la existencia de recursos ordinarios debe estimarse destinada a la tutela de legalidad y a la defensa de los afectados por las resoluciones administrativas, pero no como un obstáculo o impedimento para la pronta restauración del orden constitucional violado, mediante la promoción del juicio de garantías, destinado expresamente por la Constitución Federal para ese efecto. Pero también es cierto que ello es así cuando la violación directa de los preceptos constitucionales es la cuestión substancial o medular planteada en el juicio de amparo, y las cuestiones de legalidad resultan planteadas en forma manifiestamente accesoria y secundaria. Pero cuando el meollo de las cuestiones legales planteadas se refiere a cuestiones de legalidad, y las cuestiones de constitucionalidad son planteadas indirectamente, al través de la llamada garantía de legalidad, o bien cuando son dichas violaciones las que se plantean en forma accesoria o de manera secundaria, es indispensable agotar previamente los recursos y medios de defensa ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, para que éste no resulte improcedente, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo.

---

[191] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 72 Sexta Parte; Página: 77; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 299/71. Francisco León Arellano. Albacea de la Sucesión a Bienes de la señora Sara Sandoval de Martínez. 14 de marzo de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

19. GARANTÍAS INDIVIDUALES, ALCANCES DE LAS.[192]

> Las garantías constitucionales no deben tomarse como un catalogó rígido, invariante y limitativo de derechos concedidos a los gobernados, que deba interpretarse por los tribunales de amparo en forma rigorista, porque ello desvirtuaría la esencia misma de dichas garantías. Más bien debe estimarse que se trata de principios o lineamientos vivos y sujetos a ala evolución de las necesidades sociales, dentro del espíritu que animó al Constituyente al establecerlos. De lo contrario, se desvirtuaría la función esencial de las garantías constitucionales y del juicio de amparo, al entenderlas y aplicarlas en forma que hiciera sentir opresión a los gobernados, y limitación en la defensa de sus derechos, en vez de hacer sentir el ambiente de derecho y libertad que con dichas garantías se pretendió establecer en el país. No sería posible aplicar en la actual complejidad política, económica y social de un medio cambiante, rigorismos literales de normas que contienen principios e ideas generales, pero que no pudieron siempre prever necesariamente las consecuencias de dichos principios.

20. GARANTÍAS INDIVIDUALES, GOCE DE LAS, POR TODOS LOS QUE CAEN BAJO LA ESFERA JURÍDICA DEL ESTADO MEXICANO AUN CUANDO SE ENCUENTREN EN TERRITORIO EXTRANJERO. PROCEDENCIA DEL AMPARO.[193]

> De conformidad con el artículo 1o. constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución. Sostener que una demanda de amparo debe desecharse porque fue presentada cuando se encontraba el quejoso en territorio extranjero, es interpretar el mencionado precepto constitucional con un criterio físico-geográfico, lo cual es equivocado, pues la correcta interpretación de la Ley Fundamental

---

[192] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 62 Sexta Parte; Página: 39; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 597/73. Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 11 de febrero de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

[193] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 35 Sexta Parte; Página: 37; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 121/71. Ludwig Peter Karl Tetzeli. 30 de noviembre de 1971. Ponente: Víctor Manuel Franco. NOTA: Enviada sin votación a la Dirección del *Semanario Judicial de la Federación*.

debe descansar en un criterio jurídico. De acuerdo con este último, cuando una persona por cualquier razón cae dentro de la esfera jurídica del Estado mexicano, de manera tal que los actos emanados del mismo producen efectos jurídicos en la persona o en su patrimonio y ella los estima atentatorios de las garantías individuales, tiene derecho a combatirlos mediante la vía consagrada por la misma Constitución, aunque físicamente su persona no se encuentre dentro del territorio nacional. La postura contraria se opone al espíritu mismo de la Carta Magna, que consagrando la dignidad del individuo trata de protegerla, mediante el juicio de amparo, contra la arbitrariedad estatal. Así constituye aberrante contradicción pretender, por una parte, que los actos del Estado mexicano engendran consecuencias jurídicas en relación con un individuo y por la otra impedir que éste los impugne con los medios que el mismo Estado ha establecido con vista a cumplir, en beneficio de los particulares, una tarea de autocontrol.

21. GARANTÍAS INDIVIDUALES, SU VIOLACIÓN PUEDE HACERSE VALER EN EL AMPARO, AUNQUE NO SE HAYA ALEGADO ANTES.[194]

Cuando en la demanda de amparo se alega una violación directa a una garantía consagrada en la Constitución, tal cuestión siempre deberá estudiarse en el juicio de amparo, pues aunque determinadas violaciones o preceptos constitucionales pueden y deben ser examinadas por las autoridades y por los tribunales administrativos, por el hecho de que están obligados a observar la Constitución por encima de las leyes secundarias cuya exacta aplicación tutelan ellos, de todos modos es de notarse que el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, expresamente encomienda a los tribunales federales el tutelar, mediante el juicio de amparo, las garantías individuales, por lo que tales tribunales siempre deben examinar las cuestiones relativas cuando les sean planteadas en el juicio de amparo, independientemente de que el quejoso las haya alegado o no en recursos o medios de defensa hechos valer con anterioridad al juicio constitucional. Lo cual, por lo demás, se justifica con base en el alto interés que el orden constitucional pone en el respecto a las garantías individuales.

---

[194] Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 27 Sexta Parte; Página: 47; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Precedentes: Amparo directo DA-645/69. "Gas Ideal", S, A. 22 de marzo de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

22. GARANTÍAS INDIVIDUALES. SU APRECIACIÓN POR LA SUPREMA CORTE EN EL JUICIO DE AMPARO.[195]

En los términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclame, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada.

23. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[196]

Aun cuando las garantías individuales tengan el carácter de irrenunciables, esto no quiere decir que contra el acto que las viola, pueda reclamarse en cualquier tiempo, porque la misma Ley de Amparo establece un término, muy breve por cierto, dentro del cual deben ser reclamados los actos violatorios, so pena de tenerlos por consentidos. Es cierto que no puede renunciarse anticipadamente el derecho de reclamar contra la violación de garantías individuales; pero si la violación ya se cometió, se pierde el derecho de reclamar contra ella, si tal cosa no se hace dentro del término marcado por la ley.

24. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[197]

Ni la Constitución, ni las leyes secundarias, han establecido la jurisdicción de las autoridades federales, sobre los delitos que puedan cometerse en relación con las garantías que otorga la Carta Federal; pues, en el fondo, no hay delito que no lesiones las garantías individuales, y de tocar aquella jurisdicción a los tribunales federales, tendrían que conocer de todos los delitos que se cometieron en el país, acabando con la soberanía de los estados y anulando de hecho, a los tribunales locales, que tienen jurisdicción propia, en materia que no se ha reservado expresamente la Federación.

---

[195] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: CXXXII, Tercera Parte; Página: 51; Precedentes: Amparo en revisión 469/68. Leonilo Salgado. 19 de junio de 1968. 5 votos. Ponente: Alberto Orozco Romero.

[196] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIX; Página: 575; Precedentes: Tomo XIX, Pág. 575. Rodríguez Ramón. 29 de septiembre de 1926. Ocho votos.

[197] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIV; Página: 776; Precedentes: Tomo XIV, pág. 776. Pérez Castillo Gonzalo. 25 de febrero de 1924. Diez votos.

25. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[198]

Los derechos que bajo el nombre de garantías individuales consagra la Constitución, constituyen limitaciones jurídicas que, en aras de la libertad individual, y en respeto de ella, se opone al poder la soberanía del Estado, quien por su misma naturaleza política y social, puede limitar la libertad que cada individuo, en la medida necesaria para asegurar la libertad de todos; y la limitación de que se habla, debe ser en la forma misma en que se aprecian o definen en la Constitución las citadas garantías individuales, siendo las leyes generales y particulares, el conjunto orgánico de las limitaciones normales que el poder público impone a la libertad del individuo, para la convivencia social, dentro de las mismas garantías individuales, so pena de inferencia absoluta, en caso de rebasarlas, porque entonces, dado el régimen de supremacía judicial que la Constitución adopta, se consigue la protección de las mismas garantías, por medio del juicio de amparo.

26. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[199]

El artículo 16 de a Constitución fija las garantías de que debe gozar el individuo, sólo consigna esas garantías, pero el ataque a ellas, está castigado por las leyes particulares de cada estado, y, por tanto, el conocimiento del proceso respectivo no compete a los jueces federales.

27. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[200]

El juicio de amparo resuelve sobre la existencia o inexistencia de la violación de las garantías que la Constitución consagra, pero no sobre el castigo que puedan merecer los que hayan cometido esa violación.

28. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[201]

El juicio de amparo sólo resuelve la existencia o inexistencia de la violación de las garantías que la constitución consagra, pero no sobre el castigo que puedan merecer los que hayan cometido esa violación.

---

[198] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XI; Página: 3630; Precedentes: Tomo XI, Pág. 3630. Cía. Cigarrera Mexicana, S. A. 19 de abril de 1934.

[199] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: IX; Precedentes: 1921. Ocho votos.

[200] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: IX; Precedentes: 1921. Ocho votos.

[201] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: IX; Página: 600.

29. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[202]

El artículo 16 de la Constitución que fija las garantías de que debe gozar todo individuo, sólo consigna esas garantías, pero el ataque a ellas; está castigado por las leyes particulares de cada estado, y, por tanto, el conocimiento del proceso respectivo no compete a los jueces federales.

30. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[203]

El amparo sólo procede por la violación de las garantías individuales y no por la de derechos de otra índole.

31. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[204]

Son propias de los individuos y no de la sociedad; ésta, en su conjunto, no puede tener derechos particulares heridos y, por lo mismo, garantías violadas, por lo que el Ministerio Público, en su carácter de representante de la sociedad, no tiene derecho para pedir amparo.

32. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.[205]

No puede decirse que haya violación, mientras el interesado está en pleno goce de la garantía, en el ejercicio real del derecho garantizado.

33. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.[206]

Para que haya violación, de parte de la autoridad, se necesita un acto u omisión que, en términos concretos, perturbe el goce de la garantía.

---

[202] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: IX; Página: 600; Precedentes: Tomo IX, Pág. 600. Andrade de Valente. 7 de noviembre de 1921.

[203] Instancia: Pleno Época: Quinta Época; Fuente: Semanario; Judicial de la Federación; Parte: VII; Página: 1494; Precedentes: Tomo VII, Pág. 1494. Álvarez del Castillo Miguel. 21 de diciembre de 1920. Diez votos.

[204] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: V; Página: 109; Precedentes: Agente Del Ministerio Publico, Adscrito Al Tribunal Del Noveno Circuito. Tomo V. Pág. 109. 8-jul.-1919. Promotor Fiscal De Zacatecas. II. 1209. Agente Del Ministerio Publico Federal. VII. 594.

[205] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III; Página: 579; Precedentes: Amparo administrativo en revisión. Aguilar Solís Luis María y coagraviados. 28 de agosto de 1918. Mayoría de seis votos. La publicación no menciona el ponente.

[206] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III; Página: 579; Precedentes: Amparo administrativo en revisión. Aguilar Solís Luis María y coagraviados. 28 de agosto de 1918. Mayoría de seis votos. La publicación no menciona el ponente.

34. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.[207]

Para que exista se necesita que se perturbe a una persona en el goce del derecho garantizado, que se le impida, efectivamente, el goce de ese derecho, o que se le despoje de las cosas a que ese derecho se refiera.

35. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.[208]

No la sufren los funcionarios públicos en su carácter de tales, por las órdenes que en el ejercicio de sus funciones dicten otras autoridades.

36. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.[209]

Las controversias relativas a ellas, son de la competencia de los Tribunales de la Federación.

37. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[210]

No pudieron ser violadas en sentencias pronunciadas durante la época en que no regía la Constitución de 1917 y estaban suspensas las garantías por efecto del cuartelazo de febrero de 1913.

38. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[211]

No pudieron ser violadas durante el periodo preconstitucional, por no haber existido ningunas.

---

[207] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III; Página: 579; Precedentes: Amparo administrativo en revisión. Aguilar Solís Luis María y coagraviados. 28 de agosto de 1918. Mayoría de seis votos. La publicación no menciona el ponente.

[208] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III; Página: 1085; Precedentes: Amparo contra el Juez de Distrito de Puebla. Revisión del auto de improcedencia. Gobernador de Puebla. 18 de octubre de 1918. Mayoría de seis votos. La publicación no menciona ponente.

[209] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III; Página: 1085; Precedentes: Amparo contra el Juez de Distrito de Puebla. Revisión del auto de improcedencia. Gobernador de Puebla. 18 de octubre de 1918. Mayoría de seis votos. La publicación no menciona ponente.

[210] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: II; Página: 256; Precedentes: Tomo II, Pág. 256. Pérez Antonio. 28 de enero de 1918. Diez votos.

[211] Instancia: Pleno; Quinta Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: II; Página: 366; Precedentes: Amparo administrativo, en revisión. Corona Ramón J. 4 de febrero de 1918. Mayoría de diez votos. La publicación no menciona el Ponente.

39. RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.[212]

Es un factor indispensable para la existencia del orden social.

40. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[213]

Están en vigor desde el primero de mayo de mil novecientos diecisiete, en que se restableció el orden constitucional.

41. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[214]

Son de objeto del amparo y protección constitucionales, en tanto que están consignadas en la Carta Fundamental de la Nación, siempre que esté en observancia y haya poderes electos para su estricto cumplimiento.

42. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[215]

Están condicionadas a la vigencia de la Constitución en que se consignan.

43. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[216]

No pudieron ser violadas durante el periodo preconstitucional, porque, suspensa la observancia de la Constitución de 1857, lo estuvieron también las garantías que ella otorga.

---

[212] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: II; Página: 1192; Precedentes: Amparo administrativo. Revisión del auto de Suspensión. "Hijos de Ángel Díaz Rubín". 18 de abril de 1918. Mayoría de nueve votos, de los Magistrados De Valle, Colunga, Martínez Alomía, Urdapilleta, García Parra, Moreno, Cruz, Pimentel y Presidente De los Ríos, contra dos, de los Magistrados González y Truchuelo, por lo que toca al primer punto; y por mayoría de ocho votos, contra tres, de los Magistrados Martínez Alomía, Moreno y Cruz, por lo que respecta al segundo. La publicación no menciona el Ponente.

[213] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 20; Precedentes: Tomo I, Pág. 20. Santos José. 11 de junio de 1917.

[214] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 72; Precedentes: Tomo I, Pág. 72. Rivera G. Antonio. 22 de agosto de 1917. Siete votos.

[215] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 337; Precedentes: Tomo I, Pág. 337. Montes Avelino. 26 septiembre de 1917.

[216] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 337; Precedentes: Tomo I, Pág. 337. Montes Avelino. 26 septiembre de 1917.

44. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[217]

No pueden ser otorgadas sino por una constitución o Ley Fundamental, y no se hacen eficaces y prácticas sino por el medio que establece la misma ley que las otorga.

45. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[218]

Tampoco pudieron ser violadas durante el mismo periodo preconstitucional, las que reconoce la Constitución de 1917, porque éste aún no tenía el carácter de la ley obligatoria.

46. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[219]

No pudieron ser violadas en septiembre de 1915, porque estaban suspensas, ni pudo ocurrirse al remedio del amparo, porque estaba suspenso y no había tribunales ante quienes se pudiera hacer valer.

47. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[220]

Durante el periodo constitucional, los habitantes del país sólo tuvieron las que les otorgaron las disposiciones emanadas del Gobierno preconstitucional y las que les reconocieron las leyes comunes del orden civil y penal, en cuanto no fueron modificadas por la legislación revolucionaria.

48. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[221]

Es enteramente inadmisible que pierda el derecho a ellas, una persona, por el solo hecho de ser militar y estar sujeto al fuero de guerra.

---

[217] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 337; Precedentes: Tomo I, Pág. 337. Montes Avelino. 25 septiembre de 1917. Siete votos.

[218] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 337; Precedentes: Tomo I, Pág. 337. Montes Avelino. 26 septiembre de 1917.

[219] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 357; Precedentes: Tomo I, Pág. 357. Robles Francisco. 29 de septiembre de 1917. 8 votos.

[220] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 357; Precedentes: Tomo I, Pág. 357. Robles Francisco. 29 de septiembre de 1917. 8 votos.

[221] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 442; Precedentes: Amparo penal en revisión. Gutiérrez Teodoro. 12 de octubre de 1917. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el ponente.

49. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[222]

No pudiendo ser violadas las que otorga la Constitución de 1917, en la época en que ésta no estaba vigente.

50. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[223]

Tampoco resultan violadas en un proceso en que se observaron todas las prescripciones de la ley aplicable.

51. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[224]

Estuvieron en suspenso, como lo estuvo también la observancia de la Constitución de 1857, durante el periodo preconstitucional.

52. GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN A LAS.[225]

Se dice que un acto de autoridad viola las garantías individuales cuando infringe, en perjuicio de una persona física o moral, alguno de los derechos establecidos en los artículos 2o. a 28 de la Constitución Federal, ya que el artículo 1ro. contiene una declaración general y el artículo 29 establece el procedimiento para suspender las garantías individuales.

53. GARANTÍAS INDIVIDUALES, ATAQUES A LAS.[226]

El Derecho Constitucional Mexicano se desarrolló, al principio, en un cuadro individualista, para proteger las garantías individuales, estableciendo

---

[222] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 524; Precedentes: Tomo I, pág. 524. Sedano Anastasio. 24 de octubre de 1917. Diez votos.

[223] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 524; Precedentes: Tomo I, Pág. 524. Sedano Anastasio. 24 de octubre de 1917. Diez votos.

[224] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: I; Página: 636; Precedentes: Amparo penal directo. Pérez Ascensión y Jiménez Octaviano. 5 de noviembre de 1917. Mayoría de seis votos. La publicación no menciona el ponente.

[225] Instancia: Primera Sala; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: CVI; Página: 1354; Precedentes: Amparo penal. Revisión del auto que desechó la demanda 3393/50. Rojas Guadalupe. 13 de noviembre de 1950. Mayoría de tres votos. Relator: Luis G. Urbina.

[226] Instancia: Primera Sala; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXXVII; Página: 2002; Precedentes: Tomo LXXVII, pág. 2002. Camacho G. Aurelio. 20 de julio de 1943. Catorce votos.

medios preventivos, represivo y reparadores, y por último el juicio de amparo como medio típico y reparador por excelencia, pero no puede sostenerse que las leyes secundarias que, en cumplimiento de los preceptos constitucionales, reglamenten y fortalezcan sólo los derechos del hombre, no pueden dictarse por los estados, pues en caso contrario, no se explicaría que las legislaturas locales dictasen Códigos Penales, Civiles y de Procedimientos, en ambas materias, todos los cuales tienen como fundamento los derechos establecidos en la Constitución Federal. Así lo han entendido los jurisconsultos tan ilustres como Vallarta y Pallares, el primero de los cuales en uno de sus votos, dice: "es de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión, expedir las leyes orgánicas de todos los artículos constitucionales, pero como el artículo 117 de la Constitución, reserva a los estados las facultades que en aquélla no estén expresamente concedidas a los poderes federales, la consecuencia es que el Congreso de la Unión, puede y debe legislar expidiendo las citadas leyes orgánicas, para el Distrito y Territorios de la Baja California, pero sin que esas leyes sea obligatorias para los estados. El mismo Congreso puede y debe legislar para toda la República, expidiendo él exclusivamente, las leyes secundarias de aquellos artículos que versen sobre materia federal, reservada por texto expreso de la Constitución, a los funcionarios federales, Los estados, a su vez, pueden legislar sobre toda materia que no sea federal, respetando las leyes del Congreso, en las que lo fueren. La materia de cada artículo constitucional es la regla que decide la competencia exclusiva o concurrente de la Federación y los estados, en estos puntos, de lo contrario, la consecuencia lógica sería la negación del sistema federal. Siendo la mayor parte de los delitos ataques a las garantías individuales, de aceptar la exclusividad legisladora del Congreso Federal, ningún estado podría expedir ya Códigos Penales ni castigar el homicidio, las heridas, el plagio, etcétera. Sise negara tal facultad a los estados, para atribuirlo a la Federación, habría que aceptar consecuencias por completo absurdas, puesto que el Congreso Federal sería quien determinara los días y horas de despacho en los tribunales; los requisitos de la confianza carcelera; los que ha de contener el auto de formal prisión; los reglamentos de cárceles para que en ellas no se cobre gabela o contribución alguna, etcétera. El licenciado Pallares dice por su parte: "nuestra Constitución no ha dado al Congreso, sino a los Tribunales Federales, la facultad de proteger las garantías individuales, y sólo por medio de procedimientos jurídicos, esto es, judiciales, de carácter particular, sin hacer declaraciones generales, para que sus actos no tuvieren el carácter legislativo sino judicial". De lo anteriormente expuesto, se desprende que el conocimiento del delito de ataque a las garantías individuales, no corresponde a los Tribunales Federales, sin que obste que se trata de un delito previsto por el Código del Distrito, que debe considerarse como la ley federal, porque entonces se tendría que aceptar que todos los delitos son de la

competencia de los tribunales federales, puesto que siempre engendran violaciones a las garantías individuales.

54. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[227]

La persona jurídica no tiene que probar que se encuentra en el goce de las garantías individuales, porque éste es el estado natural y general de toda persona en la República Mexicana y el acto que restringe o afecta esas garantías, sí debe ser objeto de prueba, porque hay que hacer patente si la restricción que realizó en las condiciones que la Constitución ha previsto. La autoridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultades de restringir las garantías individuales; por tanto, se necesita que pruebe que existían las circunstancias que la Constitución prevé para que la restricción que imponga no sea considerada como violatoria de garantías, la carga de la prueba, incuestionablemente, toca la autoridad, porque el que destruye un estado jurídico o el que alega una excepción, es el que debe probar los hechos; si la autoridad no rinde esa prueba y se limita a afirmar que obró con justificación, no puede fallarse en su favor, ni negarse el amparo, sino que, por el contrario, debe concederse.

55. GARANTÍAS INDIVIDUALES, LEYES REGLAMENTARIAS DE LAS.

Si bien la Constitución General, en su artículo 16, transitorio, parece contribuir al Congreso Federal la facultad de expedir las leyes orgánicas de la Constitución, tratándose de garantías individuales, también debe entenderse que esa facultad está subordinada a la naturaleza de la materia sobre la cual versan esas garantías, según lo previene el artículo 124 de la misma Constitución, y por tanto la reglamentación de dichas garantías que atañen a la jurisdicción federal, y a las legislaturas locales, en caso contrario.

56. GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN DE LAS.[228]

Siendo los derechos del hombre los caracteres esenciales de la naturaleza humana, puede afirmarse que siempre que se trate de un individuo, basta esta

---

[227] Instancia: Primera Sala; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XLV; Página: 1533; Precedentes: Tomo XLV, Pág. 1533. Rosado García Carlos. 25 de julio de 1935.

[228] Instancia: Primera Sala; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XXXVII; Página: 559; Precedentes: Tomo XXXVII, Pág. 559. Vizcaíno José de Jesús. 3 de febrero de 1933.

circunstancia para que se le reconozcan todos los derechos inherentes a su propia naturaleza y como éstos le son indispensables para su conservación y desarrollo, su condición jurídica normal, respecto de ellos, viene a ser la de estar en el pleno goce de todos los que le son propios; de suerte que cuando le son restringidos o violados, surge una situación jurídica de excepción, en la que, al reclamar el individuo el menoscabo de sus garantías, toca a la autoridad demandada, es decir, a la responsable y no al quejoso, dentro del juicio constitucional, la justificación de que la restricción de derechos se ha producido en consecuencia con el sistema legal que nos rige y de conformidad con las instituciones; por esto la Suprema Corte de Justicia ha establecido que las autoridades deben fundar y motivar sus actos, de tal manera, que no basta que exista alguna prevención legal, para que la autoridad, sin citarla y sin apoyarse en ella, pueda dictar o llevar a cabo sus determinaciones.

57. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[229]

Conforme a nuestra organización política, todo individuo que reside en México, disfrute de las garantías individuales, que el Código Fundamental de la República otorga, y entre las cuales figuran, en primer término, la libertad, la propiedad y otras de menor entidad. La situación jurídica de los individuos, en todo el país, es el goce de tales derechos, y cuando alguna de las autoridades constituidas conforme a la propia Constitución, dicta una orden o ejecuta un acto que afecte a cualquiera de dichas garantías, como la persona objeto de ese acto, por su simple carácter de residente en la República disfruta y tiene derecho a continuar disfrutando de ellas, debe presumirse que se comete, en su perjuicio, una violación, porque se ataca el goce de tales derechos. Pero como la misma Constitución establece restricciones a las mencionadas garantías, y faculta a las autoridades para que, en ciertas condiciones, las afecten, estas facultades de la autoridad, o estas restricciones a las garantías, son verdaderas excepciones el goce de ellas, y no se realizan sino en determinados casos, cuando acontecen algunas circunstancias de hecho, previstas por la Constitución. Así es que las personas no tienen que probar que se encuentran disfrutando de la garantía violada, porque éste es el estado natural y general de toda persona en México; pero el acto que restringe o afecta a la garantía, y que es una excepción a aquella regla general, sí debe ser objeto de prueba, porque es menester hacer patente que se han realizado las condiciones que la Constitución ha impuesto, para que una autoridad tenga facultades de hacer algo contrario a dicha garantía. La au-

[229] Instancia: Primera Sala; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XXXIII; Página: 1848; Precedentes: Tomo XXXIII, Pág. 1848. Flores Joaquín. 4 de noviembre de 1931.

toridad, por el simple hecho de serlo, no tiene facultad de restringirles, por lo que es necesario que para ello existan determinadas circunstancias concretas, de las cuales derive esa facultad. Es pues necesario la prueba de esas circunstancias, porque en juicio deben probarse los hechos que afecten un derecho o que ocasionen su ejercicio. Como el amparo es un verdadero juicio, en el que deben observarse las reglas fundamentales comunes a esta clase de contiendas, una de las cuales consiste en la igualdad, en el equilibrio de las partes, se llega a la conclusión de que en el juicio constitucional, el quejoso debe probar la existencia del acto que vulnera sus garantías individuales, y que su contraparte, la autoridad responsable, reporta la obligación de justificar que el acto fue dictado y ejecutado dentro de los límites y con los requisitos que la ley exige, para atacar tales garantías, ya que está colocada en el caso de excepción; y el que destruye un estado jurídico, el que regla una excepción, es el que debe probar los hechos. Si la autoridad responsable no rinde su informe justificado, no ha podido probar que la persona afectada, está en el caso de excepción al goce de las garantías y no puede fallarse a su favor y negarse el amparo, sino que, por el contrario, éste debe concederse.

58. GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN DE LAS.[230]

La Suprema Corte ha establecido, en diversas ejecutorias, la tesis de que las garantías constitucionales por su naturaleza jurídica, son, en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, y no limitaciones a los particulares, por lo cual éstos no pueden violar esas garantías, ya que los hechos que ejecuten y que tiendan a privar de la vida, de la libertad, de las propiedades, de las posesiones o derechos a otros particulares, encuentran su sanción en las disposiciones del Derecho Común, razón por la cual, la sentencia que se dicte condenando a un individuo por el delito de violación de garantías individuales, no está arreglada a derecho y viola, en su perjuicio, las de los artículos 14 y 16 de la Constitución General.

59. ATAQUES A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES.[231]

No basta que se cometa una violación de garantías individuales, a fin de que los tribunales de la Federación sean competentes para conocer del proceso respectivo, si no que se necesita que esté interesada la federación para que

---

[230] Quinta Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XXXI; Página: 2429; Precedentes: Tomo XXXI, Pág. 2429. Rodríguez Félix. 24 de abril de 1931.

[231] Instancia: Primera Sala; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XXVIII; Página: 1324; Precedentes: Tomo XXVIII, pág. 1324, Martínez Francisco. 10 de marzo de 1930. Tres votos.

le afecten dichas violaciones de garantías. Cuando con ellas no se ataquen a los intereses de la Federación, los tribunales del orden común son competentes para conocer de la causa respectiva, y deben aplicarse las leyes vigentes en el lugar que se cometió la violación. El artículo 16 de la Constitución Federal que fija las garantías de que debe gozar todo individuo, sólo castiga esas garantías pero el ataque a ellas está castigado por las leyes particulares de cada estado, y por lo tanto, el conocimiento del proceso respectivo no comete a los jueces federales. El juicio de amparo sólo se resuelve sobre la existencia o inexistencia de las garantías individuales que la construcción consagra; pero no sobre el castigo que pueden merecer los que hayan incurrido en esa violación. La Suprema Corte ha considerado que ni la constitución ni las leyes secundarias establecen la jurisdicción de las autoridades federales, sobre los delitos que pueden cometerse en relación con las garantías con las garantías que otorga la Carta Federal; pues en fondo, no hay delito que no lesione las garantías individuales, y de tocar aquella jurisdicción a los tribunales federales, tendrían que conocer de todos los delitos que se cometieran en el país, acabando con la soberanía de los estados y anulando, de hecho, a los tribunales locales, que tienen jurisdicción propia, en materia que no se ha reservado expresamente a la Federación.

60. GARANTÍAS INDIVIDUALES, ATAQUES A LAS.[232]

Las garantías constitucionales por su naturaleza jurídica, constituyen, en la generalidad de los casos, limitaciones al poder público; por lo que, cuando se trata de un acto de formal prisión por el delito de ataques a las garantías individuales, se hace necesario que se mencione cuál es el artículo constitucional cuyas garantías son las que en particular puede violar. Así es que cuando una autoridad declara la formal prisión de un acusado, por el delito de ataques a las garantías individuales, sin expresar cuál es el artículo constitucional que éste ha violado, es indudable que no cumplió con la ley.

61. GARANTÍAS INDIVIDUALES, COMPETENCIA DE VIOLACIÓN DE.[233]

Las autoridades federales son las únicas competentes para resolver los casos en que se reclama violación de garantías individuales y por lo mismo, son

---

[232] Instancia: Primera Sala Época: Quinta Época; Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XXVII; Página: 1891; Precedentes: Tomo XXVII, Pág. 1891. Beaven Luis F. 18 de noviembre de 1929.

[233] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XCVI; Página: 444; Precedentes: Tomo XCVI, Pág. 444. Bodegas del Delfín, S. A. 16 de abril de 1948. 4 votos.

dichas autoridades las únicas a quienes compete determinar la constitucionalidad de las leyes. Por tanto, implica violación de garantías una sentencia de autoridad distinta de las mencionadas, en las que se examina la inconstitucionalidad de una ley.

62. GARANTÍAS INDIVIDUALES, DEBEN CITARSE EN LA DEMANDA DE AMPARO.[234]

Si en la demanda relativa a un juicio constitucional, no se señalan las garantías individuales, que la parte considera violadas en su perjuicio, y el juez de distrito respectivo, no la previno para que corrigiera esa irregularidad, tal omisión es de aquellas a las que se refiere el artículo 93 de la ley de amparo, esto es, de las que pueden influir en la sentencia que pueda dictarse en definitiva, pues si no se ordena la enmienda de dicha irregularidad, la controversia que se suscite no puede resolverse, siendo de revocarse en tales casos, la sentencia de primera instancia y ordenarse la reposición del procedimiento a fin de que subsane la referida omisión.

63. GARANTÍAS INDIVIDUALES, BASE DEL AMPARO.[235]

Si el legislador constituyente hubiese querido conceder al Estado la facultad de pedir amparo, para proteger cualquier violación a la propia Constitución, aunque no se tradujese en una lesión al interés particular, lo hubiere establecido de una manera clara; pero no fue así, sino que, por el contrario, tanto a través de la Constitución de 1917, como en la de 1857 y de los proyectos constitucionales y actas de reforma que las procedieron, se viene al conocimiento de que los legisladores, como siendo ya los diversos sistemas de control que pueden ponerse en juego para remediar las violaciones de la Constitución, no quisieron dotar al poder judicial facultades omnímodas para oponerse a todas las providencias inconstitucionales, poniendo en juego el curso de amparo, sino que quisieron establecerlo tan sólo para la protección y goce de las garantías individuales.

---

[234] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXXIII; Página: 4181; Precedentes: Cía. Cadillac, S. A. Pág. 4181. Tomo LXXIII. 19 de agosto de 1942. 4 votos.

[235] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXX; Página: 4718 Precedentes: Tomo LXX, Pág. 4718. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 22 de marzo de 1940. Tres votos.

64. GARANTÍAS INDIVIDUALES, BASE DEL AMPARO.[236]

El juicio de amparo fue establecido por el artículo 103 constitucional, no para resguardar todo el cuerpo de la Constitución, sino para proteger las garantías individuales; pues de su texto se desprende que el juicio de amparo se instituyó para resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y, III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Como indica la fracción I son las garantís individuales las que están protegidas por el juicio de amparo, y, aunque en las fracciones II y III, se protege también, mediante el mismo, cualquier acto de autoridad federal que vulnere o restrinja la soberanía de los estados, o de éstos, cuando invadan la esfera de la autoridad federal, aun en tales casos, es propiamente la misma fracción I la que funciona, y no las II y III, supuesto que sólo puede reclamarse en el juicio de amparo, una ley federal que invada o restrinja la soberanía de los estados o de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal, cuando exista un particular que como quejoso, reclame violación de garantías individuales y un caso concreto de ejecución, con motivo de tales invasiones, o restricciones de soberanías: es decir, se necesita que el acto de invasión se traduzca en un perjuicio jurídico en contra de un individuo y que quien reclama en juicio de amparo, sea ese individuo lesionado; por eso es que la sentencia en el amparo, cualquiera que sea la fracción del mencionado artículo 103 que funcione, será siempre tal, según la fracción I del 107, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verso la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

65. GARANTÍAS INDIVIDUALES, BASE DEL AMPARO.[237]

La jurisprudencia de la Suprema Corte ha sido unánime, según puede verse desde la primera época del Seminario Judicial de la Federación, en el sentido de que sólo los particulares pueden acudir al juicio de amparo; y no hay razón suficiente para modificar dicha jurisprudencia, en el sentido de conceder también el juicio de amparo al Estado en su carácter de autoridad.

---

[236] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXX; Página: 4718; Precedentes: Tomo LXX, Pág. 4718. Sría. de Hacienda y Crédito Público. 22 de marzo de 1940.

[237] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXX; Página: 4718; Precedentes: Tomo LXX, Pág. 4718. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 22 de marzo de 1940. 3 votos.

66. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[238]

La consignada en el artículo 17 constitucional, no puede referirse a los ejecutivos locales, pues expresamente se refieren a las autoridades judiciales.

67. GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIONES DE LAS.[239]

Para que exista violación de garantías, se requiere que el quejoso tenga derecho y que se violen éstos en su perjuicio, pero como tratándose de encargados de templos, la ley no les confiere derecho posesorio alguno, ni prohíbe el que sean separados de su encargo, la orden de la autoridad en este sentido no es susceptible de causar violación de derechos, por lo que el amparo que se endereza contra dichos actos, debe sobreseerse por improcedente.

68. GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIÓN DE LAS.[240]

Para afirmar que se han infringido los artículos 14 y 16 constitucionales, es preciso que las molestias que se dicen irrogadas y las privaciones que se asegura se han sufrido, no descansen en hechos no comprobados y en circunstancias hipotéticas, pues de este modo resultan infundados los actos en que descansa la demanda, son inconducente los razonamientos que se hagan para apoyar la concesión del amparo.

69. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[241]

No son derechos públicos reconocidos sin limitación ninguna, por texto expreso de la constitución política, su uso, restricción y suspensión, se arreglan a los casos y a las condiciones que establece dicha constitución, dentro de los límites que la misma señala.

---

[238] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXIX; Página: 4482; Precedentes: Tomo LXIX, Pág. 4482. Cortes Alonso Leopoldo. 22 septiembre de 1941. Cinco votos.

[239] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XLIV; Página: 2348; Precedentes: Castillo Apolonio. Pág. 2348, Tomo XLIV. 7 de mayo de 1935.

[240] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XXXIX; Página: 538; Precedentes: Tomo XXXIX, Pág. 538. Mendoza Alejandro y coags. 25 de septiembre de 1933.

[241] Instancia: Tercera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXXIV; Página: 2535; Precedentes: Piña Magdalena. Pág. 2535 Tomo LXXIV. 28 de octubre De 1942. Cinco votos.

70. GARANTÍAS INDIVIDUALES.[242]

Es verdad que la fracción IX del artículo 107 de la constitución federal, establece que los actos que implican una violación a las garantías que consagran los artículos 16, 19 y 20 de la misma constitución, pueden reclamarse ante el superior del tribunal que los cometa o ante el juez de distrito, pero la suprema corte ha interpretado que dicha reclamación ante el superior, se refiere exclusivamente a la materia penal.

71. RECLAMACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES PARA PREPARAR EL AMPARO.[243]

De acuerdo con el artículo 107 fracción II, de la Carta Magna y con el 97 de la Ley de Amparo, la reclamación de reparación a que se contraen dichos preceptos, no es otra cosa que la inconformidad y protesta que en contra de la violación a las leyes del procedimiento, debe formular quien se crea agraviado, como requisito indispensable para ocurrir al amparo, oportunamente. Si no hubiera algún recurso ordinario que hacer valer contra la violación del procedimiento, el litigante a quien la misma afecte, debe manifestar su inconformidad y protestar contra dicha violación dentro de tres días de notificada la resolución respectiva, reclamándola, además, como agravio en la instancia siguiente, si el juicio la tuviere, a fin de que no se vaya a entender que la ha consentido. La autoridad a quien se atribuyen las violaciones reclamadas, en los términos del citado artículo 97, hará, o no, la reparación que se le pida; si no lo hace, es indudable que el interesado puede ocurrir al amparo, en donde se resolverá si está o no satisfecho el requisito de reparación para pedir la protección constitucional. En esa virtud, es improcedente el juicio de garantías que se promueva, sin haber formulado en su oportunidad, la protesta y reclamación respectivas, que sirven de preparación al juicio de amparo.

72. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES.[244]

Para determinar si se violan o no garantías individuales, en daño de alguna de las partes, los tribunales federales pueden analizar si el razonamiento en que se fundó la autoridad responsable, es lógico.

---

[242] Instancia: Tercera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXX; Página: 2123; Precedentes: Von Anderten Bernardo. Pág. 2123, Tomo LXX. 5 de noviembre de 1941. Cinco votos.

[243] Instancia: Tercera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XLIII; Página: 474; Precedentes: Tomo XLIII, Pág. 474. Sanz José. 29 de enero de 1933.

[244] Instancia: Cuarta Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXXX; Página: 2488 Precedentes: Tomo LXXX, Pág. 2488. Amparo en Revisión 7459/43, Sec. 1a. Campuzano José Jr. 10 de mayo de 1944. Unanimidad de cuatro votos.

Sinopsis:

a) Las garantías constitucionales son los medios formulados en la ley fundamental para la protección de los derechos humanos, tanto de la primera (derechos individuales) como de la segunda generación (derechos sociales).

b) Las garantías constituciones son relaciones jurídicas fundadas en la ley fundamental. Esta relación jurídica implica la subordinación del gobernado frente al gobernante, siendo el primero titular de un derecho humano y el segundo el deudor del respeto y promoción del mismo.

c) Las garantías constitucionales como tales son el objeto del juicio de amparo.

CAPÍTULO 2
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD JURÍDICA

I. La seguridad jurídica *in genere*

Gustav Radbruch decía que "Entendemos por seguridad jurídica, no la seguridad por medio del Derecho, la seguridad que el Derecho nos confiere al garantizar nuestra vida o nuestros bienes contra el asesinato, el robo, etcétera —pues ésta va ya implícita en el concepto de la adecuación a fin—, sino la seguridad del Derecho mismo".[1] Efraín Polo Bernal precisa que "La seguridad jurídica es el beneficio del reinado del derecho, ella exige la adecuación de la ley a los mandatos constitucionales, la imparcialidad y buena organización de la justicia, el cumplimiento del orden constitucional y legal en cualquier acto de autoridad".[2] O de manera de más sencilla: "La idea de seguridad jurídica implica la certeza, protección, firmeza y claridad de las normas jurídicas y su aplicación, esto es, que el gobernado sabe perfectamente a qué atenerse".[3] En síntesis: "la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por los procedimientos regulares, establecidos previamente".[4] Lo cual requiere de cuatro condiciones: que el derecho esté debidamente formalizado; que el derecho sea preciso, no objeto de interpretación arbitraria; que el derecho sea "practicable", o sea, eficaz; finalmente que tal derecho sea estable, es decir:

---

[1] G. Radbruch, *op. cit*., p. 40.

[2] E. Polo Bernal, *op. cit*., 1993, p. 21.

[3] A. Rojas Caballero, *op. cit*., p. 253.

[4] Jorge Adame Goddard, "Seguridad jurídica", en *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, t. P-Z. p. 3429. Es interesante este énfasis en el "procedimiento", lo cual ha llevado a Juventino Castro a denominar a las garantías de seguridad jurídica como "Las garantías del procedimiento". *Cf.* Juventino Castro, *Garantías y amparo*. México, Porrúa, 2000, p. 249.

> [...] no debe hallarse expuesto a cambios frecuentes, no debe hallarse a merced de una legislación incidental, que dé todo género de facilidades para troquelar cada caso concreto en forma de ley: los *checks and balances* —frenos y contrapesos— de la teoría de la división de poderes y la morosidad del aparato parlamentario son, desde este punto de vista, una garantía de la seguridad jurídica.[5]

Hasta aquí, puede afirmarse que la seguridad jurídica excluye los actos de poder de carácter arbitrarios, distantes del referente del derecho positivo, como conjunto de normas jurídicas claras y estables.[6] Regresando con Burgoa, las garantías individuales de seguridad jurídica implican: "el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el *summum* de sus derechos subjetivos".[7]

Héctor Fix Fierro precisa que "Los derechos de seguridad confieren al individuo certidumbre sobre el alcance y la permanencia de sus derechos y obligaciones frente al poder político".[8]

Los artículos 14[9] y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[10] son los principales depositarios de los principios fundamen-

---

[5] E. Polo Bernal, *op. cit*., p. 21.

[6] En síntesis, la seguridad jurídica es la "Garantía de la aplicación objetiva de la ley", T. Navarrete, Salvador Abascal y A. Laborie, *op. cit*., p. 215.

[7] "Todo acto de autoridad, emanado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos autoritarios estatales creados por el orden de derecho, tiene como finalidad inherente, imbíbita, imponerse a alguien de diversas maneras y por distintas causas; es decir, todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona moral o física en sus múltiples derechos: vida, propiedad, libertad, etcétera.

Dentro de un *régimen jurídico*, esto es, dentro de un sistema en que impere el derecho, bien bajo un carácter normativo legal o bajo un aspecto consuetudinario, esa afectación de diferente índole y de múltiples y variadas consecuencias que opera en el *status* de cada gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista del derecho". Ignacio Burgoa Orihuela, *Las garantías individuales*, p. 504.

[8] J. L. Soberanes Fernández y H. Fix-Zamudio, comps., *op. cit*., p. 304.

[9] Respecto del artículo 16 constitucional explica Luis Bazdresch lo siguiente: "Este precepto comprende genéricamente la seguridad jurídica en cuanto su párrafo inicial prescribe como regla general, que cualesquiera molestias, de toda clase, a la persona, la familia, el domicilio, los papeles y las posesiones, deben provenir de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". L. Bazdresch, *op. cit*., p. 167.

[10] José Ovalle Favela comenta: "El artículo 14 constitucional es uno de los pilares sobre los que descansa el ordenamiento jurídico mexicano. No es una casualidad el que este pre-

tales de la garantía de seguridad jurídica. En la siguiente tesis aislada perteneciente a la novena época y cuyo rubro dice:

> RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL PREVER COMO OBLIGACIÓN DE TODO SERVIDOR PÚBLICO, ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.[11]

Podemos encontrar un razonamiento jurídico que compendia lo que hemos afirmado respecto a la conceptualización de la seguridad jurídica:

> La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son respetadas por el legislador, cuando al expedir normas que prevén infracciones administrativas o conductas antijurídicas, especifica sus elementos de manera clara, precisa y exacta a fin de otorgar certidumbre a los gobernados y evitar que las autoridades administrativas actúen arbitrariamente ante la indeterminación de los conceptos. En ese tenor, resulta indudable que la hipótesis contenida en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos respeta las mencionadas garantías, toda vez que al establecer como obligación de todo servidor público el abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, otorga certeza sobre la conducta que puede consti-

---

cepto sea, junto con el artículo 16 constitucional el más invocado en las demandas con las que se inician los juicios de amparo. En él se contienen cuatro de las más importantes garantías de seguridad jurídica:

La de irretroactividad de la ley;

1. la de audiencia;

2. la de legalidad en materia civil;

3. la de legalidad en materia penal", en Varios autores, *Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones*, t. III: Artículos constitucionales 12-23. México, Cámara de Diputados, LVII Legislatura / Miguel Ángel Porrúa, 2000, pp. 77-78.

[11] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, julio de 2002 Tesis: 1a. XLVI/2002 Página: 57 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 63/2002. Héctor Palomares Medina. 8 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

> tuir un incumplimiento de dicha obligación, pues de manera expresa limita la abstención a actos u omisiones que impliquen incumplimiento de alguna disposición jurídica que tenga relación con el desempeño del empleo, cargo o comisión de dicho funcionario.

El razonamiento contenido en la anterior tesis especifica los siguientes elementos:

a) La expresión genérica de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que se contienen en los artículos 14 y 16 constitucionales.

b) El legislador debe expedir normas cuyas hipótesis sean claras, precisas y exactas a fin de otorgar certidumbre y la indeterminación conceptual.

En suma, la seguridad jurídica implica la vigencia del estado de derecho, el cual

> [...] presupone un retorno a las bases fundamentales, esto es, que frente a la organización de la sociedad, sólo el Derecho es un instrumento capaz de establecer las reglas para una convivencia como presupuesto del desarrollo, la paz y la manera más eficaz de permitir que sus miembros alcancen sus propios fines.[12]

Sólo a modo de referencia, consideremos la definición de Eduardo García Máynez sobre el Estado Moderno, es decir: "la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio".[13]

Con estos elementos y para concluir, podemos definir el estado de derecho como aquel orden público en el que prevalece el derecho como un sistema de organización social, cuya normatividad es precisa en cuanto su definición de juicios normativos, tanto imperativos como su contenido coercitivo. Se puede afirmar, que la seguridad jurídica es un requisito *sine qua non* para la existencia del estado de derecho.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica in genere

1. METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES

[12] A. Rojas Caballero, *op. cit.*, p. 254.

[13] E. García Máynez, *op. cit*., p. 98.

QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (*DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).[14]

> El citado precepto viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues si bien establece diversas sanciones que pueden imponerse con motivo de las infracciones que se cometan, sin embargo, omite establecer los parámetros necesarios que permitan a la autoridad determinar el tipo de infracción que da lugar a la imposición de las sanciones especificadas, pues dicho precepto se refiere de manera genérica a los casos en que las autoridades pueden imponer las diversas sanciones que se especifican, al disponer "quienes incurran en el incumplimiento de la ley y demás disposiciones derivadas de ella" permite que, a quien incurra en un incumplimiento menor, la autoridad le imponga una mayor sanción que a quien comete una infracción de mayor gravedad, lo que propicia la arbitrariedad al dejar a la autoridad administrativa ese amplio margen, como también ocurre respecto de cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no amerita sanción. No obsta para la conclusión anterior, el contenido del artículo 115 del mismo ordenamiento, ya que sólo establece diversos grados de gravedad que deben tomar en cuenta las autoridades para imponer las sanciones que contempla la ley, pero no

---

[14] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, noviembre de 1997 Tesis: P./J. 83/97 Página: 24 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 2362/96. Super Servicio Raga, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 2494/96. Servicio Astro-Mex 68, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1575/96. Marcelino Álvarez González. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 2419/96. Servicio Hospital, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 2632/96. Servicio Roble Norte, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en ausencia de él hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Clementina Flores Suárez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinte de octubre en curso, aprobó, con el número 83/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete.

define o señala la conducta infractora que da lugar a cada una de las sanciones que se especifican; de lo que se sigue que no corrige la indeterminación contenida en la parte inicial del artículo 112, que deja a los particulares en estado de indefensión al permitir a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad, así como de que incluso pueda no ameritar sanción alguna.

2. INSTITUCIONES DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RELATIVA, QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL PARA EL COBRO DEL ADEUDO RESPECTIVO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.[15]

El párrafo primero del mencionado precepto legal otorga el carácter de título ejecutivo a los contratos o las pólizas en los que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por las instituciones referidas, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, lo que determina la naturaleza de la vía ejecutiva a efecto de que dichas instituciones demanden en una forma procesal privilegiada de su deudor el pago de una cantidad líquida, amparada en la citada documentación a la que se le determina traer aparejada ejecución, lo que implica la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, sin que esto viole la garantía de seguridad jurídica, pues el objetivo de ese procedimiento es el de dar seguridad, celeridad y firmeza a la circulación de la riqueza a través de las operaciones de crédito, sobre la premisa del reconocimiento de la existencia de un acuerdo de voluntades, esto es, de un contrato que crea derechos y obligaciones específicos, plasmados en un documento que debe reunir los elementos necesarios para su existencia y una determinada forma para su validez, alentando con esto el tráfico mercantil.

3. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

---

[15] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, diciembre de 1998 Tesis: P. CXVIII/98 Página: 249 Materia: Constitucional, Civil Tesis aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 642/97. Francisco Javier Galdós Muñoz. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de diciembre en curso, aprobó, con el número CXVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.

PENALES PARA EL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROCESALES QUE CONTRAIGA EL SUJETO QUE OBTENGA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO ES CONCULCATORIA DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL.[16]

> La exigencia que impone la fracción III del artículo 269 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en el sentido de que el inculpado podrá obtener su libertad provisional cuando, además de las garantías relativas al monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele, también se le exija otra para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que, en términos de ley, deriven a su cargo en razón del proceso que se le instruye, no es conculcatoria de la garantía de seguridad jurídica consagrada en la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que siempre ha sido una condición que en forma explícita se exigía en el texto original del citado precepto constitucional para la obtención del beneficio de la libertad provisional bajo caución; y aunque tal disposición ha sido materia de varias modificaciones, siempre se ha reconocido, aunque sea de manera implícita que, para el otorgamiento de tal beneficio, debe exhibirse una garantía que asegure al inculpado y lo constriña al cumplimiento de sus obligaciones procesales.

---

[16] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, junio de 1999 Tesis: P./J. 44/99 Página: 5 Materia: Constitucional, Penal Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 51/96. Arminda Isabel González Ramírez y coags. 4 de noviembre de 1996. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Martín Ángel Rubio Padilla. Amparo en revisión 518/95. Carlos Villanueva López. 4 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Amparo en revisión 2282/96. Florentino Andrés Javier. 19 de junio de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Germán Martínez Hernández. Amparo en revisión 3026/96. Hipólito Ortiz Ortiz. 14 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Amparo en revisión 1990/95. Santiago Pérez Sergio y coag. 1 de diciembre de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número 44/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN VIRTUD DE LA CELEBRACIÓN DE AQUÉLLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[17]

> El artículo tercero transitorio de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, no es violatorio de los principios de seguridad y certeza jurídicas previstos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, pues si bien autoriza que se suspenda la aplicación de las disposiciones de la Ley Electoral cuando la Comisión Estatal Electoral celebre convenios de coordinación y colaboración con los organismos electorales federales, durante la vigencia de ellos, el propio precepto remite a los términos del artículo 81, fracción X, que a su vez se relaciona con el artículo 152, segundo párrafo, del propio ordenamiento legal, y de cuya armónica interpretación puede concluirse que tales convenios sólo podrán celebrarse para el intercambio y uso de información común; para acordar que determinados procedimientos y actividades electorales se realicen conjuntamente, cuando esto evite incrementar innecesariamente el esfuerzo ciudadano y el gasto de recursos públicos; para utilizar los padrones, listas nominales y credenciales para votar con fotografía federales, así como para utilizar las casillas receptoras de la votación federal para la recepción de la votación en las elecciones estatales y municipales; además de que el propio artículo 81 establece que no podrán afectarse los derechos que la ley confiere a los partidos políticos, coaliciones, candidatos y ciudadanos en virtud de los referidos convenios; esto es, aun cuando los citados convenios pueden dar lugar a la suspensión de determinadas disposiciones de la ley, se permite de cualquier manera desarrollar el proceso electoral en los términos que la propia ley prevé, pero con elementos de las autoridades federales que resultan aptos y suficientes para los mismos fines, sin transgredir derecho alguno de los actores que participan en las elecciones locales.

---

[17] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, abril de 2000 Tesis: P./J. 45/2000 Página: 548 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99. Partido Revolucionario Institucional y la minoría de Diputados de la Sexagésima Octava Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Nuevo León. 7 de octubre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretarios: Osmar Armando Cruz Quiroz y Pedro Alberto Nava Malagón. El Tribunal Pleno, en su se-

5. EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA IMPONER UNA CLAUSURA TEMPORAL, PARCIAL O TOTAL, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[18]

> La potestad concedida a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en el referido precepto, para ordenar la clausura temporal, total o parcial, de fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre y recursos forestales o se desarrollen actividades que impliquen un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de daño o deterioro grave de los recursos naturales o de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, no transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Ello es así, porque el precepto impugnado no genera incertidumbre a los gobernados ni permite actuaciones arbitrarias de la autoridad, ya que las circunstancias que dan origen a la imposición de la clausura temporal, total o parcial, se encuentran definidas en la propia Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, específicamente en su artículo 3o., donde se precisan los conceptos de contaminación, desequilibrio ecológico, ecosistema y recurso natural, parámetros que acotan el ejercicio de esa facultad discrecional, cuya finalidad es la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional. Además, el hecho de que en el artículo combatido se conceda a la autoridad administrativa un margen de

---

sión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 45/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. NOTA: La ejecutoria relativa a la acción de inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 641.

[18] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, junio de 2000 Tesis: P. LXXXV/2000 Página: 25 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 3002/98. Campamento Activo Potrero Redondo, S. A. de C. V. 15 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de mayo en curso, aprobó, con el número LXXXV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de mayo de dos mil.

discrecionalidad para determinar el riesgo, daño o deterioro graves y las repercusiones peligrosas que producen las actividades de los particulares, y con base en ello la procedencia de una clausura total o parcial, no significa que se permita la arbitrariedad, pues su actuación siempre se encuentra sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación.

6. COMPETENCIA ECONÓMICA. LA LEY FEDERAL CORRESPONDIENTE NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y DIVISIÓN DE PODERES PORQUE CONTIENE LAS BASES NECESARIAS PARA DETERMINAR LOS ELEMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA DECIDIR CUÁNDO SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA.[19]

La ley mencionada establece las conductas que pueden considerarse como prácticas monopólicas utilizando diversos conceptos técnicos como el de "poder sustancial" que tenga el presunto responsable, el de "mercado relevante" en el que se colocan los bienes o servicios de que se trate, y otros términos que son propios de la materia especializada, y aun cuando la referida ley no contiene una definición formal de lo que debe entenderse por cada uno de estos conceptos, sí establece en sus artículos 12 y 13, entre otros, los criterios que permiten comprender su significado, lo que basta para concluir que no transgrede los principios de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes establecidos, respectivamente, en los artículos 14, 16 y 49 de la Constitución Federal, pues no se deja a la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley, la definición de esos conceptos.

7. DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.[20]

El artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece la garantía de seguridad jurídica, consistente en que todo acto de autoridad debe

---

[19] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: P. CVII/2000 Página: 107 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 2617/96. Grupo Warner Lambert México, S. A. de C. V. 15 de mayo de 2000. Mayoría de nueve votos. Ausente: Presidente Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Silverio Rodríguez Carrillo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

[20] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, julio de 2002 Tesis: P. XXVIII/2002 Página: 7, Materia: Constitucio-

estar fundado y motivado, garantía que no contraviene el artículo 40 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aun cuando no establece reglas concretas para que el Juez, en ejercicio de sus facultades, valore la imputación formulada por los diversos participantes en el hecho delictuoso investigado y demás personas involucradas en la averiguación previa, a fin de tener por comprobados "los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado", dado que la valoración de mérito no debe ser arbitraria o caprichosa, sino con prudencia, sensatez y buen juicio, es decir, el juzgador, en ejercicio de su arbitrio judicial, debe establecer si hay adecuación entre los hechos atribuidos a los inculpados y el ilícito que se les imputa. Además, el Juez debe motivar adecuadamente por qué la imputación respectiva es eficiente y suficiente para tener por probados "los elementos del tipo penal y la responsabilidad del inculpado", esto es, está obligado a exponer pormenorizadamente los razonamientos idóneos para justificar la determinación que al respecto pronuncie. En tales circunstancias, las disposiciones del numeral 40 no contravienen la garantía de seguridad jurídica contemplada en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, pues no facultan al juzgador a valorar arbitrariamente los elementos probatorios a que el propio precepto se refiere.

8. CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).[21]

Si bien es cierto que en principio debe equipararse a una relación laboral la existente entre el Estado y sus empleados, también lo es que esa equipara-

---

nal, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo en revisión 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco. Amparo en revisión 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy veinticinco de junio en curso, aprobó, con el número XXVIII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil dos.

[21] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, marzo de 1998 Tesis: XX.1o.39 A Página: 780 Materia: Administrativa; Precedentes: Amparo directo 497/97. Florinda López Herrera. 11 de diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Rubén Baltazar Aceves. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.

ción no comprende en general a los servidores públicos, en virtud de que la fracción XIII, apartado B del artículo 123, en relación con los diversos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 116, fracción V, todos de la Constitución Federal, excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública y, por tanto, no puede resolverse el asunto conforme a lo establecido por el artículo 6o., fracción I, párrafo tercero, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, pues por la exclusión contemplada en los preceptos constitucionales y la ley estatal antes citados, la relación que guarda el quejoso en su carácter de policía auxiliar del Estado, con las autoridades demandadas es de naturaleza administrativa y no laboral, y como tal, se rige por la Ley de Justicia Administrativa de Chiapas.

9. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE PREVÉ SU INTERRUPCIÓN CUANDO SE PRACTIQUEN CIERTOS ACTOS PROCEDIMENTALES, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 AL 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[22]

Si bien es cierto que la prescripción de la acción persecutoria, cuyo fundamento radica tanto en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo como en la seguridad jurídica que todos los hombres deben tener ante aquél, es una figura necesaria en la medida que preserva la justicia criminal, pues sólo a través de ella el individuo y la sociedad adquieren certeza y confianza en que los procesos no se paralicen hasta el infinito, también lo es que al determinar el artículo 110 del Código Penal para el Distrito Federal que los actos de procedimiento son causas que interrumpen su curso, no atenta contra las garantías de seguridad jurídica previstas en los artículos 14 al 23 de la Constitución Federal que exigen el cumplimiento de los requisitos de orden constitucional y legal en cualquier acto de autoridad. Ello es así, porque si el derecho del Estado para perseguir al presunto delincuente surge en el mismo momento en que se produce el hecho relevante y se inicia el curso de la prescripción de la acción penal, no puede exigirse al Estado una actuación inmediata, cuando es la propia ley la que impone actuar en todo caso fundada y motivadamente, esto es, para el ejercicio de la referida acción, es

[22] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, junio de 2001 Tesis: 1a. XLIV/2001 Página: 245 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 1596/98. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

necesaria la práctica de ciertos actos procedimentales que revelan el interés del Estado en cumplir con su función persecutoria y represiva, obteniendo la calificación del hecho y de su autor para extraer de ella las consecuencias que la ley señala. Además, no se deja al arbitrio del Ministerio Público la realización de todos los actos encaminados a interrumpir la prescripción, pues sólo las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y del probable responsable son aptas para hacerlo, siempre y cuando no se realicen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, pues, en caso contrario, ésta no se interrumpirá sino con la aprehensión del inculpado, armonizándose con ello los fundamentos de la figura jurídica de que se trata.

10. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA LOS USUARIOS QUE INCUMPLAN CON EL PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[23]

La circunstancia de que el artículo 99 de la Ley para regular la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado de Colima, faculte a los organismos operadores o, en su defecto, a la comisión estatal para realizar las acciones necesarias tendientes a impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas residuales a las redes de drenaje y alcantarillado, a aquellos usuarios que incumplan con el pago respectivo conforme a lo dispuesto en la propia ley, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Lo anterior es así, porque el citado artículo 99 no precisa el número de pagos mínimos que los usuarios del citado servicio deben incumplir para que se les aplique dicha sanción, generándose con ello una situación de incertidumbre, al dejar a la voluntad de la autoridad el determinar el momento en que debe imponerse al particular tal sanción; ni tampoco prevé las circunstancias que en cada caso concreto posibiliten a la autoridad correspondiente para imponerla, esto es, la gravedad de la infracción, la reincidencia en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro

[23] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, agosto de 2001 Tesis: 1a. LX/2001 Página: 167 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Amparo en revisión 1756/99. José Luis Jiménez Morales. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

elemento que tienda a individualizarla. Además, al no señalarse con precisión en el mencionado artículo 99 cuáles son todas las acciones que se estiman necesarias para impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar las aguas residuales a las redes de drenaje y alcantarillado, se deja en estado de indefensión a los usuarios del servicio de que se trata, pues desconocen los alcances de la ejecución de la referida sanción.

11. MINISTERIO PÚBLICO. LA RESOLUCIÓN EN LA QUE DECLARA ENCONTRARSE IMPOSIBILITADO JURÍDICAMENTE PARA CONOCER DE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN VIRTUD DE QUE OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y, ACORDÓ NO INICIAR NI INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA RESPECTIVA, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.[24]

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., fracciones I y II, 113 y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8o., fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y compete a éste iniciar la averiguación previa, practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes para determinar la existencia o probable existencia de los ilícitos que se desprendan de los hechos denunciados, así como recibir las denuncias y querellas o realizar acciones oficiosas cuando el caso lo amerita, sobre hechos determinados que la ley señala como delitos. Ahora bien, el hecho de que el Ministerio Público manifieste encontrarse imposibilitado jurídicamente para conocer de los hechos denunciados, en virtud de que operó la prescripción de la acción persecutora y, acuerde no iniciar ni integrar la averiguación previa respectiva, se traduce en una falta de fundamentación y motivación y, por tanto, transgrede, en perjuicio del quejoso, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues para resolver en ese sentido debió determinar, en primer término, el delito o delitos que se desprendan de los hechos puestos a su consideración, para lo cual debe iniciarse un procedimiento penal, que comienza con la apertura de la averiguación previa. Sostener lo contrario sería un error de técnica procesal, ya

[24] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, febrero de 2002 Tesis: 1a. XIII/2002 Página: 29 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 968/99. 30 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

que si no se inicia la citada etapa, no es posible determinar si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial, son o no constitutivos de delitos, presupuesto necesario para estar en posibilidad de realizar el estudio de la prescripción de la acción.

12. MENORES INFRACTORES. LEY DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.[25]

La Ley para Menores Infractores del Estado de Baja California no quebranta la garantía de seguridad jurídica, en razón de que en el proceso administrativo que se sigue ante el Consejo de Menores de la referida entidad federativa, regulado por los artículos 10, 34, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, se establece la obligación, por parte de la autoridad correspondiente, de notificar de inmediato a los menores infractores, su situación jurídica y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque su defensa, de alegar y el dictado de una resolución inicial dentro del término de cuarenta y ocho horas, lo que hace patente el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que en lo fundamental, son las que garantizan la adecuada defensa antes del acto de privación de la libertad, propiedad, posesiones o derechos del gobernado y que se traducen en el respeto al derecho público subjetivo en comento.

Sinopsis:

a) La seguridad jurídica implica una situación opuesta a la arbitrariedad del acto de quien ejerce el poder, ya que su principio fundamental radica en el principio de legalidad, es decir, que todo acto de autoridad no debe sobrepasar a lo establecido de manera estricta en la ley.

b) La seguridad jurídica es la base del estado de derecho.

c) La seguridad jurídica in genere *es contenida, en la Constitución General de México en los artículos 14 y 16:*

[25] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, mayo de 2000 Tesis: 2a. LI/2000 Página: 311 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 879/99. 28 de abril del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y está, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

II. La garantía de legalidad *in genere*

La expresión más importante de la seguridad jurídica radica en la garantía de legalidad. Mientras que en el ámbito del derecho privado, lo no expresamente prohibido, se entiende como permitido, en el derecho público, sólo es permitido lo fundamentado de manera expresa y limitativa en la ley. Esta garantía admite la subdivisión en "la exacta aplicación de la ley" y la garantía de "fundamentación y motivación". Por el momento nos ocuparemos de la garantía de legalidad en general. Efraín Polo Bernal, de manera breve define el término "legalidad" como "calidad de lo que es legal y ser legal es lo que está reglado por la ley. De ahí que cuando se dice que toda actuación es legal quiere decir que ella respeta la norma fijada por el legislador".[26] O, como lo explica Ariel Rojas Caballero, la garantía de legalidad es aquella

> [...] consistente en el deber jurídico de toda autoridad que se dirija al gobernado de hacerlo por medio de un mandamiento donde gráficamente conste el sentido de su actuar, amén de que la autoridad debe estar constitucionalmente facultada para realizar dicho procedimiento y debe expresar en la orden escrita el precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias que justifican su proceder.[27]

Así las cosas, podemos deducir los siguientes elementos de tal garantía: Mandamiento escrito; Autoridad competente; Fundamentación y motivación.[28] Hemos advertido, que se desarrollarán, por sí mismas, las garantías de aplicación estricta de la ley, así como de fundamentación y motivación.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Legalidad in genere

1. AGUAS NACIONALES. LA LEY RELATIVA RESPETA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, PORQUE ESTABLECE LAS NORMAS A QUE DEBE

---

[26] E. Polo Bernal, *op. cit.*, p. 25.
[27] A. Rojas Cabalero, *op. cit*., p. 314.
[28] *Ibid*., pp. 319-329.

SUJETARSE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN LA DEMARCACIÓN DE LOS CAUCES Y RIBERAS.[29]

El artículo 3o., fracciones III, VIII y XII, de la Ley de Aguas Nacionales define los conceptos de: a) cauce de una corriente como "el canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse", especificando que "cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considerará como cauce el canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento"; b) el de ribera o zona federal como "las fajas de diez metros de anchura contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias" y tratándose de cauces con una anchura no mayor de cinco metros "la amplitud de la ribera o zona federal será de cinco metros", estableciendo también la forma de delimitación de tales franjas mediante el cálculo de "el nivel de aguas máximas ordinarias" a partir de "la creciente máxima ordinaria que será determinada por la comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley" y especificándose que "en los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el mar"; y c) el de vaso de lago, laguna o estero como "el depósito natural de aguas nacionales delimitado por la costa de la creciente máxima ordinaria". Deriva de lo anterior que la Comisión Nacional del Agua, en la demarcación o delimitación de los cauces y zonas federales de las aguas nacionales, no goza de un libre arbitrio, sino que su actuación está sujeta a lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, por encontrarse definido lo que debe entenderse por el cauce de la corriente, así como la extensión de las franjas que constituirán la ribera o zona federal, no pudiéndose comprender extensiones mayores a las que expresamente se señalan, sin que obste a lo anterior el que sea la comisión quien determine la creciente máxima ordinaria a partir de la cual se calculará el nivel de aguas máximas ordinarias que será el punto de partida de la medida horizontal de las franjas, pues ello deberá hacerlo de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento

---

[29] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Tomo: VII, enero de 1998 Tesis: P. III/98 Página: 100 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 2364/96. Ramiro Garza Garza. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número III/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y ocho.

de la ley, en concreto, en su artículo 4o., fracciones I, III, V, VI y VII, poniendo a disposición de quien lo solicite la información de la creciente máxima ordinaria determinada para un cauce o vaso específicos, conforme a las fracciones II y IV, inciso c), del mismo precepto. Por tanto, la Ley de Aguas Nacionales respeta la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, porque establece las normas a que deberá sujetarse la Comisión Nacional del Agua en la demarcación o delimitación de los cauces y riberas o zonas federales de las aguas nacionales.

2. METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (*DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).[30]

El citado precepto viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, pues si bien establece diversas sanciones que pueden imponerse con motivo de las infracciones que se cometan, sin embargo, omite establecer los parámetros necesarios que permitan a la autoridad determinar el tipo de infracción que da lugar a la imposición de las sanciones especificadas, pues dicho precepto se refiere de manera genérica a los casos en que las autoridades pueden

[30] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, noviembre de 1997 Tesis: P./J. 83/97 Página: 24 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 2362/96. Super Servicio Raga, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 2494/96. Servicio Astro-Mex 68, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1575/96. Marcelino Álvarez González. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 2419/96. Servicio Hospital, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 2632/96. Servicio Roble Norte, S. A. de C. V. 9 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano; en ausencia de él hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Clementina Flores Suárez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinte de octubre en curso, aprobó, con el número 83/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete.

imponer las diversas sanciones que se especifican, al disponer "quienes incurran en el incumplimiento de la ley y demás disposiciones derivadas de ella" permite que, a quien incurra en un incumplimiento menor, la autoridad le imponga una mayor sanción que a quien comete una infracción de mayor gravedad, lo que propicia la arbitrariedad al dejar a la autoridad administrativa ese amplio margen, como también ocurre respecto de cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no amerita sanción. No obsta para la conclusión anterior, el contenido del artículo 115 del mismo ordenamiento, ya que sólo establece diversos grados de gravedad que deben tomar en cuenta las autoridades para imponer las sanciones que contempla la ley, pero no define o señala la conducta infractora que da lugar a cada una de las sanciones que se especifican; de lo que se sigue que no corrige la indeterminación contenida en la parte inicial del artículo 112, que deja a los particulares en estado de indefensión al permitir a la autoridad imponer sanciones de diferente rango a cualquier incumplimiento legal, con independencia de su gravedad, así como de que incluso pueda no ameritar sanción alguna.

3. RESPONSABILIDAD CORRESPECTIVA. EL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, NO VULNERA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD ESTABLECIDA EN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.[31]

La responsabilidad correspectiva que establece el artículo 272 del Código Penal del Estado de Michoacán que dispone: "Artículo 272. Cuando en la comisión de las lesiones intervengan dos o más personas y no constare quién o quiénes fueron los autores de aquéllas, se les impondrá prisión de quince días hasta dos terceras partes del máximo de la sanción que corresponda al delito de lesiones cometidas según su modalidad y multa de cien a tres mil pesos, a todos los que hubieren atacado al ofendido con instrumentos a propósito para inferirle las lesiones que recibió", no viola el principio de legalidad en materia penal, previsto en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que implica que tanto el delito como la pena deben

[31] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, marzo de 2000 Tesis: P. XXVI/2000 Página: 105 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 3242/98. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número XXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

estar previstos en una ley expedida con anterioridad por el órgano legislativo correspondiente, en virtud de que sólo establece una penalidad atenuada cuando se comete el delito de lesiones con la intervención de dos o más personas y no constare quiénes fueron los autores de aquéllas, toda vez que dicho delito se encuentra previsto en el artículo 269 del mismo código punitivo y las diversas modalidades en los artículos 270 y 271 de la misma ley de la materia.

4. SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[32]

El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nue-

---

[32] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, septiembre de 1998 Tesis: P./J. 45/98 Página: 5 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 2/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de agosto en curso, aprobó, con el número 45/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

va resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho.

Sinopsis:

La garantía de legalidad es la expresión formal de la garantía de la seguridad jurídica.

A diferencia del derecho privado, todo acto de autoridad es restringido a lo explicitado por la ley.

En general, la garantía de legalidad es consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, que de nuevo aquí se transcriben con el propósito de facilitar su consulta:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y está, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fisca-

les, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

III. La garantía de legalidad, fundamentación y motivación del acto de autoridad

La seguridad jurídica, como se ha entendido, es un logro del constitucionalismo moderno, ya que en éste, prevalece la ley como fuente del derecho, y por consiguiente se da la primacía del principio de legalidad. Así las cosas, podemos afirmar que, una característica esencial del fenómeno constitucionalista moderno, consiste en que todo acto de autoridad debe estar fundamentado en una ley previa (o norma de carácter general) al mismo. En efecto, porque como ya lo adelantábamos, una constitución moderna:

> [...] en un sentido estricto es el conjunto de normas jurídicas que en el Estado Constitucional limitan su poder y regulan su actividad, garantizando la libertad de los ciudadanos. [...] La idea que pretende ser dominante en una Constitución es la de que existe una legalidad a la que debe someterse el mismo Estado y que tiende a asegurar la libertad.[33]

In genere, este principio (legalidad) se encuentra consagrado en los artículos 14 y 16 constitucionales, como bien lo explica Rodolfo Lara Ponte:

> El artículo 16, que junto al 14 constituye parte esencial en toda fundamentación impugnadora de actuaciones desajustadas a legalidad constitucional en el juicio de garantías, protege en su texto tanto la libertad del individuo como su seguridad, a partir de exigir la motivación y fundamento de los actos de autoridad que causen a los gobernados molestias en sus personas, papeles o posesiones.[34]

---

[33] Joaquín Salcedo Izu, *Sistemas de fuentes histórico-jurídicas españolas*. Pamplona, [s. e.], 1990, p. 294.

[34] R. Lara Ponte, *op. cit*., p. 159.

Así lo recoge una tesis de la octava época, cuyo rubro es "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE". El texto del sumario respectivo, nos permite una precisa aproximación conceptual:

> La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.[35]

De manera específica, se ha explicado en otra tesis (también de la octava época) en que consiste la "fundamentación":

> Si la resolución reclamada menciona los preceptos legales en los cuales se funda, no se puede decir que haya incurrido en la violación formal de falta de fundamentación, en términos del artículo 16 constitucional. Pues el determinar si la fundamentación es o no adecuada, es decir, si no hay inexacta aplicación de los preceptos señalados, u omisión de aplicación del precepto pertinente, son cuestiones de legalidad que no atañen a la violación constitucional formal directa que se mencionó.[36]

A su vez, la motivación: "consiste en el razonamiento, contenido en el texto del acto autoritario conforme al cual quien lo emite llega a la conclusión de que el caso concreto se ajusta a las prevenciones legales que le sirven de fundamento".[37]

---

[35] Tesis Seleccionada; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Octava Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIV-noviembre; Tesis: I. 4o. P. 56 P; Página: 450; CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO; Precedentes: Amparo en revisión 220/93. Enrique Crisóstomo Rosado y otro. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández.

[36] Rubro: "FUNDAMENTACIÓN. (ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL)". Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIV-julio, Página: 599; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 254/92. Armando Durán Sánchez. 1 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Nelson Loranca Ventura.

[37] Rubro "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE". Tesis Seleccionada; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Octava Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*;

Por consiguiente, las definiciones generalmente aceptadas, son en principio, del concepto "fundamentación", el que todo acto de autoridad debe contar con la expresión del precepto normativo aplicable. Asimismo, el concepto "motivación", se ha definido como el razonamiento lógico-jurídico, mediante el que se ha concluido la adecuación del acto de autoridad con el precepto invocado. A su vez, la jurisprudencia ha distinguido entre la violación formal y la violación material, de la garantía en comento. En efecto, "La falta de fundamentación y de motivación no tienen el mismo alcance que la indebida fundamentación o motivación".[38] Veamos como se ha interpretado la violación formal de garantías, en la siguiente tesis:

> Si una resolución de segunda instancia se apoya en motivos de hecho, es decir, no adecuados a precepto legal alguno, se incurre en una inadecuada motivación, por no darse, precisamente, la correlativa fundamentación, ya que ambas deben vincularse entre sí, de tal suerte, que no puede hablarse de una correcta aplicación de la primera, sin que exista correspondencia con la segunda; de donde resulta, que cuando el tribunal de apelación no cita las normas en que sustenta sus conclusiones, se conculcan garantías de legalidad tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues, una sentencia no es acto volitivo de quien lo pronuncia, sino función jurisdiccional que hace obligatoria la conversión de una disposición abstracta y general en una situación concreta y particular.[39]

Respecto de la violación material, ésta sucederá "si en el acto de molestia la autoridad pretendiendo cumplir con dichos requisitos, da una incorrec-

---

Parte: XIII-febrero; Página: 357; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes Amparo directo 926/93. Gigante, S. A. de C. V. y coags. 23 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.

[38] E. Polo Bernal, *op. cit.*, p. 175.

[39] Rubro:"VIOLACIÓN FORMAL DE GARANTÍAS. SE INCURRE EN ELLA CUANDO NO HAY CORRELACIÓN ENTRE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Tesis Seleccionada; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: IX-enero; Página: 277; SEGUNDO TRIBUNAL EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 502/91. María Dolores García García. 9 de octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías. Amparo directo 98/90. Víctor Hugo Castellón Torres. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Moreno Ballinas. Secretario: Juan Luis González Macías.

ta fundamentación o motivación desde el punto de vista material o de contenido, que se expresan en el mismo, en este caso el juzgador de amparo podrá o no otorgar la protección de la justicia federal, en cuanto al fondo".[40] En este sentido, veamos la siguiente tesis:

> Efectuado un cobro por la autoridad fiscal, con una cierta motivación y fundamentación, ya no le es dable mejorar esa fundamentación y motivación desde el punto de vista material, con motivo de la impugnación que el afectado haga de tal cobro, pues los juicios y medios de defensa no deben estimarse como oportunidades para que las autoridades enmienden yerros y corrijan, desde el punto de vista material o de su contenido, las resoluciones notificadas a los causantes, pues la fundamentación y motivación deben existir y darse ya correctamente al efectuarse el cobro, en términos del artículo 16 constitucional. Y en tales casos, los cobros deben ser anulados en forma lisa y llana, estableciéndose cosa juzgada al respecto, si no omiten dar fundamentación y motivación, pero las que dan no son correctas.[41]

In fine, Mancilla Ovando concluye:

> El acto de autoridad fundado y motivado permitirá a los tribunales de amparo, examinar la validez constitucional a la luz del principio de legalidad; si el fundamento argüido no resulta la disposición legal exactamente aplicable al caso, se declarará la inconstitucionalidad del acto de autoridad; ello se puede apreciar apropiadamente, en los motivos que sustentan los argumentos con los que se concluye que la hipótesis de la norma encuadra en la conducta material en la que se aplica. La falta de constitucionalidad del acto reclamado será absoluta e impedirá a ese poder público dictar un nuevo mandamiento en los mismos supuestos.[42]

---

[40] E. Polo Bernal, *op. cit.*, p. 176.

[41] Rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN MATERIAL. Tesis Seleccionada; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Séptima Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 71 Sexta Parte; Página: 29; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Precedentes: Amparo directo 484/74. Vicente Humberto Bortoni. 5 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

[42] Jorge Alberto Mancilla Ovando, *Las garantías individuales y su aplicación en el proceso penal*. 9a. ed. México, Porrúa, 2000, p. 72.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Legalidad; "Los actos de molestia in genere*"* [43]

1. EJECUCIÓN IRREPARABLE. ACTOS DE MOLESTIA.[44]

> De acuerdo con los criterios que definen los actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto, atendiendo fundamentalmente a la repercusión que puedan tener en la esfera de los derechos sustantivos del gobernado, esa característica no sólo puede concurrir en los actos de privación con efectos permanentes o definitivos, sino también en los de molestia temporal, porque con ellos pueden verse afectados ese tipo de derechos.

2. POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS, ACTOS DE MOLESTIA, INSUFICIENTES PARA PRIVAR DE VALOR A LOS HECHOS PROBADOS REFERENTES A LA EXISTENCIA DEL DELITO.[45]

> Si bien es cierto que en estricta puridad, nuestro Máximo Ordenamiento no establece en favor de los miembros de la Policía Federal de Caminos la facultad de perseguir los delitos, atento a que ello corresponde en exclusiva al Ministerio Público, como representante social que es, según disposición expresa del artículo 21 constitucional, también lo es que el proceder irregular de los elementos pertenecientes a la referida policía, al dañar bienes del acusado, con motivo de ciertas pesquisas, en todo caso motiva su reclamo en la vía legal pertinente, pero no puede privar de valor a los hechos constatados en forma plena o indubitable en contra del inculpado, que trascienden a la demostración de la materialidad del ilícito contra la salud que se le atri-

---

[43] Se inserta esta selección con el objeto de coadyuvar la interpretación del elenco de tesis aisladas y jurisprudenciales referentes a la fundamentación y motivación de los actos de autoridad.

[44] Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, diciembre de 1997 Tesis: III.3o.C.38 K Página: 663 Materia: Común; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 813/97. Socorro Palacios Camacho. 24 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía.

[45] Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, diciembre de 1999 Tesis: VIII.1o.28 P Página: 756 Materia: Penal Tesis aislada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 553/98. 10 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Roberto Rodríguez Soto.

buye. En efecto, hechos tales como manejar un vehículo que tiene un compartimiento especial en el que se transportaba marihuana, así como la calidad y existencia del estupefaciente no pueden desvanecerse o dejar de tener relevancia, puesto que si así se hiciera, se quebrantaría no sólo la legalidad, sino también la lógica, debido precisamente a que el daño causado en el mencionado compartimiento es inidóneo e insuficiente para desvirtuar los hechos incontrovertibles constitutivos del delito, además de que tales hechos, probados en sí mismos, esclarecieron la flagrancia en la comisión del delito, justificando por ello la detención del quejoso en los términos del párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución General de la República Mexicana.

3. ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES.[46]

De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.

---

[46] Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVII, abril de 2003 Tesis: I.3o.C.52 K Página: 1050 Materia: Común Tesis aislada. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 10303/2002. Pemex Exploración y Producción. 22 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.

Sinopsis:

a) Los actos de molestia son aquellos en los que la autoridad ha invadido la esfera privada del gobernado, ya sea en su persona, bienes, domicilio o papeles. Esta interferencia sólo es válida si se ha fundamentado en la ley.

b) Esto lo encontramos fundamentado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento".

b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Legalidad concretada en las debidas Fundamentación y Motivación

1. PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO.[47]

La Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida

[47] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, junio de 1997 Tesis: P. C/97 Página: 162 Materia: Constitucional. Precedentes: Amparo en revisión 943/93. María Cristina de la Garza González y otra. 8 de abril de 1997. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de junio en curso, aprobó, con el número C/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de junio de mil novecientos noventa y siete.

por el Congreso constitucionalmente facultado para ello y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (Apéndice 1988, Primera Parte, página 131, jurisprudencia 68). El acto de promulgación de la ley forma parte del proceso legislativo que culmina con su vigencia y, por ende, para el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación requiere que provenga de la autoridad competente para ordenar la publicación y circulación de la ley a fin de que pueda ser obedecida (fundamentación), ya que ha cumplido con las formalidades exigidas para ello (motivación); sin que sea necesario, para la satisfacción de tales requisitos, que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que faculten al Poder Ejecutivo Federal o Estatal para realizar tal acto, ni las razones que lo llevaron a concluir, tanto que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedición de la ley como que la misma no es violatoria de derechos fundamentales, ya que tal cita y razonamiento en el acto mismo de autoridad no se requiere tratándose de actos legislativos.

2. SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[48]

El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para

[48] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, septiembre de 1998 Tesis: P./J. 45/98 Página: 5 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 2/97. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 29 de junio de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de agosto en curso, aprobó, con el número 45/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra

resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho.

3. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.[49]

Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.

---

[49] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Tomo: XI, abril de 2000 Tesis: P./J. 50/2000 Página: 813 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Precedentes: Controversia constitucional 34/97. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 11 de enero de 2000. Unanimidad de diez votos. Impedimento legal: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Mara Gómez Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 50/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. NOTA: La ejecutoria relativa a la controversia constitucional 34/97, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 811.

4. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.[50]

> La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.

---

[50] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: P. CXVI/2000 Página: 143 Materia: Constitucional, Común Tesis aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 1936/95. Industrias Peredia, S. A. de C. V. 22 de mayo de 2000. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CXVI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

5. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LA DEMANDA PROMOVIDA POR UN PARTIDO POLÍTICO NO ESTÁ SUJETA A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[51]

> El documento mediante el cual un partido político promueve una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, no requiere que se funde y motive en virtud de que no es un acto unilateral fundado en ley que pudiera afectar derechos de los gobernados, toda vez que es indiscutible que a través de éste sólo se promueve una instancia y por lo tanto el referido documento no puede ni debe considerarse que esté sujeto a cumplir los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, los cuales sólo deben observarse en los casos de actos de molestia dirigidos a los gobernados.

6. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE INCURRE EN ELLA SI SE DICTA UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN, NO OBSTANTE QUE SE HABÍA CONCEDIDO EL AMPARO EN CONTRA DE OTRA ANTERIOR, SI ESE AMPARO LO FUE SÓLO EN CUANTO A FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.[52]

> Los incidentes de repetición del acto reclamado tienen por objeto hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reiteración, por

---

[51] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, abril de 2001 Tesis: P./J. 58/2001 Página: 745 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 18/2001 y sus acumuladas 19/2001 y 20/2001. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. 7 de abril de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de abril en curso, aprobó, con el número 58/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil uno. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 18/2001 Y SUS ACUMULADAS 19/2001 Y 20/2001. PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO. Véase página 638.

[52] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, mayo de 1997 Tesis: 1a./J. 17/97 Página: 203 Materia: Penal; Precedentes: Inconformidad 5/88. Modesto Chávez Flores. 22 de enero de 1990. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno. Inconformidad 16/95. Rolando Silverio Andrés. 17 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga

parte de la autoridad responsable, de los actos por los cuales la Justicia Federal otorgó la protección constitucional. Sin embargo, si en un juicio de amparo en que se reclamó una orden de aprehensión, se otorgó dicha protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, y la autoridad responsable dicta una nueva orden de aprehensión por considerar que se encontraban satisfechos los extremos del artículo 16 constitucional, no puede ser considerado como una repetición del acto reclamado, pues de acuerdo con los términos en que fue concedido el amparo al quejoso, la responsable quedó facultada para emitir una nueva orden de captura satisfaciendo los requisitos legales.

7. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INEXISTENCIA DEL. SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA.[53]

Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de los actos reclamados son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto o actos indebidamente fundados y motivados que se determinaron en el juicio eran indebidos, so pena que de no hacerlo, es decir, en el caso de insistir en la emisión de un acto con los mismos fundamentos y motivos, incurrirá en repetición del acto reclamado estando sujeta a las responsabilidades que de ello derivan en términos de lo dispuesto en los artículos 108 y 208 de la Ley de Amparo. Sin embargo, una sentencia de garantías en tal sentido, no impide que la responsable emita un nuevo acto si encuentra diversos fundamentos y motivos que lo justifiquen, aunque tal acto sea de la misma naturaleza y sentido y tenga la misma finalidad y consecuencias que el acto por el cual se otorgó el amparo, lo que no significa que la autoridad esté necesariamente constreñida a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, pues pueden no existir fundamentos y motivos que lo justifiquen, obligación que sólo se originaría a cargo de la autoridad cuando el acto reclamado.

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. Inconformidad 117/96. Rodolfo Pérez Vidal. 14 de agosto de 1996. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. Inconformidad 171/95. Gregorio Maximino Arteaga Plata. 9 de octubre de 1996. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Blanca Evelia Parra Meza. Inconformidad 234/96. J. Encarnación Ruiz Hernández. 15 de enero de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela.

[53] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: 1a./J. 30/98 Página: 337 Materia: Común.

8. ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE *NON REFORMATIO IN PEIUS* EN EL RECURSO DE REVISIÓN.[54]

La revisión en el juicio de amparo, en tanto recurso, se rige por principios o reglas, entre ellos el de *non reformatio in peius*, conforme al cual no está permitido a los Tribunales Colegiados de Circuito agravar la situación del quejoso cuando únicamente éste recurre la sentencia de amparo; lo antes afirmado se patentiza si se toma en cuenta que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en todo caso autoriza la *reformatio in beneficio*, al prever la figura jurídica de la suplencia tanto de los conceptos de violación como de los agravios, en los casos en que específicamente lo establece el artículo 76 bis del citado ordenamiento legal. Así, es claro que en los recursos de revisión derivados de juicios de amparo en materia penal, en que se concedió el amparo al quejoso porque la orden de aprehensión carece de fundamentación y motivación, y sólo recurre el propio quejoso, no es legalmente válido analizar los agravios expresados en cuanto al fondo del asunto, en virtud de que es incierta la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento que a la sentencia respectiva le dé la autoridad responsable, pues hacerlo implicaría el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente le perjudique, trastocando con ello el principio que se comenta. Además, de que precisamente por ese sentido concesorio, la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso recurrente.

9. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 131, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[55]

Aun cuando es cierto que ni el Congreso de la Unión ni el presidente de la República en el ejercicio de la función que a cada uno de ellos compete en

---

[54] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, noviembre de 2000 Tesis: 1a./J. 15/2000 Página: 264 Materia: Penal Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 71/98.

[55] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: 1a. LXVIII/2002 Página: 255 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 445/2001. Volkswagen de México, S. A. de C. V. 12 de junio de 2002. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.

el proceso de formación de las leyes y, específicamente, este último al emitir un decreto en términos del artículo 131, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen obligación de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan aquéllas, también lo es que esa función sólo requiere el respaldo de la Ley Suprema, pues basta que la autoridad correspondiente esté constitucionalmente facultada para expedirla. Lo anterior se corrobora con lo que establece la tesis de jurisprudencia número 146, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, página 149, con el rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA", en el sentido de que estas garantías, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).

10. SENTENCIA QUE AMPARA POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SUS EFECTOS CUANDO SE REFIERE A UNA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO, SON EMITIR UNA NUEVA.[56]

Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación del acto reclamado son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos el acto carente de fundamento y motivo, y a emitir un nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, cuando el acto reclamado consista en una resolución que se emita en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejarían sin resolver las referidas petición, instancia, recurso o juicio.

---

[56] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, febrero de 1998 Tesis: 2a. V/98 Página: 231 Materia: Común. Precedentes: Inconformidad 277/97. Jorge Ángel Mondragón Ordaz. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo X-agosto, Tercera Sala, tesis LIII/92, página 154, de rubro: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO".

11. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.[57]

> Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo.

---

[57] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, enero de 1998 Tesis: 2a./J. 70/97 Página: 400 Materia: Común; Precedentes: Inconformidad 49/97. Salvador Espinosa Vargas y otro. 5 de marzo de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Inconformidad 103/97. Herminia García Jiménez. 21 de mayo de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez. Inconformidad 1/97. Alfonso Bárcenas Hernández y otros. 13 de junio de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez López. Inconformidad 131/97. Erasmo Hernández Méndez. 20 de junio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Inconformidad 166/97. Aristeo Contreras Cardoso. 27 de agosto de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas. Tesis de jurisprudencia 70/97. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Genaro David Góngora Pimentel.

12. REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE INCURRE SI SE DICTA UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN, NO OBSTANTE QUE SE HABÍA CONCEDIDO EL AMPARO EN CONTRA DE OTRA ANTERIOR, SI LA CONCESIÓN FUE SÓLO EN CUANTO A FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.[58]

> Los incidentes de repetición del acto reclamado tienen por objeto hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reiteración, por parte de la autoridad responsable, de los actos por los cuales la Justicia Federal otorgó la protección constitucional. Sin embargo, si en un juicio de amparo en que se reclamó una orden de aprehensión, se otorgó dicha protección constitucional por falta de fundamentación y motivación, y la autoridad responsable dicta una nueva orden de aprehensión por considerar que se encontraban satisfechos los extremos del artículo 16 constitucional, no puede ser considerado como una repetición del acto reclamado, pues, de acuerdo con los términos en que fue concedido el amparo al quejoso, la responsable quedó facultada para emitir una nueva orden de captura satisfaciendo los requisitos legales.

13. INCONFORMIDAD. LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN DE UNA ORDEN DE DESALOJO EN FAVOR DEL OFENDIDO NO IMPLICA LA RESTITUCIÓN MATERIAL DEL TERRENO AL INDICIADO, CUANDO EN LA RESOLUCIÓN QUE LA CUMPLIMENTA DEJA SIN EFECTOS AQUÉLLA Y SE DICTA UNA NUEVA SIN ESAS DEFICIENCIAS Y EN EL MISMO SENTIDO.[59]

> Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por indebida fundamentación y motivación de la orden de desalojo

---

[58] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, diciembre de 1997 Tesis: 2a. CLII/97 Página: 374 Materia: Penal; Precedentes: Inconformidad 81/97. María Guadalupe Rodríguez Barragán. 18 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodríguez Franco. Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo V-mayo, tesis 1a./J. 17/97, página 203, de rubro: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE INCURRE EN ELLA SI SE DICTA UNA NUEVA ORDEN DE APREHENSIÓN, NO OBSTANTE QUE SE HABÍA CONCEDIDO EL AMPARO EN CONTRA DE OTRA ANTERIOR, SI ESE AMPARO LO FUE SÓLO EN CUANTO A FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN".

[59] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: 2a. LXXV/98 Página: 588 Materia: Penal;

solicitada por el ofendido en términos del artículo 43 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, dentro de una averiguación previa, son los de constreñir a la autoridad responsable a nulificar o dejar sin efectos dicha orden, para que con plenitud de jurisdicción emita un nuevo acto sin esas deficiencias, en respuesta a la solicitud formal efectuada por el ofendido, que no debe dejar de resolver. Consecuentemente si en la resolución en que se deja sin efectos el acto reclamado se emite otro que tiene la misma naturaleza, sentido y finalidad o consecuencia que aquel por el que se concedió el amparo, porque también resolvió favorablemente la solicitud de la parte ofendida respecto de la restitución en el goce de sus derechos, ello impide, por razón práctica, poner en posesión de los terrenos a los indiciados quejosos y reintegrar los bienes de los mismos al lugar de donde fueron sacados, pues éstos tienen expeditos sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma que procedan.

14. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.[60]

Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclama-

---

Precedentes; Inconformidad 340/97. Ilka Elisa Stosius Martínez y otros. 6 de marzo de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro Martínez.

[60] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, septiembre de 1998 Tesis: 2a./J. 67/98 Página: 358 Materia: Común Jurisprudencia. Precedentes: Inconformidad 277/97. Jorge Ángel Mondragón Ordaz. 17 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Inconformidad 255/97. Raúl Salinas de Gortari. 13 de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Fortunata Florentina Silva Vásquez. Inconformidad 62/97. Enrique Rivas. 27 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Inconformidad 92/98. Emiliano Zamora Cruz. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Inconformidad 122/98. Misael Mota Romero. 3 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. Tesis de jurisprudencia 67/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo X, agosto de 1992, página 154, tesis 3a. LIII/92, de rubro: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FAL-

da son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido.

15. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR OMISIÓN DE ESAS FORMALIDADES EN UNA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE COMUNICA AL PATRÓN SU OBLIGACIÓN DE REPARTIR UTILIDADES A LOS TRABAJADORES COMO CONSECUENCIA DE LOS DATOS POR ÉL ASENTADOS EN UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA ANUAL, SON LOS DE DEJAR INSUBSISTENTE EL ACTO RECLAMADO Y SUSTITUIRLO POR OTRO QUE SUBSANE ESAS DEFICIENCIAS.[61]

El artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución, 117 a 122 de la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la ley citada, consagran el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas conforme al porcentaje que fije la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, así como su derecho a formular objeciones a las declaraciones del impuesto sobre la renta que presenten los patrones por ser la renta gravable la base del monto de las utilidades a repartir y, además, establecen las normas pertinentes para garantizar la efectividad de esos derechos, como son el que se permita a los trabajadores tener acceso a la información relacionada con la declaración anual o complementaria anual del impuesto sobre la renta, la obligación de efectuar un reparto adicional cuando aumente la base gravable del impuesto, ya sea como resultado de una objeción formulada por los trabajadores, o bien, del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal o de alguna declaración complementaria presentada por el patrón, y la obligación a cargo de la autoridad de notificar a aquél y a los

---

TA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO”.

[61] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999 Tesis: 2a. LXX/99 Página: 504 Materia: Laboral Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 297/99. Cítricos de Huimanguillo, S. A. de C. V. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

trabajadores la procedencia del reparto adicional de utilidades en los supuestos referidos. La notificación antes aludida no constituye el ejercicio de una facultad discrecional que posea la autoridad fiscal, sino el cumplimiento a un imperativo legal a través del cual se garantiza el respeto y la efectividad del derecho de los trabajadores de participar en las utilidades de las empresas. Por tanto, los efectos de la concesión del amparo por falta de fundamentación y motivación de la resolución que comunica al patrón su obligación de repartir utilidades como consecuencia de los datos por él asentados en una declaración complementaria anual, son los de dejar sin efectos el acto reclamado y dictar otro purgando los vicios referidos, ya que así se restituye a la agraviada en el goce de la garantía violada y se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a saber, el de la existencia de la declaración complementaria que consigna una diferencia positiva entre las entradas y salidas, respecto de la cual la autoridad, por imperativo legal, debe hacer del conocimiento del patrón y de los trabajadores la procedencia del reparto a través de un acto debidamente fundado y motivado, a fin de asegurar el debido respeto al derecho de los trabajadores de participar en las utilidades de su patrón.

16. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.[62]

El requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, por regla general, no es exigible para las actas de visita domiciliaria, ya que dada su naturaleza y objeto, las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente; es decir, por ser actos de carácter instrumental que únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en todo caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora que llegara a dictar la autoridad legalmente competente, es evidente que por sí mismas no deparan perjuicio alguno al gobernado y, por tanto, no es necesario que el auditor precise los preceptos legales que estima resultan aplicables, ni que señale las causas especia-

[62] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, diciembre de 2000 Tesis: 2a. CLVI/2000 Página: 440 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Contradicción de tesis 49/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Sexto Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

les o razones particulares por las cuales considera que los hechos u omisiones observados encuadran en el supuesto que tales preceptos prevén, salvo que el acta de visita se elabore con motivo del ejercicio de las facultades decisorias que la ley le confiere al auditor.

17. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXISTENCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA REGIONAL DEL NORESTE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.[63]

Si en la sentencia dictada por la Sala Regional se establece que del análisis de los preceptos legales 2o., primer párrafo y 11 del Reglamento por el que se determinan las atribuciones de diversas dependencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a la letra dicen: "Artículo 2o. Las atribuciones que se asignan a las dependencias a que se refiere este reglamento, serán ejercidas por conducto de los titulares de las mismas...", "Artículo 11. Los delegados regionales, estatales y del Valle de México serán suplidos, durante sus ausencias, por el secretario del consejo consultivo de la delegación correspondiente", se desprende que si bien es cierto que los titulares de las dependencias podrán ejercer por sí las atribuciones que se le asignan, también lo es que los delegados regionales, estatales y del Valle de México, pueden ser suplidos en sus ausencias por el secretario del consejo de la delegación correspondiente, estando facultados dichos funcionarios para realizar, en tal situación, las atribuciones otorgadas a los titulares, por lo que si de la resolución impugnada se advierte que fue firmada por el secretario del Consejo Consultivo Delegacional en Nuevo León, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en ausencia del delegado regional, fundamentando su actuación en el artículo 11 del Reglamento por el que se determinan las atribuciones de diversas dependencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, se

[63] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, octubre de 1997 Tesis: IV.3o. J/29 Página: 637 Materia: Administrativa. Precedentes: Amparo directo 453/96. Excavaciones Técnicas, S. A. de C. V. 18 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Alvarado Estrada. Amparo directo 459/96. Elmira Cavazos Morales. 25 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Secretario: Carlos Hugo de León Rodríguez. Amparo directo 538/96. Maquinados Monterrey, S. A. 15 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo. Amparo directo 737/96. Inducción y Temple, S. A. de C. V. 1 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretaria: Angélica María Torres García. Amparo directo 801/96. Elmira Cavazos Morales. 29 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretaria: Angélica María Torres García.

considera que fue firmada por funcionario competente y que, por lo tanto, se encuentra debidamente fundada. Debe considerarse por el órgano revisor que la sentencia dictada por la Sala Regional cumple con la debida fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable, al emitirla, expresa los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a emitir su determinación y los preceptos en que apoya sus razonamientos emitiendo así una resolución precisa y clara. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

18. ORDEN DE APREHENSIÓN. FALTA ABSOLUTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.[64]

El artículo 16 constitucional no establece una forma determinada para el libramiento de la orden de aprehensión, o sea, es bastante para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que, al emitirla, el Juez razone los motivos por los cuales considera que la conducta del indiciado por la que se hubiere presentado denuncia, acusación o querella, se ajusta a la descripción típica, haciendo una relación y valoración de las pruebas que acrediten los elementos que la ley penal precise y los relativos a la probable responsabilidad, con lo que se satisfacen los requisitos del artículo 16 citado. Así, cabe distinguir entre ausencia y deficiencia de fundamentación y motivación, siendo la primera la absoluta falta de razonamientos jurídicos del juzgador, y la deficiencia cuando esos razonamientos no son del todo acabados o atendibles, y sólo en el primer supuesto se estará en presencia de una causa que impida al Juez de amparo entrar al estudio de los elementos de fondo de la orden de aprehensión reclamada, por desconocerse los fundamentos y motivos en que se apoyó la autoridad responsable para emitirla, en cuyo caso, es aplicable la jurisprudencia número 6/92, visible en la página 14 de la *Gaceta* 56, correspondiente al mes de agosto de 1992, del *Semanario Judicial de la Federación*, cuyo rubro dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN INFUNDADA E INMOTIVADA. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA". Mas cuando la motivación y fundamentación sea deficiente o indebida, nada impide al Juez de Distrito entrar al estudio de las violaciones de fondo del acto reclamado, lo que jurídicamente implica que se deben estudiar los aspectos relacionados

[64] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, octubre de 1997 Tesis: XVIII.1o.3 P Página: 773 Materia: Penal; Precedentes: Amparo en revisión 230/97. Emiliano Pineda Morales. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Roberto Cantú Barajas. Secretaria: Graciela Rocío Santes Magaña.

tanto del acreditamiento de los elementos del tipo como de la probable responsabilidad del indiciado, apreciando directamente, según su criterio, el valor de las pruebas aportadas. Pensar lo contrario es irrelevante para los intereses del quejoso, porque lo que sustancialmente le agravia no es la deficiente o indebida fundamentación y motivación del acto de autoridad, sino la posible privación incorrecta de su libertad personal, protegida por el artículo 16 constitucional, para la emisión de la orden de aprehensión, además de que esa protección federal sería también ineficaz porque, si se está ante la ausencia de comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, no podría entonces fundarse y motivarse debidamente la orden de aprehensión, pues los requisitos de fondo de la misma no estarían acreditados. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

19. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO.[65]

Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y

---

[65] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, agosto de 1997 Tesis: XIV.2o. J/12 Página: 538 Materia: Común. Precedentes: Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Henry de J. Ortegón Aguilar). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Armando Cortés Escalante. Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Rubén A. Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán Molina. Amparo en revisión 168/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de Quintana Roo (Quejoso: Julio C. Caballero Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo XV-febrero, tesis XX.302 K, página 123, de rubro: "ACTOS DE MERO TRÁMITE. AUN CUANDO NO SEAN RESOLUCIONES DEFINITIVAS LA RESPONSABLE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LOS".

motive la causa legal del procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones definitivas o que pongan fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple contestación recaída a cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal precepto constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Sinopsis:

a) La seguridad jurídica se funda en el principio de legalidad, a eso se concreta la garantía de fundamentación y motivación.

b) La fundamentación es el deber que tiene todo servidor público u órgano público de especificar los preceptos o normas jurídicas en que basa su actuación.

c) La motivación consiste en la coincidencia de los hechos o circunstancias en que ha incurrido el gobernado para que se le haga aplicable el precepto o preceptos correspondientes, por la autoridad.

d) Esta garantía se consagra en el primer párrafo del artículo 16 constitucional: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento".

IV. Irretroactividad de las leyes

Uno de los principales efectos del derecho asegurado mediante la legalidad, se puede expresar a través del principio referente a que la ley rige los hechos acaecidos durante su vigencia. El artículo 14 constitucional es bastante claro en este sentido: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". La problemática técnica aquí presentada se da cuando, tras un acto de derogación o abrogación se modifican o suprimen consecuencias jurídicas de un hecho dado bajo el imperio de la ley anterior. A contrario *sensu*, una ley se puede aplicar retroactivamente de manera benéfica, en este orden de ideas, basta considerar la casuística dada en el seno de la

materia penal.[66] Sin embargo, en el sentido perjudicial, la doctrina ha analizado la problemática de los derechos adquiridos y las expectativas (Merlin, Baudry-Lacantinerie, etcétera) o el carácter abstracto de la ley y su aplicación concreta (Bonnecase). Un ejemplo de la primera posición, es la siguiente ejecutoria rubricada como:

DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.[67]

> El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

Respecto a la segunda posición, ésta ha sido explicada en la siguiente ejecutoria de 1942, cuyo rubro se intitula RETROACTIVIDAD, TEORÍAS SOBRE LA.[68]

---

[66] RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO. "La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio". Quinta Época: Amparo en revisión 6417/41. "Cía. del Puente de Nuevo Laredo", S. A. 3 de marzo de 1942. Cinco votos. Amparo en revisión 854/41. Bremen, S. A. 23 de abril de 1942. Cinco votos. Amparo en revisión 9239/41. Ford Motor, Co. y coag., S. A. 31 de julio de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1232/52. Líneas Unidas del Norte, S. C. L. 11 de agosto de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 408/53. Maderería Mexicali, S. A. de C. V. 14 de octubre de 1953. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: En los Apéndices al *Semanario Judicial de la Federación* de 1917-1954, de 1917-1965 y de 1917-1975 la tesis aparece publicada con el rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY". En el tercer precedente el número del Tomo se publica como LXXII y en el quinto precedente el número del Tomo es LXXIII según los diversos Apéndices al *Semanario Judicial de la Federación*.

[67] Instancia: Pleno; Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 145-150 Primera Parte; Página: 53; Precedentes: Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coags. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de 21 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Volumen 78, pág. 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S. C. y coags. (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de 16 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.

[68] Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXXII; Página: 2108; Precedentes: Tomo LXXII, Pág. 2108. Amparo en Revisión 854/41, Sec. 2a. Bremen, S. A. 23 de abril de 1942. Unanimidad de cinco votos.

> Sobre la materia de retroactividad, existe diversidad de teorías, siendo las más frecuentes la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho, y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas, o situaciones abstractas, y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede efectuarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por una disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente, en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 de Apéndice el Tomo L del *Semanario Judicial de la Federación*, al establecer: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores y esta última circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos ya". "Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá en los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye".

Rojas Caballero admite la existencia de "un nuevo método para determinar si se está en el supuesto de una ley retroactiva"[69] especificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el caso de la tesis intitulada: RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.[70]

Se trata de una tesis de gran valía doctrinal que va más allá de las posiciones anteriores (Derechos adquiridos y expectativas; Situaciones abstractas y concretas). Veamos pues, el texto del sumario:

---

[69] Ariel Alberto Rojas Caballero, *op. cit.*, p. 262.

[70] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: P./J. 123/2001 Página: 16 Materia: Constitucional Jurisprudencia; Precedentes: Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Po-

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o con-

---

nente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno.

> tinuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

Estos criterios se encuentran apuntalados, en principio, por una tesis con ya largos antecedentes cuyo rubro se intitula: GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE.[71]

Cuyo contenido, como puede verse, hace referencia a los alcances de los sujetos pasivos de tal garantía:

> Conforme al criterio actual adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la interpretación del artículo 14 de la Constitución Política de

---

[71] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVIII, septiembre de 2003 Tesis: 1a./J. 50/2003 Página: 126 Materia: Constitucional Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 1362/28. Robles Carlos. 17 de mayo de 1929. Cinco votos. Ponente: Alberto Vázquez del Mercado. Secretario: H. Guerra. Amparo en revisión 270/2000. The American British Cowdray Medical Center, I. A. P. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy. Amparo en revisión 1933/99. Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables, I. A. P. y coags. 9 de agosto de 2000. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. Amparo en revisión 1797/99. Educadores Integrales, I. A. P. y coags. 31 de enero de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Ariel Oliva Pérez. Amparo en revisión 914/2002. Caja Independencia, S. C. L., Sociedad Cooperativa de Consumo de Ahorro y Préstamo, de R. L. de C. V. 21 de mayo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Tesis de jurisprudencia 50/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de tres de septiembre de dos mil tres.

> los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía de irretroactividad, ésta protege al gobernado tanto de la propia ley, desde el inicio de su vigencia, como de su aplicación, al constreñir al órgano legislativo a no expedir leyes que en sí mismas resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente, pues la intención del Constituyente en dicho precepto, fue prever de manera absoluta, que a ninguna ley se le diera efecto retroactivo, sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la ley por las autoridades, o a si la ley por sí misma lo produce desde el momento de su promulgación, pues resultaría incongruente admitir que el amparo proceda contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que sus preceptos, automáticamente vuelven sobre el pasado, lesionando derechos adquiridos.

Finalmente, hemos seleccionado una tesis aislada cuyo contenido doctrinal también hace referencia a la naturaleza del acto de autoridad retroactivo, distinguiendo entre una ley retroactiva y su aplicación:[72]

> El análisis de retroactividad de las leyes conlleva el estudio de los efectos que una precisa hipótesis jurídica tiene sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificándose si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza el órgano de control de constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo las mencionadas situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, constitucional, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. A diferencia de lo anterior, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley no implica el estudio de las consecuencias que ésta, por sí sola, tiene sobre lo sucedido en el pasado, sino verificar si la aplicación concreta que de una hipótesis normativa realiza una autoridad, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional, se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición aplicada lo que de no ocurrir, implicaría una aplicación incorrecta de la ley, mas no la retroactividad de ésta.

---

[72] RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA; Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, agosto de 2000 Tesis: 2a. CXI/2000 Página: 376 Materia: Constitucional; Tesis aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 479/2000. Amelia Oceguera Vázquez. 19 de mayo del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de irretroactividad de la ley

1. RETROACTIVIDAD DE LA LEY SUSTANTIVA PENAL. REFORMAS LEGALES SUPERVENIENTES EN EL PROCEDIMIENTO. ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE ÉSTAS CUANDO SE PRODUCE EN BENEFICIO DEL INTERESADO Y SIN AFECTAR DERECHO DE TERCERO.[73]

> De conformidad con lo preceptuado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario *sensu*, es correcto aplicar retroactivamente una ley cuando este proceder beneficia al interesado, siempre y cuando no pueda afectar el interés jurídico de tercero. Por ende, debe considerarse que en los casos en que un determinado acto o hecho se haya producido durante la vigencia de una determinada ley y que la legalidad de éste o de sus efectos deba ser determinada cuando son otras diversas las normas legales que le son aplicables, el juzgador debe aplicar las normas que resulten ser más favorables al interesado, siempre y cuando se dé satisfacción a la condición mencionada. En consecuencia, teniendo en consideración: 1o. Que la observancia de las reformas legales debe ser inmediata en cualquier instancia, aun en el juicio de garantías, dada la naturaleza misma que les corresponde, pues no puede dudarse que la sociedad está interesada en que los actos de aplicación de la ley se refieran a las normas en vigor y no a aquellas que ya no tienen fuerza obligatoria, a pesar de que bajo su vigencia se haya producido el acto o hecho jurídico que es materia del juicio, y, además, porque por encima de la determinación de abrogar una ley o de derogar o modificar determinados preceptos, está el interés público en que dicha ley o normas dejen de ser aplicadas; 2o. Que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la sentencia constitucional debe referirse concretamente a los fundamentos legales que determinan el sentido de la resolución, lo que se traduce en la

[73] Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte TCC; Tesis: 704; Página: 448; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Octava Época: Amparo en revisión 136/93. Luis Fernando Leal Beltrán. 8 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 323/93. José Luis Cuevas Martínez. 10 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 351/93. Felipe Gómez Rodríguez. 17 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 345/93. Rubén Peña Tapia. 1 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo directo 380/93. Jesús Morales Ortiz. 1 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis IX.2o.J/13, *Gaceta*, número 74, pág. 75; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIII-febrero, pág. 234.Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo I-mayo de 1995, pág. 124, tesis por contradicción 1a./J.7/95.

expresión clara y específica de las normas legales que son aplicables al caso; y, por último, 3o. Que resolver en el juicio de amparo, que es constitucional un determinado acto de autoridad, porque satisface las exigencias que establecen los preceptos legales que lo regían en la fecha en que se produjo, sin analizar el contenido de las nuevas normas legales que le son exactamente aplicables, se traduciría en: a) No respetar la garantía consagrada por el artículo 14, primer párrafo, de nuestra Constitución Política, al disponer, a contrario *sensu*, que es correcto dar efecto retroactivo a las leyes cuando esto beneficia al interesado y no perjudica derecho de tercero; b) Aplicar una ley que no es vigente y, por ende, juzgar un acto de autoridad con base en normas que no le son aplicables; c) Desatender la voluntad del legislador, y, por tanto, la voluntad democrática del pueblo expresada a través de los órganos competentes, que determinó abrogar la ley o derogar o modificar los preceptos legales correspondientes, evidentemente por considerar que son las nuevas normas legales, y no las de anterior vigencia, las que deben de regir al acto reclamado; y d) Afectación ilegal directa al quejoso, pues se declararía que es constitucional el acto de autoridad que le afecta, a pesar de que en la fecha en que se dicta esa determinación es ostensible que las normas que determinan la legalidad de dicho acto son otras diversas cuyo contenido puede, acaso, ser exactamente opuesto al que se fija en las normas aplicadas. Debe concluirse que, en el juicio de amparo, cuando dentro del período que se comprende de la fecha en que se produce el acto reclamado a aquella que corresponde el día en que se resuelve definitivamente sobre su legalidad, entran en vigor reformas legales que benefician al quejoso al modificar su situación jurídica frente al acto que impugna, la constitucionalidad de éste debe ser analizada a la luz de las disposiciones que más beneficios generan o que menos perjuicios producen al que se dice agraviado, en la medida en que tal actuación se lleve a cabo sin afectar derechos de tercero.

2. ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL, DADO QUE LAS EXENCIONES QUE ESTABLECE NO CONSTITUYEN UN FUERO.[74]

En términos del artículo 13 de la Constitución General de la República están prohibidos los fueros, entendidos, entre otras connotaciones, como el

[74] Octava Época; Instancia: Pleno; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo I, Parte SCJN; Tesis: 12; Página:16; Octava Época: Amparo en revisión 2821/89. Aulecar, S. A. de C. V. 2 de julio de 1991. Se resolvió, en lo que es materia de la revisión, revocar la sentencia recurrida y con la salvedad a que se refiere el considerando segundo del proyecto, negar el amparo por mayoría de quince votos en relación con los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; y por mayoría de catorce votos en

privilegio o prerrogativa que se otorgue a uno o varios individuos atendiendo a su persona misma, con lo cual se establecería un privilegio de naturaleza subjetiva. Tal prohibición constitucional no se ve quebrantada por el artículo 6o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, ya que las exenciones que prevé en favor de diversos sujetos no se otorgan considerando factores subjetivos, sino en atención a las peculiaridades de las diversas categorías de causantes que en él se mencionan y por las que ameritan un tratamiento fiscal distinto; por ello la jurisprudencia de este Alto Tribunal las ha estimado exenciones objetivas.

3. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. LA LEY FEDERAL DE DERECHOS NO ES RETROACTIVA PUES NI SE APLICA A FECHAS ANTERIORES A SU VIGENCIA NI SE PUEDE ACEPTAR QUE LA CONCESIÓN FUERA SIEMPRE GRATUITA.[75]

La afirmación de que la Ley Federal de Derechos, en lo que se refiere a los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, es retroactiva porque cam-

---

relación con los artículos 7o. y tercero transitorio de la ley reclamada. Amparo en revisión 5296/90. Desarrollo Urbano Integral, S. A. de C. V. 2 de julio de 1991. Puesto a votación el proyecto se resolvió, en la materia de la revisión, revocar la resolución que se revisa y negar el amparo por mayoría de catorce votos en relación con los artículos 2o., 3o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas, y 9o. del Reglamento de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; y por mayoría de trece votos en relación con los artículos 9o. y tercero transitorio de la ley reclamada. Amparo en revisión 410/91. BMG/Ariola Internacional, S. de R. L. de C. V. 2 de julio de 1991. Por unanimidad de diecisiete votos se resolvió confirmar la resolución que se revisa y sobreseer en el juicio respecto de las autoridades y por los actos precisados en el considerando primero del proyecto, y negar el amparo por mayoría de catorce votos en relación con los artículos 2o., 3o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; y por mayoría de trece votos en relación con los artículos 9o. y tercero transitorio. Amparo en revisión 4759/90. Pfizer, S. A. de C. V. 26 de septiembre de 1991. Por mayoría de quince votos se resolvió modificar la resolución que se revisa, sobreseer en el juicio, y negar el amparo en relación con los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., y tercero transitorio de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; y por mayoría de catorce votos negar el amparo en relación con el artículo 9o. Amparo en revisión 4961/90. Arrendadora Hewlett Packard, S. A. de C. V. 26 de septiembre de 1991. Por mayoría de quince votos se resolvió modificar la resolución que se revisa, sobreseer en el juicio, y negar el amparo en relación con los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., y tercero transitorio de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas; y por mayoría de catorce votos negar el amparo en relación con el artículo 9o. NOTA: Tesis P./J.10/92, *Gaceta*, número 51, pág. 9; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IX-marzo, pág. 11.

[75] Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 205-216 Primera Parte; Página: 48; Amparo en revisión 8150/84. Televisión González Camarena y coagraviados. 14 de octubre de 1986. Unanimidad de dieciocho votos de los

bia los términos y contenido del título de concesión, modificando de gratuito a oneroso el uso del espacio aéreo y atacando así los derechos adquiridos por los concesionarios, es inaceptable, en primer término, porque el tributo de que se trata no se causa por el uso del espectro radioeléctrico anterior a su vigencia y, en segundo, porque en los títulos respectivos jamás se pactó la gratuidad de dicho uso por todo el tiempo de la concesión.

4. SEGURO SOCIAL. DETERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UN CRÉDITO A UN PATRÓN. CASO EN QUE NO ES RETROACTIVA.[76]

Este tribunal considera que los actos administrativos de los delegados regionales, mediante los cuales determinan un crédito a un patrón, fijan las bases para su liquidación y expiden las cédulas correspondientes para dárselo a conocer y requerirlo de pago, en uso de las facultades que les confiere el artículo 4o. del reglamento por el que se determinan las atribuciones de las

---

Ministros: De Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Gutiérrez de Velasco, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Ortiz Santos, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y Presidente Del Río Rodríguez. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Séptima Época, Primera Parte: Volúmenes 205-216, página 47. Amparo en revisión 2066/84. Broadcasting, Baja California, S. A. y otros. 20 de abril de 1986. Unanimidad de dieciocho votos de los Ministros: De Silva Nava, López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela Güitrón, Díaz Infante, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Martínez, Moreno Flores, Schmill Ordóñez, Díaz Romero, Olivera Toro y Presidente Del Río Rodríguez. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Rubén Pedrero Rodríguez. Engrose: Ulises Schmill Ordóñez. NOTA: Este criterio ha integrado la jurisprudencia P./J.15/88, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, página 147.

[76] Séptima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 193-198 Sexta Parte; Página: 233; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 193-198, página 157. Amparo directo 23/85. Transformadores Monterrey, S. A. 15 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: María Eliza Zúñiga Alcalá. Volúmenes 193-198, página 157. Amparo directo 40/85. Pigmentos y Oxidos, S. A. 29 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Carlos César López Gastélum. Volúmenes 193-198, página 157. Amparo directo 5/85. Servi-Despensa, S. A. 19 de abril de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Felipe García Cárdenas. Secretaria: Mercedes Magaña Valencia. Volúmenes 193-198, página 157. Amparo directo 140/85. Mantenimiento y Acabados Industriales, S. A. 19 de abril de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando A. Yates Valdez. Secretario: Carlos César López Gastélum. Volúmenes 193-198, Sexta Parte, página 157. Amparo directo 94/85. Casa Chapa, S. A. 26 de abril de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: María Eliza Zúñiga Alcalá.

diversas dependencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el quince de abril de mil novecientos ochenta y tres, no implica la aplicación retroactiva, en su perjuicio, de esta norma reglamentaria, aunque tales créditos se hayan generado con anterioridad a la fecha en que entró en vigor, por las razones siguientes. La retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado para cambiar, modificar o suprimir los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas particulares o concretas, según la teoría que sobre esta cuestión se adopte, y en nuestro sistema jurídico, el artículo 14 constitucional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los gobernados. En el reglamento invocado se precisan las atribuciones, entre otras dependencias, de las delegaciones estatales, regionales y del Valle de México, establecidas en el artículo 253 de la Ley del Seguro Social; el artículo 4o., fracción III, del primero de estos ordenamientos, dispone que estará a su cargo "determinar los créditos a favor del instituto y las bases para su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, mediante la emisión y firma de las cédulas de liquidación correspondientes o por cualquier otro medio acorde a las leyes y reglamentos aplicables". El ejercicio de estas facultades no puede traducirse en la aplicación retroactiva del ordenamiento invocado aunque se refiera a adeudos surgidos con anterioridad, si se lleva a cabo durante su vigencia, pues con ello no se afecta ningún derecho adquirido o situación jurídica concreta que se encuentre en la esfera patrimonial del deudor, ya que no puede estimarse que la determinación de mérito se tenga que hacer por el órgano del instituto competente en la fecha que se generó el crédito, porque las atribuciones conferidas a una autoridad para el cumplimiento de su función no se traducen para los particulares en un derecho adquirido que pueda incorporarse a su esfera jurídica-patrimonial, en razón de que la distribución de funciones en los órganos de la administración pública es una cuestión que sólo a ésta concierne y que puede ser modificada por la ley, de acuerdo con las necesidades del servicio, sin que con ello se afecte en nada a los particulares, puesto que la garantía individual consignada en el artículo 16 constitucional, consistente en que sólo se les puede afectar por una autoridad competente, queda satisfecha con el hecho de que dicha competencia se tenga en el momento de la afectación, aunque no se haya tenido con anterioridad.

5. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.[77]

El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho

[77] Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 145-150 Primera Parte; Página: 53; Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Orte-

no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

6. PROCEDIMIENTO, IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE. REGLAS RELATIVAS.[78]

Las disposiciones legislativas comprendidas bajo la denominación general de leyes de procedimiento, se refieren, principalmente a las que deben ser observadas por aquéllas que, mediante el concurso del Juez competente, tratan de obtener la sanción judicial de sus propios derechos, respecto de las personas obligadas, con arreglo a la ley, o de hacer decretar, de igual modo, los medios legales para poder sujetar a las mismas, a la observancia de sus obligaciones jurídicas; pero acontece que las leyes de procedimiento no contienen disposiciones que afecten únicamente a la forma de hacer valer por la parte, los derechos nacidos de determinada convención, sino que comprenden también disposiciones de la ley sustantiva; de donde se sigue que las leyes del procedimiento, aunque de orden público, no deben aplicarse retroactivamente, cuando lesionan derechos adquiridos, ya que el propósito de la no retroactividad de la ley, estriba precisamente en el respeto a esos derechos adquiridos.

7. IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.[79]

Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una

---

ga y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S. C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear.

[78] Séptima Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 205-216 Primera Parte; Página: 99; Amparo en revisión 936/84. Pom, S. A. 20 de mayo de 1986. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

[79] Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia; 9a. Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, noviembre de 1997 Tesis: P./J. 87/97 Página: 7 Materia: Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 2013/88. Rolando Bosquez Jasso. 16 de agosto de 1989. Mayoría de diecinueve votos. Ponente: Ulises

consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede conside-

---

Schmill Ordóñez. Secretario: Juan Manuel Martínez Martínez. Amparo en revisión 278/95. Amada Alvarado González y otros. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. Amparo en revisión 337/95. María del Socorro Ceseñas Chapa y otros. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Amparo en revisión 211/96. Microelectrónica, S. A. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. Amparo en revisión 1219/96. Rosa María Gutiérrez Pando. 14 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de noviembre en curso, aprobó, con el número 87/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

rarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

8. ARRENDAMIENTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICÓ EL DIVERSO POR EL QUE SE REFORMÓ EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD (*DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1993).[80]

Conforme a la citada norma transitoria, las disposiciones del decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el 21 de julio de 1993, por el que se reformaron diversos preceptos del Código Civil para el Distrito Federal, entre otros, el 2478, se aplicarán a partir del 19 de octubre del mismo año, respecto de los inmuebles que se encuentren arrendados en tal fecha, para un uso distinto del habitacional. Ahora bien, el hecho de que la reforma del último numeral citado, mediante la cual se modifica el plazo referente al aviso para dar por concluidos los contratos de arrendamiento celebrados por tiempo indeterminado sobre predios urbanos, sea aplicable, por efectos de lo dispuesto en la norma de tránsito en comento, en relación con los contratos celebrados, inclusive, con anterioridad a su vigencia, no implica una violación a la garantía de irretroactividad prevista en el párrafo primero del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos, como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que el plazo de mérito no constituye un derecho que las partes, en un contrato de arrendamiento, hubieren adquirido por efectos de su celebración, pues en tal momento sólo constituía una mera expectativa de derecho, ya que su actualización estaba condicionada a un requisito determinado: la expresión de cualquiera de las partes contratantes de darlo por terminado; por lo que la disposición transitoria no afecta derechos ad-

---

[80] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, noviembre de 1997 Tesis: P. CLIX/97 Página: 72 Materia: Civil, Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 1219/96. Rosa María Gutiérrez Pando. 14 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el tres de noviembre en curso, aprobó, con el número CLIX/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

quiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, bajo el criterio de la teoría de los componentes de la norma, si del contenido del precepto transitorio referido, deriva que el nuevo plazo establecido en la ley regirá únicamente para aquellos casos en los que con posterioridad a su entrada en vigor tenga lugar el supuesto previsto en el artículo 2478, la expresión de la voluntad de alguna de las partes de dar por concluido el contrato, y su consecuencia jurídica, la terminación del contrato, se colige que ambos componentes de la norma jurídica acontecerán bajo la vigencia del precepto reformado y, por tanto, deben someterse a éste, sin que ello implique retroactividad. En apoyo a lo anterior, destaca que el plazo previsto por el mencionado artículo 2478 no constituye un elemento de existencia o de validez del contrato de arrendamiento, pues él radica en una cuestión de indeterminación temporal regulada, ante la ausencia de la voluntad de las partes, por una disposición legal, por lo que la norma que debe regir tal situación es la vigente al momento en que se exprese la voluntad de alguna de las partes contratantes de dar por concluido el contrato y se genere su consecuencia jurídica, la terminación respectiva.

9. BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO EN EL ESTADO DE TABASCO A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[81]

Aun cuando en la mencionada ley se establecen modalidades en el funcionamiento de los establecimientos para comercializar bebidas alcohólicas, diversas a las previstas en la legislación abrogada, como en lo tocante a la

[81] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, septiembre de 1997 Tesis: P./J. 63/97 Página: 61 Materia: Constitucional, Administrativa; Precedentes: Amparo en revisión 2667/96. Controladora de Negocios Comerciales, S. A. de C. V. y otros. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 196/97. Controladora de Negocios Comerciales, S. A. de C. V. y otros. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Amparo en revisión 2784/96. Victoria Ulin Domínguez. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. Amparo en revisión 2802/96. Lilí Estrada León y otros. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 2853/96. Comercializadora Usumacinta, S. A. de C. V. y otros. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de agosto en curso, aprobó, con el número 63/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete.

temperatura en que debe venderse la cerveza en envase cerrado al público, ello no vulnera la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de los que, a su entrada en vigor, estaban autorizados para realizar las actividades relativas, toda vez que del texto de la nueva legislación se desprende que las modalidades que establece han de regir hacia el futuro, a partir de su vigencia, sin que exista disposición que les otorgue eficacia rectora respecto de hechos y situaciones pasadas, por lo que no destruyen los efectos ya acaecidos conforme a la ley anterior; además, la referida ley no priva a los licenciatarios de un derecho adquirido, dado que los que les otorgaba el ordenamiento legal anterior no eran de naturaleza intocable o ilimitada, pues corresponde al Poder Legislativo establecer las disposiciones que, desde el punto de vista administrativo, son necesarias para regular las actividades de los particulares, sin que exista prohibición para que modifique o reforme las bases correspondientes, siempre y cuando respete los mandamientos constitucionales.

10. MONEDA EXTRANJERA. LOS ARTÍCULOS 8o., 9o. Y 4o. TRANSITORIO DE LA LEY MONETARIA, QUE REGULAN LA FORMA EN QUE SE DEBEN LIQUIDAR EN EL TERRITORIO NACIONAL LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.[82]

Los mencionados artículos de la Ley Monetaria regulan la forma y términos en que debe cumplirse una obligación pecuniaria dentro de la República, aun cuando la obligación de pago se haya contraído fuera de ella, pues basta que deba cumplirse en territorio nacional para que rija la regla prevista en la ley, relativa a que la moneda extranjera se convierta en su equivalente a moneda nacional conforme al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que debe hacerse el pago. Lo anterior implica que dicha regla rige el cumplimiento de la obligación pero no su origen, ni tampoco cambia la situación jurídica que dio nacimiento a la obligación, ya que el monto a pagar en moneda extran-

[82] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, julio de 1997 Tesis: P. CXIV/97 Página: 16 Materia: Constitucional, Civil; Precedentes: Amparo en revisión 2265/96. Moisés Mitrani Gamberg. 26 de mayo de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Neófito López Ramos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número CXIV/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de mil novecientos noventa y siete.

jera sigue siendo el mismo y, solamente para efectos de cumplir, debe hacerse la conversión a moneda nacional. Así, las precitadas normas, que rigen las obligaciones contraídas con posterioridad a su vigencia por así derivarse de la exposición de motivos respectiva, no restringen, modifican o cambian el acto o el hecho jurídico que hubiera generado la obligación en moneda extranjera, sino que imponen, como regla general, la obligación de que los compromisos que se contraigan a partir de su vigencia queden estipulados en pesos mexicanos, que constituye la unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos y la moneda circulante; pero cuando las condiciones impuestas determinan la estipulación de pago en moneda extranjera, dado que ésta no tiene curso legal en la República, es necesario que se dé la conversión de esa moneda a la nacional, teniendo en cuenta el tipo de cambio del lugar y fecha en que la obligación se cumple. Todo ello conduce a concluir que la ley no rige hacia el pasado, pues no afecta la situación existente que generó la obligación del deudor y tampoco altera la esencia de la obligación contraída, porque ésta consiste en hacer el pago en moneda extranjera y la ley solamente está rigiendo hacia el futuro, en tanto que obliga a realizar el pago de moneda extranjera dentro de la República, respecto de aquellos contratos o actos jurídicos existentes con posterioridad a su vigencia; mientras que la obligación de pago también se rige por una ley que ya se hallaba en vigor al momento en que se contrajo la obligación, y su aplicación concreta se surte hacia el futuro, pues será al momento de hacer el pago cuando surja la necesidad de convertir la moneda extranjera a moneda nacional.

11. CONTRIBUCIONES. LOS ARTÍCULOS 17-A Y 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIÓN II, DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989, QUE DISPONEN LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LAS EXIGIBLES CON ANTERIORIDAD A 1990, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[83]

Los preceptos legales citados establecen la obligación de actualizar, a partir de 1990, el monto de las contribuciones que se tornaron exigibles antes de

[83] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, marzo de 1997 Tesis: P. XXXVIII/97; Página: 135 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo directo en revisión 1428/95. México Internacional Kikaku Atracción, S. A. de C. V. 9 de enero de 1997. Unanimidad de once votos. Po-

ese año, aplicando el factor de actualización resultante de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente al en que se efectúe el pago entre el correspondiente al mes de diciembre de 1989. Dichos preceptos no violan la garantía de irretroactividad consagrada por el artículo 14 constitucional, pues regulan un supuesto jurídico presente desde su vigencia, a saber, la existencia de contribuciones no cubiertas y exigibles con anterioridad a mil novecientos noventa, y las consecuencias de derecho de su realización a partir de tal vigencia, pues la actualización del monto de las contribuciones referidas opera a partir de mil novecientos noventa. Asimismo, si bien las contribuciones se tornaron exigibles antes de 1990 al darse las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales anteriores a dicho año, reguladoras tanto del nacimiento y determinación de la obligación fiscal como de las fechas y plazos para su pago, la existencia de la contribución exigible y no cubierta es una situación que se prolonga en el tiempo hasta que se efectúe el pago y, por tanto, no es válido pretender que la situación de referencia quede regulada por las disposiciones fiscales vigentes cuando nació la obligación fiscal, se determinó y se dejó de cubrir, ya que las consecuencias de dicha situación no quedan consumadas al omitirse el pago de la contribución dentro de los plazos legales sino que se prolongan en el tiempo, ya que por el transcurso de éste y con motivo de los cambios de precios en el país, la pérdida del valor de la moneda y, por ende, del monto de la contribución, se sigue generando, y por ello tales consecuencias deben regirse por las normas vigentes mientras se van produciendo. Como la actualización opera a partir de la vigencia de las normas y hacia el futuro, no afecta situaciones ocurridas con anterioridad a esa vigencia, como tampoco afecta a la obligación fiscal tal como se generó pues el que la contribución actualizada conserve la naturaleza jurídica que tenía antes de la actualización, sólo implica que ella sigue siendo contribución, ya que habiéndose generado, determinado y tornado exigible conforme a las disposiciones fiscales anteriores a 1990, la actualización opera a partir de este año y hacia el futuro como una consecuencia de la existencia del crédito exigible.

---

nente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el cuatro de marzo en curso, aprobó, con el número XXXVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y siete.

12. VALOR AGREGADO. EL INCREMENTO A LA TASA DE ESTE IMPUESTO, ESTABLECIDO MEDIANTE LEY PUBLICADA EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE 27 DE MARZO DE 1995, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD EN PERJUICIO DE LOS MILITARES RETIRADOS.[84]

Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 3o., primer párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están obligados a pagar el impuesto las personas físicas y morales que, en territorio nacional, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios, quienes lo trasladarán al consumidor final, quedando las personas que conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, obligadas a aceptar la traslación. Por su parte, el artículo 30 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas dispone que "los haberes de retiro, compensaciones y pensiones quedan exentos de todo impuesto", lo que implica que a los militares retirados no puede gravárseles con tributo alguno que recaiga en los ingresos derivados de haberes de retiro, compensaciones y pensiones, mas a la luz del dispositivo legal citado no adquirieron dichos militares el derecho a que no se les traslade o cobre impuesto alguno. En consecuencia, el incremento de la tasa del impuesto al valor agregado del 10 % al 15 %, no viola la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio de los militares retirados, que como consumidores finales deben aceptar la traslación del impuesto, pues éste grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios, mas no los ingresos derivados de haberes de retiro, compensaciones y pensiones.

---

[84] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, febrero de 1997 Tesis: P. XXIX/97 Página: 190 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 363/96. Daniel Cervantes Flores. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXIX/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete.

13. JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[85]

> El párrafo primero del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: "Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización previsto en el ordenamiento abrogado, podrán jubilarse a los treinta años de servicio y veintiocho en el caso de la mujer, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto, conforme a la siguiente tabla"; en tanto que, el párrafo segundo precisa la indicada "tabla". Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal dé lugar a que quienes se jubilen a partir de su vigencia obtengan menos beneficios que quienes lo hicieron con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal que antes se consideraba, y por la modificación de los porcentajes para el cálculo de la pensión, no implica que se viole la garantía de irretroactividad

---

[85] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, agosto de 1998 Tesis: P./J. 42/98 Página: 10 Materia: Constitucional, Laboral Jurisprudencia; Precedentes: Amparo en revisión 278/95. Amada Alvarado González y coags. 29 de agosto de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. Amparo en revisión 337/95. María del Socorro Ceseñas Chapa y coags. 27 de febrero de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Amparo en revisión 483/97. María Luisa Quintanilla Bernardina. 23 de septiembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Clementina Flores Suárez. Amparo en revisión 202/96. María de los Ángeles Cecilia Morales Álvarez y coags. 31 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas. Amparo en revisión 336/95. Marco Antonio Rentería Cantú y coags. 31 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el seis de agosto en curso, aprobó, con el número 42/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho. Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, tesis P./J. 87/97, página 7, de rubro: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA".

de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por jubilación no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, por lo que mientras ese requisito no se cumpla, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a la jubilación es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento reciban un trato menos benéfico de los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por jubilación, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales de tal prerrogativa laboral, que una vez actualizados generan el derecho a la jubilación; además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que mediante ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron.

14. INFONAVIT. EL ARTÍCULO 29, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD.[86]

La garantía prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la irretroactividad de los efectos de una ley, garantía que se ha entendido en el sentido de que una ley

[86] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Tomo: VIII, agosto de 1998 Tesis: P. LVII/98 Página: 70 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 3675/97. Experiencia Profesional del Norte, S. A. de C. V. 26 de marzo de 1998. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Grajales. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el nueve de julio en curso, aprobó, con el número LVII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho.

no puede establecer normas retroactivas, ni aplicarse a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su vigencia, o bien, afectar derechos adquiridos. Sin embargo, esta garantía no resulta violada por el artículo 29, fracciones II y III, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues si bien es cierto que establecen el incremento de la contribución relativa, es inexacto que el particular tenga el derecho adquirido a pagar para siempre sobre una misma base o tasa, puesto que la fijación de las aportaciones que en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional, constituye una obligación y no un derecho del contribuyente a pagar para siempre la misma cantidad. Lo anterior, aunado a que el precepto en cita, vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, rige desde esa fecha y, por tanto, acorde con sus lineamientos, deberán realizarse de ahí en adelante los pagos correspondientes a la ley nueva, sin que ninguna disposición obligue a cubrir aportaciones anteriores o vencidas, al tenor de las nuevas disposiciones.

15. ACTIVO. EL DECRETO DE REFORMA DE LA LEY RELATIVA A ESE IMPUESTO, PUBLICADO EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[87]

La garantía de irretroactividad de la ley consagrada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste, esencialmente, en que aquélla no puede regular ni aplicarse a situaciones o hechos acontecidos con anterioridad a su vigencia, supuesto jurídico que es observado en el decreto de reforma de la Ley del Impuesto al Activo, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el diez de mayo de mil novecientos noventa y seis, en virtud de que en lo que atañe a ese ordenamiento jurídico, se aprecia que no existe disposición que pretenda regular situaciones o hechos anteriores a su entrada en vigor, esto es, que establezcan que las empresas que componen el sistema financiero, que antes estaban exentas del pago del impuesto al activo, deberán pagar dicho tributo por los meses anteriores al

[87] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, diciembre de 1998 Tesis: P. XCIII/98 Página: 208 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 149/97. Banoro, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número XCIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

inicio de su vigencia. Sin que sea óbice a lo precedente, lo previsto en el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, que en la parte conducente dispone que las empresas que componen el sistema financiero podrán, a partir del ejercicio de mil novecientos noventa y seis, y hasta el de mil novecientos noventa y ocho, realizar el acreditamiento que en el mismo se indica, considerando los impuestos sobre la renta y al activo causados en cada uno de los tres ejercicios anteriores al de que se trate, puesto que ello no implica que el impuesto reclamado deba pagarse también por esos ejercicios o por los meses que anteceden a la entrada en vigor del decreto que se analiza, ya que lo único que se prevé es que para efectos del acreditamiento se considerarán los impuestos citados causados con anterioridad; ni tampoco lo dispuesto en este numeral, en el sentido de que el mismo se refiere al ejercicio de mil novecientos noventa y seis, implica que las empresas que componen el sistema financiero deban pagar el impuesto por todo ese año sino por lo que resta del mismo, a partir del momento en que están obligadas a contribuir.

16. CADUCIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS AL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL DISTRITO FEDERAL TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD (*DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS).[88]

A través de la citada reforma legal se introdujo, en el artículo 549-A, la figura de la caducidad de la instancia de los recursos administrativos previstos en el Código Financiero del Distrito Federal, y en la referida norma de

[88] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, abril de 1999 Tesis: P./J. 34/99; Página: 5; Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia; Precedentes: Amparo en revisión 119/98. Universidad Autónoma Metropolitana. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2269/97. Universidad Nacional Autónoma de México. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: José Antonio Sánchez Castillo. Amparo en revisión 3193/97. Gina Viviana Bechelani Fajer. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 3277/97. Salicilatos de México, S. A. de C. V. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jesús Enrique Flores González. Amparo en revisión 151/98. Belmopan, S. A. de C. V. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. El Tribunal Pleno, en su

tránsito se dispuso que dicha caducidad operará, respecto de los recursos interpuestos antes de la entrada en vigor del mencionado decreto, si con anterioridad a esta fecha hubieren transcurrido doscientos días naturales sin promoción del recurrente, salvo que se promueva dentro de los treinta días siguientes a su vigencia. De ahí que, al tomarse en cuenta para computar el plazo que dará lugar a la caducidad de los recursos administrativos, días transcurridos con anterioridad a la entrada en vigor de tal figura procesal, se transgrede la garantía de irretroactividad tutelada en el párrafo primero del artículo 14 constitucional, pues con ello se afecta el derecho adquirido de los gobernados, derivado de la ausencia de regulación sobre tal materia, a que la instancia intentada en sede administrativa no caduque mientras no se establezca tal consecuencia jurídica en la legislación aplicable, prerrogativa que conlleva el que dicha consecuencia únicamente podrá derivar de circunstancias acontecidas a partir de su vigencia, pero no con anterioridad; por lo que resulta jurídicamente inválido tomar en cuenta, para declarar la caducidad respectiva, días transcurridos con anterioridad a la incorporación de dicha figura procesal al ordenamiento conducente, sin que obste a lo anterior el que se haya establecido que la caducidad no operará de promoverse dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor de la mencionada reforma, pues con independencia de ello, se consideran como sustento de la falta de interés procesal, los doscientos días transcurridos con anterioridad.

17. CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[89]

Esta garantía, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que una ley no puede contener disposiciones que regulen hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia o afectar derechos adquiridos; el Congreso de la Unión, en ejercicio de la

---

sesión privada celebrada el diecinueve de abril en curso, aprobó, con el número 34/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve.

[89] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, noviembre de 1999 Tesis: P./J. 105/99 Página: 27 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 1804/98. Servicios Administrativos Elamex, S. A. de C. V. 26 de octubre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 1796/98. Delphi Ensamble de Cubiertas Automotrices, S. A. de C. V. 26 de octubre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Amparo en revisión 1782/98. Zenco de Chihuahua, S. A. de C. V. 26 de octubre de 1998. Unanimidad de nueve votos.

potestad tributaria que la propia Constitución le confiere, anualmente determina las contribuciones del año fiscal correspondiente, y cuando las incrementa hacia el futuro, es claro que no afecta situaciones anteriores y los particulares no pueden alegar violación a dicha garantía, porque no tienen el derecho adquirido para pagar siempre sobre una misma base o tasa, ya que contribuir al gasto público es una obligación de los mexicanos consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, y no un bien que ingrese al patrimonio del contribuyente.

18. PÉRDIDA FISCAL. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2002, QUE ESTABLECE SU AMORTIZACIÓN EN DOCE PAGOS PROVISIONALES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[90]

Al prever el precepto citado que las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores se disminuirán de la utilidad fiscal base de los pagos provisionales, conforme a una mecánica específica, consistente en que en cada pago provisional sólo puede aplicarse la pérdida fiscal dividida entre doce, debidamente actualizada y en correspondencia con el periodo que abarque el pago provisional respectivo, no transgrede el principio de irretroactividad de la ley

---

Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1443/98. Hielería Juárez, S. A. de C. V. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Castro Zavaleta Amparo en revisión 1621/98. Unicopy Corporación de México, S. A. 29 de octubre de 1998. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 105/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

[90] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVIII, agosto de 2003 Tesis: P./J. 45/2003 Página: 41 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 713/2002. Televisión Azteca, S. A. de C. V. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo en revisión 261/2003. Lend Lease México, S. A. de C. V. y coag. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 269/2003. Inmobiliaria Pozo Bravo, S. A. de C. V. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:

consagrado en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no desconoce el derecho de los contribuyentes a amortizar sus pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores, de la utilidad fiscal obtenida en ejercicios posteriores (hasta diez), en términos de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, sino que únicamente regula el momento y la forma de llevarla a cabo. Además, el referido artículo 55 disponía que la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podría disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes, pero no contenía regla alguna en relación con el momento y la forma en la que procedería su amortización, por lo que el hecho de que ahora el tercer párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establezca la forma y términos en que puede hacerse la disminución de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en relación con el cálculo de los pagos provisionales, no infringe el citado principio constitucional, pues no afecta situaciones jurídicamente reguladas con anterioridad.

19. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. NO VIOLA ESA GARANTÍA EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.[91]

El citado precepto, reformado por decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación de catorce de enero de mil novecientos ochenta y siete, no es retroactivo y, por tanto, no viola lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en virtud de que sus regulaciones se encuentran en una norma legal adjetiva en la que, para la sustanciación de un juicio, dispone la sistematización de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los que no se realizan ni se desarrollan en un solo momento, sino que se suceden con el

---

Andrea Zambrana Castañeda. Amparo en revisión 293/2003. Almacenadora Sur, S. A. Organización Auxiliar de Crédito y coags. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 605/2003. Inmobiliaria Nueva Xalapa, S. A. de C. V. y coag. 5 de agosto de 2003. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María de Lourdes Margarita García Galicia. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de agosto en curso, aprobó, con el número 45/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de agosto de dos mil tres.

[91] Octava Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, diciembre de 1999 Tesis: P./J. 134/99 Página: 9 Materia: Constitucional, Civil Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 2013/88. Rolando Bosquez Jasso. 16 de agosto de 1989. Mayoría de diecinueve votos. Ausente: Noé Castañón León. Disidente: Victoria Adato Green. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretario: Juan Manuel Martínez

tiempo y a este diferente momento de realización de los actos procesales es al que debe atenderse para determinar cuál es la norma que, en todo caso, debe regir el acto de que se trate. En este sentido, las facultades que otorgaba el artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal antes de la reforma y que daban la posibilidad jurídica de impugnar la sentencia respectiva mediante el recurso de apelación, en ciertos supuestos, no se vieron afectadas porque esa fase procedimental no se actualizó en los juicios correspondientes, es decir, la sentencia no fue emitida durante su vigencia, sino bajo el imperio del mencionado numeral después de su reforma y, por tanto, son las determinaciones contenidas en este precepto modificado las que deben regir la ejecución de dicho acto, lo que no implica violación alguna a la garantía constitucional que se analiza.

20. RETIRO. LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SÉPTIMO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SÉPTIMO, PRIMER PÁRRAFO, PARTE PRIMERA, DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, VIGENTES A PARTIR DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[92]

Conforme a lo dispuesto en los artículos 183-A a 183-S de la Ley del Seguro Social derogada, los asegurados sujetos a su régimen obligatorio adqui-

---

Martínez. Amparo directo en revisión 1761/89. Distribuidora Soel, S. A. de C. V. 14 de junio de 1990. Mayoría de dieciséis votos. Ausente: Carlos del Río Rodríguez. Disidentes: Mariano Azuela Güitrón y Victoria Adato Green. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno. Amparo directo en revisión 1722/89. Juan Morales Aguilar. 12 de septiembre de 1990. Unanimidad de dieciocho votos. Ausentes: Carlos del Río Rodríguez, Victoria Adato Green y Salvador Rocha Díaz. Ponente: José Martínez Delgado. Secretario: Luis María Aguilar Gómez. Amparo directo en revisión 1956/90. Sebastián Pineda Ruiz. 14 de febrero de 1991. Mayoría de dieciséis votos. Ausente: Noé Castañón León. Disidentes: Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón y Victoria Adato Green. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno. Amparo directo en revisión 1972/91. Mundo Automotriz, S. A. 8 de octubre de 1992. Mayoría de catorce votos. Ausentes: Carlos de Silva Nava, Miguel Montes García, Felipe López Contreras, José Antonio Llanos Duarte y Mariano Azuela Güitrón. Disidente: Victoria Adato Green. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alberto Pérez Dayán. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 134/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. NOTA: Jurisprudencia constituida en la Octava Época, cuyo texto se aprueba con motivo de la aplicación del criterio en asuntos análogos correspondientes a la Novena Época.

[92] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, marzo de 2000 Tesis: P. XXX/2000 Página: 105 Materia: Constitucio-

rieron el derecho de titularidad de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, integrada por las subcuentas de ahorro y de vivienda, así como a elegir la institución de crédito, entidad financiera o sociedad de inversión autorizadas para el manejo de las cuentas y a disponer de los fondos de la subcuenta de retiro en la forma, plazos y términos previstos por dicha ley y al darse los requisitos y condiciones ahí establecidos. Los artículos transitorios décimo cuarto y décimo séptimo de la Ley del Seguro Social y séptimo, primer párrafo, parte primera, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro vigentes a partir del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, no violan la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado pues no obran sobre el pasado para desconocer o lesionar los derechos adquiridos por los titulares de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro constituidas a la luz de la normatividad derogada, en virtud de que sólo disponen que los fondos de las subcuentas de ahorro se transferirán a la administradora de fondos para el retiro que aquéllos elijan o a la cuenta concentradora del Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de que no lo hagan, para integrar esas subcuentas separadas de las subcuentas previstas en la nueva ley dentro de las cuentas individuales de cada trabajador, lo que respeta los derechos adquiridos por éstos ya que conservan sus fondos y se les autoriza a elegir la administradora que manejará sus cuentas, además que se les permite acogerse a la nueva reglamentación o a la derogada al darse los supuestos por ésta prevista para el goce de sus pensiones y a retirar sus fondos acumulados conforme a lo ahí establecido, según lo determinado en los artículos tercero, cuarto, undécimo, décimo tercero y décimo sexto transitorios de la nueva Ley del Seguro Social.

21. DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN

---

nal, Laboral Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 254/98. Mario Mayén Flores. 18 de noviembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 675/98. Sergio Galván Alemán. 18 de noviembre de 1999. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número XXX/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO.[93]

> Si bien es cierto que una norma de tránsito tiene como función regular el paso ordenado de una ley anterior a una nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de ésta, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, también lo es que tratándose de la derogación o abrogación de leyes penales sustantivas, la regulación que al respecto realice una norma de tránsito debe observar los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de retroactividad de la ley en beneficio del inculpado, procesado o sentenciado, previstos, respectivamente, en los párrafos inicial y tercero del artículo 14 constitucional. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, al disponer que los tipos penales contenidos en la abrogada Ley Federal sobre el Derecho de Autor, específicamente el previsto en la fracción II de su artículo 135, seguirán vigentes por cuanto a la persecución, sanción y ejecución de sentencias por los hechos ejecutados hasta antes de su entrada en vigor, viola los principios constitucionales referidos, pues en el catálogo de figuras típicas reguladas en el título vigésimo sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, establecido en virtud del citado decreto, no se tipifica la conducta considerada anteriormente como delictiva en el aludido precepto de la abrogada ley autoral y, por ende, no se presenta una sucesión de normas sustantivas penales en el tiempo, al no preverse idénticas conductas típicas en la ley anterior y en la nueva, por lo que los hechos cometidos durante la vigencia de aquélla al dejar de tener el ca-

[93] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, septiembre de 2000 Tesis: P. CXLIV/2000 Página: 21 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 471/98. 8 de junio de 2000. Mayoría de seis votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Genaro David Góngora Pimentel. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXLIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

rácter delictivo no pueden surtir efecto alguno, y por ello, durante la vigencia de la nueva ley, ya no pueden ser objeto de persecución, investigación, procesamiento, ni de una sentencia condenatoria y su ejecución. Además, si se estimara vigente el mencionado artículo de la abrogada ley del derecho de autor, como la conducta tipificada en él dejó de tener el carácter delictivo en el ordenamiento vigente, constituiría una norma privativa prohibida en el artículo 13 constitucional, al aplicarse sólo a aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la entrada en vigor del ordenamiento penal.

22. JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[94]

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional.

---

[94] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, diciembre de 2000 Tesis: P./J. 145/2000 Página: 16 Materia: Constitucional, Común Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 145/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil.

23. CONSOLIDACIÓN FISCAL. LAS REFORMAS A LOS PRECEPTOS QUE REGULAN ESTE RÉGIMEN, QUE INICIARON SU VIGENCIA EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y POR CONSECUENCIA DE LA CERTEZA Y LA SEGURIDAD JURÍDICAS, EN RELACIÓN, EXCLUSIVAMENTE, CON LOS CONTRIBUYENTES QUE EN ESE MOMENTO TRIBUTABAN DENTRO DEL PERIODO OBLIGATORIO DE CINCO EJERCICIOS, SÓLO RESPECTO A LOS PENDIENTES DE TRANSCURRIR.[95]

> De lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del contenido de las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma jurídica que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar el tema de la retroactividad de la ley, se advierte que una norma transgrede el citado precepto constitucional cuando modifica o destruye los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos y las consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en tales casos sí se permite que la nueva ley las regule. En congruencia con lo anterior, puede concluirse que las reformas a los preceptos

---

[95] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, agosto de 2001 Tesis: P./J. 95/2001 Página: 5 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. Precedentes: Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Juan Francisco Sánchez Planells. Amparo en revisión 1037/99. Fibervisión de México, S. A. de C. V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy nueve de agosto en curso, aprobó, con el número 95/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a nueve de agosto de dos mil uno.

que regulan el régimen de consolidación fiscal, vigentes a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, violan el principio de irretroactividad de la ley, en relación, exclusivamente, con los contribuyentes que en ese momento se encontraban tributando en forma obligatoria en el referido régimen con motivo de la solicitud y de la autorización de inicio que los ubicó en ese supuesto y sólo respecto al periodo pendiente de transcurrir, pues una vez cumplido éste, la obligación de tributar conforme al régimen de consolidación fiscal desaparece y ya no será consecuencia del supuesto surgido conforme a la ley anterior, sino que ello tendrá su origen en la voluntad del contribuyente de continuar tributando conforme al régimen de consolidación fiscal, siendo aplicables las nuevas disposiciones. Lo anterior es así, porque las aludidas reformas modificaron o alteraron en forma desfavorable los derechos adquiridos por el grupo de contribuyentes que se encontraban en el supuesto obligatorio de consolidar sus resultados fiscales por un periodo que no podría ser menor a cinco ejercicios fiscales, en términos de lo dispuesto por el artículo 57-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta (teoría de los derechos adquiridos) o las consecuencias del supuesto de la solicitud y de la autorización emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (teoría de los componentes de la norma) bajo la vigencia de la ley anterior, ya que introdujeron nuevas obligaciones afectando la certeza y la seguridad jurídicas de las citadas sociedades, pues se acotaron los beneficios de la consolidación fiscal, con respecto a los que se generaron con motivo de la autorización de inicio para consolidar el impuesto sobre la renta.

24. AGRUPACIONES FINANCIERAS. EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN VI, DE LA LEY QUE LAS REGULA, AL ESTABLECER QUE NO PODRÁN SER CONSEJEROS QUIENES PARTICIPEN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS PERTENECIENTES A OTROS GRUPOS FINANCIEROS, O DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE ÉSTOS, ASÍ COMO DE OTRAS ENTIDADES NO AGRUPADAS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[96]

De lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del contenido de las

[96] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVIII, diciembre de 2003 Tesis: 1a. LXXIII/2003 Página: 77 Materia: Constitucional Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 858/2002. Max Michel Suberville. 18 de junio de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar el concepto de retroactividad de la ley, se advierte que una norma transgrede el citado precepto constitucional cuando modifica o destruye los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos y sus implicaciones nacidas bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o cuando se trata de consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior. En congruencia con lo antes expuesto, la fracción VI del artículo 25 de la Ley para regular las Agrupaciones Financieras, que establece que en ningún caso podrán ser consejeros quienes participen en el consejo de administración de entidades pertenecientes a otros grupos financieros, o de las sociedades controladoras de ellos, así como de otras entidades financieras no agrupadas, no viola la garantía de irretroactividad de la ley consignada en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, ya que sólo regula supuestos surgidos con posterioridad al inicio de su vigencia, sin afectar consecuencias derivadas de los supuestos que se presentaron conforme a la ley anterior, es decir, los mencionados consejeros no adquirieron por virtud de la disposición anterior el derecho a desempeñar indefinidamente el cargo, sino sólo a ejercerlo durante la vigencia de aquella norma que no imponía esa restricción, pues las disposiciones jurídicas no pueden permanecer estáticas sino que tienen que responder a las demandas de la sociedad.

25. SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE SE REFIERE A SOCIEDADES COOPERATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.[97]

El artículo quinto transitorio del Reglamento para el Pago de Cuotas al Seguro Social, que establece que para las aportaciones de las cuotas relativas

[97] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: 2a./J. 34/98 Página: 523 Materia: Constitucional, Administrativa; Precedentes: Amparo en revisión 198/98. Prestadores de Servicios Agroindustriales Especializados del Valle de México, S. C. L. de R. L. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 238/98. Prestadores de Servicios Logísticos y Operativos de Monterrey, S. C. L. de R. L. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en revisión 11/98. Prestadores de Servicios Profesionales Administrativos del Norte, S. C. L. de R. L. 17 de abril de 1998. Unanimidad

a los trabajadores asalariados de la sociedad cooperativa, así como de los socios de éstas, inscritos a partir del inicio de la vigencia de la ley, se estará a la forma establecida en la misma, no es contrario al principio de irretroactividad previsto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional, ya que no ordena actuar sobre situaciones pasadas, ni trata de destruir los efectos ya acaecidos conforme a la ley o reglamento anteriores, sino que pretende regir situaciones jurídicas que se den desde su entrada en vigor, lo que se pone de manifiesto a través de lo dispuesto en los artículos tercero y undécimo transitorios de la nueva Ley del Seguro Social, que establecen que los asegurados inscritos con anterioridad a la vigencia de dicho ordenamiento legal podrán optar por acogerse a los beneficios de la ley derogada o ajustarse al sistema de pensiones establecidas en ésta; además, el reglamento lo único que hace es remitir a los términos establecidos en la ley, y ésta da la opción para que los beneficiarios se acojan a la ley vigente o la derogada. Por otro lado, el último párrafo del artículo quinto transitorio establece que las normas contenidas en él van a regir a partir de la vigencia de la ley.

26. JUBILACIÓN. EL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[98]

El artículo décimo tercero transitorio mencionado, que establece que los trabajadores del Estado de Nuevo León que ya tenían derecho a la jubilación a

---

de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 67/98. Prestadores Profesionales del Valle de México, S. C. L. de R. L. 17 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 311/98. Prestadores de Servicios Administrativos de Chihuahua, S. C. L. de R. L. 17 de abril de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Tesis de jurisprudencia 34/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 8 de mayo de 1998. AMPARO EN REVISIÓN 311/98. PRESTADORAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CHIHUAHUA, S. C. L. DE R. L. Véase página 484.

[98] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, diciembre de 1999 Tesis: 2a. CXLVII/99 Página: 405 Materia: Constitucional, Laboral Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 2775/98. Gilberto Aguirre Baeza. 10 de noviembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

la fecha de entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de ese Estado, o bien, que se encontraban cerca de obtener ese derecho, podían optar entre el pago de la pensión correspondiente en los términos establecidos en la ley anterior o de conformidad con el nuevo ordenamiento, no resulta retroactivo, en virtud de que rige solamente para quienes ya tenían incorporado a su favor el derecho a la jubilación, es decir, quienes ya contaban con los años de servicio requeridos para ello y, además, habían decidido optar por la jubilación. Lo anterior en virtud de que el derecho a la jubilación no nace inmediatamente cuando se pacta, sino que está condicionado al cumplimiento de algunos requisitos, como cumplir cierto número de años de servicio, que de no actualizarse impedirá que se adquiera ese derecho; de igual manera, si no se optó por la jubilación, no se actualizaron los supuestos de la norma, es decir, si en su momento quien tenía derecho a jubilarse con los porcentajes inherentes al tiempo de servicio correspondiente, no hizo valer ese derecho, no se actualizó en su beneficio el supuesto previsto por la norma. Además, debe tenerse presente que el propio precepto transitorio estableció que aquellas personas que contaran con los años de servicio requeridos para obtener su jubilación, o bien, que encontrándose próximos a cumplirlos, tenían la posibilidad de decidir cuál opción elegían para el pago de su pensión, lo cual debían informar a más tardar el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, lo que constituyó un beneficio extra para quienes todavía no contaban con el derecho a la jubilación.

27. ORGANIZACIONES GANADERAS. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY QUE LAS REGULA, PUBLICADA EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN EL SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[99]

Si se toma en consideración que, por un lado, el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como garantía del individuo, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y que, por el otro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que hay aplicación retroactiva cuando se afectan derechos que ingresaron al patrimonio de la persona bajo la vigencia de la

[99] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, mayo de 2001 Tesis: 2a. L/2001 Página: 458 Materia: Constitucional Tesis aislada. Amparo en revisión 429/2000. Unión Ganadera Regional en el Estado de Tabasco y coags. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.

ley predecesora y que no la habrá cuando se afectan meras expectativas de derecho, resulta inconcuso que el artículo sexto transitorio de la Ley de Organizaciones Ganaderas que determina que, al entrar en vigor la ley respectiva, el patrimonio de las organizaciones ganaderas pasará a los asociados que estén reconocidos o inscritos en ellas, tiene efectos retroactivos en perjuicio de las citadas organizaciones y, por tanto, viola la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si durante la vigencia de la ley abrogada las organizaciones ganaderas a las que se dirige la norma, para la realización de sus fines, adquirieron derechos y obligaciones de orden patrimonial apreciables en dinero, que conforman su patrimonio, el hecho de que con arreglo a la nueva ley pertenezcan a aquellos asociados que a la fecha de entrada en vigor de dicho ordenamiento estén reconocidos o inscritos en la organización respectiva, implica indudablemente la privación de un derecho adquirido con anterioridad. Lo anterior se confirma desde otro punto de vista tomando en consideración que el patrimonio formado durante la vigencia de la ley anterior, consecuencia de la adquisición de todos los bienes, facultades y provechos que llegaron a integrarlo, resulta afectado por la ley nueva, al establecer que pasa al patrimonio de personas distintas, como son los asociados registrados.

28. IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES PARA LA PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY ADUANERA REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES O REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS O MAQUILADORAS QUE PRETENDAN DEDICARSE A TAL ACTIVIDAD, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.[100]

Si se toma en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, en el sentido de que no sólo prohíbe la retroactividad de la ley, sino también de sus actos concretos de

[100] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, junio de 2001 Tesis: 2a. LXXXVII/2001 Página: 304 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 607/2000. Héctor Adalberto García Noriega. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

aplicación, y que para determinar en los casos concretos si se vulnera dicha garantía, ha adoptado tanto la teoría de los derechos adquiridos, conforme a la cual existe aplicación retroactiva desfavorable cuando se afectan derechos que ingresaron al patrimonio de la persona bajo la vigencia de la ley predecesora y no se produce ese tipo de retroactividad cuando sólo se afectan meras expectativas de derecho, como la de los componentes de la norma jurídica, según la cual la retroactividad desfavorable se produce cuando una ley vuelve al pasado para afectar supuestos y consecuencias producidos conforme a la ley anterior o cuando, mirando al futuro, afecta consecuencias originadas en supuestos regidos por la ley derogada; resulta inconcuso que el artículo 108 de la Ley Aduanera, reformado por decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho que prevé las condiciones o requisitos que debe cubrir una empresa o maquiladora que pretenda dedicarse a la importación temporal para producir artículos de exportación con programas autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con posterioridad a su vigencia, no viola la referida garantía constitucional. Lo anterior es así, porque ni en el citado artículo 108 ni en los artículos transitorios del decreto que lo reformó se señala que las empresas o maquiladoras que venían funcionando al amparo del anterior artículo 108 y con la autorización de la mencionada secretaría con base en el decreto que establece programas de importación temporal para producir artículos de exportación, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el tres de mayo de mil novecientos noventa, ya no podrán hacerlo, por lo que el indicado artículo 108 no vuelve al pasado para afectar situaciones jurídicas acaecidas con antelación, ni tampoco destruye o afecta hacia el futuro derechos adquiridos por los gobernados, sino que sólo regula situaciones futuras a partir de la iniciación de su vigencia.

29. IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.[101]

Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos

[101] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, junio de 2001 Tesis: 2a. LXXXVIII/2001 Página: 306 Materia: Constitucional Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 607/2000. Héctor Adalberto García Noriega. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Sexta Época, Volumen CXXXVI, Primera Parte, página 80, tesis de rubro: "RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA".

Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

30. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMÓ, ADICIONÓ Y DEROGÓ DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES RELACIONADAS CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE, ENTRE ELLAS, LA LEY DE EXPROPIACIÓN, NO VIOLA ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, YA QUE ÚNICAMENTE PRECISA EL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE APLICARÁ.[102]

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como garantía individual que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, que las disposiciones contenidas en las leyes no deben aplicarse hacia el pasado, afectando hechos o situaciones que se presentaron antes de su vigencia, problema que se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo; asimismo, en relación con la figura de la retroactividad, existe otra denominada “ultra actividad” de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada, se sigue aplicando a hechos o actos que se producen con posterioridad a la ini-

[102] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, mayo de 2002 Tesis: 2a. LVII/2002 Página: 302 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 1612/2001. Moisés Kalach Alfie y otro. 31 de enero de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

ciación de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia. En ese tenor, el artículo tercero transitorio del decreto que reformó, adicionó y derogó disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre ellas, la Ley de Expropiación, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, no viola la garantía individual referida, pues en aquel numeral se dispone que la reforma al artículo 10 de la Ley de Expropiación se aplicará a las expropiaciones que se realicen a partir de la entrada en vigor del propio decreto, esto es, dicha disposición no vuelve al pasado modificando una situación favorable a un gobernado creada por la ley anterior, sino que sólo precisa el momento a partir del cual se aplicará la norma, de manera que la ultra actividad del referido artículo 10 es consecuencia lógica del mencionado numeral tercero transitorio, puesto que a las expropiaciones ordenadas con anterioridad les tendrá que seguir siendo aplicable ese dispositivo, que si bien para las expropiaciones decretadas con posterioridad a la entrada en vigor del decreto ya no estará vigente, continuará estándolo para las dispuestas con anterioridad.

31. DERECHOS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PLACAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL UNO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.[103]

El artículo 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato vigente para el año de mil novecientos noventa y ocho no estableció una vigencia determinada para el uso de las placas de circulación, cuyo cambio se acordó en dicho precepto mediante el pago de los derechos correspondientes, sin que ello pueda desprenderse de los trabajos legislativos que precedieron a esa ley, tales como la exposición de motivos y el dictamen que recayó a ella, pues si tales proposiciones no llegaron a concretarse en la ley, carecen de obligatoriedad para los gobernados, en tanto no constituyen mandatos que deban

[103] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, octubre de 2002 Tesis: 2a./J. 111/2002 Página: 201 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 56/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Décimo Sexto Circuito. 18 de septiembre de 2002. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Tesis de jurisprudencia 111/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco del septiembre de dos mil dos.

respetar; de ahí que quienes realizaron el trámite relativo al aludido cambio de placas bajo el amparo de esa norma, sólo adquirieron el derecho a que sus vehículos circularan con esas placas mientras la Legislatura Local no estableciera el canje. En tales condiciones, se concluye que el artículo 10, fracción I, de la Ley de Ingresos vigente para el año dos mil uno en dicha entidad federativa, que estableció nuevo pago de derechos por suministro de placas de circulación de vehículos automotores, no viola la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que no desconoce derecho alguno protegido por ley anterior.

32. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PUEDE ANALIZARSE EN AMPARO INDIRECTO AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO.[104]

El Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la legalidad del acto reclamado, tomando en cuenta diversos aspectos: competencia de la autoridad, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etcétera. Esta obligación es más intensa tratándose del juicio de garantías en materia penal, pues el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, previene la suplencia total de la queja en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación. De ahí que cuando en la demanda de garantías el quejoso haga valer como concepto de violación en contra del auto de formal prisión reclamado, que la acción penal se encontraba prescrita, el juzgador tiene el deber de estudiar tal argumento, a pesar de que no se le hubiera propuesto a la autoridad responsable. Tal proceder, en modo alguno puede estimarse como una indebida sustitución del Juez, o infracción a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, pues este precepto sólo lo obliga a apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; esto es, a no allegarse más pruebas que le permitan conocer los hechos, que aquellas que formen parte de la averiguación previa, o que hayan sido admitidas por la autoridad responsable. Por otra parte, en relación al amparo directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que

---

[104] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999 Tesis: 1a./J. 18/99 Página: 328 Materia: Penal Jurisprudencia. Precedentes: Contradicción de tesis 56/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco. Tesis de jurisprudencia 18/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

el tribunal supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal el quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y suficientes para dicho examen.

Sinopsis:

a) La garantía de irretroactividad de las normas de carácter general busca resolver la incertidumbre jurídica que pudiera darse en el caso de aplicar una norma posterior a un hecho anterior.

b) La aplicación perjudicial de manera posterior está prohibida de manera expresa en la Constitución, como lo especifica el respectivo fragmento del artículo 14: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

c) La Jurisprudencia ha interpretado que cuando los efectos retroactivos no causan perjuicios, una norma de carácter general posterior al hecho, es aplicable.

V. Garantía de legalidad, la exacta aplicación de la ley

Esta garantía ha sido objeto de una intensa polémica histórica. El artículo 14 de la Constitución de 1857 establecía en su texto lo siguiente: "No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley".[105] En su momento José María Lozano e Ignacio Vallarta interpretaron que la "exacta" aplicación hacía referencia a la materia penal de manera exclusiva. La exégesis de Miguel Mejía era contraria, esto es, que la garantía de legalidad se extendía a todas las materias.[106] En realidad, Lozano y Vallarta

[105] Víctor Martínez Bullé Goyri, "Los derechos humanos en el México del siglo XX", en *Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica*, Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica; Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Corte de Constitucionalidad República de Guatemala # 31, México 1998, p. 90.

[106] José Luis Soberanes Fernández, *El Poder Judicial Federal en el siglo XIX (notas para su estudio)*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 148.

profetizaron un problema: la posibilidad de que el juicio de amparo fuese objeto de abusos por parte de los abogados patronos. Así, el amparo sería considerado, no tanto como un juicio de constitucionalidad, sino como una especie recurso de casación.[107] Como lo explica Luis Bazdresch:

> Históricamente Ignacio L. Vallarta y José María Lozano, dos juristas eminentes, postularon que la garantía de exacta aplicación de la ley rige solamente en materia penal, pero no en la civil, para evitar que mediante el amparo, los tribunales de garantías se conviertan en revisores de las decisiones de todas las demás autoridades judiciales en dicha materia civil...[108]

Así las cosas, en la Ley de Amparo de 1869,[109] el artículo octavo disponía lo siguiente: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales".[110] Sin embargo, "la Suprema Corte de Justicia a partir del caso Miguel Vega, resuelto el 29 de abril del mismo año de 1869, declaró inconstitucional dicho precepto".[111] De esta manera:

> A partir de entonces y no obstante los apasionados debates que se prolongaron hasta principios de nuestro siglo, se admitieron sin restricciones los juicios de amparo interpuestos contra resoluciones judiciales cuando los jueces no aplicaban exactamente (es decir, correctamente) las disposiciones legales secundarias.[112]

Actualmente, la garantía de exacta aplicación de la ley, se ha constreñido a la materia penal, al menos en lo que se refiere al texto del artículo 14, pues como concluye Héctor Fix-Zamudio:

---

[107] "(Del francés *cassation*, derivado del verbo passer, anular, y a su vez del latín *quassare*, sacudir violentamente, romper) El medio de impugnación que se traduce en el recurso de carácter extraordinario a través del cual se examina la legalidad de la actividad del juez en el procedimiento y en la sentencia que de ser acogido, puede producir el efecto de anular el fallo respectivo, ya sea para reponer el citado procedimiento o con el propósito de que se pronuncie una sentencia de fondo". Héctor Fix-Zamudio, "Casación", en *Nuevo diccionario jurídico mexicano*, t. A-C., p. 504.

[108] L. Bazdresch, *op. cit.*, p. 166.

[109] Esta ley fue decretada el 19 de enero de 1869.

[110] José Barragán, *Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987, p. 315.

[111] H. Fix-Zamudio, en V.V. A.A., *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada*, t. 1, p. 197.

[112] *Idem*.

> En tal virtud, y con apoyo en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que se refuerza con la invocación del artículo 16, en cuanto exige que todo acto de autoridad competente debe constar por escrito y estar debidamente fundado y motivado, actualmente se impugnan todas las relaciones judiciales de todos los jueces y tribunales del país ante los tribunales federales por conducto del juicio de amparo, que de esta manera no sólo procede por violaciones directas a los derechos fundamentales realizadas por cualquier autoridad, sino también cuando se infringen disposiciones legales secundarias y aun reglamentarias, con lo cual se ha establecido un recurso de casación federal, que por ello recibe el nombre de *amparo judicial* o *amparo casación*.[113]

Luis Bazdrech reconoce tal situación:

> Como quiera que sea, sigue siendo perfectamente valedero el argumento de que la materia civil no está excluida del régimen de garantías, y por tanto, debe sostenerse que el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, autoriza a los tribunales de garantías para examinar si la sentencia de un tribunal ordinario en materia civil que ha sido reclamada en amparo, se ajusta o no a la letra, y en su caso, a la interpretación jurídica de la ley aplicada.[114]

En materia penal, la garantía en comento:

> Constitucionalmente recoge una vieja regla que impera en el derecho penal, *nullum poena, nullum delictum sine lege*, es decir, no hay pena ni hay delito si no hay ley que lo establezca, y atiende a la tipificación previa de la conducta y la decisión absolutoria cuando falta, ya sea la previsión de la conducta o de la pena correspondiente.[115]

Éste es uno de los más importantes sentidos que ha interpretado la doctrina jurisprudencial. En este orden de ideas veamos la siguiente tesis de la novena época,[116] cuyo rubro dice:

---

[113] *Ibid*., p. 198.

[114] L. Bazdresch, *op. cit.*, p. 167.

[115] A. Rojas Caballero, *op. cit.*, p. 305.

[116] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: IV, octubre de 1996; Tesis: P. CXXX/96; Página: 156; Precedentes: Amparo directo en revisión 976/93. Eduardo Amkie Cohen y Dayán. 24 de septiembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el

CONYUGICIDIO. EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, QUE ESTABLECE ESTE DELITO, EQUIPARADO AL DE PARRICIDIO PARA APLICACIÓN DE LA PENA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, YA QUE NO ESTABLECE LA IMPOSICIÓN DE LA PENA POR ANALOGÍA.

El texto del sumario establece lo siguiente:

> Conducir a la imposición de una pena, y, que todo hecho relacionado en la ley como delito, El artículo 255 del Código Penal del Estado de México, al establecer el delito de conyugicidio y equiparlo al de parricidio para aplicación de la pena, no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, ya que los principios "*nullum crimen sine lege*" y "*nulla poena sine lege*", en que descansa dicha garantía y que se refieren a que un hecho que no esté señalado en la ley como delito no es delictuoso, y por ello, no puede debe prever expresamente la pena que le corresponda, en caso de su comisión, son respetados por dicha disposición al disponer "...Se equipara al delito de parricidio y se le impondrá la misma pena al que dolosamente prive de la vida al cónyuge...", de lo cual se desprende que contiene los elementos de toda norma punitiva, esto es, la descripción de una conducta que configura la infracción y la sanción que ha de aplicarse, en caso de su comisión. Por tanto, no hay aplicación analógica porque sí se establece el tipo penal "...al que dolosamente prive de la vida al cónyuge...", y por cuanto a la pena tampoco hay aplicación analógica, porque establece la pena en caso de su consumación "...Se equipara al delito de parricidio y se le impondrá la misma pena..." Ahora bien, si por cuestión de técnica o economía legislativa, en un solo precepto legal se establecieron tres diversos tipos legales, con elementos que los distinguen (parricidio, conyugicidio y filicidio), y que en caso de su comisión procedía la imposición de una igual sanción, ello debe entenderse así porque el legislador recogió la distinción que doctrinalmente se realiza en torno al parricidio, sin que por ello pueda sostenerse que hay una aplicación por analogía de la pena, sino que únicamente con apoyo en su facultad punitiva entendió y dispuso que la comisión de cualquiera de los tres ilícitos, es de gran trascendencia y gravedad para la sociedad y ameritan la imposición de igual sanción.

---

diecisiete de octubre en curso, aprobó, con el número CXXX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Garantía de legalidad, "la exacta aplicación de la ley".

1. GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. EL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO LA VIOLA.[117]

> El artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al prever la posibilidad de que el Juez en el proceso emplee los medios de prueba que estime convenientes, según su criterio, para acreditar los elementos del tipo y la presunta o plena responsabilidad de una persona, no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal que establece el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, pues, por tratarse de una disposición de carácter procesal o adjetivo, ajena a aspectos relacionados propiamente con la integración de la norma punitiva —descripción típica y previsión de la pena—, así como respecto a la forma o manera en que han de aplicarse las penas, no puede contravenir los principios *nullum crimen sine lege* y *nulla poena sine lege* en que descansa dicha garantía, además de que tampoco faculta o autoriza al juzgador a imponer penas mediante una aplicación analógica o por mayoría de razón.

2. SALUD, DELITO CONTRA LA. EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 198 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[118]

> El tercer párrafo del artículo 198 del Código Penal Federal establece dos tipos penales que se consideran complementados y cualificados; complementados, porque remiten a los elementos del tipo fundamental contenido en el primer párrafo del artículo 198 del ordenamiento citado, siempre y cuando no se

---

[117] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, junio de 1999 Tesis: P. XLVIII/99 Página: 10 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo directo en revisión 666/97. Jesús Vázquez Quevedo. 22 de marzo de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número XLVIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.

[118] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, diciembre de 1999 Tesis: P. LXXXIV/99 Página: 30 Materia: Constitu-

presenten las circunstancias que en él se precisan, es decir, que el sujeto no se dedique como actividad principal a las labores propias del campo, y que no concurran la escasa instrucción y la extrema necesidad económica; y cualificados, porque los dos fijan una pena mayor a la del tipo fundamental, pues prevén circunstancias que agravan el delito. La diferencia entre los dos tipos antes mencionados radica en la finalidad perseguida por el sujeto, pues si la finalidad de la siembra, cultivo y cosecha es de las previstas por las fracciones I y II del artículo 194 del Código Penal, el delito será considerado de mayor gravedad y, por tanto, dará lugar a una sanción más elevada; por el contrario, si la finalidad que se pretende alcanzar con la conducta delictiva no se encuentra prevista en tal precepto, la pena será menor. De lo anterior se concluye que el tercer párrafo del artículo 198 del ordenamiento penal de mérito, al establecer dos tipos penales distintos con sus respectivas sanciones y no dos penas diferentes para un mismo tipo delictivo, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal consagrada en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional.

3. APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY PENAL, GARANTÍA DE LA, EN RELACIÓN AL DELITO DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN.[119]

El artículo 206 de la Ley de Amparo, al establecer el tipo del delito de desobediencia al auto de suspensión debidamente notificado y hacer la remisión, para efectos de sanción, al de abuso de autoridad previsto por el artículo 215 del Código Penal Federal, no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, ya que los principios *nullum crimen sine lege*

---

cional, Penal Jurisprudencia; Precedentes: Amparo directo en revisión 2402/97. 11 de enero de 1999. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número LXXXIV/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

[119] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, diciembre de 1997 Tesis: 1a./J. 46/97 Página: 217 Materia: Penal, Constitucional; Precedentes: Contradicción de tesis 19/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Segundo Circuito. 22 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. Tesis de jurisprudencia 46/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

y *nulla poena sine lege*, en que descansa dicha garantía, se refieren a que un hecho que no esté tipificado en la ley como delito, no puede conducir a la imposición de una pena, porque a todo hecho relacionado en la ley como delito debe preverse expresamente la pena que le corresponda, en caso de su comisión. Tales principios son respetados en los preceptos mencionados, al describir, el primero de ellos, el tipo penal respectivo, y el segundo, en los párrafos penúltimo y último, la sanción que ha de aplicarse a quien realice la conducta tipificada. Así, la imposición por analogía de una pena, que implica también por analogía la aplicación de una norma que contiene una determinada sanción, a un caso que no está expresamente castigado por ésta, que es lo que proscribe el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, no se surte en las normas impugnadas.

4. ROBO DE INFANTE. EL ARTÍCULO 302, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, AL PREVER EXPRESAMENTE LA PENA POR LA COMISIÓN DE AQUEL DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.[120]

La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en la prohibición de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, pues la imposición de una pena, implica, también por analogía, la aplicación de una norma que contiene una determinada sanción a un caso que no está expresamente castigado por ésta, es decir, aquella imposición y aplicación por analogía, es la que proscribe dicha garantía, ya que la pena que se pretendiera imponer al hecho no penado en la ley, no tendría una existencia legal previa, violándose con ello los principios *nullum crimen sine lege* y *nulla poena sine lege*; asimismo, es de precisarse que la mencionada garantía no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate, sino que obliga también al legislador a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas

[120] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, julio de 2002 Tesis: 1a. XLIX/2002 Página: 58 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo directo en revisión 229/2002. 8 de mayo de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador, por lo que la ley penal debe estar concebida de tal forma que los términos mediante los cuales especifique los delitos o las penas, sean claros, precisos y exactos a fin de evitar que la autoridad aplicadora incurra en confusión ante la indeterminación de los conceptos y, en consecuencia, en demérito de la defensa del procesado. En este tenor, se concluye que el artículo 302, fracción V, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla cumple con la citada garantía constitucional, toda vez que precisa debidamente la consecuencia jurídica del delito de robo de infante, pues expresamente establece la pena correspondiente, esto es, prisión de dieciocho a cincuenta años y multa de cien a mil días de salario mínimo, con lo que se otorga certeza jurídica a quien se le aplique tal sanción y se evita, en consecuencia, la arbitrariedad en la actuación de la autoridad aplicadora.

5. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL RELATIVA TAMBIÉN SE RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AUN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA.[121]

La marcada diferencia entre la naturaleza de las sanciones administrativas y las penales, precisada en la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones al título cuarto de la Constitución Federal, publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en los artículos que comprende dicho título y en la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en la cual se dispone que los procedimientos relativos se desarrollarán en forma autónoma e independiente, no significa que en el ámbito sancionador administrativo dejen de imperar los principios constitucionales que rigen en materia penal, como es el relativo a la exacta aplicación de la ley (*nullum crimen*,

[121] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, julio de 2000 Tesis: 2a. LXVI/2000 Página: 152 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada; Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, septiembre de 2001 Tesis: 2a. CLXXXIII/2001 Página: 718 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 2164/99. Fernando Ignacio Martínez González. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

sine lege y *nulla poena*, *sine lege*), que constituye un derecho fundamental para todo gobernado en los juicios del orden criminal, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Federal, sino que tal principio alcanza a los del orden administrativo, en cuanto a que no se podrá aplicar a los servidores públicos una sanción de esa naturaleza que previamente no esté prevista en la ley relativa. En consecuencia, la garantía de exacta aplicación de la ley debe considerarse, no sólo al analizar la legalidad de una resolución administrativa que afecte la esfera jurídica del servidor público, sino también al resolver sobre la constitucionalidad de la mencionada ley reglamentaria, aspecto que generalmente se aborda al estudiar la violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales con los que aquél guarda íntima relación.

6. VIOLACIÓN EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE LA PREVÉ COMO DELITO, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.[122]

La citada garantía, contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proscribe la imposición por simple analogía y aun por mayoría de razón, de penas que no estén decretadas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, lo que tiene su origen en los principios *nullum crimen sine lege* y *nulla poena sine lege*, conforme a los cuales un hecho que no esté señalado en la ley como delito no será considerado como tal y que todo hecho relacionado en la ley como delito debe prever expresamente la pena que le corresponde. Si se toma en consideración lo anterior, resulta inconcuso que el artículo 177 del Código Penal del Estado de Baja California, al prever como delito la violación equiparada, no transgrede la mencionada garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, en virtud de que contiene los elementos de toda norma punitiva, al describir la conducta o hecho delictivo y señalar expresamente la pena aplicable a quien lo comete, esto es, al tipificar el delito de violación equiparada, cuyo bien jurídico tutelado es la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y cuya consumación del injusto prevé la imposición de una sanción de diez a quince años de prisión y hasta quinientos días multa.

---

[122] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: 2a. CCVII/2001 Página: 444 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo directo en revisión 1129/2001. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Constanza Tort San Román.

7. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.[123]

> La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.

8. FALSEDAD DE DECLARACIÓN RENDIDA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL. EL ARTÍCULO 247, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, PUBLICADO EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN APLICABLE A DICHO DELITO, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL.[124]

> El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. IX/95, de rubro: “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA

---

[123] Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: I, mayo de 1995; Tesis: P. IX/95; Página: 82; Precedentes: Amparo directo en revisión 670/93. Reynaldo Álvaro Pérez Tijerina. 16 de marzo de 1995. Mayoría de siete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de mayo en curso, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios y Olga María Sánchez Cordero; aprobó, con el número IX/95 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

[124] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, junio de 2001 Tesis: 1a. XLV/2001 Página: 238 Materia: Consti-

PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo I, mayo de 1995, página 82, que la mencionada garantía, prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la ley, ya que el mandato constitucional exige, para su cabal cumplimiento, que también la ley sea concebida en forma tal que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos, delito y pena, sean claros, precisos y exactos, a fin de evitar confusión en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Ahora bien, en congruencia con tal criterio, debe decirse que al disponer el artículo 247, fracción I, del código punitivo citado que la sanción aplicable al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad, será de dos a seis años, en adición a una multa de cien a trescientos días de multa, viola la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque al establecer como sanción a la conducta típica consistente en falsedad de declaración rendida ante autoridad pública distinta de la judicial, "de dos a seis años", el legislador no precisó debidamente la consecuencia jurídica del delito de que se trata, creando incertidumbre en la aplicación de la pena y permitiendo la actuación arbitraria de la autoridad encargada de imponerla, o de otras autoridades, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, suponen que se trata de la pena de prisión. Además el mero establecimiento de un mínimo y un máximo de tiempo no conlleva, indefectiblemente, a considerar que la pena respectiva sea la de prisión, ya que no es ésta el único medio sancionatorio que la autoridad judicial puede imponer por un tiempo determinado, según se advierte del catálogo de penas contenido en el artículo 24 del referido Código Penal, que señala otras sanciones que pueden aplicarse por el mencionado periodo, a saber: tratamiento en libertad, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad, confinamiento, prohibición de ir a un lugar determinado, suspensión de derechos, inhabilitación o suspensión de funciones o empleos y vigilancia de la autoridad.

---

tucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 326/2000. 10 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. Amparo en revisión 37/2001. 28 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena.

9. LESIONES, LA OMISIÓN EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DE PREVER UN PLAZO DENTRO DEL CUAL SE DEBEN TENER COMO MORTALES, VIOLA LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY Y DE OBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.[125]

> Para cumplir con las garantías que establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 14 constitucional, la ley penal debe, por un lado, garantizar una adecuada defensa de los procesados y, por otro, señalar los requisitos de certeza necesarios para evitar confusiones y lograr la exacta aplicación de sus disposiciones. En efecto, identificándose el enlace entre las lesiones y la muerte, con una relación natural de causa a efecto, la certeza de esta causalidad requiere del señalamiento de una dimensión temporal que sólo el legislador puede válidamente fijar, pero cuya omisión origina el riesgo de que por quedar indeterminada e imprecisa la temporalidad dentro de la cual opera legalmente dicha vinculación, se pierda la certidumbre o seguridad de conceptos tan trascendentes para los gobernados, pues por el transcurso del tiempo surge la eventualidad de que causas ajenas a la lesión interfieran en el resultado, dificultando la exacta aplicación de la ley, por omisión de ésta. El Código Penal para el Estado de Nuevo León, que entró en vigor el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y uno, al suprimir el establecimiento del plazo dentro del cual debe tenerse como mortal una lesión, vulnera la garantía de exacta aplicación de la ley, garantía que en su cabal comprensión ha de abarcar tanto los actos propios de aplicación como la ley misma, respecto de la cual se debe exigir la certeza que permita una aplicación precisa a fin de lograr la seguridad jurídica que persigue dicha garantía; además, con la indeterminación temporal se conculcan las formalidades procesales de defensa pues se pierden, debilitan o desvanecen las posibilidades de obtener los elementos de convicción que habrían de aportarse para demostrar hechos distintos a los originalmente imputados y allegar al proceso, en consecuencia, los que resulten idóneos, conducentes y eficaces en relación con el delito que finalmente se le atribuya al procesado. Entonces, al no estar conce-

---

[125] Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: I, mayo de 1995; Tesis: P. VIII/95; Página: 86; Precedentes: Amparo directo en revisión 670/93. Reynaldo Álvaro Pérez Tijerina. 16 de marzo de 1995. Mayoría de siete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el quince de mayo en curso, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios y Olga María Sánchez Cordero; aprobó, con el número VIII/95 (9a.) la tesis que antecede. México, Distrito Federal, a quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

bido el Código Penal de que se trata, específicamente en sus artículos 308, 309 y 312, de manera tal que los destinatarios de dichas normas tengan la certeza de los hechos que se les imputan y se garantice así su audiencia respecto de hechos ciertos, ha de considerarse que tal ordenamiento sustantivo, en lo relativo, es violatorio de la Constitución General de la República.

10. INTERESES MORATORIOS PACTADOS EN EL PAGARÉ, POR EXISTIR DISPOSICIONES EXPRESAS Y DE EXACTA APLICACIÓN, NO ES SUPLETORIA LA LEY CIVIL COMÚN A LA MERCANTIL TRATÁNDOSE DE.[126]

Tratándose de intereses moratorios pactados en los títulos mercantiles, no es supletorio el Código Civil local, en razón de que versa respecto a un juicio derivado de un acto mercantil, que se rige por las disposiciones que contemplan tanto el Código de Comercio como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; pues la circunstancia de que se hayan impugnado los intereses moratorios pactados alegando que resultan usurarios, en nada puede influir en el sentido de la resolución, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Comercio, que en la parte que interesa, establece: "...Los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al de su vencimiento, el interés pactado para este caso...", y el diverso artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone en lo conducente que: "...Los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos..."; en el pagaré; luego entonces, al existir disposiciones expresas y de exacta aplicación, es evidente que no procede la aplicación supletoria de la ley civil común a la mercantil.

11. TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO TIENE FACULTAD PARA DECLARAR SOBRE LA EXACTA O INEXACTA APLICACIÓN DE UNA LEY.[127]

Si bien es verdad que existe como garantía individual consagrada por el artículo 14 Constitucional el principio de no retroactividad en la aplicación de

---

[126] Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XII-julio; Página: 234; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 45/93. Gaspar Pérez Pérez. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

[127] Quinta Época; Instancia: Segunda Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: CXXVIII; Página: 256; Precedentes: Amparo en revisión 1598/55. Francisco Padua L. 25 de abril de 1956. Cinco votos. Ponente: Alfonso Francisco Ramírez.

las leyes, también lo es que tal principio constituye una norma jurídica para la aplicación de las leyes en el tiempo, que puede verse no sólo en el precepto constitucional mencionado, sino en el artículo 5o. del Código Civil, y en otras disposiciones del mismo Código, así como en el artículo 7o. del Código Fiscal de la Federación, según el cual las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales federales entrarán en vigor en toda la República, salvo lo que cada una de ellas establezca, el décimo quinto día siguiente de su publicación, de lo que se infiere, a contrario *sensu*, que si las disposiciones legales rigen sólo después de su publicación, no pueden aplicarse para determinar los efectos jurídicos nacidos al amparo de una ley anterior, como consecuencia de un hecho concretamente determinado. Así pues, sin necesidad de que el Tribunal Fiscal de la Federación haga declaración alguna sobre violación de garantías, lo cual sí está reservado de manera exclusiva al Poder Judicial Federal por el artículo 103 Constitucional, dicho Tribunal está capacitado para resolver sobre la exacta o inexacta aplicación de una ley, por razón del tiempo de su vigencia.

12. GARANTÍA DE LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 250, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO LA VIOLA AL HACER REMISIÓN AL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.[128]

El citado precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de su reforma de mil novecientos setenta y cuatro, regulaba la garantía de la libertad de trabajo y establecía que las leyes estatales determinarían las profesiones que necesitarían título para su ejercicio, las condiciones que deberían llenarse para obtenerlo y las autoridades que deberían de expedirlo. Si en la época en que se aplicó el numeral 250, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 4o. constitucional no era una disposición atinente a materia laboral y de profesiones, puesto que su contenido se trasladó al artículo 5o. del propio Ordenamiento Fundamental, ello únicamente implica una omisión o falta de técnica jurídica del legisla-

---

[128] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, marzo de 1998 Tesis: P. XV/98 Página: 26 Materia: Constitucional, Penal. Precedentes: Amparo directo en revisión 2365/96. Eduardo Gutiérrez Alpizar. 10 de julio de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número XV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

dor al no haber reformado, al mismo tiempo que modificó el contenido de los artículos 4o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral ordinario penal; mas esa omisión no hace contrario al principio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al artículo 250, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, porque no desapareció de la Constitución la norma que permite a las legislaturas determinar qué profesiones requieren de título expedido por autoridades competentes.

13. DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO.[129]

Si bien es cierto que una norma de tránsito tiene como función regular el paso ordenado de una ley anterior a una nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de ésta, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, también lo es que tratándose de la derogación o abrogación de leyes penales sustantivas, la regulación que al respecto realice una norma de tránsito debe observar los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal y de retroactividad de la ley en beneficio del in-

[129] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, septiembre de 2000 Tesis: P. CXLIV/2000 Página: 21 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo en revisión 471/98. 8 de junio de 2000. Mayoría de seis votos. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Genaro David Góngora Pimentel. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXLIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil.

culpado, procesado o sentenciado, previstos, respectivamente, en los párrafos inicial y tercero del artículo 14 constitucional. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, al disponer que los tipos penales contenidos en la abrogada Ley Federal sobre el Derecho de Autor, específicamente el previsto en la fracción II de su artículo 135, seguirán vigentes por cuanto a la persecución, sanción y ejecución de sentencias por los hechos ejecutados hasta antes de su entrada en vigor, viola los principios constitucionales referidos, pues en el catálogo de figuras típicas reguladas en el título vigésimo sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, establecido en virtud del citado decreto, no se tipifica la conducta considerada anteriormente como delictiva en el aludido precepto de la abrogada ley autoral y, por ende, no se presenta una sucesión de normas sustantivas penales en el tiempo, al no preverse idénticas conductas típicas en la ley anterior y en la nueva, por lo que los hechos cometidos durante la vigencia de aquélla al dejar de tener el carácter delictivo no pueden surtir efecto alguno, y por ello, durante la vigencia de la nueva ley, ya no pueden ser objeto de persecución, investigación, procesamiento, ni de una sentencia condenatoria y su ejecución. Además, si se estimara vigente el mencionado artículo de la abrogada ley del derecho de autor, como la conducta tipificada en él dejó de tener el carácter delictivo en el ordenamiento vigente, constituiría una norma privativa prohibida en el artículo 13 constitucional, al aplicarse sólo a aquellos individuos ubicados en el supuesto normativo hasta antes de la entrada en vigor del ordenamiento penal.

14. DISPARO DE ARMA DE FUEGO, DELITO DE. EL ARTÍCULO 175 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 1995 QUE LO PREVÉ, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL CONSAGRADA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.[130]

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. IX/95, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 82, de rubro: “EXACTA APLICA-

[130] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, marzo de 2001 Tesis: 1a. VIII/2001 Página: 105 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada. Precedentes: Amparo directo en revisión 178/99. 10 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfonso Sierra Lam.

CIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA", interpretó el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, en el sentido de que la garantía de exacta aplicación de la ley penal en él contenida, no se circunscribe a los meros actos de aplicación sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la cual debe estar redactada de tal forma que los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que se señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Ahora bien, el artículo 175 del Código Penal para el Estado de Nuevo León vigente en 1995 que prevé que comete el delito de disparo de arma de fuego el que dispare poniendo en peligro la seguridad de una o más personas y que al responsable de dicho delito se le impondrá una pena de tres a cinco años de prisión y multa de veinte a cien cuotas, no viola la garantía constitucional de referencia. Lo anterior es así, porque al establecer el mencionado precepto la descripción de los elementos constitutivos del delito, a saber: a) que exista un arma de fuego; b) que alguien accione dicha arma; y, c) que se ponga en peligro la seguridad de una o más personas; así como la pena que debe imponerse al individuo cuya conducta encuadre en el ilícito, es inconcuso que el legislador sí especificó los elementos y características del tipo penal de disparo de arma de fuego, de manera clara, precisa y exacta, sin que la redacción de dicho precepto pueda dar lugar a confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado, respetándose con ello la garantía constitucional en cita.

15. ARMAS PROHIBIDAS. LA OMISIÓN DE INCLUIR A LOS CUCHILLOS EN LA DEFINICIÓN GENERAL QUE DE AQUÉLLAS ESTABLECE EL ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 1999).[131]

Es cierto que el artículo 233 del Código Penal del Estado de Coahuila no incluye a los cuchillos en la enumeración que hace de armas prohibidas, pues sólo se refiere a "puñales, verduguillos y demás armas ocultas o disimuladas en bastones y otros objetos, los *boxers*, manoplas, macanas, correas con balas, cables, pesas o puntas...", pero igualmente cierto resulta que a conti-

[131] Precedentes: Amparo en revisión 22/2000. 19 de mayo del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

nuación expresa "y otros instrumentos similares a los señalados con anterioridad, que potencialmente sirvan para agredir", dentro de los cuales, obviamente, están comprendidos los cuchillos, sin que su inclusión a título de "instrumentos similares" implique violación, por el legislador, de la garantía de exacta aplicación de la ley penal que establece el artículo 14, párrafo tercero, constitucional, porque a pesar de la falta de un listado exhaustivo de las armas (lo que sería materialmente imposible), el precepto impugnado cumple con la citada garantía constitucional al establecer la enumeración ejemplificativa de mérito y señalar que son armas prohibidas los instrumentos similares que potencialmente sirvan para agredir.

16. VIOLACIÓN EQUIPARADA. LA AUTORIDAD JUDICIAL INFRINGE LA GARANTÍA DE APLICACIÓN EXACTA DE LA LEY PENAL, CUANDO INVOCA LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA SOSTENER COMO CONDUCTA ILÍCITA LA INTRODUCCIÓN POR VÍA ANAL O VAGINAL, DE CUALQUIER OBJETO DISTINTO DEL MIEMBRO VIRIL, EN UNA PERSONA MENOR DE DOCE AÑOS DE EDAD, SIN MEDIAR NINGUNA ESPECIE DE VIOLENCIA.[132]

En las disposiciones antes referidas, el legislador estableció como conductas equiparables al delito de violación, respectivamente: a) cópula con persona menor de doce años de edad y, b) introducción por vía anal o vaginal, de cualquier objeto distinto del miembro viril, mediante violencia física o moral. Luego, si la autoridad judicial mezcla elementos de ambos tipos, para convenir en uno que releva de la prueba de violencia a una menor de doce años de edad, que sufrió, vía vaginal, la introducción de los dedos de la mano del sujeto activo, aprovechando que la primera disposición no exige el em-

---

[132] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, septiembre de 2000 Tesis: VI.2o.P.4 P Página: 827 Materia: Penal Tesis aislada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 88/2000. 7 de julio de 2000. Mayoría de votos-Disidente: Tarcicio Obregón Lemus. Ponente: Diógenes Cruz Figueroa. Secretaria: Yolanda Leticia Escandón Carrillo. Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 927, tesis VI.4o.14 P, de rubro: "VIOLACIÓN EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 272 DEL CÓDIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. NO SE INTEGRA ESTE DELITO CUANDO LA INTRODUCCIÓN POR VÍA ANAL O VAGINAL, DE CUALQUIER OBJETO DISTINTO DEL MIEMBRO VIRIL, SE EJECUTA EN UNA PERSONA MENOR DE DOCE AÑOS DE EDAD, PERO SIN USAR EL SUJETO ACTIVO VIOLENCIA FÍSICA O MORAL".

pleo de la fuerza o del amago en una víctima de esa índole (menor de dicha edad), viola la garantía mencionada, prevista en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que se actualiza en la tipificación previa de la conducta o hecho que se reputen como ilícitos, y por lo mismo, impone también una pena por analogía, en la medida que el Juez determina una conducta inexistente en la ley como delito.

Sinopsis:

a) La exacta aplicación de la ley en materia penal se sintetiza mediante el principio general nullum crimen, nulla poena sine lege, *que significa que no puede perseguirse ninguna conducta como presuntamente delictiva si no se encuentra prevista mediante un tipo penal anterior al hecho.*

b) Esta garantía se encuentra consagrada en el siguiente párrafo del artículo 14 Constitucional: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata".

VI. Garantía de audiencia

Cuando se estudia la garantía de audiencia, se descubre que ésta es quizá la que ha contado con más precedentes históricos. Como veíamos al inicio de este estudio, instituciones como el *Hábeas Corpus*, o las primeras declaraciones modernas, han previsto que toda persona tenga la posibilidad de ser oída y vencida en juicio cuya normatividad debe ser previa al proceso respectivo ("Por regla general la audiencia debe ser previa a la emisión del acto afectatorio").[133] Desde luego, este juicio deberá contener una serie de características muy concretas. "La garantía de audiencia y debido proceso legal son derechos que tienen una cobertura jurídica muy amplia a favor de las personas (físicas y morales o colectivas), ya que está conformada por una serie de requisitos y condiciones que deben observarse por la autoridad para que válidamente determine los alcances jurídicos de los derechos de una persona

[133] J. Reyes Tayabas, *Derecho constitucional aplicado a la especialización en amparo*. México, Themis, 1997, p. 287.

concreta..."[134] En nuestro derecho "La Constitución mexicana expresa que a ninguna persona se le podrá privar de sus intereses jurídicamente protegidos, como son la vida, la libertad, las propiedades o sus posesiones o derechos, si antes no ha mediado un juicio ante tribunales previamente establecidos, en el que deberán cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento..."[135] En este orden de ideas, veamos lo que Ignacio Burgoa explica:

> Como se puede advertir, la garantía de audiencia está contenida en una fórmula compleja e integrada por cuatro garantías específicas de seguridad jurídica [...] que son: a) la de que en contra de la persona, a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio; b) que tal juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades esenciales del procedimiento, y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio.[136]

La interpretación general que ha sentado jurisprudencia, comprende que la garantía de audiencia se manifiesta en la "oportunidad de hacer valer los derechos que en defensa de sus intereses (del gobernado) convenga".[137]

---

[134] J. J. Orozco Henríquez y J. C. Silva Adaya, *Los derechos humanos de los mexicanos*. México, CNDH, 2002, p. 27.

[135] E. Badillo, V. Martínez y J. L. Soberanes, *op. cit.*, p. 52.

[136] I. Burgoa, *Las garantías individuales*, pp. 524-525.

[137] Rubro: GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE TERRENOS BALDÍOS Y NACIONALES, DEMASÍAS Y EXCEDENCIAS VIOLA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. Tesis Seleccionada; Instancia: Pleno Época: Octava Época; Localización: Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: VI Primera Parte; Tesis: P. L/90; Página: 33; Texto: "El artículo 55 de la Ley de Terrenos Baldíos y Nacionales, Demasías y Excedencias viola la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución, al ordenar que se notifique el deslinde a los colindantes, que sean personas conocidas, por medio de publicaciones en el *Diario Oficial* de la Federación, en el Periódico Oficial de la entidad federativa correspondiente, en el periódico de mayor circulación de la región y en las oficinas municipales. Es por ello que al no estatuir tal precepto la notificación personal a los propietarios y poseedores de esos predios priva a estos sujetos de la oportunidad de hacer valer los derechos que en defensa de sus intereses convenga, situación que determina concluir que el precepto combatido es inconstitucional".

Precedentes: Amparo en revisión 1978/88. Esperanza Delgado Villarreal viuda de Rodríguez y otro. 17 de enero de 1990. Unanimidad de diecinueve votos en la materia

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Garantía de Audiencia

1. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ES NECESARIO LLAMAR A TODOS LOS INTERESADOS EN LA TRAMITACIÓN DE ESAS DILIGENCIAS PARA RESPETAR SU GARANTÍA DE AUDIENCIA.[138]

> Si a la quejosa le fueron adjudicados diversos inmuebles embargados en un juicio laboral y posteriormente la demandada en ese juicio promueve diligencias de jurisdicción voluntaria para solicitar la inscripción en el Registro Público sobre tales bienes que no estaban matriculados y que ya habían sido escriturados a la hoy inconforme, habiendo obtenido aquélla resolución

---

de la revisión de su competencia, modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías respecto del refrendo de la Ley de Terrenos Baldíos reclamada, de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente en funciones González Martínez; por mayoría de diecisiete votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente en funciones González Martínez, se resolvió conceder el amparo en relación con el artículo 55 de la ley reclamada, y las señoras ministras Adato Green y Moreno Flores, votaron en contra. Ausentes: Castañón León y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Roberto Avendaño. Tesis número L/90, fue aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada celebrada el martes dieciocho de septiembre en curso. Unanimidad de diecinueve votos de los señores ministros: Presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Salvador Rocha Díaz, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa. NOTA: Esta tesis también aparece publicada en la *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*, número 34, octubre de 1990, pág. 54.

[138] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, septiembre de 1997 Tesis: III.3o.C.63 C Página: 700 Materia: Civil; Precedentes: Amparo en revisión 109/97. Minerales y Minas Mexicanas, S. A. de C. V., antes Promotora México de Manganeso, S. A. de C. V. 27 de junio de 1997. Mayoría de votos. Disidente y ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: María Elena Ruiz Martínez.

favorable en tales diligencias, se considera que sí debió haberse llamado al trámite de las mismas a la mencionada agraviada, no sólo por contar con el título de propiedad respecto de los inmuebles, sino también para cumplir con la garantía de audiencia.

2. MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 29 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.[139]

El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al establecer que los contribuyentes con local fijo tienen la obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general en las máquinas de comprobación fiscal, no viola la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, pues su propósito fundamental no es el de imponer a esta clase de contribuyentes un acto de privación, sino una prestación de hacer, que se instrumenta a opción de los obligados, mediante dos mecanismos; en uno, derivado de la relación de este artículo con el 53-C de la Ley Federal de Derechos, el particular recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la máquina respectiva y está obligado a pagar los derechos fiscales que por los conceptos de asignación y uso se previenen; en el otro, derivado de aquel precepto en relación con el 29-A del reglamento del citado código, el obligado adquiere la máquina de los fabricantes o importadores autorizados por esa dependencia. En el primer supuesto, el acto de privación no deriva del deber de adquirir la máquina, pues ésta se les

---

[139] Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, febrero de 1997; Tesis: P./J. 9/97; Página:98. Amparo en revisión 394/93. Central de Pinturas y Vidrios, S. A. de C. V. 2 de septiembre de 1993. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz; Amparo en revisión 934/93. Grupo Asociado Internacional, S. A. de C. V. 27 de febrero de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Sergio Eduardo Alvarado Puente; Amparo en revisión 1444/95. Superetes Comercial, S. A. de C. V. 4 de noviembre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason; Amparo en revisión 2061/95. Dolores Solloa Junco y otro. 4 de noviembre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez; Amparo en revisión 283/96. Maderas y Triplay del Golfo, S. A. de C. V. 4 de noviembre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Fernández. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinte de enero en curso, aprobó, con el número 9/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil novecientos noventa y siete.

asigna para su uso por la secretaría, sino de su obligación de pagar los derechos respectivos, razón por la cual se satisface la garantía de audiencia conforme al criterio excepcional que en materia impositiva ha sostenido este órgano colegiado, pues la determinación del crédito derivado de la aplicación de tales preceptos, podrá ser combatida en el recurso administrativo de revocación o en el juicio contencioso-administrativo con arreglo a los artículos 2o., fracción IV y 117, fracción I, del propio ordenamiento en relación con el 23, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. En el segundo supuesto, la adquisición de la máquina directamente de sus fabricantes o importadores en ejercicio de la opción concedida por las normas reclamadas a los contribuyentes que, por estimarlo favorable a sus intereses, prefieren sustraerse del programa de asignación a fin de elegir la maquinaria más idónea y útil para sus objetivos empresariales, no implica, obviamente, un acto de privación impuesto unilateralmente por el Estado respecto del cual debiera observarse la garantía de audiencia previa, pues el pago del precio deriva de un contrato celebrado en ejercicio de la voluntad del contribuyente que no se traduce en una disminución patrimonial, sino en el ingreso a su peculio de un bien.

3. ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. LAS LEYES O CÓDIGOS QUE LO PREVÉN SIN ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PREVIO EN QUE SE ESCUCHE AL POSIBLE AFECTADO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.[140]

No es necesario que las leyes o códigos que establecen el arresto como medida de apremio instrumenten un procedimiento para escuchar al posible

[140] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, abril de 1998 Tesis: P./J. 24/98 Página: 5 Materia: Común; Precedentes: Amparo en revisión 288/96. Javier Fernández Elizondo. 21 de octubre de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 1362/96. Materiales y Block Monterrey, S. A. de C. V. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. Amparo en revisión 616/97. Vending Club, S. A. de C. V. 4 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 1436/97. Juan López Campa. 1 de diciembre de 1997. Once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Enrique Zayas Roldán. Amparo en revisión 2940/96. Roberto Bernal Melgoza y coag. 2 de diciembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de marzo en curso, aprobó, con el número 24/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

afectado y darle oportunidad de aportar pruebas antes de decretarlo como medida de apremio, pues con éste sólo se persigue obligar al contumaz a acatar las determinaciones y resoluciones dictadas dentro de un procedimiento judicial o después de concluido y, además, por encima del interés meramente individual del afectado con la medida de apremio, se encuentra el interés de la sociedad en que se instrumenten los medios necesarios para que las resoluciones y determinaciones judiciales se cumplan a la brevedad posible, con el propósito de que sea efectiva la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, consistente en la administración de justicia pronta, completa e imparcial, la cual se vería seriamente menoscabada si tuviera que escucharse previamente al posible afectado con la medida de apremio. Por ello, para el cumplimiento de la garantía de audiencia no es necesaria la oportunidad de defensa previa al acto de afectación, pues ella debe darse con posterioridad, a fin de no afectar la efectividad y expeditez de la administración de justicia que exige el interés público.

4. AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL.[141]

La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos de los gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de convicción que aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con

[141] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, abril de 1998 Tesis: P. XXXV/98 Página: 21 Materia: Común; Precedentes: Amparo en revisión 1664/97. Jorge Navarro Islas. 17 de febrero de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de marzo en curso, aprobó, con el número XXXV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea para tal efecto.

5. GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y VII, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA.[142]

En síntesis, la norma citada establece que cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se le revocará cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto o no cumpla con alguna de las obligaciones que contrajo al obtener el beneficio. Ahora bien, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las garantías de libertad, de audiencia previa, y al principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular; luego, la revocación de la libertad provisional bajo caución, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución de la pena, también es una excepción a las citadas garantías porque, no obstante que priva de la libertad al procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, de ahí que en este caso no requiere darse audiencia previa al inculpado sino posterior, máxime que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad provisional bajo caución, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la práctica jurisdiccional.

6. AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.[143]

Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el

---

[142] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, abril de 1998 Tesis: P. XXI/98 Página: 22 Materia: Constitucional, Penal; Precedentes: Amparo en revisión 1028/96. Carlos Mendoza Santos. 13 de enero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

[143] Instancia: Pleno; Séptima Época; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo I, Parte SCJN; Tesis: 79; Página: 93; Séptima Época: Amparo en revisión 5032/69. Fábrica de Aceites

artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos.

7. COOPERACIÓN, COBRO DE DERECHOS DE. CUANDO SE ADOPTA EL SISTEMA DE DERRAMA DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.[144]

Este Alto Tribunal invariablemente ha estimado que en casos de cobro de derechos de cooperación, mediante el sistema de derrama, es necesario oír a los causantes de los mismos, antes de fijar su monto e iniciar la ejecución de las obras relativas, a fin de no infringir en su perjuicio el artículo 14 constitucional.

8. AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CARGA DE LA PRUEBA PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE.[145]

La afirmación del quejoso en el sentido de que no se le citó ni se le oyó en defensa, que integra una negativa, obliga a las responsables a demostrar lo

---

"La Rosa", S. A. 2 de mayo de 1973. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 250/58. Guadalupe Landa Escandón y coags. 3 de julio de 1973. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 6714/57. Ma. Teresa Chávez Campomanes y coags. 10 de julio de 1973. Unanimidad de dieciocho votos. Amparo en revisión 6194/57. Ana Shapiro de Zundelevich. 9 de octubre de 1973. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 1229/59. José Martínez Moure. 6 de junio de 1974. Unanimidad de quince votos.

[144] Instancia: Pleno; Séptima Época; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo I, Parte SCJN; Tesis: 100; Página: 110; Precedentes: Séptima Época: Amparo en revisión 2559/69. Rita Leal vda. de Montemayor. 2 de febrero de 1971. Unanimidad de dieciséis votos. Amparo en revisión 3429/69. Edificios e Inversiones Monterrey, S. A. 2 de febrero de 1971. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 3673/69. Sergio Martínez Ayala y otra. 2 de febrero de 1971. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 2981/70. "Inversiones Urbanas Monterrey", S. A. 9 de febrero de 1971. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 9536/50. Rafael Manzo. 27 de agosto de 1974. Unanimidad de quince votos.

[145] Instancia Pleno, SCJN, Precedentes: Séptima Época: Amparo en revisión 5804/57. Santiago Nieto Lara y coags. 19 de febrero de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Amparo

contrario, para desvirtuar la violación del artículo 14 constitucional que se reclama.

9. AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE.[146]

En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional.

Sinopsis:

a) La garantía de audiencia, consiste en el derecho elemental de todo sujeto para acudir en su defensa ante el órgano decisorio competente.

b) Los requisitos establecidos en la Constitución General para el ejercicio de este derecho son:

1) Que se podrá privar de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos.

2) Que deban cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento.

---

en revisión 3494/73. J. Jesús Barragán Valencia y otros. 23 de enero de 1974. Cinco votos. Amparo en revisión 2667/73. Samuel Mondragón Quezadas. 7 de febrero de 1974. Cinco votos. Amparo en revisión 1917/73. Vicente Brambila Albertos y otros. 20 de marzo de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 4055/73. Otilia Flores Cabrera. 5 de junio de 1974. Cinco votos.

[146] Instancia: Segunda Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo VI, Parte SCJN; Tesis: 82; Página: 54; Precedentes: Séptima Época: Amparo en revisión 3364/49. Joaquín Velázquez Pineda y coags. 11 de julio de 1949. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 4722/70. Poblado de Las Cruces (ahora Francisco I. Madero), Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. 25 de febrero de 1971. Cinco votos. Amparo en revisión 3372/73. Carmen Gómez de Mendoza. 14 de marzo de 1974. Cinco votos. Amparo en revisión 2422/73. Adolfo Cárdenas Guerra. 28 de marzo de 1974. Cinco votos. Amparo en revisión 2712/73. Ernesto Elías Cañedo. 18 de septiembre de 1974. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: Tesis 3, Informe 1974, Segunda Parte, pág. 25.

3) Que se fundamente el juicio en leyes previas a los hechos.

c) La doctrina jurisprudencial ha enfatizado que la garantía de audiencia es una obligación a cargo de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado o quejoso para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses.

d) Esta garantía es consagrada en el artículo 14 constitucional que establece lo siguiente: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

VII. La seguridad jurídica en el derecho penal

Hemos visto algunas de las garantías individuales de mayor trascendencia en materia de seguridad jurídica. Algunas inciden en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, hemos encontrado ejecutorias sobre la exacta aplicación de la ley. Sin embargo, hay casos específicos que la propia constitución ha constreñido a la materia y proceso penal. Iniciemos pues, por la garantía de un auto de formal prisión. Esta garantía se encuentra contenida en el artículo 19 constitucional, que a la letra dice:

> Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.
>
> Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a procesos. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Veamos, a continuación lo que comenta Sergio García Ramírez:

Me referiré ahora a las consecuencias jurídicas —que sustentan sendas consecuencias materiales— del auto de formal prisión y del auto de sujeción a proceso. [...] esos autos fijan, estrictamente, el tema del proceso: su materia, su objeto, la cuestión litigiosa; sólo a ésta se referirá el proceso; a ella dirigirán las pruebas de cargo y descargo; en ella se concentrarán los alegatos de la acusación y la defensa; a ella se contraerá la sentencia. El auto de formal prisión y el de sujeción a proceso son, pues, el límite de la sentencia, que no puede agregar punto alguno a los hechos delictuosos contemplados en aquéllos.[147]

Jesús Zamora Pierce explicita las consecuencias del auto de formal prisión:

El texto constitucional atribuye al auto de formal prisión las siguientes consecuencias:

1. *Justifica la prisión preventiva*. De los artículos 18 y 19 Constitucionales resulta que, si se imputa a una persona delito que merezca pena corporal, y si por esa causa se le priva de su libertad, su detención sólo podrá exceder del término de tres días si se justifica con un auto de formal prisión.

2. *Fija la litis*. [...]

3. *Suspende las prerrogativas del ciudadano*. Del artículo 38, fracción II, Constitucional resulta que por estar sujeto a un proceso criminal, por delito que merezca pena corporal, se suspenden los derechos y las prerrogativas del ciudadano, a contar desde la fecha del auto de formal prisión.

4. *Determina el inicio del plazo que fija la Constitución para dictar sentencia*. [...]".[148]

---

[147] Sergio García Ramírez, en *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada*, t. I, p. 304.

[148] Jesús Zamora Pierce, *Garantías y proceso penal*. México, Porrúa, 2001, pp. 90-91. Las prerrogativas del ciudadano se consagran en el artículo 35 constitucional, que establece:

A su vez, explica Jorge Alberto Mancilla Ovando:

> El auto de formal prisión, es un acto de autoridad dentro del juicio penal, que establece: a) La declaración del juzgador de que existen motivos bastantes para convertir la detención en prisión preventiva; b) Que se sujeta a proceso penal al acusado por el delito o delitos en que se funda la acción penal del Ministerio Público, c) Ordena se abra el juicio en su periodo de instrucción y se brinda a las partes el derecho de ofrecer pruebas dentro del término previsto por la Ley Reglamentaria, facultándose el desahogo de aquéllas que lo requieran en el periodo de instrucción.[149]

Cabe aclarar que "En el juicio punitivo el auto de formal prisión, no vicia la garantía de audiencia de los gobernados; ya que al ordenarse que la detención se convierta en prisión preventiva, tiene como fin procesal asegurar que el acusado no se fugue u oculte, paralizando la marcha del proceso".[150] En resumen, Efraín Polo Bernal especifica:

> *El auto de formal prisión* es, entonces, un acto de autoridad dentro del proceso penal que establece la declaración del juzgador de que existen motivos bastantes para a) Convertir la detención en prisión preventiva, b) sujetar a proceso al acusado por el delito o delitos en que se funda la acción penal, c) se abra juicio en su período de instrucción con oportunidad de pruebas dentro del término reglamentario, y d) impulsar el procedimiento hasta llegar al estado de dictar sentencia.
>
> Los requisitos de forma, que es preciso cumplir en un mandamiento de esa naturaleza, son: a) El delito que se impute al acusado y sus elementos constitutivos, b) las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lugar; y c) los datos que arroje la averiguación previa.[151]

"Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes, y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición".

[149] J. A. Mancilla Ovando, *op. cit.*, p. 188.

[150] *Idem*.

[151] E. Polo Bernal, *op. cit.*, p. 198.

Así las cosas, en cuanto las exigencias formales del auto de formal prisión, veamos la siguiente tesis, cuyo rubro dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ESTUDIO PREFERENTE DE LOS ELEMENTOS DE FORMA":

> Es preferente estudiar y analizar si un acto de molestia de autoridad, que sea reclamado en amparo, contiene o no la debida motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en el caso de los autos de formal prisión, si se aprecia que no están debidamente motivados, lo que es un requisito de forma, se debe conceder el amparo que se solicite, por dicha falta de motivación, sin ser menester que se analice si se satisfacen los requisitos de fondo, ya que dicho análisis, en su caso, será objeto de diversa resolución que se dicte debidamente fundada y motivada. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.[152]

En este orden de ideas, es igualmente interesante la siguiente tesis, cuyo rubro se titula: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO". El texto del sumario es bastante explícito:

> Cuando el amparo se concede por vicios de forma, y únicamente el quejoso recurre, aduciendo cuestiones de fondo, el tribunal revisor está impedido para analizarlas, toda vez que es incierta la futura existencia del acto originalmente impugnado, por virtud del cumplimiento que a la ejecutoria respectiva dé la autoridad responsable, máxime que de analizar el fondo se corre el grave riesgo de emitir un pronunciamiento que realmente perjudique al quejoso, en detrimento del principio *non reformatio in peius*, tal como lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 15/2000, consultable en la página 264, Tomo XII, noviembre de 2000, del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PRINCIPIO DE *NON REFORMATIO IN PEIUS* EN EL RECURSO DE REVISIÓN". PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.[153]

---

[152] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, abril de 1996; Tesis: II.1o.P.A.14 P; Página: 345; Precedentes: Amparo en revisión 140/95. Juan Manuel Lucía Ibarra. 22 de junio de 1995. Mayoría de votos. Ponente: Luis Pérez de la Fuente. Disidente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: Marco Antonio Téllez Reyes.

[153] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, julio de 2002 Tesis: IV.1o.P.3 P Página:

Empero, ha sido un criterio predominante que se enfatice el estudio por el tribunal conocedor del amparo de los requisitos de fondo. Si éstos faltan, el amparo se concedería de manera absoluta. Veamos la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CONCEDE CONTRA EL". El texto establece lo siguiente:

> Para dictar un auto de formal prisión, son indispensables requisitos de fondo y forma que la Constitución señala; y si faltan los primeros, esto basta para la concesión absoluta del amparo; pero si los omitidos son los de forma, la protección debe otorgarse para el efecto de que se subsanen las deficiencias relativas.[154]

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en materia penal, "el auto de formal prisión"

1. AUTO DE FORMAL PRISIÓN CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 SINO EL 19 CONSTITUCIONAL.[155]

> En los casos en que un auto de formal prisión carece de fundamentación y motivación no es directamente violatorio del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como inexactamente se sostiene

---

1253 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 653/2001. 2 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María Luisa Martínez Delgadillo. Secretario: Héctor Manuel Banda Flores.

[154] Quinta Época; Localización; Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 50; Página: 28; Precedentes; Quinta Época: Amparo en revisión 915/27. Sánchez Román. 8 de noviembre de 1929. Cinco votos. Amparo en revisión 2568/29. Navarrete Germán. 12 de febrero de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 3617/29. Aguilar Gonzalo. 5 de marzo de 1931. Cinco votos. Amparo en revisión 4320/30. Máttar y Fádul José. 12 de febrero de 1932. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 4195/43. Álvarez Francisco. 23 de agosto de 1943. Unanimidad de cuatro votos.

[155] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: IV, octubre de 1996; Tesis: XIII.1o.5 P; Página: 500; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 393/96. Juez Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. 30 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretaria: Juana Martha López Quiroz.

en la sentencia recurrida, pues este precepto que se refiere a tales requisitos respecto de actos de molestia de autoridad en general, no es aplicable al precitado acto, por existir un artículo específico como es el 19 que prevé los requisitos indispensables para emitirlo, pues es absolutamente lógico que cuando la autoridad responsable examina, y no simplemente cita, las pruebas existentes en la causa para resolver si con ellas se acreditan los elementos de un tipo penal contenido en un artículo determinado, así como la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito imputado, previsto y sancionado por preceptos específicos, está con ello motivando y fundando su resolución, por ser la fundamentación y la motivación inherentes a los propios requisitos de un auto de formal prisión.

2. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES ILEGAL CUANDO LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO SE FUNDAMENTA EN EL SEÑALAMIENTO DEL OFENDIDO QUE MANIFESTÓ CONOCER DEL DELITO POR TERCEROS.[156]

Cuando consta en la causa penal que el sujeto pasivo tuvo conocimiento del hecho delictuoso a través de terceros, como lo es si manifiesta que unas personas le avisaron de la consumación del ilícito, es evidente que el señalamiento que hace del sujeto activo carece de veracidad, pues no es posible aceptar que al ofendido le consta quién participó en el evento penal; en consecuencia, el auto de formal prisión que declara comprobada la probable responsabilidad del indiciado sustentándose en el señalamiento de la víctima que tuvo conocimiento indirecto del ilícito, es violatorio de garantías individuales.

3. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, SI NO SE HACE EL ESTUDIO DEL CONJUNTO DE HECHOS QUE INTEGRARON LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO CON PRUEBAS EVIDENTES.[157]

No se acredita con plenitud lo ordenado por el artículo 19 constitucional, si el auto de formal prisión no se sustenta en un conjunto de hechos que inte-

---

[156] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: IV, agosto de 1996; Tesis: VI.2o.92 P; Página: 632; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 253/96. José Abraham Flores Rosas. 12 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

[157] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: IV, agosto de 1996; Tesis: X.1o.14 P; Página:

gren los datos suficientes para justificar la probable responsabilidad de una persona con pruebas evidentes, pues además, los antecedentes que arroje la averiguación deben ser suficientes, no para hacerla posible, entendiéndose como tal la calidad de poder ser, de ser factible, sino de hacerlo verosímil, que se pueda probar; que el artículo 19 constitucional no tiene el alcance estrecho que se le ha conferido, sino uno mayor, puesto que no es posible admitir que sea rigorista en su parte objetiva, al expresar que el tipo penal debe quedar comprobado necesariamente y tolerante en su parte subjetiva, concediendo con ello que con simples datos pueda restringirse la libertad de una persona con todas las graves consecuencias que tal acto trae aparejado en el orden moral, social, económico, familiar y jurídico; y si la autoridad responsable no efectuó en el proceso relativo la valoración de todas las pruebas que obran en la causa penal, principalmente la relativa a que no estuvo presente el día en que sucedieron los hechos imputados, resulta claro que se violó en perjuicio del quejoso el precepto constitucional en cita.

4. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ILEGALIDAD DEL, CUANDO LA ACCIÓN PERSECUTORIA DEL DELITO SE ENCUENTRA PRESCRITA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).[158]

De la interpretación armónica de los artículos 19 constitucional, 211 y 212 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, se deduce que el auto de formal prisión sólo podrá decretarse cuando se encuentren reunidos los elementos que acrediten el tipo penal y existan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado y no concurra en favor del indiciado alguna causa excluyente de responsabilidad o que extinga la acción persecutoria; por tanto, si en la causa penal se dicta auto de formal procesamiento por un delito respecto del cual ha operado la prescripción de la acción penal, tal auto es ilegal y por consecuencia es violatorio de garantías individuales en perjuicio del quejoso, pues en esa hipótesis existe un obstáculo legal para el ejercicio de la acción penal y por ende para dictar el auto de formal prisión.

633; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 47/96. Alfonso Alonso Arcos. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretario: Rigoberto Ochoa Murillo.

[158] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: IV, agosto de 1996; Tesis: VI.2o.101 P; Página: 633; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 273/96. Bonifacio y Víctor ambos de apellidos Flores Montero. 3 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado por ministerio de ley, José Mario Machorro Castillo. Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres.

5. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES INCONSTITUCIONAL EL QUE TOMA EN CUENTA HECHOS QUE FUERON MATERIA DE UNA CAUSA ANTERIOR.[159]

De la interpretación del artículo 23 constitucional, que establece que: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene...", se concluye que la prohibición mencionada comprende no sólo los casos en que se haya dictado una sentencia definitiva que decidiera sobre la demostración del delito y la responsabilidad penal, sino también aquellos en que no obstante no haberse dictado la citada resolución, exista determinación que tiene procesalmente los mismos efectos de una sentencia.

6. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA FALTA DE PRUEBAS DEL INDICIADO NO ACREDITA SU PROBABLE RESPONSABILIDAD.[160]

Conforme a lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, el requisito de la probable responsabilidad para dictar auto de formal prisión, se cumple cuando en la causa penal existen datos suficientes para acreditar la imputación de un hecho delictuoso, correspondiendo en todo caso al Ministerio Público aportar los elementos de convicción que hagan probable la responsabilidad del inculpado; por tanto, el auto de formal prisión que se sustenta en la falta de pruebas del indiciado para desvirtuar la incriminación que se le hace, infringe la disposición constitucional mencionada, ocasionando violación de garantías individuales.

7. AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO CON POSTERIORIDAD AL DE LIBERTAD, IMPLICACIONES DEL.[161]

Si la responsable, con posterioridad al auto de libertad, decreta al quejoso formal prisión, tomando en cuenta que el representante social aportó al sumario, nuevos elementos de prueba, y ordena su reaprehensión; en tal circunstan-

---

[159] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: VI.2o.68 P; Página: 791; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 170/96. Emilio Gomar Hernández. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

[160] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, junio de 1996; Tesis: VI.2o.73 P; Página: 791; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 104/96. David Eduardo Ramírez Juárez. 9 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Magistrado por ministerio de ley José Mario Machorro Castillo. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

[161] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, mayo de 1996; Tesis: XXI.1o.18 P; Página:

cia, se infringe lo dispuesto por el artículo 90 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por ende se violan las garantías contenidas en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, para que el Juez de la causa pueda dictar el acto recurrido, el Ministerio Público debe ejercitar de nueva cuenta acción penal en contra del impetrante, solicitando su reaprehensión, y una vez lograda se deben observar las prescripciones de los preceptos constitucionales descritos.

8. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES EN EL, CUANDO SE DEBA DECRETAR LA SUBSUNCIÓN DE MODALIDADES EN UN DELITO CONTRA LA SALUD, SINO QUE DEBE SER EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.[162]

Como el delito contra la salud puede configurarse por una o más de las diversas modalidades que señalan los artículos 194 y 195 del Código Penal Federal, no es en el auto de formal prisión donde el juzgador se encuentra constreñido a decretar la subsunción de modalidades, sino hasta que culmine el período de instrucción al dictar sentencia definitiva, pues es donde tendrá una apreciación más completa y precisa a través de los elementos de prueba que aporten las partes, surgiendo en ese momento su obligación a decretar la subsunción correspondiente, es decir, cuando vaya a proceder a individualizar la sanción correspondiente.

9. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL TIENE LA OBLIGACIÓN DE VALORAR LAS PRUEBAS QUE RECIBIÓ DEL INDICIADO PARA DICTAR EL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).[163]

De conformidad con la fracción V del artículo 20 constitucional, en la que se consigna la obligación de recibir al indiciado las pruebas que ofrezca en

---

598; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 429/95. José Antonio Bautista Alvarado. 30 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Fernando Suárez Correa. Secretario: Gabriel Costilla Hernández.

[162] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, mayo de 1996; Tesis: V.2o.19 P; Página: 598; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 61/96. Agente del Ministerio Público y otro. 28 de marzo de 1996. Mayoría de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Disidente: Genaro Rivera. Secretario: Ernesto Encinas Villegas.

[163] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, abril de 1996; Tesis: XX.65 P; Página: 345;

su defensa, trae inmersa la obligación por parte del órgano jurisdiccional de valorarlas debidamente, ya que la recepción de las pruebas no puede concebirse sin la finalidad obvia de su debida apreciación y valorización.

10. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL", QUEDÓ SUPERADA POR LAS REFORMAS DE LOS ARTÍCULOS 19 CONSTITUCIONAL Y 83 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.[164]

Este Tribunal Colegiado, estima que la jurisprudencia cuyo rubro es: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL", ha quedado superada por las reformas que sufrieron los artículos 19 constitucional y 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por los siguientes razonamientos. Del contenido del artículo 19 constitucional reformado, se desprende que para dictar un auto de formal prisión, es necesario que de lo actuado en el proceso penal, aparezcan datos suficientes que justifiquen los elementos del tipo penal que se impute al acusado y además hagan probable su responsabilidad penal en la comisión del mismo; lo que significa que debe examinarse la descripción que del ilícito se haga en la legislación penal; ahora bien, el empleo de la expresión "elementos del tipo", en dicho precepto legal tiene como finalidad fortalecer la seguridad jurídica del gobernado para que pueda defenderse adecuadamente del delito atribuido. Al respecto el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social reformado, dispone que los elementos del tipo penal son los siguientes: "I. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido; II. La forma de intervención de los sujetos activos; y III. La realización dolosa o culposa de la acción u omisión. Asimismo, se acreditarán, si el tipo penal lo requiere: a). Las cualidades del sujeto activo y pasivo; b). El resultado y su atribución a la acción u omisión; c). El objeto material; d). Los

---

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 274/95. Heriberta Nucamendi González. 7 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González.

[164] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, febrero de 1996; Tesis: VI.3o.16 P; Página: 390; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 679/95. Ernesto Sánchez Flores. 25 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretario: Jesús G. Luna Altamirano.

medios utilizados; e). Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; f). Los elementos normativos; g). Los elementos subjetivos específicos; y, h). Las demás circunstancias que la ley prevea". Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la clasificación de los delitos en orden al tipo, ha dicho que desde un punto de vista doctrinario, en relación con la autonomía de los tipos, éstos se han clasificado en: básicos, especiales y complementados. De acuerdo con lo anterior el delito de robo calificado con violencia moral, es un tipo complementado, circunstanciado o subordinado, pues necesita para su existencia del tipo fundamental o básico, añadiéndosele una circunstancia, que en la especie, resultan ser los medios utilizados por el acusado para llevar a cabo el delito, esto es la violencia moral consistente en amagar a la víctima con un arma, a fin de desapoderarlo de sus bienes, circunstancia que se encuentra prevista en el artículo 380 fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; razones por las que resulta apegado a derecho que el juez natural estudie tal situación agravante en el auto de formal prisión, incluyéndola como parte integrante del tipo penal complementado.

11. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 190 Y 191 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).[165]

Los requisitos que establecen los artículos 190 y 191 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, resultan inaplicables cuando el acto reclamado se hace consistir en un auto de formal prisión; esto es así en virtud de que los preceptos de referencia establecen reglas que deben observarse al dictar la sentencia con que culmina un proceso penal y no cuando se emite el auto de formal prisión.

12. AUTO DE FORMAL PRISIÓN.[166]

Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere única-

---

[165] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, enero de 1996; Tesis: VI.2o.42 P; Página: 263; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 642/95. Jorge Ramírez Rojas. 29 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

[166] SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 192/87. Bernardino Arturo Aguilar Reyes. 24 de febrero de 1988. Una-

mente, que los datos arrojados por la averiguación, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado.

13. AUTO DE FORMAL PRISIÓN.[167]

Los tribunales federales tienen facultades para apreciar directamente, según su criterio, el valor de las pruebas recibidas y que tiendan a demostrar el cuerpo del delito o la presunta responsabilidad del inculpado; y si los jueces federales no tuvieran el arbitrio de hacer la estimación de esas pruebas, estarían incapacitados para resolver sobre la constitucionalidad del auto, y en tal sentido es firme la jurisprudencia de la Suprema Corte.

14. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AMPARO CONTRA EL, CUANDO EL QUEJOSO DESISTE DEL RECURSO DE APELACIÓN.[168]

Si aparece que el acusado apeló del auto de formal prisión, y posteriormente desistió del recurso, esto no puede significar conformidad con dicha resolución, sino sólo quitar el obstáculo legal que haría improcedente el juicio de amparo, y por lo mismo, no hay razón alguna para considerar consentida la resolución reclamada, ni menos para, por este concepto, sobreseer en el juicio de garantías.

---

nimidad de votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Reynaldo Manuel Reyes Rosas. Tomo I, Segunda Parte-1, p. 138.

[167] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 46; Página: 26; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 3230/27. Friedemberg Walter. 24 de julio de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 975/30. Fuentevilla Enrique Luis. 28 de octubre de 1931. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 2855/30. Gerardo Jesús E. 28 de enero de 1932. Cinco votos. Amparo en revisión 4320/30. Máttar y Fádul José. 12 de febrero de 1932. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1237/32. Navarro Bernardo. 7 de septiembre de 1932. Unanimidad de cuatro votos.

[168] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 47; Página: 27; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 7646/42. Cárdenas Santeliz Jesús. 18 de enero de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1057/44. Hernández Ayala Porfirio. 2 de junio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 2360/44. Olloqui María Refugio. 10 de julio de 1944. Mayoría de cuatro votos. Amparo en revisión 9309/43. Estrada Arcadio. 2 de agosto de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 5392/45. Cervantes Arango Tomás. 4 de octubre de 1945. Mayoría de cuatro votos.

15. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPARO CONTRA LA CLASIFICACIÓN DEL DELITO.[169]

No corresponde al juez de amparo, al resolver el que se interponga contra el auto de formal prisión, el hacer la clasificación de los delitos.

16. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CUANDO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL.[170]

Es improcedente el amparo que se endereza contra el auto de formal prisión, si está pendiente de resolverse el recurso de apelación que contra él se hizo valer.

17. AUTO DE FORMAL PRISIÓN INFUNDADO E INMOTIVADO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA.[171]

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto jurídico de la sentencia que otorgue el amparo al quejoso o agraviado es el de restituirlo en el uso o goce de la garantía individual que le fue

---

[169] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 48; Página: 27; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 3838/26. Alba Ornelas J. Guadalupe de. 28 de junio de 1927. Mayoría de siete votos. Amparo en revisión 8985/43. Villalpando Valdés Conrado. 10 de agosto de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 6556/46. Viloria Vicente. 11 de noviembre de 1946. Cinco votos. Amparo en revisión 674/46. Cervantes Arango Tomás. 11 de agosto de 1948. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 4005/47. Cerda Torres Victoriano. 3 de septiembre de 1948. Cinco votos. NOTA: En el Apéndice de 1954 el rubro era "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPARO CONTRA EL. LA CLASIFICACIÓN DEL DELITO".

[170] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 49; Página: 28; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 6742/34. Cantarell V. Manuel. 13 de marzo de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 683/36. Marín Humberto. 8 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1185/36. Pérez Francisco y coags. 10 de julio de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 6231/36. Rey Doce Benito. 19 de noviembre de 1936. Cinco votos. Amparo en revisión 5866/36. Campo Fernando del. 26 de noviembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos.

[171] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 51; Página: 29; Precedentes: Octava Época: Contradicción de tesis 3/94. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Vigésimo Primer Circuito, Tercero del Sexto Circuito y Segundo del Quinto Circuito y la sostenida por el Segundo Tri-

violada o transgredida; es decir, volver la situación al estado que tenía antes de la violación cometida por la responsable, lo que significa que esta sentencia nulifica el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; en consecuencia, la concesión del amparo respecto de un auto de formal prisión que contenga violaciones formales debe ser lisa y llana y no para efectos.

18. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.[172]

Atento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el auto de formal procesamiento sólo se precisará la materia de la causa a seguir, al determinar el órgano jurisdiccional los hechos delictivos que motivaron el ejercicio de la acción penal y subsumirlos provisionalmente dentro de una o varias disposiciones legales que tipifiquen tales hechos, sobre la base de que existan datos de la probable responsabilidad del acusado en su comisión. Por ello, todo juzgador al dictar un auto de formal prisión, debe limitar su actividad al estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, sin analizar modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, ya que estos extremos deben ser objeto del proceso penal correspondiente y de la sentencia respectiva. No es obstáculo a la conclusión anterior, lo preceptuado por el artículo 20, fracción I, constitucional, en el sentido de que al resolverse sobre la procedencia de la libertad provisional, deben tomarse en cuenta las calificativas o modificativas que para el delito materia del ejercicio de la acción penal se invoquen por el Ministerio Público, ya que esta última disposición no se refiere en concreto al auto de formal prisión, sino a la hipótesis en que el acusado solicite y se le conceda la libertad bajo caución; además de que al reformarse el último de los dispositivos legales citados, en los términos aludidos, no sufrió enmienda el artículo 19 de la Constitución General de la República.

---

bunal Colegiado del Segundo Circuito. 7 de noviembre de 1994. Cinco votos. NOTA: Tesis 1a./J.20/94, *Gaceta*, número 84, pág. 15; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIV-diciembre, pág. 23.

[172] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 52; Página: 29; Precedentes: Octava Época: Contradicción de tesis 5/88. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de mayo de 1989. Mayoría de cuatro votos. NOTA: Tesis 1a./J.4/89, *Gaceta*, número 16-18, pág. 59; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo III, Primera Parte, pág. 263.

19. AUTO DE FORMAL PRISIÓN (PENA ALTERNATIVA).[173]

Es violatorio de garantías el auto de formal prisión, si el delito que se imputa al acusado se castiga con pena alternativa de prisión o multa.

20. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO.[174]

Cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación.

21. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA EL (LIBERTAD CAUCIONAL).[175]

La suspensión que se pida contra el auto de formal prisión es improcedente, si el quejoso se encuentra disfrutando de libertad caucional.

---

[173] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 53; Página: 30; Precedentes: Quinta Época: Amparo directo 6131/33. Lizcano Blas. 16 de julio de 1935. Mayoría de cuatro votos. Amparo en revisión 3121/35. Gómez Checheb Paz. 7 de mayo de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 6271/38. Chablé Epifanio. 17 de noviembre de 1938. Cinco votos. Amparo en revisión 2321/39. Bartolo Dimas. 21 de julio de 1939. Cinco votos. Amparo en revisión 5630/39. López Gordillo Clemente. 28 de octubre de 1939. Unanimidad de cuatro votos.

[174] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 54; Página: 30; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 1585/36. Vasconcelos María Dolores. 24 de abril de 1936. Mayoría de cuatro votos. Amparo en revisión 3780/36. Orihuela Pablo. 8 de agosto de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 2263/36. Cruz Rodrigo M. 5 de septiembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 4611/36. Rivera Amador. 23 de septiembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 4643/36. Santana Cuéllar Luis. 30 de septiembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos.

[175] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 55; Página: 31; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 2932/24. Domínguez Ulrico. 14 de noviembre de 1924. Unanimidad de once votos. Amparo en revisión 674/25. Muñoz Lorenzo. 19 de marzo de 1925. Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 541/25. León Calderón Francisco. 26 de marzo de 1925. Mayoría de nueve votos. Amparo en revisión 923/25. Villegas Jr. Manuel. 2 de abril de 1925. Mayoría de nueve votos. Amparo en revisión 3477/31. Mondragón Salvador. 11 de febrero de 1932. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: En los Apéndices a los Tomos de Quinta Época el rubro era "LIBERTAD CAUCIONAL".

22. AUTO DE FORMAL PRISIÓN.[176]

Para motivarlo, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del reo; requiere únicamente, que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado.

23. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL.[177]

El objetivo que persiguió el legislador con el establecimiento de la ampliación del término constitucional de las setenta y dos horas en el doble de ese tiempo para resolver la situación jurídica del inculpado, es el que se brinde a éste una mayor oportunidad de defensa, para que el juzgador resuelva teniendo en cuenta no sólo los datos que arroje la averiguación previa, sino también los elementos de prueba recabados dentro de dicho término y su ampliación, por lo que, si el juzgador omite estimar las pruebas del inculpado allegadas y desahogadas tanto en el término constitucional como en su extensión, tal hecho importa una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

---

[176] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 425; Página: 245; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 35/89. Carlos Xílotl Ramírez. 16 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 84/89. José Zeferino Raúl Jiménez Orea. 4 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 122/89. Luciano Cortés Bonilla y Toribio Meza Bonilla. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 142/89. Alejandro Flores Herrera. 1 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 222/89. Magdaleno Crisanto Zécuistl Caleco. 13 de julio de 1989. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/28, *Gaceta*, número 19-21, pág. 162; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IV, Segunda Parte-2, pág. 602. Esta tesis en su voz y texto coincide con la jurisprudencia número 55 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Quinta Época, y que aparece a fojas 87, Segunda Parte del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1985.

[177] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 426; Página: 246; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 13/89. Héctor Leonardo Carrillo Terrazas. 26 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 52/90. Jorge Arturo Navarro Bernal. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 53/90. Armando Moreno Salcido. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 74/90. Daniel Ramírez Uriarte. 13 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 110/90. Socorro González Esquerra y Javier Francisco del

24. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL.[178]

> El objetivo que persiguió el legislador con el establecimiento de la ampliación del término constitucional de las setenta y dos horas en el doble de ese tiempo para resolver la situación jurídica del inculpado, es el que se brinde a éste una mayor oportunidad de defensa, para que el juzgador resuelva teniendo en cuenta no sólo los datos que arroje la averiguación previa, sino también los elementos de prueba recabados dentro de dicho término y su ampliación, por lo que, si el juzgador omite estimar las pruebas del inculpado allegadas y desahogadas tanto en el término constitucional como en su extensión, tal hecho importa una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

25. AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL.[179]

> El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción

---

Castillo Hernández. 12 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/3, *Gaceta*, número 36, pág. 54; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VI, Segunda Parte-1, pág. 328.

[178] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 426; Página: 246; Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 13/89. Héctor Leonardo Carrillo Terrazas. 26 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 52/90. Jorge Arturo Navarro Bernal. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 53/90. Armando Moreno Salcido. 9 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 74/90. Daniel Ramírez Uriarte. 13 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 110/90. Socorro González Esquerra y Javier Francisco del Castillo Hernández. 12 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/3, *Gaceta*, número 36, pág. 54; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VI, Segunda Parte-1, pág. 328.

[179] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, octubre de 2000 Tesis: 1a./J. 20/2000 Página: 79 Materia: Penal Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 71/97. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 21 de junio de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Tesis de jurisprudencia 20/200. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente José

a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental.

26. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, CESACIÓN DE EFECTOS DEL, SI SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN.[180]

Si el Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión confirmó la concesión del amparo otorgado contra la orden de aprehensión reclamada, resulta evidente que tal concesión constituye una situación jurídica que definitivamente deja insubsistente el auto de formal prisión reclamado en posterior amparo, por lo que es de concluirse que, en tal caso, han cesado los efectos de dicho auto.

---

de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

[180] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, agosto de 1997 Tesis: VII.P. J/28 Página: 485 Materia: Penal; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 235/95. Juez Primero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz (José Antonio Rosas Velázquez). 31 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Pablo Pardo Castañeda. Amparo en revisión 47/96. Juez Primero de Primera Instancia de Poza Rica, Veracruz (Susana Mar García). 10 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Amparo en revisión 157/96. Juez Primero de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz (Nahum Morales Cuervo). 21 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. Amparo en revisión 680/96. Rodolfo Palestino Vázquez y Juez Primera de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz. 6 de mayo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Pérez Troncoso. Secretario: Ramón Zúñiga Luna. Amparo en revisión 42/97. Esteban López Ronzón. 12 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Vicente Salazar Vera. Secretaria: Leticia López Vives.

27. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE CONSIDERARSE COMO ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO NO SE SEÑALE COMO TAL EN EL CAPÍTULO RELATIVO DE LA DEMANDA DE AMPARO, SI EN CONTRA DEL MISMO SE FORMULAN DIVERSOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.[181]

> Si de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierten diversos motivos de inconformidad esgrimidos en contra del auto de formal prisión, que no fue señalado de manera expresa como acto reclamado en el capítulo respectivo, debe tenerse como tal, pues si el Juez de Distrito, al analizar la demanda de garantías, oportunamente, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, no previno al quejoso para que aclarara esa irregularidad, sería incorrecto que se omitiera, en perjuicio del peticionario del amparo, el estudio de dichos conceptos de violación y, consecuentemente, el análisis de la constitucionalidad de ese acto restrictivo de la libertad, por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del mismo ordenamiento legal, el Tribunal Colegiado debe considerar esos conceptos de violación cuyo estudio omitió el *a quo*.

28. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. AL SER COMBATIDO EN AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE INSTANCIA, LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS Y LA OBLIGACIÓN DE SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE CERRAR LA INSTRUCCIÓN.[182]

> Cuando en el amparo promovido contra el auto de formal prisión, se reclamen violaciones a los artículos 16 y 19 de la Carta Magna, el Juez de instancia

---

[181] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, abril de 1997 Tesis: I.4o.P.10 P Página: 221 Materia: Penal; Precedentes: Amparo en revisión 116/97. José Guadalupe Monroy Luna, autorizado del quejoso José Cruz Luna. 6 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretaria: Beatriz Alejandrina Tobón Castillo. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 167, tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR EL".

[182] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, diciembre de 1998 Tesis: III.2o.P.46 P Página: 1019 Materia: Penal Tesis aislada; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 78/97. Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito. 12 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretario: Alejandro López Bravo. Am-

debe suspender el procedimiento una vez cerrada la instrucción, acorde a lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el objeto de que no se dicte sentencia, pues de pronunciarse ésta, se estaría en el supuesto de considerar irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas y por ende, la improcedencia del juicio de garantías, lo cual no corresponde al designio del legislador, quien tuvo como propósito el preservar la materia del juicio de amparo, es decir, el auto de formal prisión. Luego entonces, el decretar la suspensión del procedimiento es una obligación de la autoridad que conozca del proceso penal incoado al quejoso, sea o no la responsable, porque la ley no hace distinción alguna; para esto, el Juez de Distrito debe comunicar a dicha autoridad, tanto el inicio del juicio constitucional como la obligación de mérito; toda vez que es en la autoridad que conozca del juicio constitucional, en quien recae la tarea, no sólo de aplicar, sino también de velar que se apliquen y cumplan exactamente las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues de lo contrario, sería estéril el propósito del legislador y ese actuar se traduciría en dejar en completo estado de indefensión al quejoso.

29. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE DE APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR, SÓLO PODRÁ CAMBIARSE LA CLASIFICACIÓN DEL DELITO SI NO AGRAVA LA SITUACIÓN DEL INCULPADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE TABASCO).[183]

Si el inculpado o su defensor apelan del auto de formal prisión, el *ad quem* sólo puede cambiar la clasificación del delito y dictarlo por el que aparez-

---

paro en revisión 43/97. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. 17 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Fermín Rivera Quintana. Secretario: Alejandro López Bravo.

[183] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, diciembre de 1998 Tesis: X.3o.13 P Página: 1020 Materia: Penal Tesis aislada; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 359/98. Felipe Méndez Jiménez. 30 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Enrique Galicia López. Amparo en revisión 414/98. Miguel Ovando García. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: César Thomé González. Secretario: Elpidio Ibarra Franco. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 119, tesis XVI.2o.10 P, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS, TRATÁNDOSE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)".

ca probado, si no se agrava la situación del inculpado; ello, porque si bien el artículo 196, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales del Estado, dispone que "Si se trata de un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o de orden de aprehensión o de citación para declaración preparatoria, podrá cambiarse la clasificación del delito y dictarse por el que aparezca probado", sin embargo, la facultad referida no es discrecional ni absoluta, por el contrario, debe ser ejercida de forma restrictiva, cuidando que no se le depare perjuicio al inculpado acorde a lo que dispone uno de los principios rectores del derecho procesal penal denominado *non reformatio in peius*, que consiste en la prohibición establecida con el objeto de evitar que la autoridad judicial modifique en perjuicio del reo, la situación legal de éste.

30. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. RESULTA CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SI ESTIMA COMPROBADOS EN FORMA DISYUNTIVA LOS ELEMENTOS DEL TIPO DE DELITOS AUTÓNOMOS.[184]

Carece de la debida fundamentación y motivación, por incongruente, el auto de formal prisión en el que se determina que se encuentran acreditados los elementos del tipo de los delitos de "contrabando y/o su equiparable", si de las constancias de autos se advierte que sólo son susceptibles de demostrar uno u otro de esos ilícitos y no la actualización de los elementos de ambas figuras delictivas, dada su autonomía; por ende, tal decisión resulta violatoria de lo establecido en el artículo 16 constitucional.

31. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA. COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLA EN AMPARO.[185]

La resolución dictada por el Magistrado responsable que confirma un auto de formal prisión, tiene ejecución material, no es de carácter simplemente

---

[184] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: XIX.2o.31 P Página: 995 Materia: Penal; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 165/97. Antonio Gerardo Medina Flores. 19 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Pablo Galván Velázquez.

[185] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, agosto de 1998 Tesis: XIX.2o.33 P Página: 828 Materia: Penal Tesis aislada; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCI-

declarativo, porque en virtud de dicha determinación el gobernado queda sujeto a proceso ante el Juez de la causa, y aun cuando se encuentre gozando del beneficio de la libertad bajo fianza, queda vinculado a determinadas obligaciones, como lo es la de presentarse al juzgado cuantas veces sea requerido, so pena, en caso de incumplimiento, de revocarse el beneficio y ordenarse su reaprehensión. Bajo esta óptica es competente para conocer de la demanda de garantías promovida en contra de la resolución que confirma el auto de término, el Juez de Distrito del lugar en donde resida el Juez de la causa.

32. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS DICTAR DOS EN UNA MISMA CAUSA PENAL.[186]

El segundo párrafo del artículo 19 constitucional dispone que todo proceso se seguirá por el o los delitos señalados en el auto de formal prisión, y si de la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación. Ahora bien, si en una causa criminal se ejercita acción penal por el delito contra la salud en sus modalidades de posesión y comercio y al resolver la situación jurídica del indiciado se decreta la formal prisión por la modalidad de posesión y auto de libertad por la modalidad de comercio con las reservas de ley; lo correcto jurídicamente es continuar con la investigación pertinente respecto de esta última modalidad y, en su caso, consignar de manera separada los nuevos elementos, los cuales serían materia de una nueva resolución judicial en una causa penal distinta, sin perjuicio de que se acumulen posteriormente; ya que dictar dos autos de formal prisión en un mismo proceso es violatorio de la garantía arriba mencionada.

MO NOVENO CIRCUITO. Precedentes: Competencia 2/98. Matilde Flores Hernández. 7 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Olga Iliana Saldaña Durán. Secretario: Jesús Martínez Vanoye.

[186] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, octubre de 1998 Tesis: XIV.2o.86 P Página: 1104 Materia: Penal Tesis aislada; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 338/98. Martha Patricia Pérez Reyes. 9 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis A. Cortés Escalante. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 121-126, Sexta Parte, página 83, tesis de rubro: "FORMAL PRISIÓN, DOS AUTOS DE, EN EL MISMO PROCESO".

33. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO PUEDE CONSTITUIRSE EN PRUEBA DEL DELITO POR EL QUE SE SENTENCIÓ AL QUEJOSO.[187]

Resulta incorrecto el proceder de la Sala responsable, que toma en consideración el contenido del auto de formal prisión dictado en el proceso, en contra del promovente del amparo y otros, como probables responsables del delito de secuestro; interlocutoria en la que se valoraron las pruebas allegadas a la indagatoria, con las que afirma, al dictar sentencia definitiva, que se acreditaron los elementos del ilícito en cuestión. Lo incorrecto es porque el auto de término constitucional, de ninguna manera constituye prueba para tener por acreditado el injusto que se atribuye al procesado, pues aquél, en su momento procesal, sólo sirvió para resolver la situación jurídica del inculpado, por lo que la autoridad responsable no se debe remitir al citado proveído para tener por demostrado el delito, sino que, por el contrario, debe valorar por sí misma y de manera directa, todos y cada uno de los elementos de convicción que obren agregados al sumario y emitir la resolución condigna.

34. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBEN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.[188]

Este tribunal estableció la jurisprudencia número 439 publicada en la página doscientos cincuenta y seis del Tomo II, Materia Penal del Apéndice al

---

[187] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, diciembre de 1998 Tesis: III.2o.P. J/8 Página: 938 Materia: Penal Jurisprudencia; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 175/97. Jesús Ornelas Gaytán o Alfredo Tejeda Mendoza. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez. Amparo directo 176/97. Abel Barajas Madrigal. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez. Amparo directo 178/97. Antonio Ríos López. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez. Amparo directo 179/97. Bartolomé Ríos López. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez. Amparo directo 180/97. Saúl Gómez Moreno. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: José de Jesús Vega Godínez.

[188] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, abril de 1999 Tesis: VII.P.99 P Página: 496 Materia: Penal Tesis aislada; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 497/98. Francisco Vázquez Cantón. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere.

Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto reza: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidos los autos de prisión preventiva, dado que los mismos constituyen actos de molestia a los que se refiere el 19 del mismo ordenamiento". Ahora bien, en contra de lo sostenido en dicha tesis, tratándose de un auto de formal prisión sí es necesario satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 20 constitucional, como es el que deba ser escuchado el inculpado en preparatoria; estar asistido por defensor y aportar pruebas durante el término constitucional en el que se resolverá su situación jurídica, lo que constituye verdaderas formalidades esenciales que deben ser observadas, como aconteció en este caso. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 194 de la Ley de Amparo, se decide de manera unánime interrumpir la obligatoriedad de dicha tesis.

35. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL QUE SE APOYA EN HECHOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO CRIMINAL INSTRUIDO EN CONTRA DEL MISMO INCULPADO, VIOLA EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.[189]

Si el delito de robo tuvo por objeto diversos bienes muebles y se juzgó al quejoso por esos hechos, sin incluir uno de esos bienes, viola el artículo 23 constitucional el auto de formal prisión que se reclama dictado en relación con dicho bien, en contra del mismo quejoso en diverso proceso, porque esos hechos fueron realizados en una sola actividad antijurídica, con un solo pro-

---

Secretario: Nicolás Leal Salazar. NOTA: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la jurisprudencia número 439, del propio tribunal, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO", publicada en el Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 256.

[189] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, diciembre de 1999 Tesis: III.1o.P.27 P Página: 691 Materia: Penal Tesis aislada; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 70/99. 26 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Secretario: Fernando Arballo Flores.

pósito delictivo y resultado, por lo que no pueden analizarse en forma individual como entidades delictivas autónomas, pues no son independientes ni integrantes de delitos diversos, sino que se trata de una misma secuela delictiva, que dio origen a un solo delito de robo calificado sobre diversos bienes muebles y que, por tanto, debieron ser objeto de una sola averiguación y acusación y por ende juzgados en el mismo proceso, puesto que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

36. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO TIENE APLICACIÓN PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL DICTADO DEL.[190]

De acuerdo con la reforma del artículo 19 constitucional del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para dictar un auto de formal prisión se exige que los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito penal y hacer probable la responsabilidad del indiciado; es decir, que en autos se encuentren constancias que acrediten los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura delictiva. Sin embargo, el artículo 204 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango, aun exige como requisito para emitir un auto de formal prisión, la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino también los normativos y los subjetivos que contenga la figura típica de que se trate. De lo anterior se desprende que la legislación local en cita exige mayores requisitos que el precepto constitucional para dictar un auto de formal prisión, otorgando mayores prerrogativas al inculpado, toda vez que, en esa medida, se extiende la garantía constitucional que es el mínimo de derechos de que disponen los gobernados, por lo que resulta preferente su aplicación.

37. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA EN LA LEY QUE LO REGULE, DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA

---

[190] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Tomo: XI, abril de 2000 Tesis: XXV.1 P Página: 933 Materia: Penal Tesis aislada; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 85/99. 9 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Luis González Bardán.

CONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO).[191]

El artículo 19 constitucional dispone en su primera parte que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Por su parte el artículo 64 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Guerrero, en lo conducente dispone que el "tipo penal" se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de todos los elementos que integran la descripción de la conducta, según lo determine la ley. De lo anterior deriva que no obstante la reforma efectuada al precepto constitucional citado, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, vigente a partir del día siguiente, la ley secundaria aludida no ha sido actualizada, pues sigue refiriéndose a los elementos del tipo penal y no al cuerpo del delito como lo establece el precepto constitucional. Por ello, dado el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, los Jueces del Estado de Guerrero se encuentran obligados a dictar los autos de formal prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para tener por comprobado el cuerpo del delito, no los elementos del tipo penal consignados en la ley secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la Ley Suprema, pues mientras que el cuerpo del delito exige únicamente se acrediten los elementos objetivos del delito, los elementos del tipo penal requieren del acreditamiento de todos los elementos objetivos, subjetivos y normativos, como son: 1) La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro, 2) La forma de intervención del sujeto activo, 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa, 4) La calidad de los sujetos activo y pasivo, 5) El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, 6) El objeto material, 7) Los medios utilizados, 8) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, 9) Los elementos normativos y, 10)

[191] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, enero de 2001 Tesis: XXI.4o.1 P Página: 1686 Materia: Penal Tesis aislada; CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 7/2000. 2 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretaria: Catalina Alicia Ramírez Romero. NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 1/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala.

Los elementos subjetivos específicos, así como la probable responsabilidad del inculpado; además, deben señalarse todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen sobre el inculpado en la comisión de una conducta delictiva.

38. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUTORIZA A LOS MAGISTRADOS UNITARIOS DE CIRCUITO A RECLASIFICAR LOS HECHOS DELICTUOSOS, TRATÁNDOSE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO Y SU DEFENSOR (ALCANCE DEL PRINCIPIO *NON REFORMATIO IN PEIUS*).[192]

El auto de formal prisión como regulador del proceso penal, debe dictarse por el delito que aparezca probado, consideración que debe sostenerse tanto por lo que respecta al a quo, como por lo que toca al *ad quem*, no obstante que sólo hubiesen apelado el inculpado y su defensor, ya que tal facultad la confiere el segundo párrafo del artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues este precepto legal, posterior al 364 de tal código, que limita la jurisdicción de las autoridades judiciales de segunda instancia al estudio y resolución de los agravios propuestos por el o los apelantes, no es contradictorio de aquél, sino que ambos artículos deben aplicarse juntamente y relacionarse entre sí. Así las cosas, debe decirse que el numeral citado en primer término autoriza al Magistrado del Tribunal Unitario responsable, para que sin variar los hechos y las pruebas demostrativas de la probable responsabilidad, esto es, ajustándose estrictamente a los términos de los hechos delictuosos acreditados e imputados al recurrente, reclasifique los mismos sin infringir las garantías otorgadas en el numeral 19 de la Constitución Federal, porque tal norma exige que todo proceso se siga forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión y porque el efecto de la resolución que el superior dicta, sustituyéndose o reasumiendo la jurisdicción inferior, viene a ser precisamente el de que el proceso se siga por el delito que quede señalado en dicha resolución, así que el derecho de defensa del inculpado-recurrente no se reduce en ninguna medida, puesto que podrá hacerlo plenamente a través de todo el procedimiento que se inicia a

[192] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, marzo de 2001 Tesis: XVII.3o.4 P Página: 1721 Materia: Penal Tesis aislada; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 308/2000. 5 de enero de 2001. Mayoría de votos. Disidente: María Teresa Zambrano Calero. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Guillermo Alberto Flores Hernández.

partir del proveído de formal prisión. En la apuntada tesitura, debe decirse que el principio *non reformatio in peius*, no debe aplicarse en tratándose del segundo párrafo del referido ordinal 385 del ordenamiento adjetivo penal federal, sino sólo en relación al primer párrafo, ya que, evidentemente, son diferentes el recurso que se interpone contra la sentencia definitiva y el que se presente en contra del auto de formal procesamiento; puesto que en el primero, se determina la condena al procesado por el delito que se le atribuyó en el juicio, y el segundo, sólo da pauta al inicio de la instrucción. Además, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal, en el auto de bien preso debe fijarse claramente el delito o delitos por los cuales se debe seguir el proceso, en base a los específicos hechos sobre los cuales se realizó la consignación; luego, el efecto de la resolución que el tribunal *ad quem* dicta en sustitución a lo resuelto por el *a quo*, tiene por finalidad establecer un principio de seguridad y certidumbre jurídicas, para que el proceso se siga precisamente por el delito que quede señalado en la apelación, que sólo busca la concordancia entre los hechos materia de la consignación y la prueba de su existencia, con la clasificación que corresponda respecto a la realidad del tipo penal que proceda.

39. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL ARTÍCULO 87 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO, TIENE APLICACIÓN PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL DICTADO DEL.[193]

De acuerdo con la reforma del artículo 19 constitucional del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para dictar un auto de formal prisión, se exige que los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad

[193] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, mayo de 2001 Tesis: XXI.3o.2 P Página: 1090 Materia: Penal Tesis aislada; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 71/2001. 22 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Avelar Gutiérrez. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 933, tesis XXV.1 P, de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO TIENE APLICACIÓN PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL DICTADO DEL". NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 1/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala.

del indiciado; es decir, que en autos se encuentren constancias que acrediten los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura delictiva. Sin embargo, el artículo 87 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, aún exige como requisito para emitir un auto de formal prisión, la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino también los normativos y los subjetivos que contenga la figura típica de que se trate. De lo anterior se desprende que la legislación local en cita exige mayores requisitos que el precepto constitucional para dictar un auto de formal prisión, otorgando mayores prerrogativas al inculpado, toda vez que, en esa medida, se extiende la garantía constitucional que es el mínimo de derechos de que disponen los gobernados, por lo que resulta preferente la aplicación de la norma local.

40. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE DEBEN INCLUIR LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL, A LA LUZ DE LA REFORMA DEL TRES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, AL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL DISTRITO FEDERAL.[194]

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/97, publicada en la página 197 del Tomo V, del mes de febrero de 1997, del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, con el rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN ÉL', QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES", estableció el criterio de que en el auto de formal prisión deben quedar determinados con precisión los elementos constitutivos del tipo penal incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador. Por otra parte, el ar-

---

[194] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, mayo de 2001 Tesis: I.6o.P.18 P Página: 1091 Materia: Penal Tesis aislada; SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 396/2000. 31 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Daniel J. García Hernández. Amparo en revisión 1536/2000. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Gustavo Felipe González Córdova.

tículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal sufrió reformas el tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, estableciendo de nueva cuenta la comprobación del "cuerpo del delito", abandonando el concepto de "elementos que integran el tipo". Sin embargo, la connotación actual del cuerpo del delito difiere de la que estuvo vigente antes de la reforma de 1993, pues entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por cuerpo del delito debía entenderse el conjunto de elementos objetivos o externos integradores del tipo penal respectivo, y disponía que el cuerpo del delito se tendría por comprobado cuando se acreditara la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, pero en la actualidad es diferente, toda vez que el artículo 19 constitucional establece que en el auto de formal prisión deberán expresarse "...el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución...", y el artículo 122 del precepto antes citado establece que "...El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito..."; de ello es dable concluir que es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir un auto de formal prisión, demostrar todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como las circunstancias de ejecución del mismo, incluyendo en éstas las calificativas o modificativas del delito, pues en el caso, éstas también forman parte de la conducta. Por tal razón es obligatorio observar lo establecido en la jurisprudencia de la Primera Sala citada con anterioridad, pues lo dispuesto en la misma no se contrapone a las reformas establecidas en el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ya que, derivado de un análisis integral del precepto antes citado con el artículo 19 de la Constitución, se debe concluir que el juzgador al emitir el auto de formal prisión debe abarcar lo establecido en ambos preceptos con el fin de respetar la garantía de seguridad jurídica del gobernado en el proceso penal.

41. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO ES NULO EL DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL.[195]

La citada disposición constitucional establece en lo conducente: "Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos

[195] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: X.1o.31 P Página: 1087 Materia: Penal Tesis aislada; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 270/2000. 1 de febrero de 2001. Mayoría de votos. Disidente: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. Ponente: Roberto Alejandro Navarro Suárez. Secretario: Rúber Alberto Rodríguez Mosqueda. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Tomo XXIX, página 1133, tesis de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN".

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión...”; plazo que podrá prorrogarse únicamente a petición del mismo, en la forma que señala la ley; la prolongación de detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal; la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el inculpado, que dentro del plazo no reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir, y si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Ahora bien, si el auto de formal prisión fue dictado cinco horas después del momento en que feneció la ampliación del término solicitado por el inculpado, tal transgresión al artículo 19 de la Carta Magna no le causa ningún perjuicio, porque el dictado del auto de bien preso fuera del término ampliado, no implica que adolezca de nulidad, pues de considerarlo así debe decretarse ésta y su consecuencia sería la emisión de un nuevo auto, que de suyo también conlleva el vicio de haberse emitido fuera del término constitucional, pero aun dictándose un nuevo mandamiento no existe posibilidad de retrotraer el tiempo dentro del cual debió haberse emitido, por eso se estima que dicha formalidad, por ser sólo un vicio de forma que por no decretarse dentro del tiempo ordenado por la Carta Magna, quedó subsanada desde el momento en que se dictó. De esta disposición, sin embargo, no se advierte que el dictado de un auto de formal prisión fuera del término previsto en el precepto constitucional que se analiza, traiga como consecuencia que deje de producir efecto jurídico alguno; por tanto, como se indicó, al momento en que se emite el auto de formal prisión reclamado, queda consumada irreparablemente la transgresión de los derechos individuales del reo, pero tal circunstancia no puede llegar al extremo de considerarlo nulo, menos aún las actuaciones precedentes que llevaron a dictar la resolución en comento, pues lo único impugnado es el mandamiento pronunciado fuera del término constitucional, no los actos de referencia; por ello, si el procesado está privado de su libertad, y continúa en esa forma, será responsabilidad del carcelero no haberlo dejado libre dentro de las tres horas siguientes de concluido el plazo constitucional, por no haber recibido el auto de formal prisión.

42. FORMAL PRISIÓN, AUTO DE. ES LEGAL, AUN CUANDO NO SE ORDENE SU EJECUCIÓN.[196]

El artículo 19 de la Carta Magna establece la obligación del órgano jurisdiccional de justificar la detención de una persona con un auto de formal pri-

[196] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: XIX.3o.3 P Página:

sión, que se dictará cuando de los datos que arroje la averiguación previa se acrediten los elementos del tipo penal de que se trate y hagan probable la responsabilidad penal del acusado en su comisión, fundando y motivando debidamente dicha determinación; ahora bien, si el Juez instructor pronuncia dicha resolución cumpliendo con los mencionados requisitos, pero omite ordenar su ejecución, tal circunstancia no trae como consecuencia que el mismo se considere ilegal, toda vez que el mandamiento de reaprehensión puede ser legalmente emitido con posterioridad al pronunciamiento de ese fallo, en virtud de que sólo tendría como efecto que el acusado cumpla con las obligaciones que, bajo la nueva situación jurídica, le imponga el Juez del proceso para la continuación del procedimiento penal instaurado en su contra.

43. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS SI SE DICTA EN CONTRA DE UNA PERSONA QUE NO GUARDA IDENTIDAD CON QUIEN LOS DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE CARGO SEÑALARON COMO AUTOR DEL DELITO.[197]

Uno de los aspectos principales que deben dilucidarse en el proceso, lo constituye precisamente la identidad del inculpado con la persona que los denunciantes y testigos de cargo señalan como autora del delito, de forma tal que cuando existe la certeza de que la orden de aprehensión se ejecutó contra quien no fue involucrada en la averiguación previa, no puede fincársele responsabilidad en la comisión del ilícito imputado, por lo que el auto de formal prisión dictado en su contra es violatorio de garantías.

44. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.[198]

No basta para considerar que ya no surte efectos el auto de formal prisión, la circunstancia consistente en que se hubiera concedido a los mismos que-

---

1125 Materia: Penal Tesis aislada; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 570/2000. 26 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Gilberto Vargas Chávez. Secretario: Aurelio Márquez García.

[197] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, enero de 2002 Tesis: XIII.2o.8 P Página: 1256 Materia: Penal Tesis aislada; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 370/2001. 5 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Gómez Argüello. Secretaria: Ma. de los Ángeles Pombo Rosas.

[198] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: IX.1o.27 P Página: 1246 Materia: Penal Tesis aislada; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 177/2002. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala.

josos, en un juicio de amparo diverso, la protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión, si en autos no consta que, en cumplimiento de ese fallo protector, la autoridad responsable hubiera declarado insubsistente no sólo la orden de aprehensión que se había reclamado, sino también el auto de formal prisión que se dictó contra los quejosos en el mismo proceso, como secuela de su aprehensión, con motivo de la orden respecto de la cual se les otorgó el amparo.

45. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO.[199]

Partiendo de la base de que el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su defensa durante el proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al quejoso a defenderse, además, de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional por la que los Jueces de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no garantías individuales.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

---

[199] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: VI.1o.P.198 P Página: 1335 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 140/2002. 16 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretaria: María Cristina Bretón Estrada.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y está, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

b) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la garantía de non bis in idem

Antes de comenzar con la selección propiamente dicha, es conveniente hacer algunas precisiones. La garantía en comento se encuentra contenida en el artículo 23, cuyo texto dice: “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la prác-

tica de absolver de la instancia". Efectivamente, este numeral "Limita la duración de los procesos, para evitar que sean muy longados. Evita la duplicación o repetición de los procesos. Y prohíbe dejarlos abiertos, con resolución indefinidamente pendiente".[200] Empero, la garantía de seguridad jurídica más importante aquí integrada es la que implica la prohibición de juzgar a alguien, dos veces, por el mismo delito. Esto último, es lo que la doctrina ha denominado como principio *non bis in idem*. Sergio García Ramírez explica al respecto:

> La existencia del individuo y de la comunidad se vería gravemente perturbada, en constante entredicho, si los conflictos jurídicos —los problemas, las dudas, los asuntos litigiosos— permanecieran indecisos. Al no saber a qué atenerse en sus relaciones con notros hombres, declinaría la vida de quien se hallara a merced de la incertidumbre. Para evitar eso se han instituido medios de adquirir certeza sobre el alcance de supuestos deberes y derechos. El principal de tales medios, pero desde luego no el único, es el proceso. Por este conducto se arriba a la sentencia, que establece, en fin, la verdad acerca de aquellos deberes y derechos.
>
> [...] Con la sentencia concluye el juicio. Por eso se dice que la materia de éste —el problema que se llevó a la consideración del juzgador— ya ha sido objeto de juzgamiento, no se encuentra pendiente como lo estuvo antes de la sentencia: en suma, está juzgada. La sentencia encierra, entonces la "cosa juzgada". Nadie podrá volver más adelante sobre el mismo asunto, porque esto sería tanto como ignorar la "cosa juzgada", desechar la "verdad legal" y mantener incierta la suerte del individuo [...] Traslademos lo anterior al ámbito penal, en el que opera el mandamiento del artículo 23 —puesto que habla de ser juzgado "por el mismo delito"— y se hallan en juego, como siempre se ha dicho, los más delicados valores de la vida humana [...] Es por ello que en la historia jurídica apareció y se instaló —con un designio fundamentalmente tutelar del ser humano— el principio de la santidad de la cosa juzgada", particularmente intenso en materia penal. No habrá múltiples juicios en contra de la misma persona y por los mismos hechos; sólo habrá uno, y una vez dictada la correspondiente sentencia definitiva, ésta será tenida, para todos los efectos como "verdad legal". He aquí el *ne bis in idem* que acoge el artículo 23.[201]

---

[200] L. Bazdresch, *op. cit.*, p. 168.

[201] S. García Ramírez, en *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada*, t. I, pp. 375-376.

Es importante precisar que la Constitución "Sólo autoriza la aplicación de la figura de cosa juzgada en el proceso penal".[202] A su vez, Jorge Alberto Mancilla Ovando advierte:

> Hay que hacer notar, sin embargo, que la garantía constitucional no constituye una patente de inmunidad que permita cometer delitos de la misma naturaleza de aquellos que han sido materia de proceso concluido con sentencia ejecutoria. Si se realiza una conducta que constituya un delito, diferente a aquella por la que se juzgó, podrá enjuiciarse al gobernado por el nuevo delito, sin que ello constituya violación de garantías individuales.[203]

Concluimos con Ariel Rojas Caballero que "la garantía de *non bis in idem* se viola, únicamente, cuando se pretende juzgar a una misma persona dos veces, en el mismo fuero penal, por el mismo delito".[204]

1. ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.[205]

> Dicho precepto prohíbe de modo terminante, que se juzgue a alguien dos veces por el mismo delito.

2. ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.[206]

> Sólo existe la transgresión del artículo 23 constitucional, en el caso de que se haya dictado sentencia irrevocable; pero si tal sentencia no se dictó, nada impide que se abra nuevo proceso, en donde se dicte una resolución firme.

---

[202] J. A. Mancilla Ovando, *op. cit.*, p. 304.

[203] *Ibid*., p. 307.

[204] A. Rojas Caballero, *op. cit.*, p. 491.

[205] Quinta Época Instancia: Pleno; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 780; Página: 506; Precedentes: Quinta Época: Tomo V, pág. 815. Amparo en revisión. Sales Raúl. 17 de noviembre de 1919. Unanimidad de diez votos. Tomo VII, pág. 1051. Amparo en revisión. Sales Raúl. 14 de septiembre de 1920. Unanimidad de ocho votos. Amparo directo 104/18. Sandoval Juan. 28 de octubre de 1920. Unanimidad de ocho votos. Amparo directo 1263/19. Mérigo Juan. 2 de febrero de 1924. Unanimidad de ocho votos. Amparo en revisión 1783/25. García Raymundo S. 14 de julio de 1926. Unanimidad de nueve votos.

[206] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 781; Página: 506; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 365/20. Howat José. 19 de abril de 1921. Unanimidad de ocho votos. Amparo directo 1263/19. Mérigo Juan. 2 de febrero de 1924. Unanimidad de ocho votos. Amparo en revisión 1394/28. Ramírez Javier. 9 de abril de 1929. Cinco votos. Amparo directo 3989/25. Arriaga Huicochea Juan. 18 de septiembre de 1929. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 3911/29. Martínez González Pedro. 8 de abril de 1930. Mayoría de tres votos.

3. *NON BIS IN IDEM*, PRINCIPIO DE. NO PRESUPONE LA IDENTIDAD DE LOS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DEL DELITO.[207]

> El principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (*non bis in idem*), prohíbe juzgar dos veces a una persona por la comisión de un mismo hecho delictuoso, hipótesis que no se actualiza tratándose de la comisión de dos o más hechos delictivos con identidad de elementos configurativos.

4. CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE AQUÉLLAS SE PODRÁN VOLVER A DETERMINAR CUANDO SE COMPRUEBEN HECHOS DIFERENTES, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO *NON BIS IN IDEM* CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[208]

> El principio de *non bis in idem* contenido en el artículo 23 constitucional como una garantía de seguridad jurídica, tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo delito. Dicha garantía no es exclusiva de la materia penal, tomando en cuenta que conforme al artículo 14 constitucional, la garantía de seguridad jurídica debe regir en todas las ramas jurídicas, y tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito, de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo delito; en otras palabras, el citado principio consistente en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, presupone la existencia de un juicio originado en la comisión de un delito, por el cual el gobernado no puede ser objeto de otro juicio, es decir, lo que el principio *non bis in idem* prohíbe es que una misma consecuencia de una conducta se castigue doblemente con la misma sanción, o

---

[207] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XII-noviembre; Página: 383; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 859/92. Alberto Reyes Olmos. 6 de julio de 1993. Mayoría de votos. Ponente: Fernando Narváez Bárker. Disidente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Sexta Época, Segunda Parte, Volumen III, página 9.

[208] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, julio de 2002 Tesis: 1a. XLVIII/2002. Página: 56 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada; Precedentes: Amparo directo en revisión 1315/2001. Promotora Turística El Panorama, S. A. de C. V. 8 de mayo de 2002. Mayoría de tres votos. Disidentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

bien, que la propia conducta sea sometida a dos procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga idéntica sanción. Atento lo anterior, al margen de que la determinación de contribuciones omitidas por parte de la autoridad fiscal pueda o no considerarse un juicio, se concluye que el tercer párrafo de la fracción II del artículo 64 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y dos, no contraviene el principio constitucional de referencia, pues si bien es cierto que aquel dispositivo permite a la autoridad fiscal volver a determinar contribuciones omitidas correspondientes a un mismo ejercicio, también lo es que esta nueva revisión la constriñe a hechos distintos.

5. *NON BIS IN IDEM*. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE.[209]

No es necesario que se sentencie a alguien dos veces por el mismo delito, para que se transgreda lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución General de la República, toda vez que dicho precepto establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, sin que implique necesariamente que deban llevarse a cabo dos procesos que culminen con sentencias, ya sean absolutorias o condenatorias, pues se trata de proteger con dicha norma jurídica a los gobernados para que éstos no sean sometidos a dos juicios o procesos por los mismo hechos delictivos, sin que deba entenderse el término "procesar" como sinónimo de sentenciar, sino de someter a un procedimiento penal a alguien y la frase "ya sea que se le absuelva o se le condene" contemplada en el aludido artículo constitucional se refiere al primer juicio en el que se juzgó al acusado.

6. *NON BIS IN IDEM*. NO LO VIOLENTA EL INICIO DE UNA NUEVA INDAGATORIA SI NO HA OPERADO LA PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE AQUELLA QUE MOTIVÓ LA DENEGACIÓN DEL LIBRAMIENTO DEL MANDATO DE CAPTURA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).[210]

La ejecutoriedad del auto que niega el libramiento de una orden de captura, por considerar que no estaban acreditados los elementos del tipo penal im-

---

[209] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, octubre de 1998 Tesis: I.3o.P.35 P Página: 1171 Materia: Penal Tesis aislada; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 595/97. Francisco Valdez Cortazar. 16 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos de Gortari Jiménez. Secretaria: Marina Elvira Velázquez Arias.

[210] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VIII, noviembre de 1998 Tesis: XXII.2o.2 P

putado, en modo alguno implica que los hechos ilícitos a que se constriñe hubiesen sido juzgados, pues, para que esto sucediera, se requería el dictado de una sentencia con la que se condenara o absolviera al indagado; por lo que debe convenirse que en tanto no opere la prescripción como causa extintiva de la pretensión punitiva del Estado, el Ministerio Público se encuentra facultado para practicar diligencias encaminadas a demostrar la existencia de los elementos típicos aun en indagatoria diversa y consignar, por segunda ocasión, al juzgador los hechos investigados, quien podrá o no obsequiar la orden de aprehensión solicitada, cuenta habida que no puede admitirse que con ese proceder se estén juzgando dos veces los mismos hechos.

7. *NON BIS IN IDEM*. CUANDO NO SE VIOLA EL PRINCIPIO DE.[211]

No puede decirse jurídicamente que exista violación al segundo de los supuestos que consagra el artículo 23 constitucional, que se refiere a que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por el hecho o circunstancia de que a una persona se le instruyen dos procesos por ilícitos de la misma naturaleza, si del material probatorio existente se justifica que ambos se cometen en actos distintos.

8. GARANTÍA CONSTITUCIONAL *NON BIS IN IDEM*. NO VIOLA EL PRINCIPIO UN SEGUNDO JUICIO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL, CUANDO EL ACUSADO FUE JUZGADO POR AUTORIDAD LOCAL INCOMPETENTE.[212]

El principio consagrado en el artículo 23 constitucional, en el sentido de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, no se viola cuando

---

Página: 549 Materia: Penal Tesis aislada; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 201/97. Ignacio Gutiérrez Guerrero. 2 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hanz Eduardo López Muñoz. Secretario: David Alberto Navarro Ledesma.

[211] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XII-julio; Página: 251; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 9/93. José Gaudencio Zavala Núñez. 27 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Eusebio Gerardo Sanmiguel Salinas.

[212] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: VI Segunda Parte-2; Página: 541; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 149/90. Lorenzo Gerardo Martínez Ponce. 24 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Juan Castillo Duque.

el tribunal federal sentencia a un acusado por determinado delito, aun cuando el mismo ya hubiere sido sentenciado anteriormente por una autoridad judicial local si ésta era incompetente; porque para la legislación federal, no puede hablarse en tales casos de cosa juzgada, en virtud de que las autoridades del fuero común incompetentes, no pueden impedir que los Poderes de la Unión ejerzan legalmente sus atribuciones.

9. *NON BIS IN IDEM*, VIOLACIÓN NO COMETIDA A LA GARANTÍA DE.[213]

La mera determinación del tribunal de apelación consistente en ordenar la remisión de las constancias de autos a la autoridad judicial del fuero común, para que "resuelva en definitiva lo que en derecho proceda", sólo con relación a uno de los delitos del proceso, habiendo anulado el fallo de primer grado sobre el particular, no puede significar que al inculpado se le vaya a juzgar dos veces por dicho delito. En efecto, se trata de un mandamiento de tramitar un incidente de competencia que no puede, desde ningún punto de vista, ser estimado como un doble juicio de la responsable, menos aun cuando la sentencia de primer grado no causó estado.

10. *NON BIS IN IDEM*, VIOLACIÓN NO CONFIGURADA AL PRINCIPIO DE.[214]

El artículo 23 de la Constitución prohíbe que alguien sea juzgado más de una vez por el mismo hecho, pero ello no significa que si alguien ejecuta una serie de conductas y se le procesa ante un juez por algunas de ellas y otro es el tribunal que conoce de las restantes, se le esté juzgando dos veces por el mismo hecho. La circunstancia de que las conductas de referencia integren

---

[213] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 121-126 Segunda Parte; Página: 111; Precedentes: Amparo directo 7006/77. José Enrique García Dávalos. 6 de abril de 1979. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Secretario: Francisco Nieto González. Amparo directo 328/78. Raymundo Ruiz Herrera. 6 de abril de 1979. 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Secretario: Francisco Nieto González. NOTA (1): En la publicación original de esta tesis aparece la leyenda: "Véase: Séptima Época; Segunda Parte: Volumen 3, Pág. 77". En la publicación original de esta tesis aparece la leyenda: "Apéndice de Jurisprudencia 1917-1965, Segunda Parte, tesis Núm. 23, Pág. 76". Se elimina la leyenda que aparece en la publicación original "Sostiene la misma tesis" para el asunto 328/78.

[214] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 58 Segunda Parte; Página: 57; Precedentes: Amparo directo 4813/72. Inocente Calderón Guzmán y Coags. 5 de octubre de 1973. 5 votos. Ponente: Abel Huitrón y A.

la misma figura ilegal es intranscendente; lo que importa es que no se haga más de un pronunciamiento en relación con una conducta concreta. Imaginando el caso de quien ejecuta una serie de robos y es enjuiciado tan sólo por parte de los mismos por no haberse descubierto los demás, nada impide que una vez acreditados los que permanecían ocultos se le enjuicie, pues tales hechos no fueron materia del pronunciamiento anterior que comprendía únicamente los que con anterioridad habían quedado acreditados.

11. *NON BIS IN IDEM*, VIOLACIÓN NO CONFIGURADA AL PRINCIPIO DE, EN CASO DE INCOMPETENCIA.[215]

El artículo 23 constitucional consigna la garantía constitucional de que ningún sujeto puede ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, pero para que un juicio exista debe de concluir con un auto o sentencia que ponga fin al proceso, cualquiera que sea el sentido de esas resoluciones; más si el tribunal que conoce del proceso, en primera o en segunda instancia o en cualquiera que sea el estado del proceso, se declara incompetente para conocer de un delito, este proceso en realidad no ha concluido y, por ende, es lícito y jurídico el que la autoridad competente pueda iniciar nuevamente el proceso, haciendo acopio de los datos que obraban en el sumario, y en ese nuevo proceso se dicte sentencia bien sea condenatoria o absolutoria con plenitud de jurisdicción.

12. *NON BIS IN IDEM* Y COMPETENCIA.[216]

Si los delitos que se imputan al acusado tienen el carácter de ilícitos del orden común por encontrarse previstos en el artículo de un Código Penal de un Estado, toda vez que los hechos ocurrieron dentro de los límites de esa entidad federativa y si no se ejercitó acción penal por el delito que fue el que sirvió de apoyo para que la autoridad judicial federal aceptara la competencia,

---

[215] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 52 Segunda Parte; Página: 31; Precedentes: Amparo directo 3531/72. Jorge Aguilar Vélez. 12 de abril de 1973. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Séptima Época, Segunda Parte: Volumen 3, Pág. 77. Amparo directo 6454/61. Alfonso Escoboza Miranda. 26 de marzo de 1969. Mayoría de 3 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Sexta Época, Segunda Parte: Volumen LXXXVI, Pág. 13. * NOTA (1): * En la publicación original el reenvío es incorrecto.

[216] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 47 Segunda Parte; Página: 33; Precedentes: Amparo directo 3108/72. Pedro Guadarrama Carbajal. 15 de noviembre de 1972. Mayoría de 3 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Disidentes: Mario G. Rebolledo F. y Manuel Rivera Silva.

el conocimiento del proceso relativo corresponde al juez del fuero común; siendo así, el juez federal violó el artículo 16 de la Constitución General de la República al juzgar al acusado careciendo de competencia constitucional para tal efecto. En atención a lo anterior, el amparo debe concederse para que la responsable declare insubsistente la sentencia reclamada, decrete su incompetencia y remita los autos a la autoridad jurisdiccional del fuero común que considere competente para conocer de la conducta delictiva que se atribuye al quejoso, a fin de que lo juzgue dejándolo a su disposición en lo que se refiere a su libertad personal, bajo los efectos del auto de formal prisión dictado.

13. *NON BIS IN IDEM* Y COMPETENCIAS CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL.[217]

La diferencia que existe entre la competencia constitucional y la jurisdiccional, es que aquella es la capacidad de un tribunal de determinado fuero para juzgar ciertas materias y la jurisdiccional es también la capacidad, de un determinado órgano perteneciente a un tribunal, para intervenir en ciertos asuntos en forma exclusiva y así la carencia de la primera tiene por consecuencia que ningún órgano del tribunal puede intervenir y la segunda, que el asunto debe juzgarse, no por el órgano jurisdiccionalmente incompetente, sino por el que está capacitado para ello, perteneciente al mismo tribunal. La noción anterior capta las distintas consecuencias de ambas incompetencias, mas conviene determinar con precisión el principio fundamental de donde derivan, a efecto de que sirva de base para esclarecer los diversos problemas que surjan, vinculados con esta misma cuestión. Nuestro régimen federal descansa en el principio de que el reparto de atribuciones entre la Federación y los Estados, debe hacerlo la Constitución Federal y que aquélla sólo tiene las facultades que expresa y limitadamente ésta le confiere, reservándose los Estados las que no se otorgaron a la Federación. Además, se constituyen dos entidades (Federación y Estados) que deben crear sendos órdenes jurídicos y, al efecto, se les dota de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que corresponden a las funciones estatales indispensables para la

---

[217] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 47 Segunda Parte; Página: 34; Precedentes: Amparo directo 3108/72. Pedro Guadarrama Carbajal. 15 de noviembre de 1972. Mayoría de 3 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. Disidente: Mario G. Rebolledo F. y Manuel Rivera Silva. Competencia 87/71. Entre los Jueces Primero de Distrito de el Estado de Sonora y de Primera Instancia de la Ciudad de Ures, de la citada Entidad Federativa. 9 de noviembre de 1972. 5 votos. Ponente: Abel Huitrón y A. NOTA (1): Se elimina la leyenda que aparece en la publicación original "Sostiene la misma tesis" para el asunto 87/71.

existencia de un orden jurídico. nuestro constituyente, para constituir la República Federal, creó los órganos necesarios a efecto de que dentro del territorio nacional funcionaran dos órdenes jurídicos coextensos, diferenciados sólo por razón de la materia; el federal y el local o común y, asimismo, tantos órdenes como hay Estados componentes de la Federación, con jurisdicción sólo dentro del espacio de sus respectivos territorios. En consecuencia con lo anterior, quedan perfectamente deslindados los campos de acción de todos los poderes. Las facultades del Poder Legislativo Federal las enumera expresamente la Constitución y las no comprendidas en dicha enumeración, quedan reservadas a los Estados y las atribuciones de éstos se limitan, en relación con los demás estados por razón territorial, sus leyes sólo rigen dentro del ámbito de sus propios territorios. Como el derecho no consiste únicamente en la simple formulación teórica de las leyes, sino que es de su esencia aplicar concretamente ciertas consecuencias a determinados hechos, es inconcebible un orden jurídico con la sola función legislativa, pues las leyes se dictan para aplicarse prácticamente, por lo que además de los órganos que las expiden, se requieren otros que las apliquen (el judicial y el ejecutivo). Para formar los órdenes jurídicos a que ya se ha hecho referencia la Constitución crea siempre los tres poderes necesarios para que aquéllos funcionen y, por ello, se crean los Poderes Judiciales con el fin de que apliquen las leyes de los poderes legislativos. De ahí que sea correcto concluir lo siguiente: que las facultades que un poder legislativo tiene para legislar, se entienden tácitamente concedidas al poder judicial respectivo para juzgar de la aplicación de las leyes expedidas por ese poder y que la competencia constitucional de un determinado tribunal, se mide, en principio, por la competencia legislativa de su correspondiente poder legislativo. Por eso, resulta evidente la diferencia entre competencia constitucional y jurisdiccional, ya advertida en el precedente referido, puesto que si un cierto poder judicial no tiene competencia constitucional para determinado asunto, todos los órganos jurisdiccionales que lo componen también carecen de ella; en cambio, si ese poder judicial tiene la competencia constitucional, la tendrán absolutamente todos los órganos que lo componen. Ahora bien; independientemente de la competencia jurisdiccional para algún caso, que corresponde a otro órgano de ese mismo poder judicial. La Constitución establece tratándose de una persona a quien se atribuye un delito, que sea juzgada legalmente (artículo 14, párrafo segundo) y que no pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito (artículo 23). Y obviamente, esta última garantía no abarca a quien ha sido juzgado ilegalmente por tribunal incompetente y después juzgado por el órgano jurisdiccional que corresponde, porque no es enjuiciado dos veces conforme a derecho, sino sólo aquella en que se sometió al órgano com-

petente. Es principio de derecho procesal universalmente admitido, que todo lo que un juez incompetente resuelva, es nulo de pleno derecho. La mayor parte de los Códigos de la República Sostiene el principio establecido en el Código de Procedimientos Penales del Distrito y Territorios Federales en su artículo 452, por virtud del cual un juez incompetente actúa con validez hasta que se cierra la instrucción, puesto que solamente a partir de ese momento puede hacerse valer la incompetencia por declinatoria. Por lo tanto, la nulidad sólo comprende las actuaciones posteriores al auto referido, conservando las demás su plena validez.

14. *NON BIS IN IDEM*, VIOLACIÓN NO CONFIGURADA A LA GARANTÍA DE. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y FRAUDE.[218]

Si el Ministerio Público consignó por dos delitos distintos, esto es el relativo a la responsabilidad oficial y el diverso delito de fraude, en atención a diversas denuncias, y así se dio vista al jurado popular para que conociera los hechos que a juicio de la representante social tipificaban el delito de responsabilidad oficial y, sobre ellos, resolviera lo que conforme a derecho procediese, llegando a la conclusión dicho jurado popular que no se reunían los requisitos necesarios para acreditar la culpabilidad del acusado y en consecuencia se le absolvió por dicho delito, específicamente por cuanto hace a las fracciones XXIV y XXV del artículo 18 de la Ley de Responsabilidad de Empleados y Funcionarios de la Federación y, en la misma resolución, indicó que ningún análisis se había hecho respecto al diverso delito de fraude por el que también fue acusado y que sería materia de análisis por el juez instructor. Y si con base en lo anterior al juzgado de primera instancia estudio y resolvió respecto a la situación jurídica del inculpado sólo en lo tocante a los hechos a que se refería la diversa denuncia, que tipificaban el diverso delito de fraude, mismo que se consideró acreditado tanto por lo que hace al cuerpo del delito como a la responsabilidad penal del inculpado, no puede hablarse de que se haya juzgado al acusado dos veces por un mismo hecho, sino que, dentro de la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales, fue juzgado por hechos distintos que a juicio del Ministerio Público tipificaban delitos diversos, habiendo resultado absuelto en uno y condenado en el de fraude a que ya se ha hecho referencia; por lo tanto, no existe violación alguna de garantías en este aspecto, en perjuicio del acusado.

---

[218] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 44 Segunda Parte; Página: 49; Precedentes: Amparo directo 4569/71. Eusebio Vargas Vega. 21 de agosto de 1972. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva.

15. *NON BIS IN IDEM*. RESOLUCIONES COMPLEMENTARIAS QUE NO VIOLAN EL ART. 23 CONSTITUCIONAL.[219]

> Si bien es verdad que la garantía que otorga el artículo 23 constitucional es que no se juzgue dos veces a una persona por los mismos hechos delictuosos, esto no sucede si por error del tribunal de alzada se dejaron de estudiar en la primera resolución los agravios que se hicieron valer en tiempo, y para subsanarlo, se dicta una segunda resolución en la que se hace un análisis de los mismos, y con más razón cuando en la misma se beneficia al inculpado, y en los puntos resolutivos se dice que la misma forma parte de la sentencia anterior.

16. *NON BIS IN IDEM*, INOPERANCIA DEL PRINCIPIO DE, CUANDO EL TRIBUNAL QUE CONOCE EN PRIMER TÉRMINO ES INCOMPETENTE.[220]

> La Constitución establece, tratándose de una persona a quien se atribuye un delito, que sea juzgada legalmente (artículo 14, párrafo segundo) y que no pueda ser juzgada dos veces por el mismo delito (artículo 23). Y, obviamente, esta última garantía no abarca a quién ha sido juzgado ilegalmente por tribunal incompetente y después juzgado por el órgano jurisdiccional que corresponde; porque no es enjuiciado dos veces conforme a derecho, sino sólo aquélla en que se sometió al órgano competente puesto que es principio de derecho procesal universalmente admitido, que todo lo que un juez incompetente resuelva, es nulo de pleno derecho.

17. *NON BIS IN IDEM*, GARANTÍA DE. SE LIMITA A LA CONDUCTA DELICTUOSA CONCRETA Y NO SE EXTIENDE AL DELITO GENÉRICO.[221]

> El principio non bis in ídem, que recoge el artículo 23 constitucional, consistente en que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma conducta

---

[219] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 19 Segunda Parte; Página: 35; Precedentes: Amparo directo 58/70. Antonio Paz González. 2 de julio de 1970. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Mario G. Rebolledo Fernández. Secretario: Salvador Ramos Sosa.

[220] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 3 Segunda Parte; Página: 77; Precedentes: Amparo directo 6454/61. Alfonso Escoboza Miranda. 26 de marzo de 1969. Mayoría de 3 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Sexta Época, Segunda Parte: Volumen LXXXVI, Pág. 13. * NOTA (1): * En la publicación original el reenvío es incorrecto.

[221] Séptima Época Instancia: Sala Auxiliar; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 169-174 Séptima Parte; Página: 217; Precedentes: Amparo directo 2051/78. Arturo

delictuosa, por los mismos hechos constitutivos de un delito previsto por la ley, en modo alguno opera sobre el nombre genérico o designación legal de un hecho delictuoso; y tal principio se refiere, en estricta interpretación, a proscribir la iniciación de un nuevo juicio sobre una cuestión que ya ha sido fallada en forma definitiva en un procedimiento judicial anterior; de manera que esta hipótesis no se adecua a conductas similares que el amparista realiza en diferente tiempo y en diverso lugar.

18. *NON BIS IN IDEM*. NATURALEZA DEL PRINCIPIO.[222]

El artículo 23 Constitucional prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito, pero de ninguna manera alude, en forma estricta, al nombre de este delito, sino que se refiere a los hechos materiales o individualizados constitutivos de ese delito, por lo que una primera condena por determinados y concretos hechos que se adecuan a la tipificación de cierto ilícito, no impide otra posterior por diversos hechos pero constitutivos también del mismo tipo.

19. *NON BIS IN IDEM*. INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN LA SEGUNDA INSTANCIA POR AUTORIDAD FEDERAL TRATÁNDOSE DE DELITOS DEL ORDEN COMÚN NO VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE.[223]

No es cierto, que al ordenar que se remitan copias certificadas del proceso al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que se turne al Juzgado del Orden Común competente para conocer del delito de robo, se viole el principio *non bis in idem*, porque la ejecutoria del Tribunal de Alzada, al suprimir para el fin la penalidad que se impuso al sentenciado en primera instancia, por el motivo de la incompetencia, no entraña que se haya juzgado al agraviado, porque por tal debe entenderse cuando un sujeto es condenado o absuelto por sentencia autorizada por un determinado ilícito, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 23 Constitucional, lo que no

---

de León Martínez. 1 de febrero de 1983. Mayoría de 4 votos. Ponente: Salvador Martínez Rojas. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco.

[222] Séptima Época Instancia: Sala Auxiliar; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 56 Séptima Parte; Página: 39; Precedentes: Amparo directo 9482/64. Jorge Argaez Manzanillo. 20 de agosto de 1973. 5 votos. Ponente: Alfonso López Aparicio.

[223] Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 205-216 Sexta Parte; Página: 319; TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 265/86. Raymundo Soria González. 20 de agosto de 1986. Ponente: Raúl Murillo Delgado.

acontece en la especie, porque como se dijo, el Tribunal omitió verter pronunciamiento alguno que decida la responsabilidad o falta de responsabilidad del quejoso; luego entonces, no fue juzgado por ese ilícito y por ende, no impide que la autoridad competente en su caso, proceda de conformidad con su atribuciones a la represión del mismo.

20. *NON BIS IN IDEM*. LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA FUNDADA EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL, NO OPERA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN APELACIÓN QUE, REVOCANDO LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DE PRIMERA INSTANCIA, ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A PARTIR DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.[224]

A fin de que una sentencia adquiera autoridad de cosa juzgada, es menester que el juez haya decidido la cuestión substancial litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser discutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro futuro (*non bis in idem*), derivando la imposibilidad de abrir la discusión en el nuevo proceso, sea porque las partes han consentido el pronunciamiento de primera instancia, sea por haberse agotado los recursos ordinarios y extraordinarios cuando ellos procedan, estableciéndose de este modo la irrevocabilidad de la sentencia. Así, en el caso en el que el fallo absolutorio dictado en favor del inculpado por el juez de instrucción, no lo consiente el Ministerio Público, quien lo recurre en apelación no adquiere autoridad de cosa juzgada, ni engendra la excepción conforme a la cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos delictivos, por lo que no puede considerarse que la reposición del procedimiento a partir del auto de formal prisión que ordene el Tribunal de alzada contra el inculpado, infrinja la disposición contenida en el artículo 23 constitucional.

21. MULTAS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. *NON BIS IN IDEM*.[225]

La garantía constitucional contenida en el artículo 23, que prohíbe enjuiciar dos veces por la misma infracción, es aplicable a las penas que se impongan por infracciones administrativas, como es el caso de las multas.

---

[224] Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 139-144 Sexta Parte; Página: 105; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 100/79. Luis Vicente Lara Carpio. 29 de agosto de 1980.Ponente: Víctor Manuel Franco. NOTA: En la publicación original se omite la mención de la votación.

[225] Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 31 Sexta Parte; Página: 47; PRIMER TRIBUNAL COLE-

22. AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO.[226]

Partiendo de la base de que el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su defensa durante el proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al quejoso a defenderse, además, de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un medio extraordinario de defensa constitucional por la que los Jueces de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no garantías individuales.

Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

GIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: DA-535/70. Presciliano Barrera Ramírez de Arellano. 6 de julio de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

[226] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: VI.1o.P.198 P Página: 1335 Materia: Penal Tesis aislada; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 140/2002. 16 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretaria: María Cristina Bretón Estrada.

c) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en los juicios penales

El artículo 20 constitucional consagra un amplio número de garantías propias de las personas sujetas a proceso. En virtud de que el texto del mismo es extenso, seguiremos el esquema manejado por Jesús Zamora Pierce, en su obra "Garantías y Proceso Penal". Así, podemos desglosar cinco garantías contenidas en el numeral en comento: La garantía de libertad bajo caución; La garantía de no autoincriminarse; La garantía de defensa; La garantía de jurado y de ser juzgado en audiencia pública y la garantía de brevedad. Las garantías de libertad serán tratadas en el tomo segundo. Sólo para no dejar en el tintero, una breve explicación introductoria, veamos las siguientes precisiones de Luis Bazdrech:

> Están consignados detalladamente en los siguientes artículos constitucionales: el 18 y el 19, en cuanto tratan del auto de formal prisión, y a los cuales ya nos referimos al detallar la garantía de libertad corporal; el 21, que versa sobre la persecución y sanción de los delitos, ya analizado al definir su participación en la garantía de seguridad jurídica; el 23, relativo a las instancias de los juicios criminales y que prohíbe la duplicación de los procesos, también comprendido en dicha garantía de seguridad jurídica; y particularmente el artículo 20, que consignan los derechos específicos que la Constitución garantiza a los procesados durante el curso del procedimiento respectivo, y que en concreto son: la libertad bajo caución, [...], la prohibición de la incomunicación y en general de todo medio que tienda a que el reo declare en su contra; el conocimiento del nombre del acusador y de la naturaleza de la acusación, a fin de poder contestar el cargo; los careos con quienes declaren contra el inculpado, la admisión de las pruebas que ofrezca, el juicio por un juez de derecho y en ciertos casos por un jurado popular, el acceso a todos los datos del proceso, el término para el pronunciamiento de la sentencia, la defensa personal o por medio de defensor particular u oficial, y la limitación de la restricción de la libertad personal exclusivamente al tiempo justificado por la responsabilidad criminal; todas esas prevenciones constitucionales tienen la debida aplicación en los correspondientes ordenamientos procesales, y el estudio de sus detalles es materia del Derecho procesal penal.[227]

[227] L. Bazdrech, *op. cit.*, pp. 170-171.

1. CONFESIÓN MINISTERIAL EMITIDA SIN LA ASISTENCIA DE DEFENSOR ANTES DE LA VIGENCIA DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 20, FRACCIONES II Y IX, CONSTITUCIONAL. NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS NI CARECE DE EFICACIA PROBATORIA.[228]

> Si bien en las reformas al artículo 20 fracciones II y IX de la Constitución General de la República, publicadas en el *Diario Oficial* de la Federación el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, vigentes a partir del cuatro de septiembre siguiente, se establecieron entre otros derechos para el inculpado, el de asistirse por un defensor desde la averiguación previa, requiriéndole desde ese momento para que nombre uno y en caso de no querer o no poder hacerlo, la autoridad del conocimiento debe asignarle un defensor de oficio, determinándose que la confesión rendida ante el Ministerio Público o ante el juez sin la asistencia de un defensor carecerá de todo valor probatorio; empero, si la detención del enjuiciado y las diligencias de averiguación previa ministerial se realizaron antes de que esas reformas entraran en vigor, esto es, cuando sólo el artículo 20, fracción IX, constitucional contemplaba como obligatorio el nombramiento de defensor para el inculpado ante el juez de la causa, y como facultad exclusiva del enjuiciado la de asistirse de defensor a partir de su detención; el hecho de que el Ministerio Público no le haya asignado un defensor de oficio durante la averiguación previa, ante su propia negativa o reserva en cuanto al derecho de nombrarse uno, no puede considerarse violatorio de lo establecido por las reformas al artículo 20, fracciones II y IX de la Carta Magna, ni tampoco, por tanto, privarse de toda eficacia probatoria a la confesión ministerial emitida por el inculpado; máxime que en tratándose de lo relativo a la defensa del detenido, tales disposiciones prevén derechos de carácter procesal que por su natura-

---

[228] Octava Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 82, octubre de 1994; Tesis: VI.2o. J/331; Página: 51; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 510/93. Ángel Eduardo Cuautle Cabrera. 28 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo directo 426/93. Francisco García Paz. 23 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 575/93. Ignacio Hernández Cabrera. 19 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 597/93. José Luis Hernández Tejeda. 19 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 270/94. Ricardo Hernández Morales. 17 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Cabrera Vázquez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

leza no puede retrotraerse o aplicarse a situaciones procesales ya acontecidas, siendo además ilustrativo sobre el particular, el principio jurídico de que en materia procesal, no existe retroactividad de la ley.

2. CONFESIÓN MINISTERIAL. CARECE DE VALOR PROBATORIO CUANDO LA DESIGNACIÓN HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIRLA NO RECAE EN UN DEFENSOR DE OFICIO, HOY DEFENSOR PÚBLICO.[229]

Si bien es cierto el Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 125, confiere la facultad al Ministerio Público para que una vez iniciada una averiguación, pueda "...citar para que declaren sobre los hechos que se averigüen, a las personas que por cualquier concepto participen en ellos o aparezcan tengan datos sobre los mismos...", no menos lo es que dicho servidor público precisamente al recibir dentro de la averiguación previa respectiva una declaración con carácter de confesión, por referirse aquélla a hechos propios que le perjudican, debe sin restricción cumplir con el deber que le impone el artículo 128, fracción III, inciso b), en relación con el 287, fracción II, del citado Código Federal de Procedimientos Penales, ambos en concordancia con las fracciones IX y X del artículo 20 constitucional, que establecen que desde el inicio de su proceso, el inculpado será informado de los derechos que en su favor consigna la Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. La primera y la tercera hipótesis tienen lugar cuando el acusado manifiesta de manera clara su voluntad de defenderse por sí solo, es decir, se nombra a sí

---

[229] Novena Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, octubre de 1999; Tesis: XXIII.1o. J/17; Página: 1172; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 373/99. Raquel Lara González. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 374/99. Pedro Chávez Muñoz. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 375/99. Alejandro Flores Castillo. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 376/99. Antonio Bernal González. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 377/99. David Vela Luna. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes.

NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 87/99, pendiente de resolver en la Primera Sala.

mismo su propio defensor, o bien designa como tal a una persona de su confianza; sin embargo, cuando el inculpado no manifiesta su voluntad de defenderse por sí mismo y además expresa que no tiene persona de su confianza que lo defienda, deberá serle designado un defensor de oficio, hoy defensor público, pues de lo contrario, la defensa que se le asigne no sería la adecuada, en contravención al texto constitucional y al código adjetivo mencionado. Así, si como en el caso, la persona que el Ministerio Público nombró al quejoso para que lo asistiera en su declaración ministerial no tiene el carácter de defensor de oficio, por estar en el supuesto contemplado en la fracción IX del artículo 20 de la Carta Magna, es inconcuso que tal nombramiento no satisface el requerimiento constitucional anotado y en esa virtud la declaración ministerial vertida carece de valor probatorio.

3. CAREOS. DEBEN CELEBRARSE AUNQUE LA LEY LOCAL NO SEÑALE QUE SU OMISIÓN SEA CAUSA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO.[230] (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)

El artículo 20, fracción IV, de la Constitución Federal de la República, establece que en todo juicio del orden criminal tendrá el acusado, como garantía individual, la de ser careado con los testigos que depongan en su contra, los que declararán en su presencia si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa; y si bien es cierto que el Código Procesal Penal de Querétaro no señala que la omisión de careos sea motivo para reponer el procedimiento, también lo es que el artículo 133 de la Constitución Federal establece que ésta es la Ley Suprema de toda la Unión y que los jueces de cada Estado deben arreglarse a la misma, a pesar de las disposiciones en contrario que existan en las Constituciones o leyes estatales, de modo tal que si no se practican los careos de que se trata, es procedente la concesión del amparo para que se subsane la apuntada omisión.

---

[230] Séptima Época Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte HO; Tesis: 802; Página: 518; TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Precedentes: Séptima Época: Amparo directo 639/71. Catalina Landeros de Soria. 3 de septiembre de 1971. Unanimidad de votos. Amparo directo 645/71. Agustín Martínez Ordóñez. 3 de diciembre de 1971. Unanimidad de votos. Amparo directo 653/71. Porfirio Guerrero Rangel. 13 de diciembre de 1971. Unanimidad de votos. Amparo directo 1002/71. Fidencio Sánchez Torres. 14 de enero de 1972. Unanimidad de votos. Amparo directo 643/71. Celso García Ramírez. 31 de enero de 1972. Unanimidad de votos.

4. CAREOS. ALCANCE DE LA REFORMA SUFRIDA POR LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL.[231]

A partir de la reforma sufrida por la fracción IV del artículo 20 constitucional que entró en vigor el cuatro de septiembre del año en curso, el inculpado deberá ser careado en presencia del juez con quienes depongan en su contra, siempre y cuando previamente lo solicite, lo que implica que la celebración del careo dejó de ser obligación legal del juzgador, pues éste sólo debe acordarlo a petición de dicho inculpado, ya sea por sí o por conducto de su defensor.

5. CAREO SUPLETORIO. PROCEDENCIA.[232]

Para que se omita el careo constitucional y proceda en su lugar el supletorio, es necesario que el Juez agote previamente todos los medios legales para

---

[231] Octava Época Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 79, julio de 1994; Tesis: VII.P. J/42; Página: 60; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 368/93. María del Carmen López Chávez. 21 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretaria: Juana Martha López Quiroz. Amparo directo 549/93. Óscar Rivera López. 15 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia López Vives. Amparo directo 600/93. Gilberto Hidalgo Arenas. 1 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. Amparo directo 499/93. Martín González Martínez. 29 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. Amparo directo 36/94. Mónico Alejandre Valdez. 6 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco.

[232] Octava Época Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 67, julio de 1993; Tesis: I. 4o. P. J/1; Página: 31; CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 1967/92. Federick Alan Mc Phail Fanger. 28 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretaria: Martha del Carmen Hernández Álvarez. Amparo directo 2072/92. José Luis Yáñez López. 21 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretario: Manuel Bárcena Villanueva. Amparo directo 2126/92. Martín Méndez Sánchez. 10 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández. Amparo directo 2516/92. José Humberto San Germán Cruz. 10 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández. Amparo directo 56/93.

la comparecencia de los testigos de cargo, pues de otra forma se conculca la garantía de defensa consagrada en el artículo 20 fracción IV de nuestra Carta Magna, que da oportunidad al procesado de cuestionar a los testigos, quienes podrán rectificar y aun retirar su acusación.

6. CAREOS. CUANDO SU FALTA IMPORTA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL.[233]

Sabido es que el careo en su aspecto de garantía constitucional defiere del careo desde el punto de vista procesal porque el primero tiene por objeto que el reo vea y conozca a las personas que declaran en su contra para que no se puedan forjar artificialmente testimonios en su perjuicio y para darle ocasión de hacerles las preguntas que estime pertinentes a su defensa, en tanto que el segundo persigue como fin aclarar los puntos de contradicción que hay en las declaraciones respectivas. En tal virtud, la falta de celebración del primero de dichos careos constituye una violación de la fracción IV del artículo 20 de la Carta Magna, cuya omisión da origen a que se reponga el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la diversa fracción III del artículo 160 de la Ley de Amparo.

Gerardo Arturo Caballero Méndez. 17 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández.

NOTA: Se formó jurisprudencia aunque no se consideraron estos asuntos: Octava Época, Tomo XII, agosto, página 371. Amparo directo 2029/92. José Cruz Rangel Cordero. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Bruno Jaimes Nava. Secretaria: Martha del Carmen Hernández Álvarez. Amparo directo 1989/92. Mauro Rosas Palestino. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Pedro Leda Elizalde.

[233] Octava Época Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 67, julio de 1993; Tesis: VII.P. J/24; Página: 60; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 3/93. Celia Montano García. 2 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio Marín Rodríguez. Amparo directo 100/93. Angélica Castelán Guerrero. 1 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. Amparo directo 587/92. Guillermo Hernández Cruz. 15 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco. Amparo directo 177/93. Hugo Linares Vidal. 11 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra. Amparo directo 200/93. Mateo Mejía López. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia López Vives.

7. CAREOS. DEBEN CELEBRARSE DE OFICIO.[234]

Si el acusado no es careado con los testigos que hayan depuesto en su contra, se conculca en su perjuicio la garantía consagrada en la fracción IV del artículo 20 de la Constitución Federal, cometiéndose la violación de procedimiento a que alude el artículo 160, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que sea válido el argumento en el sentido de afirmar que el acusado debe solicitar la práctica de esas diligencias, puesto que es obligación del juzgador decretar de oficio el desahogo de las mismas, por imponérselo así el preinvocado dispositivo constitucional.

8. CAREO CONSTITUCIONAL. SÓLO PUEDE ACORDARSE A PETICIÓN DEL PROCESADO EL.[235]

Conforme a la reforma al artículo 20, fracción IV, de la Constitución Federal, vigente a partir del cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y

---

[234] Octava Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 66, junio de 1993; Tesis: V.2o. J/66; Página: 45; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 147/92. Laura Elena Neyoy de Valenzuela. 29 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo directo 344/92. Jesús María de la Vara Moreno. 30 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Amparo directo 439/92. Epifanio Adalberto Valles Ruiz. 18 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Amparo directo 4/93. Horacio González Estrada. 27 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Amparo directo 185/93. José Arvizu Bazaldua. 28 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David Guerrero Espriú. Secretario: Arturo Ortegón Garza.

[235] Novena Época Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: II, septiembre de 1995; Tesis: XX. J/5; Página: 397; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 975/94. Eduardo de León Ruiz. 2 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez. Amparo directo 156/95. José Luis García García. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez. Amparo directo 166/95. Eleazar Barrios Tirado. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez. Amparo directo 272/95. Juan Carlos Medina Chirino. 29 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Rafael León González. Amparo directo 438/95. Rodrigo Roblero Morales. 6 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.

tres, la celebración de careo constitucional deja de ser obligación legal del juez, porque éste lo acordará sólo a petición del procesado, ya por sí o por conducto de su defensor, lo que se entiende, por ser a aquel a quien le interesa conocer a su acusador o a las personas que de alguna manera lo involucren como responsable del delito que se le reprocha, solicitud que, viene a provocar un impulso al procedimiento penal, a fin de agilizar su trámite.

9. CAREOS PROCESALES. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN INCURRE EN VIOLACIÓN DE GARANTÍAS CUANDO OMITE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SU PRÁCTICA, NO OBSTANTE ADVERTIR CONTRADICCIONES SUSTANCIALES ENTRE TESTIGOS.[236]

Si conforme a la legislación procesal penal el Juez de primera instancia debe ordenar la práctica de careos cuando exista contradicción sustancial en las declaraciones de dos personas, omitiendo hacerlo, y el tribunal de alzada advierta que existe tal contradicción entre las declaraciones rendidas por los testigos de cargo y de descargo, debe ordenar la reposición del procedimiento de primera instancia para el efecto de que se practiquen los careos procesales indebidamente omitidos, pues de no hacerlo así se violenta la garantía de defensa del impetrante.

10. JURADO POPULAR.[237]

Del contexto de la fracción VI del artículo 20 constitucional, se deduce de manera clara que no es forzoso que todos los delitos que se castiguen con pena de más de un año de prisión, se juzguen por el jurado popular, sino que la Constitución ampliamente concede a los Estados, la facultad de elegir entre un juez de derecho o un tribunal de hecho.

---

[236] SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Clave: V.2o., Núm.: J/57.

[237] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte HO; Tesis: 895; Página: 569; Precedentes: Quinta Época: Amparo directo 1202/21. Colín Ángel. 23 de septiembre de 1924. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 4742/27. Maytorena José María. 13 de febrero de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 2196/28. Hinojos Pedro. 6 de junio de 1930. Mayoría de tres votos. Amparo en revisión 3428/29. Cuevas Miguel Félix. 8 de octubre de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 901/30. Meza Pablo. 3 de diciembre de 1930. Cinco votos.

11. PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL.[238]

La fracción V del artículo 20 constitucional, no determina en manera alguna, que la prueba deba recibirse en todo tiempo y a voluntad absoluta del quejoso, sino en el tiempo que la ley respectiva conceda al efecto.

12. PROCESOS, TÉRMINO DE LOS.[239]

El término señalado por el artículo 20 constitucional en su fracción VIII, no es aplicable cuando no se ha dictado en contra del acusado el auto de formal prisión.

13. DEFENSA, GARANTÍA DE.[240]

La obligación impuesta a la autoridad de instancia por la fracción IX del artículo 20 constitucional, surte efectos a partir de que el indiciado es puesto a disposición de la autoridad judicial, y ésta al recibir la declaración preparatoria del presunto responsable tiene la obligación ineludible de designarle defensor si es que aquél no lo ha hecho; mas la facultad de asistirse de defensor a partir de la detención del acusado, concierne única y exclusivamente a éste, por lo que si no lo tuvo desde el momento en que fue detenido, esa omisión es imputable al propio acusado y no al juez instructor.

---

[238] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 273; Página: 153; Precedentes: Quinta Época: Amparo directo 1411/19. Rodríguez Verdín Salvador. 16 de mayo de 1922. Unanimidad de diez votos. Amparo directo 3379/27. Martín Irenero L. 18 de mayo de 1928. Mayoría de siete votos. Amparo directo 3298/23. Dorantes Cipriano. 23 de abril de 1929. Cinco votos. Amparo directo 1977/29. Vázquez Mauricio. 10 de diciembre de 1929. Cinco votos.

[239] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 265; Página: 149; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 7182/41. Hernández Gabino. 8 de enero de 1942. Cinco votos. Amparo en revisión 5367/46. García Felipe. 23 de marzo de 1947. Cinco votos. Amparo en revisión 8076/46. Hernández Pérez de Hernández Leonides. 16 de julio de 1947. Cinco votos. Amparo en revisión 6839/48. Cruz Hermenegildo. 24 de abril de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 432/53. Alfonso Reyes Gasca. 8 de junio de 1953. Cinco votos.

[240] Séptima Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte HO; Tesis: 852; Página: 547; Precedentes: Séptima Época: Amparo directo 4942/71. Elia Payán Alcalá. 17 de marzo de 1972. Cinco votos. Amparo directo 5925/71. Julio Carbajal Reséndiz. 26 de julio de 1972. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo. 5934/73. Víctor Manuel Santiago Rodríguez y otro. 26 de julio de 1974. Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 1194/74. Francisco Hernández Ruiz. 30 de agosto de 1974. Cinco votos. Amparo directo 5770/74. Ignacio García Coronado. 9 de abril de 1975. Cinco votos.

14. AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.[241]

Atento lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el auto de formal procesamiento sólo se precisará la materia de la causa a seguir, al determinar el órgano jurisdiccional los hechos delictivos que motivaron el ejercicio de la acción penal y subsumirlos provisionalmente dentro de una o varias disposiciones legales que tipifiquen tales hechos, sobre la base de que existan datos de la probable responsabilidad del acusado en su comisión. Por ello, todo juzgador al dictar un auto de formal prisión, debe limitar su actividad al estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, sin analizar modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, ya que estos extremos deben ser objeto del proceso penal correspondiente y de la sentencia respectiva. No es obstáculo a la conclusión anterior, lo preceptuado por el artículo 20, fracción I, Constitucional, en el sentido de que al resolverse sobre la procedencia de la libertad provisional, deben tomarse en cuenta las calificativas o modificativas que para el delito materia del ejercicio de la acción penal se invoquen por el Ministerio Público, ya que esta última disposición no se refiere en concreto al auto de formal prisión, sino a la hipótesis en que el acusado solicite y se le conceda la libertad bajo caución; además de que al reformarse el último de los dispositivos legales citados, en los términos aludidos, no sufrió enmienda el artículo 19 de la Constitución General de la República.

---

[241] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Gaceta,* del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 16-18, abril-junio de 1989; Tesis: 1a./J. 4/89; Página: 59; Contradicción de tesis 5/88. Entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de mayo de 1989. Mayoría de 4 votos, contra el voto de la Ministra Victoria Adato Green. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretario: Carlos Arellano Hobelsberger. Tesis de jurisprudencia 4/89. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de junio de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores ministros: Presidente Samuel Alba Leyva, Francisco Pavón Vasconcelos, Luis Fernández Doblado, Santiago Rodríguez Roldán y Victoria Adato Green. México, Distrito Federal, a de doce de junio de mil novecientos ochenta y nueve.

NOTA: Esta tesis también aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación,* Tomo III, Primera Parte, pág. 263.

Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Novena Época, Tomo V-febrero de 1997, Pág. 197, tesis por contradicción 1a./J.6/97.

15. AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU CONTRA.[242]

A las excepciones al principio de definitividad específicamente previstas por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistentes en que no existe obligación de agotar recursos, dentro del procedimiento, tratándose de terceros extraños y de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o de cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución de la República, debe añadirse la diversa excepción que se desprende de la fracción XII del artículo 107 de la Carta Magna reproducida, en esencia, en el artículo 37 de la Ley de Amparo en el sentido de que "la violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del Tribunal que la cometa o ante el juez de Distrito que corresponda", pues resulta claro que tampoco en esos casos se exige el agotamiento previo de recursos. Ahora bien, para que proceda el amparo en contra del auto de sujeción a proceso no es necesario que se agote el recurso de apelación, pues tanto ese auto como el de formal prisión se encuentran regulados por el artículo 19 constitucional en virtud de que no difieren, en lo esencial, uno del otro, ya que ambos constituyen la base del proceso, que no puede seguirse sino por el delito o delitos en ellos señalados, y no pueden pronunciarse si no existen elementos suficientes para comprobar el cuerpo del delito y para hacer probable la responsabilidad del inculpado. La única diferencia existente entre ambas determinaciones radica en que el auto de sujeción a proceso no restringe la libertad sino sólo la perturba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no es con su autorización. Independientemente de ello, la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XII del artículo 107 de la norma fundamental, no supedita su procedencia al hecho de que el acto reclamado afecte la libertad del quejoso, sino que la hace depender de la violación de cualquiera de las garantías tuteladas por los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la propia Constitución.

---

[242] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 56; Página: 31; Precedentes: Octava Época: Contradicción de tesis 14/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito. 4 de septiembre de 1990. Mayoría de cuatro votos.

NOTA: Tesis 1a./J.4/91, *Gaceta*, número 44, pág. 14; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VIII-agosto, pág. 64.

16. PRUEBAS CONTRADICTORIAS O DE DESCARGO. DEBEN SER VALORADAS PORMENORIZADAMENTE EN LA ETAPA DE PREINSTRUCCIÓN.[243]

La interpretación relacionada de las fracciones III, IV y V del artículo 20 constitucional con el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales permite afirmar el derecho que tiene el inculpado a que se le reciban pruebas en el procedimiento de preinstrucción; por consiguiente resulta lógico y jurídico que las pruebas de descargo que aporte el inculpado para desvirtuar las pruebas de cargo de la representación social, deben ser valoradas aunque se trate de pruebas contradictorias, entendiendo como tales, las que tienen valor análogo, pues en caso de no ser valoradas dichas pruebas en la citada etapa de preinstrucción se violarían las normas que regulan la prueba, máxime que no existe fundamento legal que apoye al juez a posponer la valoración de las pruebas contradictorias hasta la sentencia definitiva, lo cual podría causarle al procesado un daño irreparable. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de las pruebas depende del momento procesal en que se aporten, pues su objetivo difiere según la etapa procesal en que se aporte, ya que tienden a demostrar diferente hipótesis legal, así en la etapa procesal de preinstrucción, la hipótesis legal a probar por parte del Ministerio Público es el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del acusado y éste por su parte deberá ofrecer las pruebas para desvirtuar su presunta responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye. Una y otras pruebas deben ser analizadas por el juez circunscribiendo su valoración única y exclusivamente a la etapa de preinstrucción pues de ello dependerá si el acusado es o no sometido a proceso penal.

17. DEFENSOR, FACULTAD DEL ACUSADO DE ASISTIRSE DE, A PARTIR DE LA DETENCIÓN.[244]

La obligación señalada por la fracción IX del artículo 20 constitucional, en el sentido del nombramiento de defensor para el acusado, se refiere a cuan-

---

[243] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 272; Página: 152; Precedentes: Octava Época: Contradicción de tesis 5/93. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo y Tribunal Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito (antes Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito), y Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 18 de octubre de 1993. Unanimidad de cuatro votos.

NOTA: Tesis 1a./J.1/94, *Gaceta*, número 75, pág. 12; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIII-marzo, pág. 37. Amparo directo 4029/28. Hinojosa Jesús M. 21 de agosto de 1930. Cinco votos.

[244] Octava Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 80, agosto de

do este ha sido ya declarado sujeto a proceso, momento en el cual es ineludible la obligación del juez de nombrarle defensor, en caso de que aquél no lo haya hecho; más la facultad de asistirse de defensor, a partir de la detención del inculpado, concierne única y exclusivamente a éste, por lo que si no lo tuvo desde el momento en que fue detenido, esa omisión es imputable al propio acusado y no al juez instructor.

18. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE INFUNDADO EL INCIDENTE DE DESVANECIMIENTO DE DATOS, SI EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN.[245]

Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 64, Novena Parte, del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1985, establece que cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 de la Carta Magna, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación, sin

---

1994; Tesis: VI.2o. J/305; Página: 75; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 46/91. Fernando Narváez Yáñez. 19 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo directo 54/93. Felipe Cano Cruz. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo directo 280/93. Asunción Linares Rojas. 7 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 426/93. Francisco García Paz. 23 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 53/94. Nicolás Piedras Méndez. 2 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

[245] Octava Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 79, julio de 1994; Tesis: I.2o.P. J/55; Página: 33; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 188/87. Edmundo Peláez Muñiz y otros. 7 de julio de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Martha García Gutiérrez. Amparo en revisión 232/90. Aída Granados Peláez. 15 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernández Rivera. Amparo en revisión 475/90. Reyes Pacheco Pozos. 16 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Martín Carrasco. Secretaria: Martha García Gutiérrez. Amparo en revisión 118/94. Alfonso Herrera García. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Enrique Escobar Ángeles. Amparo en revisión 178/94. Jorge José Giannetto Fernández y otro. 28 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Ballesteros Tena. Secretario: Juvenal Hernández Rivera.

embargo, ésta no es aplicable, en tratándose de la interlocutoria dictada en el incidente de desvanecimiento de datos, ni mucho menos lo dispuesto por los artículos 17 y 37 de la Ley de Amparo, porque esa resolución, no restringe directamente la libertad de los gobernados, ni importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, ni alguno de los prohibidos por el precepto 22 constitucional y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los indicados numerales 16, en materia penal, 19 y 20 de nuestra máxima ley, lo que sí sucedería en los casos de orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que les niegue el beneficio de la libertad provisional bajo fianza, contemplados en tales garantías y en los que no opera el principio de definitividad, que establece el artículo 107, fracción XII, constitucional, sin que en esa salvedad esté comprendida la sentencia interlocutoria que se dicte en el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, porque, se repite, no restringe la libertad de los procesados, sino que ésta les fue limitada como consecuencia inmediata de la prisión preventiva a que están sujetos, a más de que, la resolución que declaró improcedente tal incidente, sólo tiene carácter procesal y no constitucional, por lo tanto no se conculcan en forma alguna en su perjuicio las indicadas garantías y por ello debe agotarse el recurso ordinario de apelación antes de intentar el amparo.

19. CONCURSO DE DELITOS POR DOBLE HOMICIDIO, RESULTA INAPLICABLE POR EL JUEZ, CUANDO NO LO SOLICITÓ EL MINISTERIO PÚBLICO.[246]

Cuando en la secuela procesal se estima demostrada la existencia de un concurso real de delitos, cualquiera que sea el carácter de éste, para que el juzgador de instancia se encuentre en la aptitud de imponer las que correspon-

---

[246] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 75, marzo de 1994; Tesis: 1a./J. 5/93; Página: 11; Contradicción de tesis 12/91. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 31 de mayo de 1993. Mayoría de cuatro votos, en contra del Ministro Samuel Alba Leyva. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretario. Rubén Arturo Sánchez Valencia. Engrosó Ministra Victoria Adato Green. Tesis de Jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión del nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de votos de los señores Ministros: Presidente Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, Samuel Alba Leyva, Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado.

NOTA: La tesis 5/93, publicada en la *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*, núm. 71 (noviembre de 1993) pág. 14, por disposición de la Sala queda sin efectos y se sustituye por la que aquí se publica.

dan, sólo por el de mayor entidad o bien acumularlas por cada ilícito demostrado hasta por un monto que queda a su criterio, es evidente que conforme a una correcta técnica procesal, dicha actuación judicial debe sustentarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio Público, quien es el titular indiscutible de la acción penal, mismo que por ser un órgano técnico, no corresponde al juez subsanar sus deficiencias u omisiones, de manera que si en la acusación omite esgrimir pedimento alguno para sancionar al procesado como responsable de un concurso real de delitos, a pesar de la prueba de éste, es obvio que dicho funcionario judicial se encuentra legalmente impedido para sancionar por ese concepto, por no existir acusación de parte de quien correspondía hacerla. En efecto, conforme al artículo 21 constitucional, el juzgador tiene una amplia potestad sancionadora, la cual constituye una de sus funciones inmanentes, sin embargo, la misma no puede ser absoluta, oficiosa, ni arbitraria, pues atento a los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley penal, de defensa para un procesado y de equilibrio procesal de las partes, que se deducen de los preceptos 14, 20 y 21 de la Carta Magna, esa actuación punitiva judicial debe ser consecuencia de previa petición por parte del titular de la acción penal; de modo que, cuando éste omita efectuar consideración a ese respecto, no cabe justificar la imposición de las penas, subsanando la deficiencia ministerial, en detrimento a las garantías del acusado pues el argumento de que solamente corresponde a la autoridad judicial la imposición de las penas, deviene ineficaz en razón de que ésta, como se ha dicho, no es arbitraria, sino acorde y consecuente a una normatividad y a un estado de derecho en vigor, pues admitir lo contrario equivaldría a trastocar el sistema penal vigente hacia una postura eminentemente inquisitiva.

20. PRUEBAS CONTRADICTORIAS O DE DESCARGO. DEBEN SER VALORADAS PORMENORIZADAMENTE EN LA ETAPA DE PREINSTRUCCIÓN.[247]

La interpretación relacionada de las fracciones III, IV, y V del artículo 20 constitucional con el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales

---

[247] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación*; Tomo: 75, marzo de 1994; Tesis: 1a./J. 1/94; Página: 12; Contradicción de tesis 5/93. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo y Tribunal Colegiado en Materia Penal de dicho Circuito (antes Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito), y Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 18 de octubre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Clementina Gil de Lester. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretaria: Rosa Elena Rivera Barbosa. Tesis jurisprudencial 1/94. Aprobada

permite afirmar el derecho que tiene el inculpado a que se le reciban pruebas en el procedimiento de preinstrucción; por consiguiente resulta lógico y jurídico que las pruebas de descargo que aporte el inculpado para desvirtuar las pruebas de cargo de la representación social, deben ser valoradas aunque se trate de pruebas contradictorias, entendiendo como tales, las que tienen valor análogo, pues en caso de no ser valoradas dichas pruebas en la citada etapa de preinstrucción se violarían las normas que regulan la prueba, máxime que no existe fundamento legal que apoye al juez a posponer la valoración de las pruebas contradictorias hasta la sentencia definitiva, lo cual podría causarle al procesado un daño irreparable. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de las pruebas depende del momento procesal en que se aporten, pues su objetivo difiere según la etapa procesal en que se aporte, ya que tienden a demostrar diferente hipótesis legal, así en la etapa procesal de preinstrucción, la hipótesis legal a probar por parte del Ministerio Público es el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del acusado y éste por su parte deberá ofrecer las pruebas para desvirtuar su presunta responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye. Una y otras pruebas deben ser analizadas por el juez circunscribiendo su valoración única y exclusivamente a la etapa de preinstrucción pues de ello dependerá si el acusado es o no sometido a proceso penal.

21. DEFENSOR. LA DESIGNACIÓN HECHA POR EL ESTADO DEBE RECAER EN UN DEFENSOR DE OFICIO, HOY DEFENSOR PÚBLICO.[248]

De lo dispuesto por los artículos 20, fracciones II, IX y X, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, fracción III,

---

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 28 de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos de los señores Ministros: Presidente Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado.

[248] Novena Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, octubre de 1999; Tesis: XXIII.1o. J/15; Página: 1178; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 373/99. Raquel Lara González. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 374/99. Pedro Chávez Muñoz. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 375/99. Alejandro Flores Castillo. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 376/99. Antonio Bernal González. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 377/99.

inciso b), y 159 del Código Federal de Procedimientos Penales, 28 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, y 1o. y 5o. de la Ley Federal de Defensoría Pública, se desprende que en los procedimientos del orden penal el inculpado tiene el derecho fundamental de defenderse por sí, por abogado, o por persona de su confianza, pero si no quiere o no puede designar defensor, debe nombrársele un defensor de oficio, hoy defensor público, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica que sólo un profesional del derecho reconocido legalmente puede prestar.

22. DEFENSOR PÚBLICO. CARECE DE VALOR PROBATORIO LA DECLARACIÓN DEL INCULPADO CUANDO LA DESIGNACIÓN HECHA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA RECIBIRLA NO RECAE EN UN DEFENSOR DE OFICIO.[249]

El artículo 128, fracción III, inciso b), del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 287, fracción II, de ese mismo ordenamiento legal, ambos en concordancia con las fracciones IX y X del artículo 20 de la Constitución General de la República, establecen que desde el inicio de su proceso, el inculpado será informado de los derechos que en su favor consigna la Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por

---

David Vela Luna. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes.

NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 87/99, pendiente de resolver en la Primera Sala.

[249] Novena Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, octubre de 1999; Tesis: XXIII.1o. J/16; Página: 1179; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 373/99. Raquel Lara González. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 374/99. Pedro Chávez Muñoz. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 375/99. Alejandro Flores Castillo. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 376/99. Antonio Bernal González. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes. Amparo directo 377/99. David Vela Luna. 11 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Alberto Hernández Segura. Secretario: Juan Ramón Carrillo Reyes.

NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 87/99, pendiente de resolver en la Primera Sala.

abogado, o por persona de su confianza, surtiéndose la primera y la tercera de las hipótesis cuando el acusado manifiesta de manera clara su voluntad de defenderse por sí solo, es decir, se nombra a sí mismo su propio defensor, o bien designa como tal a una persona de su confianza; sin embargo, cuando el inculpado no manifiesta su voluntad de defenderse por sí mismo y además expresa que no tiene persona de su confianza que lo defienda, deberá serle designado un defensor de oficio, hoy defensor público, pues de lo contrario la defensa que se le asigne no sería la adecuada en contravención al texto constitucional y a las disposiciones legales secundarias citadas. Así, si como en el caso la persona que el Ministerio Público nombró al quejoso para que lo asistiera en su declaración ministerial no tiene el carácter de defensor de oficio, por estar en el supuesto contemplado en la fracción IX del artículo 20 de la Carta Magna, es inconcuso que tal nombramiento no satisface el requerimiento constitucional anotado y en esa virtud, la declaración ministerial vertida carece de valor probatorio.

23. DEFENSOR. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO SU ILEGAL DESIGNACIÓN, SI LA MISMA RECAE EN UN PASANTE EN DERECHO, POR LO QUE CON ELLO SE VIOLA LA GARANTÍA INDIVIDUAL DE ADECUADA DEFENSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).[250]

El artículo 160 de la Ley de Amparo, dispone que en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte las defensas del quejoso: “II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley...” En este sentido, la ley

---

[250] Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,*: Tomo: VIII, diciembre de 1998; Tesis: II.2o.P. J/7; Página: 961; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 388/97. Daniel Olín Miranda. 3 de julio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia Herlinda Velasco Villavicencio. Secretario: Rafael Zamudio Arias. Amparo directo 34/98. Tomás Colín de Jesús. 4 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia Herlinda Velasco Villavicencio. Secretaria: Gloria Angélica Juárez García. Amparo directo 344/98. Raúl Reza Martínez. 10 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia Herlinda Velasco Villavicencio. Secretaria: Gloria Angélica Juárez García. Amparo directo 380/98. Faustino González Serrano. 27 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Melgoza Figueroa. Secretaria: Yolanda Leticia Escandón Carrillo. Amparo directo 456/98. María Gabriela Pérez Rodríguez. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonia Herlinda Velasco Villavicencio. Secretario: Rafael Zamudio Arias.

adjetiva penal para el Estado de México en el capítulo II, del título quinto, relativo a la "Declaración preparatoria del inculpado y nombramiento de defensor", en su artículo 182, fracción IV, último párrafo, ordena que el Juez tendrá la obligación de hacer saber al detenido en ese acto: "... fracción IV. El derecho que tiene de defenderse por sí mismo o para nombrar persona de su confianza que lo defienda, advirtiéndole que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor de oficio ... Si la persona designada defensor no es abogado con título legalmente registrado, se le requerirá para que designe además, a quien lo sea, para que asesore técnicamente al defensor no abogado. Si no lo hace, el Juez le designará al de oficio para tal efecto, quien siempre deberá tener título". Luego entonces, si el quejoso al rendir su declaración preparatoria ante el Juez natural manifestó que nombraba como su defensor a un pasante en derecho, quien encontrándose presente en ese acto dijo que aceptaba el cargo conferido, y el citado Juez del proceso lo tuvo por nombrado en tales términos, sin dar cumplimiento al último párrafo del mencionado precepto, es evidente que el aludido juzgador violó las normas procesales establecidas en ese artículo 182, fracción IV, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vulnerando con ello en perjuicio del procesado la garantía de la adecuada defensa, contenida en la fracción IX del artículo 20 constitucional, lo que obliga a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable ordene se reponga el procedimiento a partir de la diligencia de declaración preparatoria del quejoso y el procesado designe un defensor que tenga el carácter de licenciado en derecho, o en su caso le designe al defensor de oficio, para que asesore al pasante en derecho que nombró como defensor.

24. VIOLACIÓN PROCESAL. LA CONSTITUYE EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA FINAL EN LA ALZADA SIN LA COMPARECENCIA DEL ACUSADO O, EN SU DEFECTO, DE LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR NOMBRADO POR ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).[251]

Si la responsable llevó a cabo la audiencia final sin la comparecencia del inculpado, encontrándose éste en posibilidad de ello o, en su defecto, sin la

[251] Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, febrero de 1998; Tesis: XI.2o. J/11; Página: 460; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo directo 177/97. Fidencio Guzmán Jaimes. 16 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Díaz Ponce de León. Secretario: Gilberto Díaz Ortiz. Amparo directo 538/97. Héctor Hernández González.

asistencia del defensor nombrado por aquél, es inconcuso que tal actuación deriva ilegal; pues si de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracción IX, de la Carta Magna, todo acusado, entre otras garantías, tiene la de que "...su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera;", debió el *ad quem*, ante la no comparecencia de uno ni la asistencia del otro, proveer lo conducente, a efecto de que en el desahogo de la audiencia de mérito, no se le privara de ese derecho constitucional y no quedara, por ende, en estado de indefensión, al no dársele la oportunidad de que estuviera legal y debidamente representado durante su celebración. No siendo óbice a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 463 del Código Procesal Penal del Estado, que reza: "Audiencia final. La audiencia final deberá efectuarse siempre con asistencia del Ministerio Público, estén presentes o no las otras partes y el defensor..."; pues siendo ésta una norma de rango inferior, es indiscutible que ante ello la responsable, en todo caso, debió atender a lo establecido en la fracción IX del artículo 20 de la Carta Magna y no al precepto secundario en comento, merced precisamente al principio de supremacía constitucional previsto en el numeral 133 de la invocada Ley Fundamental, que dice: "...Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes o tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados". Debiéndose aclarar que en lo que corresponde al defensor, la comparecencia a que se contrae la ley no se refiere propiamente a su presencia física en el tribunal el día de la audiencia, sino que aquélla debe traducirse en actos procesales que revelen una asistencia técnica profesional hacia el inculpado, que bien puede ser de manera verbal o por escrito, con tal de que sus alegaciones queden plasmadas al momento de celebrarse dicha audiencia y deban ser tomadas en cuenta al dictarse el fallo respectivo.

25. MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON

---

10 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Gustavo Solórzano Pérez. Amparo directo 659/97. Heliodoro, Francisco, Israel y Leonilo Romero Arellano. 29 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo Delgado. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco. Amparo directo 690/97. José Alfonso González Carrillo. 12 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretario: Gustavo Solórzano Pérez. Amparo directo 602/97. Ana María Mejía Mendoza. 3 de diciembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretaria: Alma Jeanina Córdoba Díaz.

CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO.[252]

> La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, más las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con

---

[252] Novena Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, febrero de 2001; Tesis: 1a./J. 40/2000; Página: 9; Precedentes: Contradicción de tesis 63/98. Entre las sustentadas, por una parte, por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Tercer Circuito, Primero del Décimo Cuarto Circuito y Primero en Materia Penal del Primer Circuito y, por otra, por el Segundo del Vigésimo Primer Circuito. 22 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno. Tesis de jurisprudencia 40/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes.

26. IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (*DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999).[253]

Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión

---

[253] Novena Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, marzo de 2000; Tesis: VII.1o.P. J/42; Página: 875; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 255/99. 30 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretario: Jorge Manuel Pérez López. Amparo en revisión 313/99. 12 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sánchez Vargas. Secretario: José Martín Gutiérrez Martínez. Amparo en revisión 298/99. 12 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Sánchez Ángeles, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Martín Soto Ortiz. Amparo en revisión 363/99. 3 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sánchez Vargas. Secretario: Isaías Nicolás Oficial Huesca. Amparo en revisión 19/2000. 15 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sánchez Vargas. Secretario: José Martín Gutiérrez Martínez. Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo X, diciembre de 1999, página 666, tesis I.2o.P. J/11, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999".

al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto".

27. ACCIÓN PENAL, RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO, EMANADA DE UNA AUTORIDAD DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN ACTO MATERIALMENTE PENAL Y DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.[254]

El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su fracción I, dispone, entre otros supuestos, que los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de garantías que se promuevan "...contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal..." Ahora bien, como donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, es válido interpretar en forma extensiva la fracción de mérito y sostener que la competencia también se surte cuando la sentencia que se dicte en el amparo pueda producir la consecuencia de afectar la libertad personal del tercero perjudicado que, en el caso de un juicio promovido en contra de una resolución de no ejercicio de la acción penal, lo sería, por supuesto, el indiciado o inculpado. Aun cuando no todos los delitos se sancionan con la privación de la libertad, la afectación debe entenderse en sentido amplio, pues aun tratándose de delitos que se sancionan con pena alternativa o con pena no privativa de la libertad, la orden de comparecer al juicio y, en su caso, el

[254] Novena Época Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, diciembre de 1997; Tesis: P./J. 91/97; Página: 5; Precedentes: Contradicción de tesis 9/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de agosto de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 91/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

auto de sujeción a proceso que pudiera dictarse en el supuesto de que se ejerciera la acción penal por tales delitos con motivo de un juicio de amparo, de conformidad con el artículo 304 bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, afectan la libertad de la persona, pues se le obliga a comparecer ante la autoridad que la requiere, aun cuando la restricción tenga el límite precario indispensable para el desahogo de las diligencias respectivas, tales como la declaración preparatoria, la identificación administrativa, entre otras. Por otro lado, interpretando en forma sistemática las fracciones del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con los artículos 19, 20, 21, primer párrafo, constitucionales; 94 a 108, 111 a 114, 118 a 121, 122, 124, 135, 136, 139, 140, 141, 144, 147, 152, 189, 191, 262, 268 bis y 273, entre otros, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 13 y 15 del Código Penal para el Distrito Federal, se obtiene que si en el propio precepto 51 se contemplan las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios de amparo para conocer de actos materialmente penales, la competencia de que se trata no sólo se actualiza con fundamento en la fracción I antes examinada, sino en dicho numeral. En estas condiciones, si bien la naturaleza de la resolución de no ejercicio de la acción penal es, por el órgano que la realiza, formalmente administrativa, por su naturaleza intrínseca es materialmente penal, por lo que la competencia para el conocimiento del juicio de amparo en su contra le corresponde a un Juez de Distrito en dicha materia, no sólo por la circunstancia de que la sentencia que llegara a dictarse pudiera afectar la libertad del tercero perjudicado, sino también porque al tratarse de una resolución materialmente penal, la competencia se ubica en el propio numeral interpretando sus fracciones sistemáticamente. La interpretación de mérito respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo.

28. TESTIMONIAL EN LA APELACIÓN EN JUICIOS PENALES FEDERALES. ES ADMISIBLE CON REQUISITOS LEGALES, AUN CUANDO HABIÉNDOSE PROPUESTO EN PRIMERA INSTANCIA, HAYA SIDO DESECHADA POR AUTO NO RECURRIDO.[255]

La historia reciente del procedimiento penal mexicano muestra una constante tendencia a mejorar la posición del inculpado y, dentro de ella, a otorgarle

[255] Novena Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IV, septiembre de 1996; Tesis: 1a./J. 24/96; Página: 51; Precedentes: Contradicción de tesis 6/94. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado Primero del Noveno Circuito, y los Tribunales Colegiados Segundo del Tercer Circuito y Segundo del Décimo Primer Circuito. 14 de agosto de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de

una reiterada provisión de mayores y mejores posibilidades de asistencia jurídica y de defensa, que dieron pauta a la reforma del artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitida mediante Decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que determina la defensa "adecuada", entendida no sólo con la persona del defensor, sino también con el desarrollo mismo de su función y a la mayor amplitud de contar con posibilidades de aportación de pruebas en descargo de la acusación que pese en su contra. Esta orientación debe seguirse en el sentido de la posibilidad de ofrecimiento de la prueba testimonial en segunda instancia, la que es procedente cuando se satisfagan los requisitos previstos en los artículos 373, 376 y 378 del Código Federal de Procedimientos Penales, que consisten en: a) que se proponga dentro de los tres días siguientes a la vista del proceso; b) que al ofrecerse se exprese el objeto y la naturaleza de la prueba y los hechos sobre los que hayan sido motivo de examen de testigos en la causa natural. No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que en primera instancia habiéndose propuesto la testimonial se hubiera desechado por extemporánea y que el auto no se impugnara en su oportunidad, porque ello sólo determina la pérdida del derecho de ofrecerla en la propia instancia, pero no excluye la posibilidad de que se proponga en la alzada, en atención a que esta etapa se rige por reglas que confieren atribuciones, reguladas expresamente, para el tribunal de apelación en los dispositivos señalados, en materia de recepción de pruebas. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Ministerio Público o del ofendido de expresar argumentos en contra de la propuesta de admisión de dicha probanza.

Artículo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. Del inculpado:

I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Pú-

---

Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Guillermo Campos Osorio. Tesis de jurisprudencia 24/96. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.

blico, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional;

II. No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las 48 horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria;

IV. Cuando así lo solicite, será careado en presencia del juez, con quien deponga a su contra, salvo lo dispuesto en la fracción V del Apartado B de este artículo;

V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso;

VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación;

VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso;

VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.

B. De la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.

V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y

VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

d) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en materia penal internacional

1. EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS.[256]

Del análisis integral de la Ley de Extradición Internacional y, concretamente, de lo dispuesto en sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 43, aparece que el procedimiento extraditorio se encuentra dividido en tres fases procedimentales, a saber: la primera, que comienza cuando un Estado manifiesta a otro la intención de presentar petición formal para la extradición de determinada persona y solicita se adopten las medidas precautorias conducentes a efecto de evitar que aquélla se sustraiga a la acción de la justicia o, en su caso, la que se inicia directamente con la solicitud formal de extradición, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 16 de la ley de la materia o los previstos en el tratado extraditorio correspondiente; la segunda, que comienza con la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores —con vista del expediente y la opinión del Juez Federal— de admitir la petición, por estar satisfechos los requisitos legales correspondientes; y, la tercera, en la que la Secretaría de Relaciones Exte-

[256] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: P. XLIV/98 Página: 70 Materia: Penal; Precedentes: Amparo en revisión 2830/97. Jorge Andrés Garza García. 24 de febrero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLIV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

riores resuelve en forma definitiva si concede o rehúsa la extradición, sin vincularse jurídicamente a la opinión emitida por el Juez. Así las cosas, resulta evidente que las violaciones que, en su caso, se cometan en una etapa ya concluida, quedan consumadas irreparablemente por cesación de efectos del acto y no pueden afectar ni trascender a la subsecuente, en razón de que cada una de ellas es autónoma e independiente de la otra.

2. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA NO ES VIOLATORIO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16, 19 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.[257]

Si bien es cierto que los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, como regla general, que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición; y que en todo proceso penal el inculpado deberá saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación, el nombre de su acusador y la causa de la acusación, igualmente cierto resulta que el artículo 18 de la Ley de Extradición Internacional que establece un término de sesenta días para la detención provisional del individuo cuya extradición se solicita, no contraría el texto de la Ley Fundamental, en razón de que en caso de solicitudes de detención provisional con fines de extradición internacional, los mencionados dispositivos no son aplicables sino que debe estarse a la regla específica que establece el artículo 119, párrafo tercero, constitucional, en cuanto señala que las extradiciones a requerimientos de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos que indica la propia Constitución, los tratados internacionales y las leyes reglamentarias, especificando dicho precepto que el auto del Juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

---

[257] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: P. XLVI/98 Página: 130 Materia: Constitucional, Penal; Precedentes: Amparo en revisión 2830/97. Jorge Andrés Garza García. 24 de febrero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

3. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. LA DETENCIÓN PROVISIONAL QUE PREVÉ SE BASA EN PRUEBAS QUE ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA RECLAMADA.[258]

> Según deriva de lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley de Extradición Internacional, que regulan el procedimiento extraditorio, la detención provisional de la persona reclamada por un Estado solicitante no puede, válidamente, basarse en una simple petición del requeriente, sino que debe apoyarse en documentos en los que se exprese el delito por el que se pide la extradición, las pruebas que acreditan la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona reclamada, así como la existencia de una orden de aprehensión emitida en su contra por una autoridad competente.

4. TRATADO DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL CUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. NO ES INCONSTITUCIONAL POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO LO HAYA SUSCRITO PERSONALMENTE, SI INSTRUYÓ AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU NEGOCIACIÓN, Y LUEGO LO RATIFICÓ PERSONALMENTE.[259]

> De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 76, fracción I, 80, 89, fracciones I, II y X, 92 y 133 de la Constitución Política de los

---

[258] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: P. XLVII/98 Página: 131 Materia: Penal; Precedentes: Amparo en revisión 2830/97. Jorge Andrés Garza García. 24 de febrero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

[259] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, mayo de 1998 Tesis: P. XLV/98 Página: 133 Materia: Constitucional, Penal; Precedentes: Amparo en revisión 2830/97. Jorge Andrés Garza García. 24 de febrero de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLV/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la disposición contenida en el citado artículo 133, en el sentido de que los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión, no debe interpretarse con la limitación letrista de que en forma específica sea el titular del Poder Ejecutivo de la Unión quien necesariamente lo lleve a cabo en todas sus fases, incluyendo la suscripción personal, pues los preceptos constitucionales invocados permiten la actuación del jefe del Ejecutivo a través del secretario de Estado correspondiente, siendo nuestro derecho interno, como es aceptado internacionalmente, el que determina la forma en que se estructura el órgano supremo representativo del Estado hacia el exterior y fija los procedimientos y límites de esa representación; por otro lado, la celebración de un tratado no se reduce a la firma del mismo, la que puede provenir del presidente, del secretario relativo o del representante que aquél señale, sino que se encuentra constituido por todo un procedimiento que se desarrolla en diversas etapas, en las cuales interviene otro poder, además de los secretarios de Estado que se ocupan de las materias específicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2o., 27, fracciones I, II, III y VII, y 28, fracciones I y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de los que deriva que corresponde al secretario de Relaciones Exteriores intervenir en toda clase de tratados y convenciones en los que el país sea parte, y al secretario de Gobernación, conducir las relaciones del Ejecutivo con el Poder Legislativo y publicar las leyes y decretos. En tales condiciones, basta con que el tratado internacional de que se trate haya sido negociado por el secretario de Relaciones Exteriores siguiendo las instrucciones del presidente de la República y luego ratificado por éste y aprobado por el Senado, como sucedió por parte de nuestro país en el tratado de mérito, para que tenga plena validez.

5. EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).[260]

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su tesis aislada P. XLIV/98, publicada en el *Semanario Judicial de la*

[260] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, octubre de 2000 Tesis: P. CLXV/2000 Página: 36 Materia: Penal Tesis

Federación y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 70, bajo el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS", que cuando culmina una de las tres fases en que se divide el procedimiento de extradición, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ella pudieran haber existido por cesación de efectos del acto reclamado, pues no pueden afectar ni trascender a la subsecuente etapa, en razón de que cada una de ellas es autónoma e independiente de las otras. Ahora bien, nuevas y mayores reflexiones respecto a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte del contenido de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que las medidas que dicten las autoridades responsables revoquen de tal manera la resolución impugnada que la situación del peticionario de garantías sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de tal acto, llevan a variar el criterio contenido en la tesis que se comenta, pero únicamente en cuanto a la causa de improcedencia del juicio de amparo que ahí se menciona, pues en realidad la hipótesis de improcedencia que se actualiza es la contenida en la fracción X del mencionado precepto, toda vez que si el procedimiento con fines de extradición internacional se divide en tres fases procedimentales autónomas e independientes, cuando culmina una, las violaciones que ahí pudieron producirse quedan consumadas de modo irreparable al no poder decidirse tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio o tramitación de la etapa subsecuente.

6. EXTRADICIÓN. EL ARTÍCULO 17 DEL TRATADO INTERNACIONAL RELATIVO, CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL CUATRO DE MAYO DE MIL NO-

---

aislada; Precedentes: Amparo en revisión 3066/98. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número CLXV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil. NOTA: Esta tesis interrumpe la tesis P. XLIV/98, que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 70, con el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS".

VECIENTOS SETENTA Y OCHO, QUE PERMITE QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO VARÍE LA CLASIFICACIÓN DEL DELITO POR EL CUAL EL RECLAMADO FUE EXTRADITADO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[261]

> El hecho de que el artículo 17, punto 2, incisos a) y b), del mencionado tratado internacional permita que durante la tramitación de un procedimiento de extradición varíe la clasificación del delito por el cual el reclamado fue extraditado, fundándose en el mismo conjunto de hechos señalados en la solicitud de extradición, no viola el artículo 19 de la Constitución Federal. Ello es así, porque si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto constitucional todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso y que cuando en la secuela de un proceso aparezca que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, éste deberá ser objeto de una averiguación previa separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, también lo es que el mencionado numeral de la Carta Magna no impide el cambio de clasificación del delito, cuando ello no implique una variación de los hechos por los que ejercitó acción penal el Ministerio Público, pues lo que en él se prohíbe es que si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, entendido éste como un conjunto de actos que sean objetivamente diferentes de los que constituyen el primer hecho ilícito, se siga el proceso penal también por dicho ilícito, es decir, que no se integre una averiguación por separado. Además, los artículos en cita regulan cuestiones distintas, pues el mencionado artículo 17 se refiere al procedimiento de extradición, mientras que el artículo 19 constitucional, al juicio criminal que se le instaure en nuestro país.

7. EXTRADICIÓN. LA POSIBILIDAD DE QUE UN MEXICANO SEA JUZGADO EN LA REPÚBLICA CONFORME AL ARTÍCULO 4o. DEL

---

[261] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, octubre de 2000 Tesis: P. CLXXI/2000 Página: 37 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 115/99. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Andrés Pérez Lozano. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número CLXXI/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil.

CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO IMPIDE AL PODER EJECUTIVO OBSEQUIARLA, EJERCIENDO LA FACULTAD DISCRECIONAL QUE LE CONCEDE EL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.[262]

> Conforme al artículo 9.1 de dicho tratado "Ninguna de las dos partes contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales pero el Poder Ejecutivo de la parte requerida tendrá la facultad, si no se lo impiden sus leyes, de entregarlos si, a su entera discreción, lo estima procedente". De ahí se infiere, en lo que concierne al Estado mexicano, que el Poder Ejecutivo goza de la facultad discrecional de entregar a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América, a los mexicanos que hayan cometido delitos en aquel país "si no se lo impiden sus leyes". Esta expresión debe entenderse como una prohibición al Poder Ejecutivo de acceder a la extradición demandada, pero sólo en el caso de que así lo establecieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o cualquier ley federal. Ahora bien, el análisis gramatical y sistemático del artículo 4o. del Código Penal Federal, lleva a concluir que no contiene ninguna prohibición o impedimento a la extradición, sino que sustancialmente establece una regla del derecho aplicable, en cuanto dispone: "serán penados en la República, con arreglo a las leyes federales", lo que significa que en caso de que un mexicano fuere juzgado en la República por un delito cometido en el extranjero, será sancionado con las penas que establezcan las leyes federales mexicanas y no conforme a las leyes del Estado extranjero donde se le atribuye que delinquió, mas no que esté prohibida su extradición.

8. EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ESTA-

---

[262] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, enero de 2001 Tesis: P./J. 11/2001 Página: 9 Materia: Penal Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de enero en curso, aprobó, con el número 11/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil uno.

DO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN.[263]

> De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el cual se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes de la parte requirente, la extradición podrá ser rehusada, a menos de que esta parte dé las seguridades suficientes de que no se impondrá la pena de muerte, o bien, de que si es impuesta, no será ejecutada. En estas condiciones, al ser la pena de prisión vitalicia una pena inusitada prohibida por el citado artículo 22, en tanto que se aparta de la finalidad esencial de la pena, consistente en la readaptación del delincuente para incorporarlo a la sociedad, resulta inconcuso que el Estado solicitante debe comprometerse a no imponer la pena de prisión perpetua, sino otra de menor gravedad.

9. EXTRADICIÓN. CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA PERSONA QUE EL ESTADO REQUERIDO HACE AL ESTADO REQUIRENTE, PERO CONSTITUYENDO UN ACTO EXCEPCIONAL EN RELACIÓN CON SU SOBERANÍA, LA SOLICITUD PUEDE VÁLIDAMENTE SER NEGADA SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS.[264]

> La extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que se halla en su territorio, a otro Estado, que la reclama por tener

---

[263] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: P./J. 125/2001 Página: 13 Materia: Constitucional, Penal Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 11/2001. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito. 2 de octubre de 2001. Mayoría de seis votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Encargado del engrose: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número 125/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil uno.

[264] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: P. XIX/2001 Página: 21 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Contradicción de tesis 11/2001. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito. 2 de octubre de 2001. Mayoría de seis votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente

ahí el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta. Por tanto, la extradición constituye un caso excepcional respecto de la soberanía del Estado requerido, por lo que el trámite correspondiente está sujeto a requisitos constitucionales, legales o convenidos que deben ser cumplidos; por tanto, el solo hecho de que un Estado (requirente) haga la solicitud respectiva a otro Estado (requerido), no es suficiente para que la persona sea entregada, pues dicha solicitud puede ser satisfecha o no por el Estado requerido, en razón del cumplimiento de las normas constitucionales o legales, así como atendiendo a las obligaciones pactadas en los tratados y convenios internacionales en la materia. Lo anterior es así, porque la extradición es un acto de soberanía fundado en el principio de reciprocidad, conforme al cual, en ambos países la conducta desplegada debe estar considerada como delito, no estar prescrita y tener una penalidad no violatoria de garantías individuales, y de no satisfacerse tales requisitos, la solicitud puede ser rechazada por el Estado requerido.

10. EXTRADICIÓN. LA CONDICIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL ES DE CARÁCTER ADJETIVO Y, POR TANTO, DEBE EXIGIRSE PARA TRAMITAR UNA SOLICITUD FORMULADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PORQUE EL ARTÍCULO 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL RESPECTIVO REMITE EXPRESAMENTE A DICHA LEY.[265]

El artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, establece los casos y condiciones en que el Estado requirente deberá comprometerse

---

Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Encargado del engrose: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número XIX/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil uno. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió.

[265] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: P. XVIII/2001 Página: 22 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Contradicción de tesis 11/2001. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito. 2 de octubre de 2001. Mayoría de seis votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

con el Estado mexicano para que pueda tramitarse una solicitud de extradición; en esas circunstancias, es claro que la condición referida es de carácter adjetivo, porque forma parte de la normatividad del procedimiento establecido en esa ley para la tramitación de las solicitudes de extradición, por lo que debe ser aplicado por las autoridades competentes, aun en el caso de que el Estado mexicano tenga celebrado con los Estados Unidos de América tratado de extradición. Lo anterior, porque el artículo 13 del tratado internacional celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América remite expresamente a la legislación de la parte requerida, concretamente, la Ley de Extradición Internacional.

11. EXTRADICIÓN. NO EXCLUYE AL EXTRADITADO DE DISFRUTAR DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.[266]

Al establecer el artículo 1o., párrafo primero, de la Ley Fundamental, que todo individuo gozará de las garantías individuales que en ella se consagran, no hace distinción alguna respecto de quiénes serán los titulares, destinatarios o sujetos beneficiados con dichas garantías, y ni siquiera distingue si se trata de un indiciado, procesado o condenado por un delito. En consecuencia, cualquier persona requerida en extradición gozará de tales derechos humanos contenidos en la Carta Magna.

---

y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Encargado del engrose: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número XVIII/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil uno. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió.

[266] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, octubre de 2001 Tesis: P. XX/2001 Página: 23 Materia: Constitucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Contradicción de tesis 11/2001. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito. 2 de octubre de 2001. Mayoría de seis votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Encargado del engrose: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dos de octubre en curso, aprobó, con el número XX/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dos de octubre de dos mil uno. NOTA: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no trata el tema de la contradicción que se resolvió.

12. EXTRADICIÓN. AMPARO CONTRA LEY O TRATADO DE, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.[267]

> Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o tratado con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o tratado del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos tales ordenamientos generales considerados en abstracto, ya que la estrecha vinculación entre una ley de extradición internacional o de un tratado de extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y otro Estado, con el acto concreto de su aplicación impide examinar al uno prescindiendo del otro, y como la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley y al tratado, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a los actos de expedición, promulgación, firma, aprobación y publicación de dichos ordenamientos generales, cuando éstos se reclamaron con motivo de su aplicación, consistente en la orden de detención provisional del quejoso con fines de extradición, si ésta ha cesado en sus efectos.

---

[267] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, noviembre de 1999 Tesis: 1a./J. 57/99 Página: 210 Materia: Penal, Constitucional Jurisprudencia; Precedentes: Amparo en revisión 1752/94. Mario Fernando Zablah o Carlos Bendeck o Jorge Samur. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. Amparo en revisión 1906/94. Jorge Antonio Gómez Garza. 29 de marzo de 1996. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios; en su ausencia integró esta Primera Sala el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ma. Edith Ramírez de Vidal. Amparo en revisión 1146/95. Mario Salvador Ruiz Massieu. 12 de febrero de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Amparo en revisión 1430/95. Jorge Emilio Dubois Ferreiro. 12 de febrero de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1404/96. Francesca Vacca Graffagni viuda de Augusta. 5 de marzo de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Ángeles Espino. Tesis de jurisprudencia 57/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Véase: Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 210, tesis 221, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN".

13. EXTRADICIÓN. EL AMPARO CONTRA LAS LEYES QUE FUNDAN LA RESOLUCIÓN QUE LA DETERMINA, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS.[268]

> De conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, adicionado mediante reforma publicada en el *Diario Oficial* de la Federación del diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, la presentación de la demanda en contra de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que determina la extradición del quejoso debe hacerse dentro del plazo de quince días, constituyendo así una excepción a la norma especial que rige tratándose de amparo contra actos que afecten la libertad personal, en que el juicio puede ser promovido en cualquier tiempo. Aquella reforma encuentra su razón de ser en la necesidad de dar seguridad jurídica al procedimiento de extradición, que involucra la actividad de un órgano jurisdiccional nacional y de algún órgano extranjero, de manera que se requiere el establecimiento de plazos perentorios que concluyan cada una de sus etapas y se facilite de esa manera su pleno desenvolvimiento. En esas condiciones, si el quejoso reclamó, además de la resolución que concede su extradición, diversas normas legales que le sirven de sustento con motivo de su aplicación, la demanda de amparo debe ser presentada dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto de aplicación, puesto que aquellos ordenamientos, considerados con independencia de éste, ningún perjuicio podrían causar al quejoso.

14. EXTRADICIÓN. EL AMPARO CONTRA LAS LEYES QUE FUNDAN LA RESOLUCIÓN QUE LA DETERMINA, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS.[269]

> De conformidad con el artículo 22, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, adicionado mediante reforma publicada en el *Diario Oficial* de la

---

[268] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, marzo de 1999 Tesis: 2a. XXIV/99 Página: 314 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 1141/98. Roberto Beltrán Félix. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

[269] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, marzo de 1999 Tesis: 2a. XXIV/99 Página: 314 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 1141/98. Roberto Beltrán Félix. 27 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.

Federación del diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, la presentación de la demanda en contra de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que determina la extradición del quejoso debe hacerse dentro del plazo de quince días, constituyendo así una excepción a la norma especial que rige tratándose de amparo contra actos que afecten la libertad personal, en que el juicio puede ser promovido en cualquier tiempo. Aquella reforma encuentra su razón de ser en la necesidad de dar seguridad jurídica al procedimiento de extradición, que involucra la actividad de un órgano jurisdiccional nacional y de algún órgano extranjero, de manera que se requiere el establecimiento de plazos perentorios que concluyan cada una de sus etapas y se facilite de esa manera su pleno desenvolvimiento. En esas condiciones, si el quejoso reclamó, además de la resolución que concede su extradición, diversas normas legales que le sirven de sustento con motivo de su aplicación, la demanda de amparo debe ser presentada dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto de aplicación, puesto que aquellos ordenamientos, considerados con independencia de éste, ningún perjuicio podrían causar al quejoso.

15. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. NO CONSTITUYE UNA CONTROVERSIA JUDICIAL Y ES INEXACTO QUE LOS TRIBUNALES JUDICIALES FEDERALES SEAN LA ÚNICA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS REQUERIMIENTOS RELATIVOS (ARTÍCULO 104, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).[270]

Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a la interpretación histórica de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la participación de la autoridad judicial en los procesos de extradición, se reduce a la emisión del auto que mande cumplir la requisitoria y, por otro, que en el propio texto legal de manera expresa se establece que corresponde al Ejecutivo Federal y no a los Gobiernos de los Estados llevar a cabo todos y cada uno de los trámites correspondientes a la extradición, resulta inexacto considerar a los tribunales del Poder Judicial de la Federación como la única autoridad competente para conocer y resolver los requerimientos de extradición internacional. Ello es así, porque para que fueran competentes los tribunales de la Federación

[270] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, julio de 2001 Tesis: 2a. CX/2001 Página: 507 Materia: Constitucional Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 79/2000. Donald Phillip Havenar. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Elena Rosas López.

para resolver las extradiciones internacionales al amparo del artículo 104, fracción I, de la propia Carta Magna, se necesitaría que existiera una controversia, es decir, un proceso entre partes legitimadas sometidas a la potestad jurisdiccional de nuestra nación, lo que no sucede tratándose de la extradición entre Estados soberanos, en donde uno es el Estado requirente y otro el Estado requerido, por lo que la relación que se da entre ambos no puede ser otra que de naturaleza internacional, de donde se deduce que no únicamente puede ser competencia de un tribunal nacional un asunto de naturaleza supranacional, sino que, además, el sujeto a extraditar no tiene legitimación activa, en tanto que la extradición es un acto entre Estados, por lo que de darse la negativa a una extradición por parte del Estado requerido, el perjuicio sería para el Estado requirente. Esto es, de aceptarse que la relación jurídica se da entre el Estado requirente y el súbdito reclamado, ello tampoco podría originar la competencia de un tribunal del Estado requerido, ya que por lógica jurídica y mayoría de razón, no se surte dicho atributo a su favor por la naturaleza de las partes, en especial por ser una de ellas un Estado extranjero; sin que sea posible perder de vista que la decisión sobre la extradición solicitada por un Estado extranjero es una facultad del Ejecutivo, toda vez que es un acto que atañe a las relaciones con otros Estados de la comunidad mundial que debe regularse por el principio de reciprocidad internacional, a fin de salvaguardar la aplicación y el respeto de los derechos fundamentales del hombre consagrados en la Constitución. En consecuencia, como la concesión de la extradición constituye un acto exclusivo de la soberanía nacional, cuya decisión se reserva al criterio del Ejecutivo Federal, que no necesita, constitucionalmente, la sustanciación de un juicio previo, ni que exista controversia alguna que deban conocer los tribunales de la Federación, es inexacto considerar que quien deba resolver los requerimientos de extradición internacional sea el Poder Judicial Federal, por lo que es perfectamente válido que el Ejecutivo conozca, tramite y resuelva dicha extradición, limitándose la participación de la autoridad judicial, constitucionalmente, a dictar el auto que mande cumplir la requisitoria.

16. EXTRADICIÓN. LA DETENCIÓN PROVISIONAL PARA ESE FIN, PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL Y 11 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, NO ES INCONSTITUCIONAL.[271]

Aun cuando los artículos 17 de la Ley de Extradición Internacional y 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados

---

[271] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, abril de 2002 Tesis: 2a. XLVII/2002 Página: 583 Materia: Cons-

Unidos de América, no señalan los requisitos de forma y fondo que deben satisfacerse para que el Juez pueda motivar la detención del reclamado hasta por sesenta días naturales, cuando un Estado ha manifestado la intención de solicitar su extradición formal, ni prevén la garantía de audiencia a favor del gobernado, pues al no tener intervención en su defensa en esta etapa precautoria, no tiene otra opción más que esperar, privado de su libertad, hasta que el Estado requeriente formalice la solicitud de su extradición o transcurra el plazo de la detención provisional, ello no significa que tal detención sea inconstitucional porque en el último párrafo del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente está permitida esa detención provisional con fines de extradición internacional hasta por sesenta días naturales, como una medida precautoria o provisional y los numerales señalados no hacen sino recoger esa disposición al reproducir el texto constitucional; además de que, si ninguna disposición contenida en la Constitución Federal puede adolecer de vicios de inconstitucionalidad, tampoco las hipótesis normativas que las reproducen pueden estimarse contrarias a la Ley Suprema.

17. EXTRADICIÓN. AUN CUANDO LA IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS DE LOS ACTOS EMITIDOS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, ELLO NO PERMITE CONTROVERTIR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL APLICADAS DENTRO DE AQUÉL HASTA QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN QUE LE PONGA FIN.[272]

Aun cuando la impugnación mediante el juicio de amparo de los actos emitidos en un procedimiento de extradición se rige por lo dispuesto en el citado precepto legal, en virtud de que su naturaleza no es la de un juicio seguido ante un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, el papel que desempeña el Juez de Distrito en su sustanciación no corresponde al de un acto de juzgamiento, sino de colaboración con el órgano rector de éste, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual tiene por objeto que esta depen-

---

titucional, Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 125/2001. 15 de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Martha Yolanda García Verduzco.

[272] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: 2a. CV/2002 Página: 383 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 142/2002. 5 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

dencia determine si en la referida secuela el Estado extranjero acreditó los requisitos que condicionan el otorgamiento de la extradición o, en su caso, si prosperan las excepciones planteadas por el individuo solicitado, por lo que se trata de un auténtico procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; ello no obsta para considerar que la impugnación de las disposiciones de observancia general que se hayan aplicado en perjuicio del gobernado dentro de ese procedimiento, únicamente puede darse con motivo del respectivo acto de aplicación intraprocedimental o de la resolución que recaiga al medio de defensa ordinario que se interponga en su contra, tal como deriva de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y en la tesis 2a./J. 1/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 130, de rubro: "AMPARO CONTRA REGLAMENTOS. ES PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO Y ÉSTA CONSTITUYE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN", ya que con motivo del dictado de la resolución que ponga fin a esa secuela, el individuo reclamado ya no tendrá la posibilidad de impugnar mediante el juicio constitucional las referidas disposiciones, pues de hacerlo hasta este momento se tendrán por consentidas en términos de lo previsto en el artículo 73, fracción IX, del propio ordenamiento.

18. EXTRADICIÓN. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, ES DE QUINCE DÍAS AUNQUE AFECTEN LA LIBERTAD DE LA PERSONA RECLAMADA.[273]

De la interpretación literal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se advierte que el plazo de quince días que prevé para promover el juicio de garantías en contra de las resoluciones emitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores favorables a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, es aplicable respecto de cualquier acto que, emitido por dicha dependencia dentro de ese procedimiento, conlleve materialmente una determinación favorable a la extradición, es decir, constituya un presupuesto necesario para su otorgamiento. Lo anterior se corrobora con lo señalado en el dictamen de las Comisiones Unidas, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara

[273] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: 2a. CIII/2002 Página: 384 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 142/2002. 5 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

de Diputados emitido en el proceso legislativo que dio lugar al decreto de reformas a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el *Diario Oficial* de la Federación, en el sentido de que dicho plazo se estableció en virtud de que en la sustanciación del procedimiento de extradición está involucrada la jurisdicción de otro Estado soberano, lo que justifica la regulación de un plazo que brinde seguridad jurídica a las relaciones de esa naturaleza. En ese tenor, si desde el inicio del mencionado procedimiento está involucrada la jurisdicción de un Estado extranjero, que debe cumplir con los diversos requisitos que condicionan la detención y extradición del individuo reclamado y, con base en ello, la citada secretaría emitirá sendas resoluciones que constituyen presupuestos indispensables para el otorgamiento de aquélla, se concluye que es de quince días el plazo para controvertir en el juicio de amparo los actos emitidos por la referida dependencia, que materialmente resulten favorables a la extradición y que, además, afecten la libertad personal del individuo solicitado; máxime que, de estimarse lo contrario, se tornaría nugatoria la intención del legislador, pues una vez fenecido el plazo para controvertir la resolución favorable a la extradición y comunicada ésta al Estado solicitante, sería factible promover juicios de garantías contra los actos emitidos en el procedimiento respectivo.

19. EXTRADICIÓN. LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES ES LA AUTORIDAD FACULTADA PARA ADMITIR UNA PETICIÓN FORMAL DE ESA NATURALEZA, FORMULADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o., INCISO B), DE LA CONVENCIÓN RELATIVA FIRMADA EN MONTEVIDEO EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES.[274]

Conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la Ley de Extradición Internacional, cuando no exista tratado internacional aplicable, las disposiciones de este ordenamiento serán las que determinen los casos y las condiciones para entregar a los Estados que lo soliciten, a los acusados ante sus tribunales o a los condenados por éstos por delitos del orden común; en tal virtud, si en el referido instrumento internacional no se prevé cuál es la autoridad nacional competente para resolver sobre la admisión de la petición formal

[274] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: 2a. CII/2002 Página: 385 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 142/2002. 5 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

de extradición y valorar los requisitos contenidos en el artículo 5o. de la Convención sobre Extradición firmada en Montevideo el veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta y tres, resulta necesario acudir a lo señalado en la citada ley, en cuyos artículos 18 a 21 prevé que recibida aquella petición, la Secretaría de Relaciones Exteriores la examinará y si la encontrare improcedente no la admitirá, lo que deberá comunicar al Estado solicitante; en el supuesto de que no se hubieran reunido los requisitos establecidos en el tratado o en el artículo 16 de la propia ley, la citada secretaría lo hará del conocimiento del promovente para que subsane las omisiones o defectos; y, en caso de admitirse la petición, la referida dependencia enviará la requisitoria al procurador general de la República, acompañando el expediente, a fin de que promueva ante el Juez de Distrito competente el dictado del auto que la cumpla y ordene la detención del reclamado. En ese tenor, debe estimarse que a la mencionada secretaría le corresponde, necesariamente, admitir o negar la petición formal de extradición y, además, su admisión vincula a los restantes órganos del Estado que participan en el procedimiento de extradición, pues como consecuencia de ello, tanto la Procuraduría General de la República como el Juez de Distrito que conozca del procedimiento deben dar curso a éste en los términos que lo ordena el respectivo tratado internacional o, en su caso, la indicada Ley de Extradición Internacional.

20. EXTRADICIÓN. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EL ARTÍCULO 5o., INCISO B), DE LA CONVENCIÓN QUE SOBRE LA MATERIA SE FIRMÓ EN MONTEVIDEO, EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES, TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL INDIVIDUO RECLAMADO CUANDO LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE ADMITE LA PETICIÓN FORMAL RESPECTIVA.[275]

De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., 5o., 9o. y 10 del referido instrumento internacional se advierte que, con motivo de la admisión de la solicitud provisional de extradición, el individuo reclamado puede ser privado de su libertad y, en un plazo máximo de dos meses, contado a partir de la fecha en que se notifique al Estado requeriente su arresto, éste deberá formalizar su petición, para lo cual será necesario que a ésta

[275] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: 2a. CI/2002 Página: 386 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 142/2002. 5 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

se acompañen, tratándose de un acusado, copia auténtica de la orden de detención emanada de un Juez competente, una relación precisa del hecho imputado, una copia de las leyes penales aplicables a ésta y de las referentes a la prescripción de la acción o de la pena, tal como lo dispone el inciso b) del mencionado artículo 5o., pues si en el lapso señalado no se formaliza la indicada solicitud, el reclamado recuperará su libertad. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe estimarse que lo establecido en este último numeral trasciende a la esfera jurídica del individuo reclamado cuando la autoridad nacional competente, una vez verificados los requisitos previstos en esa disposición, admite la petición formal de extradición, ya que en virtud de esta determinación aquél continuará privado de su libertad o será capturado en caso de que no se hubiere solicitado su detención provisional.

21. EXTRADICIÓN. SI AL IMPUGNARSE EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO RELATIVO SE CONTROVIERTEN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE FUERON APLICADAS TANTO EN ESTA DETERMINACIÓN COMO EN LA QUE TUVO POR ADMITIDA LA RESPECTIVA PETICIÓN FORMAL, DEBE ESTIMARSE QUE EL JUICIO DE GARANTÍAS RESULTA IMPROCEDENTE EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS.[276]

El criterio sostenido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CLIV/2001, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 238, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. NO PUEDE CONSIDERARSE CONSENTIDA SU APLICACIÓN AUNQUE SU INCONSTITUCIONALIDAD SE IMPUGNE CON MOTIVO DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL", no resulta aplicable en el caso del procedimiento de extradición, ya que los tratados internacionales o leyes federales que sean aplicados en perjuicio del individuo reclamado con motivo de la admisión de la correspondiente petición formal, deben impugnarse desde luego a través del juicio de garantías, dado que al regir para la impugnación

[276] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, agosto de 2002 Tesis: 2a. CIV/2002 Página: 387 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 142/2002. 5 de julio de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

constitucional de esta determinación el plazo de quince días, conforme a lo previsto en el artículo 22, fracción II, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de que el quejoso controvierta esas disposiciones con motivo de su aplicación posterior en la resolución favorable a la extradición que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, el mencionado juicio resultará improcedente en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la propia ley, en relación con lo señalado en el diverso 114, fracción I, aplicado en sentido contrario, al no impugnarse aquéllas con motivo de su primer acto de aplicación, sino de uno segundo o ulterior.

22. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA LA SOLA ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL JUICIO DE EXTRADICIÓN.[277]

El juicio de amparo es improcedente cuando se reclama la sola aceptación de la solicitud de extradición en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; por lo que si bien es cierto que en los juicios de extradición existe participación de los Jueces de Distrito, ésta se ciñe a colaborar en ese procedimiento para cumplir con la garantía de audiencia en favor de los gobernados, intervención que finaliza con el hecho de emitir una opinión que justifique la procedencia o improcedencia de tal reclamo, pero carece de coercibilidad e imperio, pues quien en definitiva resuelve legalmente acerca de la procedencia o no de la extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores; por tanto, la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades jurisdiccionales responsables, no es un acto de imposible reparación, pues el acto de autoridad que afecta la esfera jurídica de los gobernados surge al dictarse la resolución correspondiente por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra esta última es procedente el juicio de amparo, en términos de la fracción II del citado numeral, ya que con ella culmina el procedimiento de extradi-

---

[277] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, enero de 1998 Tesis: II.2o.P.21 K Página: 1109 Materia: Común; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión (improcedencia) 103/97. Óscar Cárdenas Lorente. 17 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Enrique Martínez Guzmán. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, página 299, de rubro: "EXTRADICIÓN, JUICIO DE. CARÁCTER Y NATURALEZA DE LOS ACTOS DEL JUEZ FEDERAL".

ción; por tanto, al no impugnarse la resolución definitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino la sola aceptación de la solicitud de extradición por parte de las autoridades responsables, el juicio de amparo es improcedente.

23. EXTRADICIÓN. SUSPENSIÓN. CASO EN QUE PROCEDE CONCEDERLA.[278]

Si el quejoso reclamó la orden por la cual se resolvió la procedencia de su extradición y sus consecuencias, se impone conceder la suspensión para que se mantengan las cosas en el estado que guardaban, a fin de evitar que se deje sin materia el juicio de garantías, de realizarse la extradición, sin que ello signifique que se trate de impedir el trámite del juicio respectivo, sino el que se dé oportunidad a un tribunal federal de analizar la orden de extradición reclamada.

24. AUTORIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL EMBAJADOR DE MÉXICO ACREDITADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN.[279]

El embajador de México acreditado en los Estados Unidos de Norteamérica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías cuando el acto reclamado deriva del procedimiento de extradición, porque no cuenta con facultades de decisión y ejecución, ni con poder de

---

[278] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, octubre de 1997 Tesis: I.1o.P.32 P Página: 747 Materia: Penal; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Incidente de suspensión (revisión) 317/97. Robert Charles Tillitz. 16 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María del Carmen Villanueva Zavala. Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Sexta Parte, página 73, tesis de rubro: "EXTRADICIÓN SUSPENSIÓN DEFINITIVA PROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS DEL MANDAMIENTO DE".

[279] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, mayo de 1997 Tesis: I.2o.P.17 P Página: 604 Materia: Penal; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 106/96. Mario Salvador Ruiz Massieu. 31 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila. Secretario: Ariel Oliva Pérez.

imperio para ese efecto, ya que de acuerdo con lo expuesto en los numerales 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el embajador forma parte del cuerpo permanente de funcionarios del Estado, se encarga específicamente de representarlo en el extranjero y tiene la responsabilidad de ejecutar la política exterior de México, pues aun cuando en muchas ocasiones se ha dicho que el embajador es representante del jefe del Estado que lo envió, en realidad su carácter es el de representante de un órgano del Estado.

25. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LIBERTAD PROVISIONAL, PROCEDENCIA DE LA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA EXTRADICIÓN ORDENADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, EL JUEZ DE AMPARO PUEDE PRONUNCIARSE RESPECTO A DICHO BENEFICIO, NO OBSTANTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCIÓ DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN HAYA CONCEDIDO O NEGADO EL MISMO.[280]

Si el peticionario del amparo reclama en forma primordial en su demanda de garantías, la resolución que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que obsequió su extradición a otro país, encontrándose a disposición de dicha autoridad como lo previene el artículo 29 de la Ley de Extradición Internacional y el quejoso solicita al Juez de amparo su libertad provisional en el capítulo de la suspensión de los actos reclamados, éste se encuentra en aptitud legal de pronunciarse sobre dicho beneficio, de acuerdo a lo dispuesto en el sexto párrafo del numeral 136 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 26 de la Ley de Extradición. No es obstáculo para la anterior determinación, que el Juez de Distrito que emitió opinión en el citado procedimiento de extradición, se haya pronunciado respecto de ese beneficio, pues en este supuesto el procedimiento especial de extradición no se rige por los mismos principios y reglas específicas del procedimiento penal, constituyéndose en una clara excepción a lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, porque el extraditable no está en posibilidad para impugnar la determinación del Juez de Distrito que le concedió o negó el beneficio multicitado —si la estima ilegal—, a través de algún medio de defensa ordinario.

---

[280] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, febrero de 2000 Tesis: I.1o.P.62 P Página: 1065 Materia: Penal Tesis aislada; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Queja 73/99. 29 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Murguía Cámara. Secretaria: Patricia Marcela Diez Cerda.

26. EXTRADICIÓN, DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE. NO PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO SI ÉSTA SE PRESENTA FUERA DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS.[281]

Cuando el acto reclamado en la demanda de amparo indirecto se hace consistir en la resolución pronunciada por un Juez de Distrito, en la que se ordenó la detención provisional del quejoso con fines de extradición, dicha demanda puede presentarse en cualquier tiempo, ya que se trata de un acto que restringe la libertad personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, razón por la que no es procedente desecharla; pero, si el acto impugnado lo constituye el acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual se declara favorable la extradición de la persona reclamada por un Estado extranjero, el término para promoverla será de quince días, conforme a lo establecido en el párrafo tercero de la misma fracción y numeral, ello en virtud de que evidentemente se trata de actos de naturaleza diversa en ese procedimiento.

27. EXTRADICIÓN. EL TRATADO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR SER NORMA ESPECIAL, PREVALECE SOBRE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL.[282]

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley de Extradición Internacional, ésta tiene por objeto determinar los casos y condiciones para entregar a los requeridos a los Estados que lo soliciten, cuando no exista tratado internacional; luego, si los Estados Unidos de América, sin solicitar la formal extradición, piden la detención provisional con fines de extradición internacional de un reclamado por la autoridad judicial de ese país, deben satisfacerse únicamente los requisitos previstos en el artículo 11, apartado

---

[281] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, marzo de 2002 Tesis: I.5o.P.19 P Página: 1341 Materia: Penal Tesis aislada; QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 1585/2001. 18 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Magaña Díaz.

[282] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: I.7o.P.10 P Página: 1366 Materia: Penal Tesis aislada; SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 407/2002. 30 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Aureliano Pérez Telles.

1, del tratado celebrado con México en la materia, pues en ese supuesto no es aplicable la Ley de Extradición Internacional, al existir tratado con el país requirente, ya que en atención al principio de especialidad, que regula el citado artículo 1o. de la ley en comento, en virtud del cual, si una situación es regulada por un ordenamiento general y otro de carácter especial, éste prevalece sobre aquél; en tal circunstancia, el tratado es una norma especial en relación con la Ley de Extradición Internacional.

28. EXTRADICIÓN, ORDEN DE, RESPECTO DE UNA PERSONA QUE AÚN NO HA SIDO SENTENCIADA. PARA QUE SE CONCEDA, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL PAÍS REQUIRENTE SEAN SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR LA APREHENSIÓN Y ENJUICIAMIENTO DEL RECLAMADO, CONFORME A LAS LEYES FEDERALES MEXICANAS.[283]

El artículo 10, inciso 3, subinciso b), del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y el numeral 16, fracción II, de la Ley de Extradición Internacional —este último aplicable por regular el procedimiento de extradición, atendiendo a una correcta interpretación de los preceptos 1o. y 2o. de la Ley de Extradición Internacional y 13 del tratado de referencia—, exigen para conceder la extradición de una persona que aún no ha sido sentenciada, que la parte requirente aporte las pruebas necesarias para justificar la aprehensión o enjuiciamiento del reclamado conforme a las leyes de la parte requerida, en la especie, leyes federales mexicanas, o bien, las que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del extraditable, por lo que debe concluirse que los medios de convicción aportados por el Estado requirente deben ser eficaces, aunque sea en forma indiciaria para demostrar tales extremos, en términos de lo dispuesto en el precepto 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de no cumplir el Estado solicitante con dicho requisito, debe considerarse la orden de extradición emitida por el secretario de Relaciones Exteriores como violatoria de garantías, por no ajustarse a los lineamientos de los dispositivos legales que quedaron precisados en primer término.

---

[283] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: I.1o.P.76 P Página: 1366 Materia: Penal Tesis aislada; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 1041/2001. 25 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Murguía Cámara. Secretaria: Patricia Marcela Diez Cerda.

29. EXTRADICIÓN. PARA LIBRAR UNA ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON ESOS FINES, SOLICITADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ES INNECESARIO QUE APORTE PRUEBAS QUE ACREDITEN EL CUERPO DEL DELITO Y LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL REQUERIDO, SI AQUÉLLA NO SE HA SOLICITADO FORMALMENTE.[284]

Del análisis de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, del Tratado de Extradición celebrado entre dicho país y los Estados Unidos Mexicanos, para librar una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, si no se solicita aún la formal extradición, basta con que la nota diplomática del país requirente contenga la expresión del delito por el que se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero, la promesa de formalizar la solicitud de extradición y una declaración de existencia de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria en contra del requerido. Por lo que si los Estados Unidos de América solicita la orden de detención provisional con fines de extradición internacional, sin pedir la formal extradición, no es necesario aportar las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del requerido, a que se refiere el artículo 10, apartado 3, inciso b), de dicho tratado, pues tales requisitos no se exigen por el numeral primeramente invocado.

30. EXTRADICIÓN. PARA LIBRAR UNA ORDEN DE DETENCIÓN PROVISIONAL CON ESOS FINES, SOLICITADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ES INNECESARIO QUE SE COMPROMETA A NO APLICAR LA PRISIÓN VITALICIA SI AQUÉLLA NO SE HA SOLICITADO FORMALMENTE.[285]

De conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Tratado de Extradición celebrado entre dicho país y los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que

---

[284] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: I.7o.P.11 P Página: 1367 Materia: Penal Tesis aislada; SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 407/2002. 30 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Aureliano Pérez Telles.

[285] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVI, septiembre de 2002 Tesis: I.7o.P.12 P Página: 1368 Materia: Penal Tesis aislada; SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 407/2002.

para librar una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, solicitada por el Estado citado en primer término, si no se solicita aún la formal extradición del reclamado, es innecesario que el país requeriente se comprometa a no aplicar la prisión vitalicia, pues para la procedencia de la orden referida, no lo exige así dicho numeral.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común, que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

e) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre Seguridad Jurídica en materia de Órdenes de aprehensión o detención

1. ORDEN DE APREHENSIÓN.[286]

Para dictarla es necesario que lo pida el Ministerio Público, y si éste no solicita dicha orden, el juez no tiene facultades para expedirla.

2. ORDEN DE APREHENSIÓN INFUNDADA E INMOTIVADA. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA.[287]

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto jurídico de la sentencia que otorgue el amparo al quejoso o agravia-

---

30 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretario: Aureliano Pérez Telles.

[286] Quinta Época Instancia: Pleno; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 227; Página: 129; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 2247/24. Cordero Rafael. 27 de febrero de 1926. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 2325/24. Navarro Francisco. 3 de agosto de 1926. Mayoría de siete votos. Amparo en revisión 1921/24. Ramírez Francisco y otro. 10 de agosto de 1926. Unanimidad de ocho votos. Tomo XIX, pág. 1286. Pérez Ricardo. 5 de octubre de 1926. Amparo en revisión 4308/25. Mancio Everildo y coag. 21 de diciembre de 1926. Unanimidad de nueve votos.

[287] Octava Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 228; Página: 130; Precedentes: Octava Época: Contradicción de tesis 17/90.

do, es el de restituirlo en el uso o goce de la garantía individual que le fue violada o transgredida, es decir, volver la situación al estado que tenía antes de la violación cometida por la responsable, lo que significa que esa sentencia nulifica el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; en consecuencia, la concesión del amparo respecto de una orden de aprehensión que contenga violaciones formales debe ser lisa y llana y no para efectos.

3. ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA.[288]

Cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar, ante el juez constitucional, las pruebas que estime pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, toda vez que no teniendo conocimiento el inculpado, en la generalidad de los casos, del procedimiento que se sigue en su contra, sino al ser detenido, no tiene oportunidad ni medios de defensa, si no es ante el juez que conozca del juicio de garantías.

4. ORDEN DE APREHENSIÓN TRATÁNDOSE DE PENA ALTERNATIVA.[289]

Si el delito que se imputa al indiciado, lo castiga la ley con pena alternativa, pecuniaria o corporal, la orden de aprehensión que se libre es violatoria del artículo 16 constitucional.

Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 18 de mayo de 1992. Unanimidad de cuatro votos. NOTA: Tesis 1a./J.6/92, *Gaceta*, número 56, pág. 14; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo X-agosto, pág. 26.

[288] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 229; Página: 130; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 3048/24. Gaminde vda. de Zaldívar Teresa y coag. 28 de octubre de 1925. Mayoría de ocho votos. Amparo en revisión 2299/29. Castillo Negrete Gonzalo Del. 14 de enero de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 2956/31. Ruiz Corona Rafael. 3 de febrero de 1933. Cinco votos. Amparo en revisión 8474/41. Bello Felipe y coags. 13 de abril de 1942. Cinco votos. Amparo en revisión 7871/41. Nieto Vicente. 20 de abril de 1942. Cinco votos.

[289] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte SCJN; Tesis: 230; Página: 131; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 1636/30. Rodríguez Jesús. 9 de diciembre de 1931. Cinco votos. Amparo en revisión 4486/33. Castañeda Zeferino. 27 de febrero de 1935. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 1532/36. Montiel Marcelino. 11 de julio de 1936. Cinco votos. Amparo en revisión 2865/36. Villalobos Flavio. 14 de agosto de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Tomo XXXIII, pág. 303. Sánchez Francisca y coag.

5. APREHENSIÓN. FUNDAMENTO Y MOTIVACIÓN DE LA ORDEN DE.[290]

> La fundamentación y motivación de una orden de aprehensión no se satisfacen con la relación de las diligencias indagatorias, sino con el análisis de dichos elementos y la expresión de las razones en que se apoye, para concluir que se reunieron los presupuestos del artículo 16 constitucional; y si esto no se hizo, la orden de captura es violatoria de las garantías contenidas en dicho precepto.

6. ORDEN DE APREHENSIÓN, BASTA QUE OBRE EN AUTOS COPIA CERTIFICADA DE LA, PARA ESTUDIAR SU CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD AL MENOS EN SU ASPECTO FORMAL.[291]

> Basta con que de las constancias de autos se advierta que obra copia certificada de la orden de aprehensión que se reclama, para estar en aptitud de estudiar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, cuando menos en los aspectos de carácter formal que actos de tal naturaleza deben satisfacer.

---

[290] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 417; Página: 239; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 18/88. Homero Ramírez Acosta. 11 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 283/89. Francisco Antonio Ortiz Paz. 26 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 323/89. Fulvio García Cano. 16 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 81/90. David Rangel Robles. 24 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 41/93. Diógenes Gallegos Rodríguez. 23 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis X.1o.J/22, *Gaceta*, número 84, pág. 60; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIV-diciembre, pág. 199.

[291] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 605; Página: 375; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 427/90. Lesvia Velázquez Espinoza. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 566/90. Isaías Marroquín Torres y otros. 20 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 5/91. Catarino Vicente Caravantes. 2 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 156/91. María del Carmen Villarreal Victorio y otros. 27 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 311/91. Humberto Martínez de la Cruz. 19 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis XX.J/11, *Gaceta*, número 48, pág. 99; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VIII-diciembre, pág. 126.

7. ORDEN DE APREHENSIÓN CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. IMPIDE EXAMINAR VIOLACIONES DE FONDO.[292]

Cuando la orden de aprehensión carece de motivación no existe materia para hacer la confrontación con las constancias de autos, lo que se traduce en la imposibilidad legal de entrar al estudio del fondo del asunto, pues si el juez responsable no analiza los datos de la averiguación, el órgano de control constitucional no puede avocarse a esto, porque de lo contrario substituiría indebidamente al juzgador común.

8. ORDEN DE APREHENSIÓN CARENTE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS.[293]

La orden de aprehensión que carece de los requisitos de fundamentación y motivación, viola flagrantemente el artículo 16 constitucional y, en estas condiciones, el amparo que se promueva en su contra debe concederse en forma total y no para efectos de subsanar deficiencias de forma. En efecto, la sola omisión de mencionar en ella constancias que la funden y de consideraciones relativas a las circunstancias de hecho de parte del juzgador para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis abstracta consignada por la ley, es bastante para conceder en forma lisa y llana, sin restricción

---

[292] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 606; Página: 375; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 113/88. Juan Jorge Basurto Montoya. 31 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 435/88. Severo Canales Islas y otros. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 52/89. Alfredo Martínez Méndez. 28 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 188/89. Luis Tobón Hernández. 14 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 250/89. Guadalupe Pérez Carreón y otro. 4 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.1o.J/20, *Gaceta*, número 22-24, pág. 250; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IV, Segunda Parte-2, pág. 639.

[293] Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 607; Página: 376; TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Séptima Época: Amparo en revisión 243/75. Javier y Dolores Pérez Ramírez. 22 de agosto de 1975. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 549/75. Gonzalo Mario Díaz Toledo. 28 de enero de 1976. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 598/75. Gustavo Dorles Reyes y otro. 25 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 569/75. Domingo Monjarraz Gallardo. 6 de mayo de 1976. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 167/76. Lino Esquivel Ramírez y otros. 25 de mayo de 1976. Unanimidad de votos. NOTA: En todos los vols. de la Séptima Época, donde están publicados los precedentes, esta tesis aparece bajo el rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN NO FUNDADA NI MOTIVADA. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS".

alguna, la protección constitucional, sin que se haga necesario el estudio de las constancias existentes en la averiguación, porque tal estudio corresponde al juez común responsable y no a los órganos de control constitucional.

9. ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE ATENDERSE PARA SU EMISIÓN ÚNICAMENTE AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL Y NO AL 14 DEL MISMO ORDENAMIENTO.[294]

Para el libramiento de una orden de aprehensión únicamente debe atenderse a lo dispuesto al respecto por el artículo 16 de la Carta Magna, motivo por el que no puede válidamente argüirse en este caso violaciones al diverso 14 del mismo ordenamiento.

10. ORDEN DE APREHENSIÓN. DECLARACIONES CONTRADICTORIAS.[295]

Para dictar una orden de aprehensión sólo es necesario que se llenen los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, o sea, que ésta provenga de una autoridad competente, debiendo preceder denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que

---

[294] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 608; Página: 377; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 251/92. Leobardo Marcelo Herrera. 24 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 231/93. Alejandro Aguilar Jácome. 31 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 98/93. René Vives Zamudio. 24 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 344/93. José Manuel Ramírez Zepeda. 15 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 296/94. Juez Tercero de Distrito en el Estado. 6 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VII.P.J/46, *Gaceta*, número 83, pág. 71; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIV-noviembre, pág. 323.

[295] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 609; Página: 377; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 407/88. Guadalupe Corte Cuauhtepitzi y coags. 18 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 198/89. José Emeterio Fidel Reyes Solís. 11 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 413/89. Emilio Maurer Bretón y otro. 27 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 287/91. Manuel Dorantes Hernández. 3 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 16/93. Socorro Fuentes Lozano y otra. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/249, *Gaceta*, número 64, pág. 44; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XI-abril, pág. 151.

ésta se encuentre apoyada por declaraciones de personas dignas de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado en la comisión del ilícito, por lo que resultan irrelevantes las contradicciones que pudieran existir en dichas declaraciones, pues éstas sería necesario apreciarlas para fundar el auto de formal prisión o para condenar en definitiva, pero no para dictar la orden de aprehensión.

11. ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. AUTORIDADES EJECUTORAS DE LA. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL SUPERVISOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS CRIMINALÍSTICOS DEPENDIENTE DE AQUÉL, TIENEN ESE CARÁCTER.[296]

El Procurador General de la República tiene la calidad de autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión dictadas por los jueces de Distrito, por ser éste el jefe de la institución del Ministerio Público Federal y en virtud de que de conformidad con los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha institución presidida por el Procurador, es la encargada de la persecución de los delitos, para lo cual tiene bajo su mando a la Policía Judicial Federal; de donde se sigue, que dicho Procurador tiene facultades para ordenar la ejecución de las órdenes de aprehensión solicitadas por la autoridad judicial, aun cuando dicha ejecución es realizada a través de la Policía Judicial Federal; lo que se traduce en una ejecución material de éste y jurídica del jefe del Ministerio Público Federal, máxime que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, encomienda a la mencionada policía la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero actuando siempre bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público Federal. Por las mismas razones, debe considerarse en la especie, como autoridad ejecutora, al Supervisor General de Servicios Técnicos y Criminalísticos de la Procuraduría General de la República, pues según lo

---

[296] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 610; Página: 378; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Incidente en revisión 6/87. Rogelio Posadas del Río. 29 de enero de 1987. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 48/87. Galacio Maya Rodríguez. 27 de febrero de 1987. Unanimidad de votos. Incidente en revisión 122/87. Pedro Luis Silva Álvarez. 13 de mayo de 1987. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 264/87. José María Guardia López. 11 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 156/93. Natán Sfchovich Edvabny. 28 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis I.2o.P.J/50, *Gaceta*, número 69, pág. 23; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XII-septiembre, pág. 133.

dispone el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Orgánica anteriormente invocada, el citado funcionario es el agente del Ministerio Público Federal encargado de supervisar, coordinar y regular directamente las funciones de las unidades concentradas de la Policía Judicial Federal, a las que corresponde el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada.

12. ORDEN DE APREHENSIÓN, DISCREPANCIAS ENTRE LOS TESTIGOS DE CARGO.[297]

La apreciación de las declaraciones de los testigos de cargo y sus posibles contradicciones o discrepancias, es necesario hacerla al resolverse la situación jurídica del inculpado y en su caso, en la sentencia definitiva, pero no al dictar el mandamiento de captura.

13. ORDEN DE APREHENSIÓN. EL EXAMEN DE SU LEGALIDAD DEBE HACERSE AUN CUANDO ANTES DE RESOLVERSE EL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTE EN CONTRA DEL QUEJOSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.[298]

Si bien es verdad que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad responsable pronuncia una nueva resolución que sustituye procesalmente

---

[297] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 611; Página: 379; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 35/90. Manuel Morfín y otro. 28 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 47/92. Fernando Farías Álvarez. 25 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 195/92. David Cortés Robles. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 211/92. Jaime Reyes Gutiérrez. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 33/94. Carlos Martín Vázquez Hernández. 11 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis XI.2o.J/19, *Gaceta*, número 76, pág. 64; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIII-abril, pág. 280.

[298] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 612; Página: 380; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 265/94. Alberto Ramírez Olivares. 25 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 300/94. María Minerva Esperanza Torres López. 2 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 347/94. Celedonio Hernández Quezada. 22 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 270/94. Roberto Martínez Hernández. 30 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 382/94. Jacobo Coraza Méndez. 27 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.1o.J/103, *Gaceta*, número 85, pág. 83; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XV-enero, pág. 106.

a la anterior, también lo es, que esto acontece cuando con esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de las garantías que estime violadas, situación que no se presenta cuando habiéndose reclamado una orden de aprehensión, se decreta el auto de formal prisión en contra del amparista. Tampoco se podría actualizar la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, pues dicho precepto prevé que sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia originada por el cambio de situación jurídica; circunstancia por la que actualmente el examen de la legalidad de una orden de aprehensión, debe ventilarse aun cuando antes de resolverse el juicio constitucional se dicte en contra del quejoso auto de formal prisión.

14. ORDEN DE APREHENSIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA.[299]

Toda orden de aprehensión debe reunir los requisitos de fundamentación y motivación, sin que baste que el juez natural haga una referencia vaga de que tuvo a la vista los elementos existentes en la averiguación, para estimar que se reunieron los requisitos prevenidos en el artículo 16 constitucional, sino que es preciso que la orden misma exprese los motivos en que se funda; es decir, no basta para tener por reunido tal requisito que el juez diga en su resolución que ha tenido presentes los elementos de los cuales se infieran los hechos denunciados, sino que es preciso que en la propia orden se analice el contenido de esos elementos y se expresen las razones en que se apoye, para concluir que se llenaron los requisitos del precepto constitucional invocado, pues de no hacerlo, la orden de aprehensión viola esa disposición.

---

[299] Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 613; Página: 381; TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Séptima Época: Amparo en revisión 1298/69. Raúl Hernández Andrade. 23 de septiembre de 1969. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 713/70. Jesús Alejandro Mancilla Chacón. 12 de agosto de 1970. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 765/70. Eliezer Noguerola Berdón y coags. 23 de julio de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 464/79. Abraham Ayala Gutiérrez. 27 de julio de 1979. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 522/79. Mario Asunción Yuit Uc y otros. 22 de noviembre de 1979. Unanimidad de votos. NOTA: En todos los vols. de la Séptima Época, donde están publicados los precedentes, esta tesis aparece bajo el rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA RELACIÓN DE PRUEBAS NO CONSTITUYE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE DEBE CONTENER".

15. ORDEN DE APREHENSIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA. NO BASTA UNA SIMPLE RELACIÓN DE CONSTANCIAS.[300]

> Para satisfacer la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, referente a que todo acto de molestia emitido por una autoridad debe estar fundado y motivado, resulta insuficiente que en una orden de aprehensión la autoridad judicial cite determinados artículos del ordenamiento penal respectivo, y haga una simple relación de la denuncia presentada por el ofendido, y de las demás constancias de la averiguación, pues es necesario que precise los preceptos legales aplicables al caso, y que exprese las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto, y así concluir que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas.

16. ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES OBLIGATORIO OBSERVAR LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.[301]

> La obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae

---

[300] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 614; Página: 381; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 205/88. Salomón Sánchez Hernández. 12 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 278/88. Guadalupe Sánchez Canseco y coags. 28 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 152/89. Carlos y Raciel Zempoaltécatl Ramírez. 20 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 199/89. José Romero Guzmán y otro. 20 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 349/89. Luis Sánchez Angulo. 26 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.1o.J/18, *Gaceta*, número 22-24, pág. 249; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IV, Segunda Parte-2, pág. 640.

[301] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 615; Página: 382; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 141/93. Julián Pañeda Flores. 15 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 79/93. María Dolores Torija Stivalet y otro. 11 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 420/93. Juez Primero de Primera Instancia de Jalapa, Veracruz. 17 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 13/94. Juez Primero de Primera Instancia de Jalapa, Veracruz. 1 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 457/93. Juez Primero de Primera Instancia en el Estado de Veracruz. 3 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VII.P.J/40, *Gaceta*, número 77, pág. 81; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIII-mayo, pág. 310.

el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento.

17. ORDEN DE APREHENSIÓN. PREVALENCIA O MINUSVALÍA DE LOS ELEMENTOS DE DESCARGO SOBRE LOS DE CARGO, OPORTUNIDAD PARA DILUCIDAR LA.[302]

Por regla general, y en tratándose de órdenes de aprehensión, basta que los elementos de cargo que obren en el sumario sirvan de apoyo a la denuncia, acusación o querella de hechos que la ley castiga con pena corporal y hagan probable la responsabilidad del inculpado para que los presupuestos del artículo 16 de la Carta Magna se surtan, quedando para otro momento procesal determinar la prevalencia o minusvalía de las pruebas de descargo sobre las de cargo.

18. ORDEN DE APREHENSIÓN. PRUEBAS EN EL AMPARO CONTRA.[303]

Cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar, ante el juez de Distrito las pruebas que estime pertinentes para demostrar su inconstitucionalidad aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, toda vez que no teniendo conocimiento el inculpado, en la generalidad de los casos, del procedimiento que se sigue en su contra, sino al ser detenido, no tiene oportunidad ni medios de defensa, sino es ante el juez que conozca del juicio de garantías.

---

[302] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 616; Página: 383; TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 86/93. José Saldaña Rivera y otro. 1 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 134/93. Josué Adrián Olmos Morales. 2 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 187/93. Abel Servando Granados Hernández. 8 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 204/93. Raúl Vásquez López. 17 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 231/93. Alejandro Aguilar Jácome. 31 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VII.P.J/30, *Gaceta*, número 70, pág. 78; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XII-octubre, pág. 334.

[303] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 617; Página: 384; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 24/89. José Orea Zambrano y otros. 14 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 335/89. Jesús Arellano Núñez. 7 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revi-

19. ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS.[304]

No basta que el juez natural sólo haga una referencia de los elementos existentes en la averiguación, para estimar que se reunieron los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, sino que es preciso que la orden analice esos elementos y exprese los motivos en que se funda para considerar que hay datos que hacen probable la responsabilidad de los inculpados en la comisión del ilícito de que se trata.

20. ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO.[305]

Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional,

---

sión 141/90. Jerónimo García Moreno. 15 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Queja 32/90. Bernardino Amado Cruz. 31 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 263/91. Atanacio Canico de la Luz. 5 de julio de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/148, *Gaceta*, número 45, pág. 48; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VIII-septiembre, pág. 75. Esta tesis en su voz y texto coincide con la jurisprudencia número 88 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Quinta Época y que aparece a fojas 138, Novena Parte, del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1985.

[304] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 618; Página: 384; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 182/88. Antonio López García. 15 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 307/88. Rafael Molina Castro y otros. 5 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 381/88. Josafat Crisóstomo Martínez. 28 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 65/89. Arturo Espinoza Cervantes. 30 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 145/89. José Ángel Saúl Báez López. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/54, *Gaceta*, número 34, pág. 95; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VI, Segunda Parte-1, pág. 377.

[305] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 619; Página: 385; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 181/90. Serafín Rodríguez Alonso. 28 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 294/90. Tomás Manel Pérez. 19 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 470/90. José Luis Hernández Juárez y otra. 8 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 102/91. Dionilo Morales Nazario. 19 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 2/92. Miguel Luna Domínguez. 23 de enero de 1992. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/182, *Gaceta*, número 51, pág. 63; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IX-marzo, pág. 104.

y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado.

21. ORDEN DE APREHENSIÓN.[306]

Apareciendo en autos comprobado un hecho delictuoso que la ley castiga con pena corporal, y declaración de dos personas que imputan responsabilidad a los quejosos en ese hecho antijurídico, es indudable que la orden de aprehensión que combaten los quejosos está ajustada a derecho, pues tales declaraciones sería necesario apreciarlas, para fundar el auto de formal prisión o para condenar en definitiva, pero no para dictar la orden de aprehensión.

22. ORDEN DE APREHENSIÓN.[307]

La precisa clasificación del delito no es necesaria para dictar la orden de aprehensión, sino para fundar el auto de formal prisión o la sentencia definitiva.

23. ORDEN DE APREHENSIÓN.[308]

Dictada por la autoridad judicial competente, en virtud de denuncia de un hecho que la ley castiga con pena corporal, y apoyada en datos que hagan

---

[306] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 930; Página: 589; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 121/92. Leocadio Zavala Sandoval. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 220/92. Daniel Salazar Benítez. 30 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 231/92. Óscar Filomeno García Gutiérrez y otros. 14 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 70/93. Jesús Francisco Valdez Peraza. 14 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 155/93. Luis Roberto Ogarrio Perkins. 18 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/78, *Gaceta*, número 70, pág. 67; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XII-octubre, pág. 325.

[307] Quinta Época Instancia: Pleno; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 931; Página: 590; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 1404/24. Vera Enrique C. 5 de septiembre de 1925. Unanimidad de diez votos. Tomo XIX. Mora Miguel. Amparo en revisión 3243/25. Ortiz Porfirio. 11 de octubre de 1926. Unanimidad de ocho votos. Amparo en revisión 2094/26. Robles Esteban. 9 de diciembre de 1926. Unanimidad de ocho votos. Amparo en revisión 878/26. Escamilla Ramón. 2 de abril de 1927. Unanimidad de ocho votos.

[308] Quinta Época Instancia: Pleno; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 932; Página: 590; Precedentes: Quinta Época: Tomo I, pág. 434. Amparo en revisión.

probable la responsabilidad del acusado, no puede alegarse que es violatoria de garantías.

24. ORDEN DE APREHENSIÓN.[309]

Entre los requisitos previos para dictar la orden de aprehensión no existe el de que se tome declaración al inculpado ni el de que se le cite para hacerle saber los cargos que se formulen en su contra; siendo necesario apreciar las declaraciones de los testigos, para fundar el auto de formal prisión, o para absolver o condenar en definitiva, pero no para dictar la orden de aprehensión.

25. ORDEN DE APREHENSIÓN.[310]

No se podrá librar ninguna, a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado.

Diéguez Manuel. 12 de octubre de 1917. Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 24/17. Garduño Antonio. 15 de octubre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo II, pág. 109. Amparo en revisión. Gómez Matilde. 14 de enero de 1918. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 39/17. González Gilberto y Gustavo. 23 de enero de 1918. Unanimidad de once votos. Amparo en revisión 156/17. Jacinto Luis. 25 de enero de 1918. Unanimidad de once votos.

[309] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 933; Página: 590; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 1134/23. Basurto Ladislao E. 16 de febrero de 1924. Unanimidad de once votos. Amparo en revisión 1404/24. Vera Enrique C. 5 de septiembre de 1925. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 54/27. Pérez Ulises. 24 de octubre de 1929. Cinco votos. Amparo en revisión 162/28. Pérez Epigmenio y coags. 11 de julio de 1930. Cinco votos. Amparo en revisión 2797/29. Zárate Albarrán Alfredo y coags. 3 de febrero de 1931. Unanimidad de cuatro votos.

[310] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 934; Página: 591; Precedentes: Quinta Época: Tomo V, pág. 994. Amparo en revisión. Briones Jesús. 20 de octubre de 1919. Unanimidad de diez votos. Tomo IX, pág. 690. Amparo en revisión. Torres Marcelino. 27 de diciembre de 1921. Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 1658/19. Aguilar Candelaria. 1 de agosto de 1922. Mayoría de ocho votos. Amparo en revisión 1354/21. Romero Alarcón Marciano. 1 de agosto de 1922. Mayoría de ocho votos. Amparo en revisión 795/21. Dávila Madrid Manuel. 28 de septiembre de 1922. Unanimidad de nueve votos.

26. ORDEN DE APREHENSIÓN.[311]

Para dictarla, no es preciso que esté comprobado el cuerpo del delito, sino sólo que se llenen los requisitos prevenidos por el artículo 16 constitucional.

27. ORDEN DE APREHENSIÓN.[312]

Para que proceda una orden de aprehensión, no basta que sea dictada por autoridad judicial competente, en virtud de denuncia de un hecho que la ley castiga con pena corporal, sino que se requiere además, que el hecho o hechos denunciados realmente puedan constituir un delito que la ley castigue con pena corporal; y el juez de Distrito debe hacer un estudio de las circunstancias en que el acto fue ejecutado para dilucidar si la orden de captura constituye o no, violación de garantías.

28. ORDEN DE APREHENSIÓN.[313]

Si el hecho que se imputa al acusado no merece pena corporal, la orden de aprehensión que se libre en su contra, importa una violación al artículo 16 constitucional.

---

[311] Quinta Época Instancia: Pleno; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 935; Página: 591; Precedentes: Quinta Época: Tomo III, pág. 83. Amparo en revisión. Olvera José C. 5 de julio de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo IV, pág. 540. Amparo en revisión. Navarro José Trinidad. 10 de marzo de 1919. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 1233. Amparo en revisión. Guevara José de la Luz. 28 de marzo de 1919. Unanimidad de nueve votos. Amparo en revisión 1922/21. Nieto Leopoldo F. 3 de octubre de 1923. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 2934/21. Molina Ladislao. 8 de enero de 1924. Mayoría de ocho votos.

[312] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 936; Página: 592; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 3048/24. Gaminde vda. de Zaldívar Teresa y coag. 28 de octubre de 1925. Mayoría de ocho votos. Amparo en revisión 2334/22. Aca Apolinar y coag. 18 de mayo de 1926. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 4775/27. Franco Ernesto y coag. 13 de febrero de 1930. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 2444/29. Montemayor Emigdio. 21 de noviembre de 1930. Mayoría de tres votos. Amparo en revisión 262/29. Lovillo vda. de Sánchez Amelia. 30 de enero de 1931. Cinco votos.

[313] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 937; Página: 592; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 2334/22. Aca Apolinar y coag. 18 de mayo de 1926. Unanimidad de diez votos. Amparo en revisión 2428/22. Agraz Villaseñor Félix. 22 de mayo de 1929. Mayoría de tres votos. Amparo en revisión 450/28. Garibay Francisco. 5 de junio de 1929. Cinco votos. Amparo en revisión 3267/28. Nethken Howard. 6 de junio de 1929. Cinco votos. Amparo en revisión 4775/27. Franco Ernesto y coag. 13 de febrero de 1930. Unanimidad de cuatro votos.

29. ORDEN DE APREHENSIÓN.[314]

Tratándose de la orden de aprehensión, no debe quedar solamente a juicio de la autoridad responsable la apreciación de las pruebas, sino que la Suprema Corte debe sustituirse al juez a quo, para analizar los datos que arroje la averiguación, a fin de resolver si son o no, suficientes para hacer probable la responsabilidad del inculpado; ya que de otra suerte, no habría autoridad que valorizara en definitiva esos datos, ni sería posible la garantía que concede el artículo 16 constitucional.

30. ORDEN DE APREHENSIÓN, HIPÓTESIS EN QUE ADOLECE DE FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LA.[315]

La orden de aprehensión no cumple con los principios de fundamentación y motivación que todo acto de esa naturaleza debe contener, si únicamente analiza la existencia de los ilícitos que se atribuyen al acusado, así como la responsabilidad presuntiva de éste en la comisión de los mismos, pero de ninguna forma razona sobre que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de los ilícitos en mención ni precisa el grado de participación en la conducta desplegada por el sujeto activo en la comisión de dicho evento, toda vez que es al juzgador a quien corresponde determinar sobre la autoría o participación del infractor, asimismo debe invocar las disposiciones legales en que se encuentren previstos y sancionados.

---

[314] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 938; Página: 593; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 4037/28. García Anacleto. 24 de abril de 1929. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 2444/29. Montemayor Emigdio. 21 de noviembre de 1930. Mayoría de tres votos. Amparo en revisión 806/29. Torre Emilio. 2 de diciembre de 1930. Mayoría de tres votos. Amparo en revisión 1441/29. Herrera Rafael. 4 de diciembre de 1930. Cinco votos. Amparo en revisión 2299/29. Castillo Negrete Gonzalo del. 14 de enero de 1940. Unanimidad de cuatro votos.

[315] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 939; Página: 593; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 528/90. Enrique Cruz Sandoval. 4 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 481/90. Nicolás Ramírez López. 25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 358/91. Antonio Lara Ramos. 14 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 387/91. Guadalupe Núñez García. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 398/91. Raúl Monterrosa Orozco. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis XX.J/13, *Gaceta*, número 50, pág. 82; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IX-febrero, pág. 91.

31. ORDEN DE APREHENSIÓN. (LEGISLACIÓN DE PUEBLA).[316]

Para dictar una orden de aprehensión no es preciso que esté comprobado el cuerpo del delito, sino sólo que se llenen los requisitos prevenidos por el artículo 16 constitucional y por el artículo 114 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla.

32. ORDEN DE APREHENSIÓN. NO COMPRENDE EL EXAMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO, SINO ÚNICAMENTE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[317]

Si tanto el juez de amparo, como la autoridad recurrente, coinciden en que la conducta imputada al quejoso constituye un hecho delictuoso sancionable con pena corporal, ello basta para hacer evidente que se actualizan dos de los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional; si a esto se suma que la orden de aprehensión combatida fue girada por una autoridad judicial competente, precedida de una denuncia que se encuentra apoyada por declaración bajo protesta de persona digna de fe y por otros datos que hacen probable la responsabilidad del inculpado, es claro que los restantes requisitos del precitado numeral también se encuentran plenamente satisfechos. Por tanto, si el juez natural decretó la orden de aprehensión en contra del quejoso por el delito de robo, y al parecer el hecho antijurídico que la motivó no constituye propiamente ese delito, sino uno diverso, como podría ser el de abuso de confianza, tal circunstancia resulta intrascendente, porque sobre cualquier consideración debe prevalecer el que se actualicen las exigencias consignadas por el aludido precepto.

---

[316] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 940; Página: 594; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 308/89. David González Silva. 11 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 76/90. José Concepción Zepeda Serrano. 14 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 77/90. Cesáreo Aguilar Caballero. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 229/90. Pablo Sánchez Guarneros. 11 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 94/91. Lorenzo Flores Varillas y otro. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/118, *Gaceta*, número 40, pág. 135; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VII-abril, pág. 110.

[317] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 941; Página: 595; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 214/91. Sebastián Feria Ruiz. 7 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión

33. ORDEN DE APREHENSIÓN. NO REQUIERE QUE ESTÉ PROBADO EL CUERPO DEL DELITO.[318]

Cuando el acto reclamado en el juicio de garantías, lo constituye una orden de aprehensión, ni el juez de la causa, ni el de Distrito, tienen obligación alguna de estudiar lo referente a la comprobación del cuerpo del delito, ya que este requisito no se encuentra contemplado entre los exigidos por el artículo 16 de nuestra Carta Magna para dictar una orden de aprehensión, y en atención a esto, si no se realiza un análisis de esta cuestión, con ello no se perjudica al quejoso y menos aún se viola garantía alguna en su contra.

34. ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE REQUIERE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DEL CUERPO DEL DELITO PARA EMITIR LA.[319]

Es inexacto que para librar un mandamiento de captura sea necesaria la comprobación del cuerpo del delito, pues tal exigencia no se contiene en el ar-

---

132/90. Gregorio Mingo Ramos y otra. 16 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 131/92. Juan Sánchez García. 1 de julio de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 393/92. Emma del Carmen Márquez Naranjo. 23 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 416/92. Jesús Chan Jiménez. 25 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis X.1o.J/13, *Gaceta*, número 71, pág. 80; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XII-noviembre, pág. 239.

[318] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 942; Página: 596; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 326/88. José Klein Cházaro. 14 de diciembre de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 427/88. Odilón Muñoz Campos. 19 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 173/89. José Luis Alberto Pérez. 31 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 135/91. María del Refugio Vilchis Enríquez y otros. 3 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 263/91. Atanacio Canico de la Luz. 5 de julio de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/147, *Gaceta*, número 45, pág. 48; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VIII-septiembre, pág. 75.

[319] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 943; Página: 596; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 244/92. Roberto Liévana Moreno. 26 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 11/93. Enrique Rivadeneyra Falco y otra. 17 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 51/93. Sergio Baeza Rodríguez. 22 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 103/93. Francisca Medina Romero. 16 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 139/93. Gerardo Cabrera Vega. 25 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.2o.J/10, *Gaceta*, número 70, pág. 52; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XII-octubre, pág. 238.

tículo 16 de la Constitución General de la República, que es el precepto que consigna los requisitos que deben cumplirse para emitir un acto de tal naturaleza.

35. ORDEN DE APREHENSIÓN. REQUISITOS PARA SU EMISIÓN.[320]

El artículo 16 de la Constitución Federal exige requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, los cuales son: a) que exista previamente una denuncia, acusación o querella; b) que se trate de un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal; c) que la denuncia, acusación o querella esté apoyada por declaración bajo protesta, de persona digna de fe; o bien d) por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado. Ahora bien, si sólo se cumple con el requisito del dictado de la orden aprehensoria por autoridad judicial y que existió la denuncia previa, faltando el diverso a que se refiere a la probable responsabilidad, pues sólo existe la imputación que se le hace, sin embargo dicha imputación sólo tiene el valor de un indicio que está aislada y no adminiculada con algún otro elemento de convicción, de ahí que se estime insuficiente para legitimar la orden de aprehensión por la falta de uno de los requisitos.

36. ORDEN DE APREHENSIÓN, REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA.[321]

Para librar una orden de aprehensión, no es necesario que se acredite el cuerpo del delito de que se trate, sino sólo que se reúnan los extremos del artícu-

---

[320] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 945; Página: 598; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 236/89. Cipriano Torres Román. 24 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 253/91. Agente del Ministerio Público Federal. 29 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 188/92. Ricardo Vega Flores. 30 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 54/93. Angelina Dalinda Aguilar Díaz. 19 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 165/94. Josefa López González. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis IV.3o.J/42, *Gaceta*, número 86-2, pág. 48; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XV-II febrero, pág. 139.

[321] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 946; Página: 598; TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 55/91. José Alfredo Mazariegos Pinto. 25 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 513/91. Rubén Fernández Rivera. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 126/93. Marlene López de la Cruz. 18 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 537/93. Juan Aguilar Cárdenas y otros. 18 de noviembre de 1993. Unanimidad de

lo 16 constitucional, sin embargo, conforme a la hermenéutica jurídica de dicha disposición constitucional, los hechos atribuidos al inculpado deben tener el carácter de delictivos a fin de que puedan ser sancionados con pena corporal.

37. ORDEN DE APREHENSIÓN. SIN CLASIFICACIÓN DE DELITO.[322]

La precisa clasificación del delito no es necesaria para dictar la orden de aprehensión, sino para fundar el auto de formal prisión y la sentencia definitiva.

38. ORDEN DE APREHENSIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE LA.[323]

De acuerdo con la fracción I, del artículo 20 constitucional, procede negar la suspensión contra la orden de aprehensión que se libra por un delito cuya pena impide la concesión de la libertad caucional.

39. PRESCRIPCIÓN. NO PUEDE ANALIZARSE EN LA LITIS CONSTITUCIONAL CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHEN-

---

votos. Amparo en revisión 266/94. José Domingo Hernández Pérez. 30 de junio de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis XX.J/71, *Gaceta*, número 80, pág. 107; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIV-agosto, pág. 447.

[322] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 947; Página: 599; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 202/88. Efrén Andrade Andrade. 13 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 427/88. Odilón Muñoz Campos. 19 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 224/90. Luis Ginez García. 12 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 135/91. María del Refugio Vilchis Enríquez y otros. 3 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 305/91. Francisco Hernández Altaminaro y otros. 11 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/154, *Gaceta*, número 47, pág. 86; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo VIII-noviembre, pág. 125.

[323] Quinta Época Instancia: Primera Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 948; Página: 599; Precedentes: Quinta Época: Amparo en revisión 5556/37. Guzmán Celso y coags. 10 de noviembre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 5786/37. Machorro Sixto y coags. 10 de noviembre de 1937. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 3392/37. Rojas Genaro Heliodoro y coags. 19 de noviembre de 1937. Cinco votos. Amparo en revisión 7046/37. Mota o Mata Juan y coag. 26 de febrero de 1938. Cinco votos. Amparo en revisión 1229/38. Sánchez Gerónimo y coags. 4 de mayo de 1938. Cinco votos.

SIÓN, SIN EL PREVIO ESTUDIO DEL TEMA POR PARTE DE LA RESPONSABLE.[324]

> Cuando se reclama la orden de aprehensión pendiente de ejecutarse no puede analizarse en el amparo lo relativo a la prescripción de la acción persecutoria del delito, si previamente las autoridades de instancia no lo han estudiado, porque de hacerlo los tribunales constitucionales se substituirían al juez del conocimiento o a su superior, ello es así, porque en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. Ahora bien, los artículos 111, 113 y 116 del Capítulo Sexto, del Título IV, Libro Primero, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, anterior al vigente, al referirse a la prescripción, respectivamente previenen que por ésta se extingue la acción persecutoria y la facultad de ejecutar las sanciones; que los términos para la prescripción de la acción persecutoria serán continuos y se contarán desde el día siguiente en que se cometió el delito, si fuere consumado; que la acción persecutoria prescribe en un caso igual al máximo de la sanción corporal que corresponda al delito, pero si el indiciado permanece fuera del territorio nacional, el término de la prescripción se aumentará en dos tercios. Por consiguiente, si la autoridad de instancia no previene en el conocimiento y análisis de tales cuestiones, es claro que no tendría oportunidad de cerciorarse si el término de la prescripción fue continuo y si el indiciado estuvo o no fuera del territorio nacional; desde otro punto de vista cabe advertir que el artículo 112 de la ley sustantiva penal antes citada, preceptúa que los jueces y tribunales tendrán en cuenta y aplicarán de oficio en todo caso la prescripción, tan luego tenga conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso, de donde se desprenden las facultades de las autoridades de instancia para conocer de oficio esa cuestión. Además, cabe señalar que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, precepto que sólo exige para su libramiento que proceda denuncia, acusación o querella de un

[324] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte HO; Tesis: 965; Página: 608; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 134/92. Arturo Osorio Padilla. 29 de abril de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 156/92. Egberto Martínez Llanos. 25 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 450/92. Julián Mena Naimey. 29 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 381/93. Guillermo Agustín Ascencio Gómez. 30 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 229/94. Juventino Sánchez Ita. 22 de junio de 1994. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/313, *Gaceta*, número 80, página 80; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XIV-agosto, pág. 469.

hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y que esté apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del indiciado; luego, no sería jurídico que, cubiertos tales requisitos se pretendiera declarar su inconstitucionalidad por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo y no declararse ejecutado, si previamente no medió gestión alguna del interesado alegando ante el propio juez de los autos que había operado la prescripción.

40. ORDEN DE APREHENSIÓN CARENTE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. AMPARO TOTAL Y NO PARA EFECTOS.[325]

Como la orden de aprehensión reclamada por falta de fundamentación y motivación es un acto de carácter positivo, los efectos de la concesión del amparo otorgado por el juez de Distrito deberán contraerse a la restitución a los agraviados en el pleno goce de la garantía individual violada, para lo cual debe anularse la orden de captura, de manera que no produzca efecto legal alguno en contra de los recurrentes, y en este orden de ideas la protección federal debe ser lisa y llana y no para el efecto de que el juez responsable subsane la omisión de falta de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión. Sin embargo, el hecho de concederse lisa y llanamente el amparo no significa que la responsable esté impedida para dictar un nuevo auto si lo estima conveniente, pues el amparo al concederse en forma total, sólo anula el auto que no fue correctamente fundado y motivado, pero no restringe el imperio de la responsable para emitir otros actos si así lo estima conveniente.

---

[325] Séptima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1985; Parte: Parte VI; Tesis: 73; Página: 100; TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. Precedentes: Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 145-150, pág. 185. Amparo en revisión 152/80. Celestino José Pérez y otros. 30 de enero de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Rosalía Moreno Ruiz. Volúmenes 145-150, pág. 185. Amparo en revisión 178/80. Cirilo Canseco Hernández y otra. 13 de marzo de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Volúmenes 145-150, pág. 343. Amparo en revisión 954/80. Salomón Jiménez Pérez. 5 de diciembre de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Volúmenes 151-156, pág. 125. Amparo en revisión 726/81. Octavio Vázquez Ambrosio. 11 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. Secretario: Pedro Castañeda Rosas. Volúmenes 157-162, pág. 119. Amparo en revisión 588/81. Roberto Yáñez Cruz y otra. 4 de junio de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Justino Baltazar Castellanos. PUBLICADA: Véase: *Gaceta*, del *Semanario Judicial de la Federación* número 56, pág. 14, tesis por contradicción 1a./J.6/92.

41. ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[326]

> La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante

---

[326] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999 Tesis: 1a./J. 31/99 Página: 285 Materia: Penal Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 56/97. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Cruz Hernández. Tesis de jurisprudencia 31/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna.

42. ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBEN PRECISARSE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES O ATENUANTES DEL DELITO, DE ACUERDO CON LA REFORMA AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.[327]

El segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, reformado por decreto publicado en el *Diario Oficial* de la Federación de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, estatuye que: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado". Dentro de este contexto normativo, es obligación constitucional y legal de todo juzgador, al emitir una orden de aprehensión, determinar cuáles son, según el delito de que se trate,

[327] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, abril de 1998 Tesis: 1a./J. 18/98 Página: 155 Materia: Penal; Precedentes: Contradicción de tesis 23/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 25 de febrero de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Blanca Evelia Parra Meza. Tesis de jurisprudencia 18/98. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

los datos que acreditan los elementos del tipo penal, a fin de que quede precisada no sólo la figura delictiva básica, sino que además, de ser el caso, se configure o perfile su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que el dictado de la orden de captura, como consecuencia del ejercicio de la acción penal realizada por el Ministerio Público, surte el efecto procesal de poner a disposición del Juez al indiciado en relación con determinado delito; por tanto, deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la consignación.

43. ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA POR JUEZ DE DISTRITO. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA.[328]

El procurador general de la República tiene la calidad de autoridad ejecutora de las órdenes de aprehensión dictadas por los Jueces de Distrito, por ser el titular de la institución del Ministerio Público de la Federación y en virtud de que, de conformidad con los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha institución, presidida por el procurador, es la encargada de la persecución de los delitos, para lo cual tiene bajo su mando a la Policía Judicial Federal, de donde se sigue que dicho procurador está facultado para cumplimentar la ejecución de las órdenes de aprehensión solicitadas por la autoridad judicial, siendo dicha ejecución realizada a través de la Policía Judicial Federal; lo que se traduce en una ejecución material del cuerpo policiaco y jurídica del titular del Ministerio Público de la Federación, máxime que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República encomienda a la mencionada policía la ejecución de las órdenes de aprehensión, pero actuando siempre bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público de la Federación.

---

[328] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, enero de 1998 Tesis: 1a./J. 49/97 Página: 107 Materia: Penal, Constitucional; Precedentes: Contradicción de tesis 27/97. Entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 15 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Juan Ramírez Díaz. Tesis de jurisprudencia 49/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

44. APELACIÓN IMPROCEDENTE. LO ES AQUELLA QUE INTERPONE EL INDICIADO EN CONTRA DEL ACUERDO QUE NEGÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, SI CONTRA ÉSTE SE LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE CUMPLIMENTÓ.[329]

La admisión del recurso de apelación requiere de dos presupuestos: procedencia, la que en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por ser el ordenamiento aplicable, se establece en el artículo 418, al precisar cuáles son las resoluciones apelables; y legitimación, ya que el precepto 415 exige que la segunda instancia sólo se abra a petición de parte legítima, reservándose tal derecho, en los términos del dispositivo 417, al Ministerio Público, al acusado y su defensor, así como al ofendido y sus legítimos representantes en lo que se refiere a la reparación del daño. No obstante lo anterior, en la específica hipótesis que se analiza, el recurso se interpone por el indiciado, en contra de quien se libró una orden de aprehensión que no se cumplimentó, para combatir la determinación del Juez de no tener por prescrita la acción penal, que previamente le había solicitado; y si bien la resolución es apelable de conformidad con la fracción III del artículo 418 invocado, no es de admitirse el recurso, por carecer de legitimación quien lo interpone, en virtud de que no se ha sujetado a la potestad jurisdiccional, sometiéndose a juicio, pues, por lo contrario, se encuentra evadido de la justicia, lo cual impide reconocerle la calidad de sujeto procesal y menos aún de parte, por surgir ésta hasta el momento en que es puesto a disposición del Juez como detenido, o presentado para que se le instruya la causa, y mientras esto no acontezca, se encuentra suspendido el procedimiento. Sin embargo, lo anterior no constituye óbice para que si estimase que la determinación judicial es violatoria de garantías en su contra, pueda impugnarla a través del juicio de amparo.

---

[329] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, noviembre de 1997 Tesis: 1a./J. 42/97 Página: 87 Materia: Penal; Precedentes: Contradicción de tesis 14/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito. 1 de octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ma. Edith Ramírez de Vidal. Tesis de jurisprudencia 42/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia.

45. ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.[330]

El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad.

46. ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA.[331]

La reforma al penúltimo párrafo de la fracción X, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se vincula a la fracción V del mismo precepto, consagra entre las garantías del inculpado, que se le reciban las pruebas que ofrezca durante la averiguación previa, en los

---

[330] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999 Tesis: 1a./J. 26/99 Página: 267 Materia: Penal Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 6/98. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. Tesis de jurisprudencia 26/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

[331] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999 Tesis: 1a./J. 29/99 Página: 296 Materia: Penal Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 86/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto del Cuarto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ma. Edith Ramírez de Vidal. Tesis de jurisprudencia 29/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros:

términos establecidos en la ley. El numeral 128, fracción III, inciso e), del Código Federal de Procedimientos Penales incluye ese mandamiento, pero circunscribiéndolo a que no se entorpezca la averiguación y se encuentren en el lugar de la averiguación las personas cuyos testimonios se ofrezcan, esto es, que no siempre se practican las probanzas; por ende, si de esto existe constancia indubitable, y se recurriere al juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, el Juez Federal habrá de recibir los elementos de convicción; en el caso contrario, si fueron ofrecidos y desahogados en la averiguación, o bien, habiendo tenido oportunidad de ofrecerlos, no lo hizo el indiciado, ya no se admitirán en el amparo. El criterio anterior surge a virtud de la actual redacción del invocado precepto constitucional, reformado mediante decreto de 2 de julio de 1996, que viene a modificar en parte los aspectos tomados en cuenta en la jurisprudencia 229 de la entonces Primera Sala, publicada en el Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 130, cuyo texto es: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA. Cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar, ante el Juez constitucional, las pruebas que estime pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, toda vez que no teniendo conocimiento el inculpado, en la generalidad de los casos, del procedimiento que se sigue en su contra, sino al ser detenido, no tiene oportunidad ni medios de defensa, si no es ante el Juez que conozca del juicio de garantías". En efecto, esta jurisprudencia correspondiente a la Quinta Época, parte del supuesto de que el indiciado no ha tenido oportunidad de defensa, sino hasta que comparece ante el Juez Federal, que ya no priva en la actualidad a virtud de la reforma de mérito, y constituye motivo suficiente para apartarse de la misma.

47. ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE 1999.[332]

La modificación del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia, que entró en vigor en la fecha señalada, pone de manifiesto

---

Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. NOTA: Esta tesis se aparta del criterio contenido en la jurisprudencia 229 de la anterior Primera Sala, publicada en el Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 130, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA".

[332] Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, diciembre de 1999; Tesis: I.2o.P. J/11; Página: 666; SEGUNDO TRIBU-

la existencia de una excepción orientada a que en los juicios de garantías se analicen las violaciones a la libertad personal relacionadas únicamente con los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se limite la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, al dictado de la sentencia de primera instancia, única hipótesis en la que se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; modificación que excluyó lo relativo a la orden de aprehensión regulada por el artículo 16 constitucional; por tanto, el auto de formal prisión sí da lugar a la improcedencia del amparo que con antelación se hubiera

---

NAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 674/99. Amancio Lagunas Flores. 31 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Federico Palacios Rojas, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Juan Manuel Flores Belmont. Amparo en revisión 598/99. Víctor Manuel Salinas Contreras. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Manuel Flores Belmont. Amparo en revisión 1002/99. Rafael Arredón Ramírez. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Manuel Flores Belmont. Amparo en revisión 1022/99. Rosa Luna Velázquez. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Pilar Vargas Codina, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada por ministerio de ley, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Rosa María Cervantes Mejía. Amparo en revisión 1094/99. Alejandro Salcedo Rodríguez. 15 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Manuel Flores Belmont.

Véase: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 890, tesis VI.P. J/1, de rubro: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (*DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999)" y Tomo X, octubre de 1999, página 1168, tesis II.2o.P. J/8, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL *DIARIO OFICIAL* DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE".

NOTA: Las tesis de rubros: "ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO)" y "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994", aparecen publicadas con los números P./J. 55/96 y P./J. 56/96 en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo IV, octubre de 1996, páginas 73 y 72, respectivamente.

hecho valer en contra de la orden de aprehensión, al existir cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del quejoso, ya que inicialmente la afectación a la libertad, era el motivo de la orden de aprehensión y en la actualidad es por la formal prisión decretada en contra del quejoso, lo que trae como consecuencia también la cesación de efectos del mandato de captura; por consiguiente la orden de aprehensión deja de tener vida jurídica al haber sido sustituida jurídica y procesalmente por el auto de plazo constitucional, lo que conlleva a la inaplicación, en este caso, de las jurisprudencias números 55/96 y 56/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO)" y "ORDEN DE APREHENSIÓN. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE FEBRERO DE 1994".

48. ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS ADMISIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA.[333]

La reforma al penúltimo párrafo de la fracción X, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se vincula a la fracción V del mismo precepto, consagra entre las garantías del inculpado, que se le reciban las pruebas que ofrezca durante la averiguación previa, en los términos establecidos en la ley. El numeral 128, fracción III, inciso e), del Código Federal de Procedimientos Penales incluye ese mandamiento, pero circunscribiéndolo a que no se entorpezca la averiguación y se encuentren

---

[333] Novena Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, mayo de 1999; Tesis: 1a./J. 29/99; Página: 296; Precedentes: Contradicción de tesis 86/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito y Cuarto del Cuarto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ma. Edith Ramírez de Vidal. Tesis de jurisprudencia 29/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

NOTA: Esta tesis se aparta del criterio contenido en la jurisprudencia 229 de la anterior Primera Sala, publicada en el Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 130, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA".

en el lugar de la averiguación las personas cuyos testimonios se ofrezcan, esto es, que no siempre se practican las probanzas; por ende, si de esto existe constancia indubitable, y se recurriere al juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, el Juez Federal habrá de recibir los elementos de convicción; en el caso contrario, si fueron ofrecidos y desahogados en la averiguación, o bien, habiendo tenido oportunidad de ofrecerlos, no lo hizo el indiciado, ya no se admitirán en el amparo. El criterio anterior surge a virtud de la actual redacción del invocado precepto constitucional, reformado mediante decreto de 2 de julio de 1996, que viene a modificar en parte los aspectos tomados en cuenta en la jurisprudencia 229 de la entonces Primera Sala, publicada en el Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 130, cuyo texto es: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS EN EL AMPARO RESPECTO DE LA. Cuando el amparo se promueve contra una orden de aprehensión, el quejoso puede presentar, ante el Juez constitucional, las pruebas que estime pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, aun cuando no las haya tenido a la vista la autoridad responsable, toda vez que no teniendo conocimiento el inculpado, en la generalidad de los casos, del procedimiento que se sigue en su contra, sino al ser detenido, no tiene oportunidad ni medios de defensa, si no es ante el Juez que conozca del juicio de garantías". En efecto, esta jurisprudencia correspondiente a la Quinta Época, parte del supuesto de que el indiciado no ha tenido oportunidad de defensa, sino hasta que comparece ante el Juez Federal, que ya no priva en la actualidad a virtud de la reforma de mérito, y constituye motivo suficiente para apartarse de la misma.

49. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN.[334]

La orden de reaprehensión y su ejecución, independientemente de que sean resultado de la conducta contumaz del inculpado a cumplir con las obligaciones contraídas con el Juez que le concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución, afectan su libertad personal e integridad corporal, y si

[334] Novena Época Instancia: Primera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, julio de 1997; Tesis: 1a./J. 27/97; Página: 81; Precedentes: Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 21 de mayo de 1997. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Tereso Ramos Hernández. Tesis de jurisprudencia 27/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

bien el artículo 303, fracción IV, del Código Penal del Estado de Veracruz, establece el recurso de apelación contra los acuerdos que revoquen la libertad provisional, no es necesario agotar ese medio de impugnación antes de acudir al amparo, porque como ese dispositivo admite la alzada sólo en el efecto devolutivo, no suspende la orden de recaptura, la cual puede ser ejecutada sin dar oportunidad a examinar su constitucionalidad. Por tanto, como esos actos restringen la libertad o pueden poner en peligro la integridad física del procesado, encuadran en los casos de excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, previsto en el último párrafo de la fracción XIII del numeral 73 de su ley reglamentaria, en concordancia con el artículo 20, fracción I, de la Carta Magna, por ser cuestiones afines a la garantía que consagra este precepto.

50. ORDEN DE APREHENSIÓN, NO CESAN SUS EFECTOS CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.[335]

En general, al menos desde la perspectiva del agraviado, los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de garantías en su perjuicio; por ende, para hablar de cesación de tales efectos, debe atenderse, necesariamente, a si la contravención alegada por el quejoso ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella. Es decir, debe constatarse si las cosas se han restablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, cuando se trata de actos positivos, o bien si la autoridad realizó la conducta que indebidamente omitió, en tratándose de actos negativos, pues sólo en esta medida podrá hablarse, válidamente, de que se está en presencia de la causal de improcedencia prevista en la

[335] Novena Época Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IV, septiembre de 1996; Tesis: XII.3o. J/1; Página: 527; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 5/95. Juventino Reyes Obeso. 24 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Bogarín Cortés. Secretario: Carlos Muñoz Estrada. Amparo en revisión 185/95. Ramón Falcón Ocampo. 3 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Jacinto Banda Martínez. Amparo en revisión 349/95. Irma Delia Lizárraga Guzmán. 2 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Bogarín Cortés. Secretario: Miguel Ángel Rodríguez Torres. Amparo en revisión 426/95. Diego Arístides Verdugo Zazueta. 8 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Castro Aguilar. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez. Amparo en revisión 59/96. Ricardo Heraclio Bernal Flores. (Recurrente: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal de Tepic, Nayarit). 14 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Castro Aguilar. Secretario: Jesús de Ávila Huerta.

fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así las cosas, si con motivo de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de garantías, se priva de la libertad al quejoso, o bien se le limita ésta, el hecho de que se haya dictado auto de formal prisión en su contra, en modo alguno significa que con motivo de ese nuevo estadio procesal hayan cesado los efectos del mandamiento de captura. Tal conclusión se traduce en una apreciación teórica, puesto que lo objetivamente cierto es que el auto de bien preso, en la medida en que no provoca que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de que se emitiera el citado mandamiento que se combate, tampoco puede producir la cesión de los efectos del acto reclamado. Desde otra perspectiva, resulta desafortunado que si, de acuerdo con la exposición de motivos del Decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el *Diario Oficial* de la Federación, la modificación hecha a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, tiene por objeto que se asegure que los derechos fundamentales tutelados por los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, queden protegidos, aun cuando hubiese cambiado la situación jurídica del quejoso, se acuda a un diverso motivo de improcedencia, que, en rigor, no es aplicable, para evadir el análisis del fondo de la cuestión, pues con tal proceder se frustra el espíritu de la reforma.

51. IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. INAPLICABILIDAD DE ESA CAUSAL EN CASOS DE RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL. (ORDEN DE APREHENSIÓN).[336]

Con la adición de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el lunes diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro y que entró en vigor el primero de febrero siguiente, se incluyó una excepción a la regla general originalmente establecida, lo

---

[336] Novena Época Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: III, junio de 1996; Tesis: X.1o. J/8; Página: 614; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Precedentes: Amparo en revisión 76/95. Carlos Alberto Wilson Gómez. (Recurrente: Juez Primero Penal de Primera Instancia de Cárdenas, Tabasco). 20 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar. Secretaria: María Dolores Olarte Ruvalcaba. Amparo en revisión 90/95. José Francisco Ramón Jiménez. 26 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Sergio Armando Martínez Vidal. Amparo en revisión 295/95. Humberto González Escobar. (Recurrente: Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz). 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Sergio Armando Martínez Vidal. Amparo en revisión 286/95. Aquiles Magaña García y otro. (Recurrente: Juez Segundo

que pone de manifiesto la idea del legislador de que en el juicio de garantías se analice en cualquier circunstancia la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquellos casos en los cuales se reclamen violaciones a la libertad personal en relación con los diversos 16, 19 o 20 de la Carta Magna, limitando la aplicación de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que opera por regla general en procedimientos penales, al dictado de la sentencia de primera instancia, en cuya única hipótesis se consideran irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas. Por tanto, si el acto reclamado en el juicio de amparo se hace consistir en la orden de aprehensión, y durante el trámite del mismo el inculpado se presenta ante el Juez instructor bajo los efectos de la suspensión, e independientemente de que se le dicte o no formal prisión en la causa penal correspondiente, no es legal advertir la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, por cesación de los efectos del acto reclamado, ya que con ese proceder se dejaría sin efecto la reforma sufrida por la fracción X del mismo precepto y Ley, ya que como quiera que sea, y desde otra perspectiva, se seguiría aplicando el criterio anterior contenido en la jurisprudencia 1113 que aparece publicada en las páginas 1788 y 1789 del Apéndice al *Semanario Judicial de la Federación* de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo rubro dice: "LIBERTAD PERSONAL. RESTRICCIÓN DE LA. (CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA)", que al referirse a la libertad personal asocia el cambio de la situación jurídica con la cesación de los efectos de la situación jurídica anterior, dejándose de estudiar la orden de aprehensión reclamada por sobreseerse el juicio de garantías, contraviniendo así la idea del legislador al adicionar esta última fracción, cuya finalidad es la de asegurar mediante el juicio de amparo, la efectiva y real reparación de las violaciones al artículo 16 constitucional que se hubieran cometido en la orden de aprehensión reclamada.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro). 16 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Sergio Armando Martínez Vidal. Amparo en revisión 329/95. Fernando Hernández Medina. (Recurrente: Juez Primero de Primera Instancia de Coatzacoalcos, Veracruz). 18 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Sergio Armando Martínez Vidal.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y está, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

VIII. Las garantías de inviolabilidad del domicilio, casos del ejercicio de las órdenes de cateo y las visitas domiciliarias

La inviolabilidad domiciliaria es un principio constitucional fundamental. En efecto, el artículo 16 dispone que nadie será molestado en su domicilio. En virtud del principio de legalidad hay dos excepciones: las órdenes de cateo y las visitas domiciliarias.

El artículo 16 es muy explícito, por lo que nos limitaremos a desglosarlo. Respecto de las órdenes de cateo, sólo se tiene previsto que sea la autoridad jurisdiccional la competente para emitirlas. A su vez, éstas deben expresar de manera precisa el sitio objeto de la inspección, o en su caso, la persona o personas que se busca aprehender y los objetos que se deben encontrarse. Tras la diligencia, la autoridad deberá levantar un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar y si hubiese la negativa expresa, los nombrará la autoridad. La visita domiciliaria se refiere a los actos administrativos. Se trata de el ejercicio de funciones de vigilancia, por ejemplo, inspeccionar si se cumnple con reglamentos de salubridad. Esas visitas se llevan a cabo sin necesidad de una autorización judicial y se puede exigir la exhibición de los documentos que sean necesarios. Por ejemplo, en una visita de índole fiscal, se inspeccionaría la contabilidad. Por lo demás, el artículo en comento, señala que la autoridad administrativa debe sujetarse a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos.

a) Selección de tesis y jurisprudencia sobre inviolabilidad del domicilio; órdenes de cateo

1. CATEO. ES VÁLIDO ORDENARLO COMO MEDIDA DE APREMIO EN UN PROCEDIMIENTO DE MATERIA CIVIL, SI ASÍ LO PREVÉ LA LEGISLACIÓN APLICABLE.[337]

> La orden de cateo que, conforme a las previsiones de la legislación aplicable, se emita en asuntos de materia civil, constituye un mecanismo ideado por el legislador para llevar a cabo una pronta administración de justicia, en tanto que facilita el cumplimiento de las determinaciones de las autoridades judiciales, ante la actitud omisa o rebelde de las partes en un procedimiento ju-

[337] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, abril de 1999 Tesis: P. XIX/99 Página: 33 Materia: Civil Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 1773/96. Armando Cornejo Zúñiga y coag. 21 de mayo de 1998. Mayoría de seis votos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juventino V. Castro y Castro, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Luis Ignacio Rosas González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de abril en curso, aprobó, con el número XIX/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve.

dicial. En consecuencia, el cateo, como medida de apremio, no corresponde exclusivamente al ámbito penal, ni tiene por qué sustentarse solamente en el artículo 16 constitucional, sino que puede ser ordenado bajo la tutela de los principios establecidos en el artículo 17 de la Carta Magna.

2. CATEO. EL ESTABLECIDO EN MATERIA CIVIL ENCUENTRA SUSTENTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL DIVERSO 16 DEL PROPIO ORDENAMIENTO (LEGISLACIONES CIVILES PROCESALES DE LOS ESTADOS DE MICHOACÁN Y COAHUILA).[338]

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la orden de cateo en materia civil, sólo constituye un mecanismo que ha ideado el legislador a efecto de llevar a cabo una pronta administración de justicia, ya que de ese modo se facilita el cumplimiento de las determinaciones de las autoridades judiciales, ante la actitud omisa o rebelde de las partes en un procedimiento judicial y que tal criterio es el que debe imperar, ya que de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, concretamente, cuando se previene que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, implica la posibilidad de regular los medios de apremio a fin de que los órganos jurisdiccionales puedan hacer cumplir sus determinaciones, incluso a través del cateo por orden escrita. Así, es válido sostener que, si bien tratándose del cateo autorizado por el artículo 132, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán y por el 253 del Procesal Civil del Estado de Coahuila, no corresponde a la materia penal sino, en todo caso, encuentra sustento constitucional en el mencionado artículo 17 debe tomarse en cuenta que el artículo 16 del propio ordenamiento no se constriñe a temas de materia penal, aunque ésta sea predominante, de ahí que puede establecerse en cualquier rama del Derecho; tanto es así, que las visitas domiciliarias que prevé el artículo 16 se rigen por las reglas del cateo. En tal virtud, válidamente puede afirmarse que la medida de apremio de cateo establecida en las legislaciones civiles

[338] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XVIII, julio de 2003 Tesis: P./J. 27/2003 Página: 14 Materia: Civil Jurisprudencia; Precedentes: Contradicción de tesis 22/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 24 de junio de 2003. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, con el número 27/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de julio de dos mil tres.

señaladas tiende, sin duda alguna, a garantizar la plena ejecución de una resolución dictada por un tribunal, cuya constitucionalidad deriva, precisamente, de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, pero sin que esa garantía riña con la garantía de inviolabilidad del domicilio y, por lo tanto, deje de satisfacer todos los requisitos que establece el artículo 16 constitucional.

3. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE CATEO.[339]

Es improcedente la concesión de la suspensión provisional, cuando el acto reclamado es la ejecución de una orden de cateo solicitada a la autoridad judicial por el Ministerio Público, en una actuación derivada de la integración de una averiguación, porque dicha averiguación no es susceptible de paralizarse a través de la medida suspensional, por no reunirse los extremos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que es notorio que la sociedad se encuentra interesada en que se investiguen los hechos delictuosos hasta su esclarecimiento para que, en su caso, se persigan a través del ejercicio de la acción penal, pues su comisión afecta a la estabilidad social y, de admitir lo contrario, se haría nugatoria la función constitucional del órgano persecutor de los delitos.

4. DEFENSOR. EL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL NO OBLIGA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NI AL MINISTERIO PÚBLICO A DESIGNARLO, AL MOMENTO DE EXPEDIR Y EJECUTAR, RESPECTIVAMENTE, UNA ORDEN DE CATEO.[340]

Del texto del artículo 20 constitucional no se infiere la obligación para la autoridad jurisdiccional que dicta una orden de cateo, de designar defensor que asista al posible infractor de la ley penal, porque es incuestionable que al practicarse la diligencia respectiva, el Ministerio Público inicia una inda-

---

[339] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, enero de 1998 Tesis: V.1o.26 P Página: 1181 Materia: Penal; Precedentes: Queja 12/97. Rigoberto Gaxiola García y otros. 11 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Domínguez Peregrina. Secretario: Gregorio Moisés Durán Álvarez.

[340] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, agosto de 1997 Tesis: XVII.2o.26 P Página: 701 Materia: Penal; Precedentes: Amparo directo 251/97. José Ramón Vázquez. 12 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

gatoria con la finalidad de investigar delitos y delincuentes y en ocasiones ni siquiera se tiene conocimiento del nombre del infractor, máxime que al ejecutarse una orden de cateo puede sorprenderse al activo en flagrante delito; por lo que en esas condiciones no existe razón alguna para que el juzgador o el Ministerio Público designen defensor al momento en que se obsequia una orden de cateo, pues aún no se ha iniciado el proceso contra persona determinada.

5. ORDEN DE CATEO. APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.[341]

Cuando en un juicio de amparo se demande exclusivamente la resolución a la orden de cateo y no su ejecución y consecuencias que podrían ser la detención del quejoso y su posterior procesamiento, no se surte la hipótesis normativa prevista por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se está en el caso de que se reclamaron actos que importen "ataques a la libertad personal", ya que, se insiste, sólo se reclamó la resolución a la orden de cateo y, por ende, no impugnó en el juicio constitucional su detención, ni el auto de formal prisión que se le dictó. En esa tesitura, sí resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, que prevé un término de quince días para la interposición de la demanda de garantías.

6. MEDIDAS DE APREMIO. SU NATURALEZA ES DISTINTA A LA ORDEN DE CATEO, POR LO QUE DEBE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN ADJETIVA CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DE APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO).[342]

Una orden de cateo no puede equipararse a la medida de apremio consistente en el rompimiento de cerraduras en lo estrictamente indispensable para practicar una diligencia de embargo, pues la naturaleza de ambas es distinta,

---

[341] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: IX, enero de 1999 Tesis: V.3o.2 K Página: 878 Materia: Común Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 235/98. Francisco Javier Sánchez Chaira. 3 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Carrillo Vera. Secretaria: Myrna C. Osuna Lizárraga.

[342] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, julio de 2000 Tesis: XV.1o.45 C Página: 789 Materia: Civil Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 817/99. Víctor Humberto López Trujillo. 15 de febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: Karla Gisel Martínez Martínez.

porque la primera se autoriza a petición de una autoridad investigadora, cuando se sospecha que en determinado domicilio se están efectuando actos ilícitos; y la segunda, en función de la resistencia a obedecer un mandato jurisdiccional, medida que se encuentra prevista en la fracción II del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio y que, además, puede modificarse o invalidarse a través del recurso de apelación previsto en el artículo 1341 del ordenamiento legal citado en segundo término; por lo que, previamente a acudir a la instancia constitucional, debe agotarse el recurso mencionado y de no hacerse deberá sobreseerse en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia, situación que no se actualiza tratándose de órdenes de cateo.

7. CATEO SIN ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE O SIN LOS REQUISITOS LEGALES. NULIFICA EL RESULTADO DEL MISMO Y DE LAS ACTUACIONES QUE DE ÉL EMANEN.[343]

Si la irrupción en el domicilio del quejoso se practicó sin observarse las exigencias establecidas en el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el texto de su reforma publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno, argumentando únicamente que éste les dio autorización para introducirse, localizando en el interior marihuana, así como diversas armas, por imperativo del precepto legal invocado, la diligencia así practicada carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar. Ello es así, ya que de acuerdo al Diario de Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se determinó que la reforma anteriormente aludida tuvo como propósito fundamental asegurar el imperio de las garantías individuales que en materia penal establece la Constitución en su artículo 16, al ir más allá en el artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, al establecer que si no se cumplen las formalidades que ahí se establecen, el cateo así realizado carecerá de todo valor probatorio; por ello, el resultado de tal operativo debe correr la misma suerte, y al carecer de eficacia convictiva, jurídicamente no es posible adminicularlo a las im-

---

[343] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIV, agosto de 2001 Tesis: XII.3o.4 P Página: 1210 Materia: Penal Tesis aislada; Precedentes: Amparo directo 592/99. 7 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra. Secretario: Fernando Sustaita Rojas. NOTA: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 82/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala.

putaciones hechas por los agentes aprehensores, al igual que el aseguramiento del enervante, armas y demás objetos, al provenir todo esto de un acto que conforme a la ley carece de todo valor probatorio; como una consecuencia necesaria de esto, debe concluirse que resultan totalmente inconducentes para justificar o, cuando menos, generar la presunción fundada, de que la marihuana, armas de fuego y demás objetos asegurados fueron encontrados en el domicilio del agraviado, así como que éste los mantenía dolosamente bajo su radio de acción y disponibilidad, pues en este sentido los medios probatorios en comento no aportan dato alguno. En ese orden de ideas, aun cuando pudiera existir confesión del inculpado, si de conformidad con los artículos 279 y 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que la misma pudiera adquirir valor probatorio pleno, debe adminicularse con otros medios de convicción que la robustezcan, ésta constituye un indicio aislado, ya que tanto el parte informativo antes aludido, como las imputaciones hechas en contra de los quejosos resultan ineficaces para acreditar, en términos de lo establecido por el ordinal 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, la existencia de los elementos del cuerpo de los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana, y acopio de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

8. DETENCIÓN SIN ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y DE CATEO. NO NULIFICA LA CONFESIÓN DEL INCULPADO.[344]

Aun admitiendo que el inculpado fue detenido sin orden de aprehensión emanada de autoridad competente, y que los agentes aprehensores se introdujeron a su domicilio sin orden de cateo, las violaciones que esa forma de actuar implican a disposiciones constitucionales no son reclamables en amparo directo, ni pueden serles atribuidas a las autoridades responsables de la sentencia o su ejecución, y tampoco tiene el alcance de anular la confesión de dicho inculpado ante la Policía Judicial si no existen datos que lleven a la certeza de que su declaración haya sido moral o físicamente coaccionada. No se desconoce que lamentablemente con demasiada frecuencia las auto-

[344] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 529; Página: 319; Precedentes: Octava Época: Amparo directo 355/87. Soledad García Alcalá. 2 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo directo 193/88. Emiliano Tacomol Ramiro. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Amparo directo 363/88. Esteban Rodríguez Martínez. 15 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 345/89. Rutilo Garrido Martínez. 30 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 248/89. Armando Montealegre Porras. 31 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.2o.J/35, *Gaceta*, número 22-24, pág. 261; *Semanario Judicial de la Federación*, tomo IV, Segunda Parte-2, pág. 615.

ridades investigadoras utilizan en las aprehensiones métodos reprobados por nuestra Carta Magna; pero en atención a la técnica del amparo directo, las más de las veces no compete a este tribunal analizar ese tipo de actos, debiendo concretarse a declarar que quedan a salvo los derechos del quejoso para ejercer las acciones relativas ante las autoridades correspondientes.

9. DETENCIÓN SIN ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y DE CATEO. NO NULIFICA LA CONFESIÓN DEL INCULPADO.[345]

Aun admitiendo que el inculpado fue detenido sin orden de aprehensión emanada de autoridad competente, y que los agentes aprehensores se introdujeron a su domicilio sin orden de cateo, las violaciones constitucionales que esa forma de actuar implican no son reclamables en amparo directo, ni pueden ser atribuidas a la autoridad responsable ordenadora y tampoco tienen el alcance de anular la confesión de dicho inculpado si no existen datos que lleven la certeza de que su declaración haya sido moral o físicamente coaccionada. Este tribunal no desconoce que lamentablemente con demasiada frecuencia las autoridades investigadoras utilizan en las aprehensiones métodos reprobados por nuestra Carta Magna; pero en atención a la técnica del amparo directo, las más de las veces no compete a este cuerpo colegiado analizar ese tipo de actos, debiendo concretarse a declarar que quedan a salvo los derechos del quejoso para ejercer las acciones relativas ante las autoridades correspondientes.

10. DETENCIÓN SIN ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y DE CATEO. NO NULIFICA LA CONFESIÓN DEL INCULPADO.[346]

Aun admitiendo que el inculpado fue detenido sin orden de aprehensión emanada de autoridad competente, y que los agentes aprehensores se intro-

---

[345] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 530; Página: 320; Precedentes: Octava Época: Amparo directo 268/88. José Virginio Ignacio Rojas. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 47/89. Jerónimo Aco Huerta. 18 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 449/89. José Roney Córdova Ara y otros. 24 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 334/91. Óscar Ricardo Garza Martínez y otros. 19 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 106/92. Cándido Román Sánchez. 10 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis VI.1o.J/84, *Gaceta*, número 65, pág. 51; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XI-mayo, pág. 226.

[346] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo II, Parte TCC; Tesis: 531; Página: 321; Precedentes: Octava Época: Amparo

dujeron a su domicilio sin orden de cateo, las violaciones que esa forma de actuar implican a disposiciones constitucionales no son reclamables en amparo directo, ni pueden serles atribuidas a las autoridades responsables de la sentencia o su ejecución, y tampoco tienen el alcance de anular la confesión de dicho inculpado ante la Policía Judicial Federal, si no existen datos que lleven la certeza de que su declaración haya sido moral o físicamente coaccionada. Este tribunal no desconoce que lamentablemente con demasiada frecuencia las autoridades investigadoras utilizan en las aprehensiones métodos reprobados por nuestra Carta Magna; pero en atención a la técnica del amparo directo, las más de las veces no compete a este tribunal analizar ese tipo de actos, debiendo concretarse a declarar que quedan a salvo los derechos del quejoso para ejercitar las acciones judiciales relativas ante las autoridades correspondientes.

11. EMBARGO PRECAUTORIO, LA SOLA MENCIÓN EN LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE CONTEMPLA ESA MEDIDA CONSTITUYE, PARA EFECTOS DEL AMPARO, UN ACTO DE APLICACIÓN DE DICHO NUMERAL.[347]

La cita del artículo 103 del Código Financiero del Distrito Federal, que previene el embargo precautorio en la orden de visita domiciliaria, basta para estimar, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que sí se aplicó al quejoso dicho precepto, pues es incontrovertible que toda orden de visita afecta a quien la recibe, en virtud de las facultades que se le confieren a la autoridad y de las obligaciones legales que, como consecuencia de ese

---

directo 268/91. Rubén Miranda Fimbres. 13 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 226/92. Pedro Torres Jorqueras. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 266/92. Rodolfo Espinoza Bernal. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 267/92. Gregorio Murrieta Hernández y otro. 12 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 289/92. Mateo Borja Hernández. 26 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/46, *Gaceta*, número 61, pág. 87; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XI-enero, pág. 128.

[347] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VII, febrero de 1998 Tesis: P. XI/98 Página: 44 Materia: Administrativa; Precedentes: Amparo en revisión 2742/96. DHL Internacional de México, S. A. de C. V. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número XI/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

ejercicio, se imponen al visitado; es decir, independientemente de cuál pueda ser el resultado de una visita, es innegable que su realización se sustenta en los preceptos legales que se invoquen en la orden correspondiente y, por ende, tal orden viene a ser el acto de aplicación del referido dispositivo legal, en perjuicio de la peticionaria, al facultar a los visitadores para que practiquen el embargo precautorio, aun cuando éste no se lleve a cabo en esa ocasión, dado que, en todo caso, la realización del embargo con posterioridad, constituirá un acto de ejecución de la orden de visita y la sola cita del numeral su acto de aplicación.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

b)Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre la Garantía de Seguridad Jurídica en materia de visitas domiciliarias

1. VISITA DOMICILIARIA. LOS ARTÍCULOS 196 Y 198 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE LA REGULAN, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[348]

> Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida por una autoridad administrativa debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive su causa, expresándose el nombre del visitado, el domicilio en que debe llevarse a cabo la visita y su objeto, levantándose, al concluirla, acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Ahora bien, el hecho de que los artículos 196 y 198 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, omitan algunas de las formalidades que debe revestir una visita de inspección, como la mención del nombre del visitado y que el acta que se levante se realice en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia, no implica una violación al citado precepto constitucional, ya que es suficiente la sola existencia de éste, para que los requisitos establecidos para las visitas domiciliarias que practique la autoridad administrativa subsistan por encima de la legislación ordinaria, aun cuando ésta guarde silencio acerca de su exigibilidad, pues ante la ausencia de requisitos en la norma específica, se encuentra el ordenamiento constitucional que sin excepción alguna consagra la garantía en favor de todos los gobernados, la cual debe ser respetada indefectiblemente por la autoridad administrativa cuando realice alguno de esos actos.

---

[348] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta,* Tomo: VI, diciembre de 1997 Tesis: P. CLXXIII/97 Página: 186 Materia: Constitucional, Administrativa; Precedentes: Amparo en revisión 1854/93. Jaime Elizondo Montemayor y coag. 23 de septiembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia; en ausencia de él hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretario: Antonio González García. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número CLXXIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

2. VISITAS DOMICILIARIAS. LA CLAUSURA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y SANCIÓN NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SI EL ACTO DE MOLESTIA CONSTA POR ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.[349]

> El artículo 16 constitucional, en el párrafo que establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han cumplido las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, contempla como garantía individual del gobernado, la inviolabilidad del domicilio y la de seguridad jurídica, que delimitan la facultad de la autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias, pero ello no implica que la autoridad administrativa no pueda practicarlas con el fin de vigilar y asegurarse de que se cumplan las leyes que regulan en general la actividad de los particulares, pues para esto último, basta que cumpla con lo que establece el primer párrafo del artículo 16, o sea, que el acto de molestia conste por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Además, al referirse a reglamentos "sanitarios y de policía", no se está limitando esa facultad a la aplicación de normas emanadas de la autoridad administrativa en uso de la facultad reglamentaria prevista en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que tengan por contenido aspectos relativos a la salud y al orden social, en un sentido meramente administrativo, sino que debe entenderse que se trata de cualquier norma jurídica que otorgue facultades a las autoridades administrativas para regular la conducta de los particulares y cerciorarse de que se ajusta a las normas de orden público aplicables, con la finalidad de prevenir que su actividad atente contra el orden público y el interés social. De ahí que aplicar y ejecutar el contenido de la ley en la esfera administrativa, es una función que está encomendada a la autoridad administrativa, pues incluso se trata de un deber que le impone la Constitución.

---

[349] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, mayo de 1997 Tesis: P. LXI/97 Página: 177 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo en revisión 1355/95. Inmobiliaria Rama, S. A. de C. V. 6 de enero de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Neófito López Ramos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintidós de abril en curso, aprobó, con el número LXI/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete.

3. VISITA DOMICILIARIA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA ELABORAR UNA RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA CONTABILIDAD ANTES DEL INICIO DE LA VISITA, CON EL PURO CITATORIO, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[350]

> En concordancia con el principio de que el respeto al domicilio de las personas constituye un derecho subjetivo elevado a la categoría de garantía individual, el artículo 16 constitucional establece que la orden para la práctica de visitas domiciliarias expedida por las autoridades administrativas para cerciorarse de que se han acatado, entre otras, las disposiciones fiscales, debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se funde y motive su causa, expresándose el nombre del visitado, el domicilio en que debe llevarse a cabo la visita y su objeto, levantándose, al concluirla, acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; por lo tanto, al disponer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación que, si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio, pudiendo, en ese momento, elaborar una relación de los sistemas, libros, registros y demás documentación que integre la contabilidad del visitado, transgrede lo establecido en el artículo 16 constitucional, al permitir a la autoridad administrativa empezar la visita sin cumplir con las formalidades prescritas en la citada disposición constitucional.

4. VISITA DOMICILIARIA. SI EN EL ACTA FINAL O DOCUMENTO QUE LOS VISITADORES LEVANTAN AL EFECTO, ADEMÁS DE DETERMINAR LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO, PROCEDEN A SANCIONAR AL GOBERNADO, EL JUICIO DE AMPARO QUE SE

---

[350] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, abril de 1997 Tesis: P. LVIII/97 Página: 17 Materia: Administrativa, Constitucional; Precedentes: Amparo directo en revisión 1823/95. Teresa Dana Kamaji. 9 de septiembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de abril en curso, aprobó, con el número LVIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a ocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

PROMUEVA EN CONTRA DEL PRECEPTO LEGAL QUE PREVE LA SANCIÓN APLICADA RESULTA PROCEDENTE.[351]

> De lo establecido en la tesis jurisprudencial número 16/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo III de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, correspondiente al mes de abril de 1996, página 170, cuyo rubro es: "VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUELLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCION FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION", se colige que el juicio de amparo promovido en contra de la citada acta final resultará, por lo regular, improcedente, debido a que aquélla no afecta, generalmente, interés jurídico alguno; sin embargo, si los visitadores que practican la diligencia respectiva, actuando más allá de su competencia, indebidamente determinan sancionar al sujeto fiscalizado sin limitarse a señalar que los hechos descubiertos pudieran ser constitutivos de alguna infracción administrativa y, por lo tanto, sancionables en los términos de los preceptos aplicables del Código Fiscal de la Federación, debe considerarse que tal proceder sí afecta el interés jurídico del impetrante de garantías y constituye un acto de aplicación del dispositivo legal que prevé la sanción impuesta en el acta referida.

5. VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.[352]

> El artículo 16 de la Constitución Federal no establece como requisito para la práctica de las visitas domiciliarias o de inspección, que previamente al

---

[351] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: V, febrero de 1997 Tesis: P. XXIII/97 Página: 193 Materia: Administrativa; Precedentes: Amparo en revisión 1587/94. Almacenes Tokio, S. A. de C. V. 26 de noviembre de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Homero Fernando Reed Ornelas. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXIII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete.

[352] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, marzo de 2000 Tesis: P./J. 15/2000 Página: 73 Materia: Constitucional,

inicio de la visita, los órganos de autoridad a quienes se encomiende su realización se cercioren de que la diligencia se lleve a cabo con el propietario, administrador o representante legal del visitado y, en el supuesto de que esto no ocurra, por ausencia de cualquiera de ellos, dejen citatorio para que las personas indicadas esperen con posterioridad a los visitadores; en estas condiciones, la circunstancia de que el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación prevea que dichas visitas pueden entenderse, además de con el propio visitado, administrador o representante legal, con el encargado o quien se encuentre al frente de la negociación, no resulta contraria a la Carta Magna, pues la ausencia del dueño o representante de la negociación no es causa que impida la realización de la visita.

6. VISITAS DOMICILIARIAS. SE PUEDEN ENTENDER CON QUIEN SE ENCUENTRE AL FRENTE DE LA NEGOCIACIÓN.[353]

El encargado o dependiente de una negociación o establecimiento pertenece al grupo de los llamados auxiliares de comercio que, en materia mercantil, representan de manera general, aunque limitada a las funciones que les

---

Administrativa Jurisprudencia; Precedentes: Amparo en revisión 2598/96. La Flor de México en Zacatecas, S. A. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. Amparo en revisión 3695/97. Almacenes Campanita, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 54/98. Promotora Cancún Rosa, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Amparo en revisión 320/98. Sáenz Internacional, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 571/98. Reef Explorer, S. A. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número 15/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

[353] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XI, marzo de 2000 Tesis: P./J. 16/2000 Página: 82 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia; Precedentes: Amparo en revisión 2598/96. La Flor de México en Zacatecas, S. A. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández. Amparo en revisión 3695/97. Almacenes Campanita, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 54/98. Promotora Cancún Rosa, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos.

sean propias, al propietario o titular del que dependen, como se desprende de lo establecido por el artículo 309, segundo párrafo, del Código de Comercio. Por tanto, para que las visitas domiciliarias practicadas por autoridades administrativas sean eficaces, satisfagan su objetivo y al propio tiempo cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, es suficiente que el legislador disponga que tales visitas se entiendan, no sólo con el propio visitado, con el administrador o con su representante legal sino también con el encargado o dependiente que se encuentre al frente de la negociación.

7. VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE FACULTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA PRACTICARLAS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[354]

El artículo 16 de la Constitución Federal señala que tratándose de las visitas domiciliarias, las autoridades administrativas podrán exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, lo que debe interpretarse en un sentido amplio, por-

---

Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Amparo en revisión 320/98. Sáenz Internacional, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 571/98. Reef Explorer, S. A. 18 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de febrero en curso, aprobó, con el número 16/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de febrero de dos mil.

[354] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, septiembre de 2000 Tesis: P. CXXVIII/2000 Página: 45 Materia: Constitucional, Administrativa Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 859/97. Inmobiliaria Grupo Metropolitano, S. A. de C. V. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia, hizo suyo el proyecto José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jesús Enrique Flores González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy cinco de septiembre en curso, aprobó, con el número CXXVIII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a cinco de septiembre de dos mil. NOTA: La tesis P. XCVI/95 citada, tiene como rubro: "COMPROBACIÓN FISCAL. NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL ESTABLECER DIVERSAS FORMAS DE REALIZARLA".

que de lo contrario todas las visitas de inspección tendrían que limitarse a la revisión de libros y papeles sin importar el motivo de la visita, contraviniendo dicha norma constitucional, en virtud de que ésta sólo exige que para comprobar que se ha cumplido con las disposiciones fiscales, se deben observar las leyes respectivas y las formalidades prescritas para los cateos, lo que significa que al remitir a esas leyes, autoriza que el legislador ordinario prevea las obligaciones fiscales y su comprobación de manera completa. Además, de conformidad con lo dispuesto en la tesis P. XCVI/95, visible en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 80, el hecho de que el Constituyente haya establecido un párrafo relativo a visitas domiciliarias, obedeció a que quiso dar una regla de protección especial al domicilio, entendiendo éste como una prolongación de la libertad individual, de tal forma que éste no pudiera violarse sino en los casos previstos por el propio precepto de la Carta Magna, es decir, para cateos o visitas domiciliarias, sin que ello implique que las facultades de comprobación fiscal no puedan llevarse a cabo en forma diversa, siempre y cuando se respeten las disposiciones que debe observar todo acto de autoridad a que alude el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal. En estas condiciones, debe concluirse que el hecho de que el artículo 71, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, faculte a las autoridades competentes a ordenar y practicar visitas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes o documentos, que estén relacionados con sus obligaciones fiscales, con la finalidad de determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases de su liquidación, cerciorarse del cumplimiento a las disposiciones que rigen la materia y comprobar infracciones a dichas disposiciones, no puede considerarse violatorio del precepto constitucional de referencia, en virtud de que del análisis integral del citado artículo 71, los bienes que pueden ser objeto de revisión en la práctica de una visita domiciliaria, son únicamente aquellos que se encuentren relacionados con obligaciones fiscales del contribuyente, contenidas en el propio código.

8. ACTAS FINALES DE VISITA DOMICILIARIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE, POR REGLA GENERAL, SU CONTENIDO NO SEA IMPUGNABLE ANTE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.[355]

De lo dispuesto por el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación se desprende que con el levantamiento de las actas finales de visita domicilia-

[355] Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XIII, junio de 2001 Tesis: P. X/2001 Página: 49 Materia: Constitucional,

ria se concluye esta última mas no así el procedimiento de fiscalización, toda vez que los visitadores no tienen atribución de liquidar y cobrar las contribuciones supuestamente omitidas, encontradas durante la visita, pues aun cuando sus observaciones pueden llegar a determinar la situación fiscal del visitado, precisando las obligaciones omitidas por éste, se requiere de una resolución en la que se determine el crédito fiscal, según se dispone en los artículos 144 y 145 del propio código tributario. De ello se sigue que, por regla general, el contenido de dichas actas no es impugnable ante una autoridad jurisdiccional, lo que no obstaculiza el derecho de los gobernados de acudir ante los órganos jurisdiccionales para que se les administre justicia y, por tanto, no transgrede el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, como se dijo, constituyen un simple asentamiento de hechos, los cuales por sí mismos no irrogan perjuicio al gobernado sino una vez que las autoridades fiscales correspondientes hayan emitido una resolución en la que se determine la existencia de un crédito fiscal, el afectado puede promover el juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde podrá hacer valer las manifestaciones de derecho que estime pertinentes y aportar los elementos probatorios conducentes.

9. ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. NO CONSTITUYE RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA. AMPARO IMPROCEDENTE.[356]

El acta que se levanta con motivo de una visita domiciliaria, contiene una relación de hechos respecto de determinada situación, que advierten los visitadores, quienes no son autoridades que puedan determinar, válidamente, la situación jurídica del particular, pues su función solamente consiste en cerciorarse, conforme a la facultad conferida en la orden de visita correspondiente, de la cual es consecuencia legal y directa, del cumplimiento a las obligaciones fiscales del particular, precisando en todo caso las infracciones que consideren haber encontrado en la visita practicada. De ahí que el jui-

---

Administrativa Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 129/99. Ángel Isidoro Rodríguez Sáez. 20 de febrero de 2001. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintiuno de mayo en curso, aprobó, con el número X/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiuno de mayo de dos mil uno.

[356] Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: X, noviembre de 1999 Tesis: 1a. XXVII/99 Página: 419 Materia: Administrativa Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 1837/98. David Pedro Ramos Barrón. 17 de febrero de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Cruz Hernández.

cio de garantías, sea improcedente y debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto por el numeral 73, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la citada ley, puesto que no se está en el caso de una resolución definitiva emitida por la autoridad fiscal en la que se determine la situación jurídica del auditado.

10. VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.[357]

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural, "...sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos" y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general como a las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular.

11. ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.[358]

De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federa-

---

[357] Séptima Época Instancia: Segunda Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo III, Parte SCJN; Tesis: 183; Página: 126; Precedentes: Séptima Época: Revisión fiscal 37/84. Regalos Encanto, S. A. 27 de marzo de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Revisión fiscal 18/84. Jorge Matuk Rady. 15 de abril de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Revisión fiscal 65/83. Leopoldo González Orejas. 18 de abril de 1985. Unanimidad de cuatro votos. Revisión fiscal 29/84. Pedro Espina Cruz. 25 de abril de 1985. Cinco votos. Revisión fiscal 76/84. Juan Ley Zazueta. 29 de abril de 1985. Unanimidad de cuatro votos.

[358] Octava Época Instancia: Segunda Sala; Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo III, Parte SCJN; Tesis: 509; Página: 367; Precedentes: Octava Época: Contradicción de tesis.

ción, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.

12. VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. MOTIVACION RESPECTO A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE.[359]

Una orden de visita domiciliaria no resulta constitucionalmente inmotivada por expresar que durante la diligencia respectiva, debe el visitado presentar los libros de contabilidad, registros y documentos, aun cuando no se precise en el texto del mandamiento cuáles son éstos, pues deben presentarse todos los que resulten conducentes, de acuerdo con el período que debe abarcar la visita.

Varios 40/90. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 19 de abril de 1993. Cinco votos. NOTA: Tesis 2a./J.7/93, *Gaceta*, número 68, pág. 13; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, tomo XII-agosto, pág. 41.

[359] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Apéndice de 1995; Parte: Tomo III, Parte TCC; Tesis: 972; Página: 761; Precedentes: Octava Época: Amparo en revisión 24/86. José Ramírez Tobías. 13 de marzo de 1986. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 166/86. Eduardo Alberto García Salinas. 8 de mayo de 1986. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 161/86. Industrias Químicas de México, S. A. 15 de mayo de 1986. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 278/86. Rafael Almendárez Velázquez. 14 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Amparo en revisión 68/89. José Carlos Mahbub Sarquís. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis IX.1o.J/1, *Gaceta*, número 22-24, pág. 279.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.

IX. Inviolabilidad de las comunicaciones privadas

De reciente incorporación, el artículo 16 constitucional tiene previsto que:

> Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
>
> Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
>
> La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
>
> La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.

> En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

En este orden de ideas, dejaremos que sea la propia doctrina jurisprudencial la que nos dé luces en la interpretación de tal disposición.

a) Selección de Tesis y Jurisprudencia sobre inviolabilidad de las comunicaciones privadas

1. COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR CORRESPONDIENTE.[360]

> El artículo 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comunicaciones privadas son inviolables; que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada; que dicha petición deberá ser por escrito, en la que se funden y motiven las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración; y que no se podrán otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. El párrafo décimo de dicho numeral señala que las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes, y que los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Ante ello,

---

[360] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, diciembre de 2000 Tesis: 2a. CLXI/2000 Página: 428 Materia: Constitucional Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 2/2000. Norma Angélica Medrano Saavedra. 11 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Elena Rosas López.

debe estimarse que fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución establecer como derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y, en contrapartida, la obligación exigible tanto a las autoridades como a los gobernados de respetar dicha prerrogativa, lo que da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada sin el consentimiento expreso e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en un ilícito constitucional; por ende, si dentro de un juicio civil, en cualquiera de sus especies, una de las partes ofrece como prueba la grabación de una comunicación privada que no fue obtenida legalmente, tal probanza debe estimarse contraria a derecho y, por tanto, no debe admitirse por el juzgador correspondiente, pues ello implicaría convalidar un hecho que en sí mismo es ilícito.

2. COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL.[361]

Del análisis de lo dispuesto en diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la misma contiene mandatos cuyos destinatarios no son las autoridades, sino que establece deberes a cargo de los gobernados, como sucede, entre otros casos, de lo dispuesto en sus artículos 2o., 4o. y 27, en los que la prohibición de la esclavitud, el deber de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, así como los límites a la propiedad privada, constituyen actos u omisiones que deben observar aquéllos, con independencia de que el mandato constitucional constituya una garantía exigible a las autoridades y que, por ende, dentro de su marco competencial éstas se encuentren vinculadas a su acatamiento. En tal virtud, al establecer el Poder Revisor de la Constitución, en el párrafo noveno del artículo 16 de la Constitución General de la República, que las "comunicaciones privadas son inviolables", resulta inconcuso que con ello estableció

[361] Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XII, diciembre de 2000 Tesis: 2a. CLX/2000 Página: 428 Materia: Constitucional Tesis aislada; Precedentes: Amparo en revisión 2/2000. Norma Angélica Medrano Saavedra. 11 de octubre del año 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Elena Rosas López.

como derecho fundamental el que ni la autoridad ni los gobernados pueden intervenir una comunicación, salvo en los casos y con las condiciones que respecto a las autoridades establece el propio numeral y, por tanto, la infracción de los gobernados a tal deber conlleva la comisión de un ilícito constitucional, con independencia de los efectos que provoque o del medio de defensa que se prevea para su resarcimiento, en términos de la legislación ordinaria correspondiente.

3. COMUNICACIONES PRIVADAS. LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL DE SUS GRABACIONES NO INFRINGE LA GARANTÍA DE SU INVIOLABILIDAD.[362]

Los artículos contenidos en el capítulo I, título primero "De las garantías individuales", de la Constitución Federal, protegen los derechos subjetivos del gobernado reconocidos por la ley frente a los actos de las autoridades; por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por los párrafos noveno y décimo del artículo 16 de nuestra Carta Magna, para que se actualice la hipótesis de una violación a la intervención de comunicaciones privadas, el acto mismo de la intervención de cualquier comunicación privada necesariamente debe provenir de una autoridad y nunca de un particular, siempre que no se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor; de manera que como en la especie se trata de materia civil y, especialmente, no existió ningún acto de autoridad federal mediante el cual se interviniera la comunicación telefónica sostenida entre el quejoso y la cónyuge del tercero perjudicado recurrente, sino que tal intervención se llevó a cabo por este último mediante la grabación realizada en el teléfono instalado en su domicilio, es decir, en su propia línea telefónica, con el aparato comúnmente llamado contestadora o grabadora de recados, no es cierto que la admisión de la prueba documental de audiocintas y su inspección judicial que ofreció el referido recurrente, así como su recepción y reproducción material, infrinja en perjuicio del quejoso la garantía relativa a la inviolabilidad de las conversaciones privadas que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal.

---

[362] Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: VI, diciembre de 1997 Tesis: I.5o.C.9 K Página: 656 Materia: Común; Precedentes: Amparo en revisión 3191/97. Esteban Gonzalo Arias Pérez. 23 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretaria: María Guadalupe Gama Casas.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.

X. La suspensión de garantías constitucionales y la seguridad jurídica

La Constitución tiene previsto que las garantías pueden ser suspendidas en razón de determinadas circunstancias de gravedad nacional. Empero esto no atenta al valor de seguridad jurídica, ya que la suspensión de garantías debe cubrir determinados requisitos establecidos en la propia constitución. En el artículo primero de la Ley Fundamental señala: "Artículo 1o. En los Esta-

dos Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". Los casos y condiciones se desglosan en el artículo 29:

> Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.[363]

En este orden de ideas, Efraín Polo Bernal explica los casos y condiciones para la operatividad de una suspensión de garantías constitucionales:

---

[363] Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo en el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el Territorio nacional; así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

> Las causas que la originan, están determinadas por el propio orden jurídico-constitucional, ante el riesgo que representan al Estado de Derecho y a la existencia regular y ordinaria del mismo, de la sociedad y del Estado. De aquí la necesidad de aplicar reglas distintas y excepcionales a esa situación. La norma transcrita, entonces, indica las causas por las que se pueden llegar a suspender las garantías constitucionales. Ellas son en: a) Los casos de invasión, b) perturbación grave de la paz pública, o c) cualesquier otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto.[364]

La seguridad jurídica no se atenta si se interpreta correctamente el artículo 29, Ignacio Burgoa concluye que:

> La interpretación restrictiva del artículo 49 constitucional en lo que concierne al otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar, se corrobora por las ideas sustentadas en la exposición de motivos de la adición que en el año de 1838 se introdujo al mencionado precepto por iniciativa del Presidente Cárdenas, adición que consistió en declarar enfáticamente que fuera de los casos previstos en el artículo 29 no podrían concederse tales facultades... En conclusión, suponer que fuera de los casos previstos en los artículos 29 y 131, párrafo segundo, constitucionales, el Congreso de la Unión pudiese delegar sus facultades, o poderes legislativos al Presidente de la República o a cualquier otra autoridad, significaría admitir la posibilidad de que constante y reiteradamente se quebrante la Ley Fundamental, con menoscabo y desprecio del principio de supremacía constitucional consagrado en su artículo 133, al considerar que a los órganos legisladores fuese dable alterar caprichosamente su órbita de facultades y proyectarla hacia el Ejecutivo en alguna, en varias o en todas las materias legislables, propiciándose con ello el tremendo absurdo en Derecho Constitucional de que un órgano creado por la Constitución pudiese válidamente desconocer la fuente misma de su existencia y de su actividad.[365]

a) Selección de la Doctrina Jurisprudencial en torno a la Suspensión de Garantías Constitucionales

1. EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE

---

[364] E. Polo Bernal, *op. cit.*, 1993, p. 52.

[365] Ignacio Burgoa, *Las garantías individuales*, p. 226.

A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUELLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A DECRETARLA.[366]

> El artículo 89, fracción VI de la Constitución faculta al presidente de la República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior del país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto —previstos por el artículo 29 constitucional— se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características, que de no enfrentarse de inmediato sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto constitucional, o por algún otro motivo, se prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado.

2. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, DECRETO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1945 QUE LEVANTÓ LA. NO HAY CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA NI QUEDARON CONSUMADAS LAS DISPOSICIONES ANTERIORES DEL EJECUTIVO, EN MATERIA, POR LA EXPEDICIÓN DE AQUÉL.[367]

> El hecho de que el Decreto de veintiocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco diga en su artículo 4o. “Se ratifican y declaran vigentes las

---

[366] Instancia: Pleno; Novena Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: III, marzo de 1996; Tesis: P. XXVIII/96; Página: 435; Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de marzo en curso, aprobó, con el número XXVIII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a once de marzo de mil novecientos noventa y seis.

[367] Instancia: Pleno; Séptima Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: 68 Primera Parte; Página: 50; Precedentes: Amparo en revisión 1921/50. All America

disposiciones dictadas por el Ejecutivo durante el período de emergencia en materia hacendaria" no significa que todas las disposiciones anteriores a esa fecha dictadas por el Presidente de la República en tal materia se hayan consumado en forma irreparable o hayan sufrido un cambio de situación jurídica para efectos del sobreseimiento; al contrario, precisamente, todas las disposiciones dictadas por el Ejecutivo en materia hacendaria continuarán vigentes a virtud del Decreto, lo que implica que, lejos de producirse un cambio de situación o quedar consumados sin remedio los actos, continúa la situación anterior, y si se reclaman todas las disposiciones del Ejecutivo anteriores al Decreto de veintiocho de septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco y además se impugna éste, es claro, que no hay cambio de situación ni consumación irreparable de los actos.

3. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, FACULTADES DEL EJECUTIVO DURANTE LAS.[368]

Es falso el criterio en el sentido de considerar que el Presidente de la República careció de facultades para dictar disposiciones en materia hacendaria durante el período de suspensión de garantías, ya que el H. Congreso de la Unión no se las concedió para ese aspecto, y resulta insostenible por las siguientes razones. El decreto de 1o. de junio de 1942 que aprobó la suspensión de garantías, facultó en su artículo 4o., al Ejecutivo para imponer en los distintos ramos de la Administración todas las modificaciones que fueron indispensables para la eficaz defensa del Territorio Nacional, de su soberanía y dignidad para el mantenimiento de sus instituciones fundamentales; y en su artículo 5o., lo facultó también para legislar en los distintos ramos de la administración, con sujeción a lo preceptuado en el artículo precedente. Ahora bien, si el artículo 4o. de referencia, faculto al Ejecutivo para realizar modificaciones en la administración, estaba implícita la facultad de expedir las leyes relativas cuando solamente por la Ley pudieran hacerse tales modificaciones, pues de no ser así, hubiera sido ineficaz la facultad reformatoria. En tales condiciones, si el Ejecutivo quedo facultado para legislar en los distintos ramos de la administración, en las cuales quedo comprendido el hacendario, y, por otra parte la creación de nuevos impuestos o la elevación de la tasa de los ya existentes, resulta que el tributo creado por

---

Cables and Radio Inc. 20 de agosto de 1974. Unanimidad de 16 votos. Ponente: Ernesto Solís López.

[368] Instancia: Pleno; Sexta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIV, Primera Parte; Página: 126; Precedentes: Amparo en revisión 8788/50. "Apolinar Vázquez", S. de C., y coags. 26 de agosto de 1958. Unanimidad de 15 votos. Ponente: José Castro Estrada.

el Ejecutivo y sus diversas reformas son constitucionales. Por iguales razones, es injustificada la impugnación que se haga de la Ley sobre Contribuciones Económicas a la Defensa Nacional y Finiquito de la misma, cuando el único motivo que se alega es la incompetencia del Presidente de la República para expedirla.

4. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, CREACIÓN DE IMPUESTOS CON MOTIVO DE LA.[369]

Si el Decreto de 1o. de junio de 1942, que aprobó la suspensión de garantías, en su artículo 4o. faculta al Ejecutivo para realizar modificaciones en la Administración, está en ello imbíbita la facultad de expedir las leyes relativas, cuando solamente por ley podrían hacerse tales modificaciones; y al disponer en su artículo 5o. la autorización para legislar en los distintos ramos, debe entenderse no circunscrita está facultad a la reforma de los ramos de la Administración, sino limitada a la necesidad de la eficaz defensa del territorio y de su soberanía y dignidad y mantenimiento de las instituciones, puesto que éstas son las condiciones impuestas en el artículo 4o. en consecuencia, si el Ejecutivo quedó facultado para legislar en los distintos ramos de la Administración, entre los cuales está comprendido el hacendario, y por otra parte, la creación de nuevos impuestos o la elevación de la tasa de los ya existentes, es necesaria en todo Estado de guerra, a fin de aumentar los ingresos y satisfacer los gastos públicos aumentados considerablemente por razón de ese Estado, no puede considerarse inconstitucional, por falta de competencia del Ejecutivo para dictarlo, el tributo creado con esos fines y sus diversas reformas. Por iguales razones resulta injustificada la impugnación que se hace en contra de la Ley sobre Contribución Económica a la Defensa Nacional y Finiquito de la misma, en cuanto en esa impugnación se sostiene la incompetencia del Presidente de la República para expedirla.

5. SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS, LEVANTAMIENTO DE LA.[370]

Aunque el Decreto de 28 de septiembre de 1945 no fue firmado por el Secretario de Hacienda, esta omisión, que pudo influir en su validez, se subsa-

---

[369] Instancia: Segunda Sala; Sexta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: V, Tercera Parte; Página: 200; Precedentes: Amparo en revisión 638/49. Agustín Bouvet y coags. 14 de noviembre de 1957. 5 votos. Ponente: Franco Carreño. Sostiene la misma tesis: Amparo en revisión 3728/48. Rodolfo Villarreal y coags. 14 de noviembre de 1955. 5 votos. Ponente: Franco Carreño.

[370] Instancia: Segunda Sala; Sexta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: V, Tercera Parte; Página: 210; Precedentes: Amparo en revisión 638/49. Agustín

nó con el Decreto de 28 de diciembre del mismo año, y por lo mismo, al quedar debidamente refrendado, adquirió plena vigencia.

6. COMPETENCIA EN MATERIA PENAL, TRATÁNDOSE DE PROCESOS PENDIENTES, AL LEVANTARSE LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS. (LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA).[371]

En la fracción I del artículo 11 del Decreto que restableció las garantías constitucionales en el país, no se hizo salvedad ninguna en cuanto a que las autoridades federales sólo seguirían conociendo de los procesos que hubieren iniciado conforme a las leyes de emergencia, sino que los términos en que está concebida la disposición relativa, abarcan una generalidad completa de hechos al indicar que las averiguaciones previas y los procesos pendientes, se seguirían tramitando por los jueces federales, debiéndose interpretar por consiguiente, tal disposición, en cuanto a que comprende todas las averiguaciones previas y los procesos en trámite que, por cualquiera circunstancia de hecho, no hubiera llegado aún al conocimiento directo de los jueces de Distrito.

7. LEGISLACIÓN DE EMERGENCIA APLICACIÓN DE LA, DESPUÉS DE LEVANTADA LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS.[372]

El artículo 11 del Decreto que levantó la suspensión de garantías, decretada el primero de junio de mil novecientos cuarenta y dos, establece que no obstante lo dispuesto en el artículo 2o., se observarán, respecto de los delitos cometidos durante el estado de suspensión de garantías y bajo la vigencia de la legislación de emergencia, entre otras prescripciones, las siguientes: "las averiguaciones previas y los procesos pendientes se seguirán tramitando por la autoridad a quienes dio competencia aquella legislación"; lo que significa que la ley, en forma expresa, determina que continúe conociendo del proceso la autoridad federal, sin que en la especie se pueda afirmar que dicho artículo es inconstitucional, porque haya vuelto al país el orden

---

Bouvet y coags. 14 de noviembre de 1957. 5 votos. Ponente: Franco Carreño. Sostiene la misma tesis: Amparo en revisión 2324/48. "Importadora Nacional", S. A. y coags. 14 de noviembre de 1957. 5 votos. Ponente: Franco Carreño.

[371] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: CI; Página: 1605; Precedentes: Tomo CI, Pág. 1605. Zúñiga Angulo Salvador. 16 de agosto de 1949. Doce votos.

[372] Instancia: Pleno; Quinta Época; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XCIII; Página: 326; Precedentes: Tomo XCIII, Pág. 326. Competencia 153/45, Of. Mayor de Acuerdos. Maya José y coags. 8 de julio de 1947. Mayoría de 14 votos.

constitucional, ya que mientras no se establezca y decida por la suprema corte una controversia al respecto, no se puede hacer tal declaración en forma apegada a la Ley Fundamental de la República.

8. AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. SI YA SE RESOLVIÓ EL FONDO DEL ASUNTO EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS, LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD YA NO PUEDE PLANTEARSE EN UN NUEVO AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA").[373]

En la jurisprudencia que se interrumpe se establece la posibilidad de admitir un nuevo amparo directo por la parte que habiendo perdido la cuestión de personalidad, gana en cuanto al fondo, pese a que su contraparte obtuvo el amparo en contra de la sentencia definitiva; criterio que este Tribunal Pleno no puede seguir sosteniendo, porque es contrario al texto expreso del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo y a los criterios que reiteradamente ha sustentado esta Suprema Corte, en el sentido de que en contra de los actos de ejecución de una sentencia de amparo es improcedente la acción constitucional. En efecto, si la autoridad responsable dicta una sentencia, laudo o resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la improcedencia del nuevo juicio de garantías se surte porque la causa prevista en la fracción II del invocado artículo 73 no distingue en cuanto a la naturaleza de la violación de garantías que se pretenda plantear en contra de una reso-

---

[373] Instancia: Pleno; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; Parte: IV, noviembre de 1996; Tesis: P. CXXXV/96; Página: 69; Precedentes: Amparo en revisión 6/95. G.S. Comunicaciones, S. A. de C. V. y otros. 6 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Neófito López Ramos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticuatro de octubre en curso, aprobó, con el número CXXXV/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis. NOTA: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número J/P. 6/91de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VIII, agosto de 1991, pág. 5.

lución dictada en ejecución de una sentencia de amparo. Esto es así, tomando en consideración que la causa de improcedencia de que se trata tiene su razón de ser en que la sentencia de amparo, con la calidad de cosa juzgada, que ha resuelto sobre la constitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, en cuanto al fondo de la controversia, crea un derecho en favor de una de las partes, por ser la verdad legal; de modo tal que admitir la procedencia de un nuevo juicio de amparo vulneraría el principio de cosa juzgada, aunque se aduzca que se trata de violaciones al procedimiento anteriores a ese acto, que no habían podido plantearse porque solamente producían efectos intraprocesales, y que el perjuicio se actualizaría con el dictado de una sentencia desfavorable, pues esta razón en realidad revela que hay actos dentro de juicio que por incidir en un acto procesal que pueda tener por consecuencia poner fin al juicio, debe resolverse como cuestión previa al dictado de una resolución que decida el fondo de la controversia. Luego, si la violación que incide en un presupuesto procesal como el de personalidad, ya no puede ser motivo de estudio en un segundo juicio de garantías, para no dejar en estado de indefensión a la parte interesada y, respetar la garantía constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, debe admitirse, en esos casos, la procedencia del juicio de amparo indirecto. Con ello, se dará seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el proceso y se evitará la tramitación de juicios que implicarían pérdida de tiempo, desperdicio de recursos económicos y causación de molestias innecesarias; el análisis constitucional de las resoluciones que decidan sobre un acto de esa naturaleza cumplirá con la exigencia de una pronta administración de justicia, pues aun cuando el vicio que se atribuya al acto no exista, esta misma cuestión, saneada, ya no será motivo de estudio en el juicio de amparo directo que la parte interesada llegara a promover para el caso de que la sentencia definitiva le fuese desfavorable.

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por

un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

EPÍLOGO

En este trabajo, cuya naturaleza es fundamentalmente recopilatoria, es difícil llegar a establecer un apartado de conclusiones. Empero, toda vez que se ha llevado a cabo un breve estudio en torno a la naturaleza de la jurisprudencia como fuente formal del derecho positivo mexicano, y por ende, se ha hecho una reflexión en torno a la evolución doctrinal jurisprudencial, sí se ha planteado una hipótesis, y tras el itinerario recorrido, en consecuencia, se pueden llegar a establecer algunas conclusiones, que frente a un fenómeno dinámico (la generación de jurisprudencia), aquéllas serán necesariamente parciales. Los cánones de toda investigación académica son muy claros al establecer que las conclusiones son, precisamente, la aportación original de un estudio relativamente riguroso. Sin embargo, la naturaleza de este trabajo da cierto margen de libertad para actuar más allá de tales reglas. Y es que, el *quid* del presente itinerario consiste en observar una evolución en la doctrina judicial decantada en los precedentes tanto de tesis aisladas, como las sólidas tesis jurisprudenciales. Si por un lado, el lector podrá consultar fuentes jurisprudenciales para su tarea de defensa de los derechos humanos —y por ende de las garantías individuales—, también podrá contar con elementos para aproximarse a las aportaciones doctrinales emanadas del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el lector podrá internarse en la medida de lo posible al ejercicio del *arbitrium* judicial en torno a la interpretación del contenido de la parte dogmática constitucional. Por consiguiente, el mejor ejemplo para exponer la evolución de la doctrina jurisprudencial en torno a la defensa de las garantías constitucionales, en específico (en este tomo) de seguridad jurídica, nos serviremos de la garantía de legalidad jurisdiccional contenida en el párrafo final del artículo 14. El texto en comento establece: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”.

Como puede verse, en el mismo artículo constitucional se ha formulado una garantía completamente distinta a la exacta aplicación en materia penal. En principio, el texto se refiere a las sentencias del orden civil, y en tal materia, al juez no le es permitido desconocer de una causa ante él presentada, no obstante el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley.[1] Por consiguiente, su resolución debe sujetarse a las reglas establecidas en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional.

Éste es el terreno en el que el *arbitrium* judicial se puede desplegar. Aquí se puede recurrir a las diferentes teorías de argumentación jurídica ya retóricas, discursivas o dialécticas, lo cual implicará un "argumentación abierta" frente al rígido estilo "dogmático-conceptual". Esto no sólo coadyuva a la actividad jurisdiccional, sino que la enriquece.[2] Es decir, lo que se pretende es encontrar la manera de hacer más eficaces los contenidos normativos, y, además, de contar con mayores elementos de juicio para contrarrestar los efectos negativos de un texto, o bien, para evitar a toda costa el *non liquet*, del juzgador, so pretexto de tales lagunas, silencio u oscuridad de la ley. La tarea del juzgador y del jurista en general, en este orden de ideas, consiste en la integración de la norma positiva, acudiendo a los principios generales y en consecuencia poder solucionar el caso más allá de una manera estrictamente legalista-dogmática, y por ende limitada. Respecto del procedimiento de integración, Rodolfo Luis Vigo explica:

> Hemos dicho que en la medida en que hablemos de insuficiencia de la ley, aparecerá como procedimiento integrador o explicitador la costumbre jurídica, y de contarse con ella, la norma individual judicial surgirá de los principios generales del derecho y "de la justicia social", integradores del ordenamiento jurídico vigente. Quizá sorprenda este último agregado en la redacción propuesta. En realidad, si hubiésemos sido consecuentes con nuestra posición hubiese bastado decir principios generales del derecho, ya que en éstos incluimos los principios teleológicos o metapositivos, o sea la justicia y la seguridad jurídica. Pero la razón de incluir los "principios de la justicia so-

[1] Así lo establece el artículo 18 del Código Civil Federal vigente: "Artículo 18. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia". El mismo ordenamiento ha recogido las reglas del párrafo final del artículo 14 constitucional en el artículo 19: "Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de la ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho".

[2] Valentín Petev, *Metodología y ciencia jurídica en el umbral del siglo XXI*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 59-60.

> cial", o que podríamos haber denominado simplemente "bien común", es que no queremos incurrir en lo mismo que hemos criticado, a saber, el personalismo en la fórmula propuesta. Asimismo, con el agregado en cuestión, destacamos un aspecto que en los tiempos que corren nos parece fundamental, cual es la justicia social, pues ésta constituye el fin mismo del Estado, el objeto de la prudencia política y, si bien abarca la justicia propia del mundo jurídico, no se limita exclusivamente a ella. En efecto, para que el orden social sea justo no basta que el derecho positivo lo sea, sino que es necesario que los otros aspectos de la realidad social, como el económico, el político, el cultural, etcétera, también sean ordenados y conducidos con justicia.[3]

Ahora bien, ¿cuáles son esos principios generales a los que hace referencia el artículo 14 constitucional? Ovalle Favela hace un elenco de los mismos:

> Entre los más conocidos principios generales del Derecho que orienta nuestro ordenamiento, podemos mencionar los siguientes:
>
> 1. El principio de *contradicción* o del contradictorio, que impone al juzgador el deber de resolver las promociones que le formule cualquiera de las partes, oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la oportunidad para que las exprese (*audiatur et altera pars*); este principio sustenta y está implícito precisamente en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional;
>
> 2. la *igualdad* de las personas ante la ley y de las partes en el proceso, que orienta y deriva del artículo 13 constitucional;
>
> 3. a nadie se le puede sancionar dos veces por el mismo hecho (*non bis in idem*), que prevé el artículo 23 sólo para la materia penal, pero que es un principio general aplicable en cualquier rama del Derecho;
>
> 4. las obligaciones asumidas deben ser respetadas (*pacta sunt servanda*);
>
> 5. primero en el tiempo, preferido en el Derecho (*prior tempore, potior*);
>
> 6. nadie puede transmitir más derechos que los que tiene (*nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet*);
>
> 7. la ley posterior deroga a la anterior (*lex posterior derogat generali*);
>
> 8. una ley especial deroga una ley general (*lex especialis derogat generali*);
>
> 9. las excepciones a una regla deben ser interpretadas en forma estricta (*exceptio est strictissimae interpretationis*);

---

[3] Rodolfo Luis Vigo, *Integración de la Ley, Artículo 16 del Código Civil*. Buenos Aires, Astrea, 1978, p. 196. Cabe señalar que el Dr. Vigo es Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe y catedrático de Filosofía del Derecho.

10. nadie puede ser juez en causa propia (*Nemo esse iudex in sua causa potest*); y
11. el principio de la buena fe.[4]

Es un elenco que no lo abarca todo, los principios generales del derecho o *regulae iuris* son aforismos jurídicos que se han ido forjando a través de la experiencia casuística.[5] Así las cosas, en el Digesto, libro 50, título XVII, párrafo primero, podemos encontrar la siguiente explicación:

> Es regla la que describe brevemente cómo es una cosa. No que el derecho derive de la regla, sino que ésta se abstrae del derecho existente. Así, pues, mediante la regla se transmite una breve descripción de las cosas y, como dice Sabino, es a modo de resumen que, si falla en algo, resulta inútil.[6]

Con lo anterior, podemos dar el siguiente paso. El empleo de los principios generales del derecho han sido materia de la interpretación judicial. Y en ello se ha notado una interesante evolución. Comencemos con la siguiente tesis, de la quinta época, intitulada: "PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO":[7] "No es necesario acudir a los principios generales del derecho para fundar una sentencia, cuando ésta se funda en la ley".

Como puede verse en tan escueto sumario, el papel de los principios generales es supletorio, excepcional, concediéndole a la ley una primacía de carácter dogmático. En síntesis, la ley debe ser suficiente fundamento. A su vez, en la misma época, los principios generales del derecho sólo son interpretados como aquellos contenidos en el derecho positivo. Así se puede

---

[4] LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión / Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, t. III. Comentario de José Ovalle Favela. México, Miguel Ángel Porrúa, 2000, p. 110.

[5] Al respecto se sugieren las siguientes recopilaciones de *Regulae Iuris*: L. de Mauri, *Regulae Juris, Collectio locupletísima ad textus summa diligenta exacta cui adiecta est, Editio XI Emendatur*. Milán, Uilrico Editore, 1984, 268 pp.; José Luis Soberanes Fernández, *Los principios generales del derecho en México. Un ensayo histórico*. México, Miguel Ángel Porrúa, 1999, 85 pp.

[6] *Regula est, quae rem quae est breviter enarrat. non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait sabinus, quasi causae coniectio est, quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum. Dig.50.17.1o.*; *Paulus 16 ad plaut*.

[7] Quinta Época Instancia: Tercera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: LXII; Página: 2742; Precedentes: Amparo civil directo 2708/35. Tapia Genoveva. 25 de noviembre de 1939. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

inferir de la tesis rubricada como: PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO, NO PUEDEN APLICARSE COMO TALES, LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, A CONTROVERSIAS SUSCITADAS EN DISTINTA ENTIDAD FEDERATIVA:[8]

> Si en la ley civil de un Estado, se establece que cuando no se pueda decidir una controversia judicial ni por el texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá resolverse conforme a los principios generales de derecho, no hay razón para aplicar, como tales principios, los preceptos del Código Civil del Distrito Federal, pues éstos nunca pueden ser aplicables en las controversias que se susciten en distinta entidad federativa.

Sólo para no dejarlo en el tintero, el juzgador también ha deslindado los ámbitos locales del federal. Esto se concreta en que los principios generales si bien tienen por continente al Código Civil Federal, no son invocables en la problemática civil local. Lo importante aquí es que prevalece el criterio dogmático. Este criterio fue el predominante en la Sexta época, al grado tal de considerar los *regulae iuris* como una fuente de jerarquía inferior, empero, la siguiente tesis aporta un criterio crucial: si bien es cierto que se trata de una fuente de inferior jerarquía, son una fuente formal del derecho:[9]

> No puede justificarse la actitud del titular de una unidad burocrática que, cuando considere que un empleado ha incurrido en alguna de las causas que justifiquen la terminación de su nombramiento, lo suspenda sin autorización sindical, aun cuando a la postre se reconozca su derecho para despedirlo, sin que pueda invocarse en apoyo de aquella justificación el principio general de derecho de que el que puede lo más puede lo menos, porque conforme al artículo 8o. del mencionado Estatuto, las relaciones de los titulares y sus trabajadores se rigen, en primer lugar, por las leyes especiales y por el propio Estatuto, después, por la Ley Federal del Trabajo y, en su defecto, por la costumbre, las leyes de orden común, los principios generales de derecho

[8] Quinta Época Instancia: Tercera Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XCVIII; Página: 125; Precedentes: Amparo civil directo 7945/45. Cedi Stelios. 4 de octubre de 1948. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

[9] RUBRO: TRABAJADORES DEL ESTADO. PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO COMO SUPLETORIOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN; Sexta Época Instancia: Cuarta Sala; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: XIII, Quinta Parte; Página: 245; Precedentes: Amparo directo 2080/57. Secretario del Trabajo y Previsión Social. 10 de julio de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Arturo Martínez Adame.

> y la equidad, siendo obvio que si el Estatuto contiene normas aplicables al caso, ellas son las que lo rigen y no los principios generales de derecho que constituyen una fuente de inferior jerarquía.

Es en la Octava Época que se da un salto cualitativo. La siguiente tesis, emanada de un Tribunal Colegiado de Circuito, tuvo por ponente a Genaro Góngora Pimentel:

> PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. SU FUNCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.[10]
>
> Tradicionalmente se ha considerado en el Sistema Jurídico Mexicano que los jueces para la decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento están sujetos a la observancia no sólo del derecho positivo-legal, sino también de los dogmas generales que conforman y dan coherencia a todo el ordenamiento jurídico, que se conocen como principios generales del derecho según la expresión recogida por el constituyente en el artículo 14 de la Carta Fundamental. La operancia de estos principios en toda su extensión —para algunos como fuente de la cual abreva todas las prescripciones legales, para otros como su orientación a fin— no se ha entendido restringida a los asuntos de orden civil tal y como podría desprenderse de una interpretación estricta del artículo constitucional invocado, sino que aun sin positivización para otros órdenes de negocios, es frecuentemente admitida en la medida en que se les estima como la formulación más general de los valores ínsitos en la concepción actual del derecho. Su función desde luego no se agota en la tarea de integración de los vacíos legales; alcanza sobre todo a la labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho, de allí que los tribunales estén facultados y, en muchos casos, obligados a dictar sus determinaciones teniendo presente, además de la expresión de la ley siempre limitada por su propia generalidad y abstracción, los postulados de los principios generales del derecho, pues éstos son la manifestación auténtica, prístina, de las aspiraciones de la justicia de una comunidad.

Esta tesis genera dos aportaciones de gran relevancia. En principio, los *regulae iuris* no sólo operan en el ámbito civil, sino también en el administrativo —el cual es derecho público. A su vez, se cuestiona y con razón al

---

[10] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: III Segunda Parte-2; Página: 573; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Queja 93/89. Federico López Pacheco. 27 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

dogmatismo legalista. A partir de esta resolución, el criterio doctrinal judicial ha valorado con mayor profundidad el papel de los *regulae iuris*, como puede verse en la siguiente tesis (en la que también fue ponente Genaro Góngora Pimentel):

> ACUERDOS DICTADOS POR LOS JUECES DE AMPARO. PUEDEN FUNDARSE EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO A FALTA DE PRECEPTO LEGAL APLICABLE.[11]
>
> De conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de amparo, toda resolución judicial debe contener, entre otros requisitos, el fundamento legal en que se apoye; sin embargo, a falta del precepto legal aplicable, el juzgador de amparo puede invocar como fundamento de su determinación los principios generales de derecho, como son el de economía procesal y celeridad en el procedimiento, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 14 constitucional, no debiéndose entender su aplicación restringida a la materia civil, sino a todos los asuntos jurídicos, por estimarse tales principios como la formulación más genérica de los valores establecidos por nuestro actual orden jurídico y cuya función no sólo es el llenar las lagunas de la ley, sino coadyuvar en la interpretación y aplicación del derecho.

La Novena Época siguió con tal criterio, apuntalando el carácter de fuente formal de los principios generales del derecho en el ambiente del derecho público. Así lo demuestra la siguiente tesis:

> PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. PARA DETERMINAR SU INICIO DEBE ESTARSE A LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO ANTE LA FALTA DE PREVENCIÓN EN LAS LEYES APLICABLES.[12]
>
> Ante la falta de prevención en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en el Código Federal de Procedimientos Penales, que

---

[11] Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*; Parte: VIII-noviembre; Página: 145; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Queja 243/91. Rodolfo Santa Ana Pérez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

[12] Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Tomo: XV, marzo de 2002 Tesis: I.4o.A.340 A Pági-

> le es supletorio, respecto a cuándo inicia el procedimiento administrativo disciplinario, es necesario acudir a los principios generales del derecho administrativo, en atención a lo dispuesto en el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Federal, que tiene su *ratio legis* en el principio de que los tribunales no pueden dejar de resolver las controversias que se les plantean, vinculado con lo previsto en el artículo 17 de la propia Constitución.

Se desprende, por consiguiente, que además de su carácter como fuente formal del derecho, los *regulae iuris* obedecen a la virtud de la equidad, que supera a la estricta justicia. En este sentido, aquellos son garantes de la seguridad jurídica evitando el estado de indefensión, de conformidad con las garantías —y valga la redundancia— jurisdiccionales consagradas en el artículo 17 constitucional.

Es importante destacar este proceso. En la jurisprudencia contemporánea, el Poder Judicial de la Federación ha abandonado los criterios dogmáticos, para darle lugar a un mayor juego del *arbitrium* judicial. Ha aumentado su actuación de conformidad con el saber jurídico propio de juristas, de iurisprudentes en el sentido clásico:

> Reducir, pues, la función del juez a la de mero funcionario revestido de potestad es destruir el núcleo mismo de la función judicial: dictar sentencia según su "saber" y entender. Que eventualmente el juez emplee instrumentos propios de la *potestas* no debe desfigurarnos la esencia de su misión primordial.[13]

En efecto, la conclusión parcial, a la que aquí se llega, es de felices términos. La tendencia doctrinal en la jurisprudencia judicial que interpreta la Constitución general y protege los derechos fundamentales, ha roto con la jurisprudencia conceptual-dogmática, recobrando la *ratio iuris*, y por ende, abriendo una esperanzadora puerta no sólo para la justicia, sino también para la equidad.

---

na: 1428 Materia: Administrativa Tesis aislada. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Precedentes: Revisión fiscal 1603/2001. Contralor Interno en la Procuraduría General de la República y otra autoridad. 12 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

[13] Rafael Domingo Oslé, *Teoría de la "Auctoritas"*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1987, pp. 142-143.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel y Alfonso Pérez Fonseca, *Derecho jurisprudencial mexicano*. México, Porrúa, 1998.

ALEXY, Robert, *Derecho y razón práctica*. México, Fontamara, 1998. (Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política)

ALEXY, Robert, *Teoría del discurso y derechos humanos.* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001. (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho)

ARANGO, Rodolfo, *¿Hay respuestas correctas en el derecho?* [Colombia], Ediciones Uniades, 1999.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José, *Algunos documentos para el estudio del origen del juicio de amparo 1812-1861*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José, *Primera ley de amparo de 1861*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José, *Proceso de discusión de la ley de amparo de 1869*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987.

BARRAGÁN BARRAGÁN, José, *Proceso de discusión de la ley de amparo de 1882*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993.

BARREDA SOLÓRZANO, Luis de la, *Justicia penal y derechos humanos*. México, Porrúa, 1998.

BAZDRESCH, Luis, *Garantías constitucionales, curso introductorio actualizado*. México, Trillas, 1996.

BERMAN, Harold J., *La formación de la tradición jurídica de Occidente.* México, FCE, 1996.

BETEGÓN, Jerónimo *et al.*, *Lecciones de teoría del derecho*. Madrid, McGraw-Hill, 1997.

BOUCHET-SAULNIER, Francoise, *Diccionario práctico de derecho humanitario*. Trad. de Amalia Navarro. Barcelona, Península, 2001.

BRAVO LIRA, Bernardino *et al.*, "Las dos caras de la codificación en Europa continental e Iberoamérica: legal y judicial", en *Homenaje a Ismael Sánchez Bella*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *Garantías individuales*. México, Porrúa, 1999.

CANNATA, Carlo Augusto, *Historia de la ciencia jurídica europea*. Trad. de Laura Gutiérrez-Masson. Madrid, Tecnos, 1996.

CARBONELL, Miguel, coord., *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada*, t. I. México, Porrúa / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.

CARBONELL, Miguel, coord., *Diccionario de derecho constitucional*. México, Porrúa / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.

CARMONA TINOCO, Jorge Ulises, *La interpretación judicial constitucional.* México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas / CNDH, 1996.

CARPINTERO BENÍTEZ, Francisco, *Historia del derecho natural. Un ensayo*. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999. (Serie Doctrina Jurídica, 7)

CARPIZO, Jorge, *Derechos humanos y* Ombudsman. México, Porrúa, 1998.

CASTRO, Juventino, *Garantías y amparo*. México, Porrúa, 1998.

CLAVERO, Bartolomé, *Introducción histórica del derecho.* Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 1992.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada. México, Porrúa, 2002. 4 tt.

CRUZ AGÜERO, Leopoldo de la, *Breve teoría y práctica del juicio de amparo en materia penal*. México, Porrúa, 1998.

CRUZ PRADOS, Alfredo, "Derechos humanos. ¿Qué derechos? ¿De qué humanos?", en *Nuestro Tiempo*, núm. 525. Madrid, marzo de 1998, pp. 102-115.

DE BUEN, Demófilo, *Introducción al estudio del derecho civil*. México, Porrúa, 1977.

DE LA BORBOLLA, Juan, *A fuerza de ser hombres los derechos humanos: ¿tabú de la cultura política?* México, MiNos, 1999.

DE MAURI, L., *Regulae Juris, Collectio locupletísima ad textus summa diligenta exacta cui adiecta est, Editio XI Emendatur*. Milán, Uilrico Editore, 1984.

Diccionario jurídico mexicano. México, Porrúa, 1998. 4 tt.

DOMINGO OSLÉ, Rafael, *Teoría de la "Auctoritas"*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1987.

DUMONT, Jean, *El amanecer de los derechos del hombre. La Controversia de Valladolid*. Madrid, Ediciones Encuentro, 1997.

El juicio de amparo. México, Porrúa, 1999.
FERRAJOLI, Luigi, *Derechos y garantías. La ley del más débil*. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Madrid, Trotta, 2001.
FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Madrid, Trotta, 2001.
FERRAJOLI, Luigi, *El garantismo y la filosofía del derecho*. Trad. de Gerardo Pisarello, Alexei Julio Estrada y José Manuel Díaz Martín. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001 (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho)
FERREYRA, Raúl Gustavo, *Notas sobre derecho constitucional y garantías*. Buenos Aires, EDIAR, 2001.
FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, *Derecho constitucional mexicano y comparado*. México, Porrúa, 2001.
FLEINER, Thomas, *Derechos humanos*. Trad. de José Hurtado Pozo. [Colombia], Temis, 1999.
FRAGA, Gabino, *Derecho administrativo*. México, Porrúa, 1998.
FRISCH PHILIPP, Walter y José Arturo González Quintanilla, *Metodología jurídica en jurisprudencia y legislación*. México, Porrúa, 2000.
GALEANA, Patricia, comp., *México y sus Constituciones*. México, Archivo General de la Nación / FCE, 1998.
GIMENO PRESA, María Concepción, *Interpretación y derecho*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001 (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho)
GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, "El amparo en negocios judiciales. El caso de Miguel Vega", en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, X-1998. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
GONZÁLEZ R. ARNAIZ, Graciano, coord., *Derechos humanos: la condición humana en la sociedad tecnológica*. Madrid, Tecnos, 1999.
HECK, Philipp, *El problema de la creación del derecho*. Trad. de Manuel Entenza. Granada, Comares, 1999.
HERRENDORF, Daniel E., *El poder de los jueces. Cómo piensan los jueces que piensan*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998.
HERVADA, Javier y José M. Zumaquero, *Textos internacionales de derechos humanos*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1992, t. I.
JIMÉNEZ CAMPO, Javier, *Derechos fundamentales. Concepto y garantías*. Madrid, Trotta, 1999.
La Constitución mexicana de 1917. México, Porrúa, 1998.
La Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la Federación. México, FCE / Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1992. 6 tt.

LARA ESPINOZA, Saúl, *Las garantías individuales en materia penal*. México, Porrúa, 1998.

LARA PONTE, Rodolfo, *Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano*. México, Porrúa, 1998.

Leyes fundamentales de México (1808-2002). México, Porrúa, 2002.

LOEWENSTEIN, Karl, *Teoría de la Constitución*. Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona, Ariel, 1982.

LVII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión / UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, t. I-XV. México, Miguel Ángel Porrúa, 2000.

MADRAZO, Jorge, *Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano*. México, FCE, 1993.

MANCILLA OVANDO, Jorge Alberto, *Las garantías individuales y su aplicación en el proceso penal*. México, Porrúa, 2000.

MARSHALL, John, *A life in law*. [Canadá], Leonard Baker, 1974.

MASSINI CORREAS, Carlos I., *Los derechos humanos en el pensamiento actual*. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1994.

MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio, *El derecho social*. México, Porrúa, 1963.

MOUCHET, Carlos y Ricardo Zorraquin Becu, *Introducción al derecho*. Buenos Aires, Perrot, 1987.

NAVARRETE M., Tarcisio, Salvador Abascal C. y Alejandro Laborie E., *Los derechos humanos al alcance de todos*. México, Diana, 2000.

NIKKEN, P., *La protección internacional de los derechos humanos, su desarrollo progresivo*. Madrid, Instituto Interamericano de Derechos Humanos / Civitas, 1987.

PADILLA, José R., *Garantías individuales*. México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 2000.

PADILLA, José R., *Sinopsis de amparo*. México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1990.

PALOMAR DE MIGUEL, Juan, *Diccionario para juristas*. México, Porrúa, 2000, tt. I y II.

PERELMAN, Ch. y L. Olbrechts-Tyteca, *Tratado de la argumentación. La nueva retórica*. Trad. de Julia Sevilla Muñoz. Madrid, Gredos, 1989. (Biblioteca Románica Hispánica)

PETEV, Valentin, *Metodología y ciencia jurídica en el umbral del siglo XXI*. Trad. de Luis Villar Borda. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001.

PHILLIPP, Walter Frisch y José Arturo González Quintanilla, *Metodología jurídica en jurisprudencia y legislación*. México, Porrúa, 1997.

PLATAS PACHECO, María del Carmen, *Filosofía del derecho. Analogía de proporcionalidad*. México, Porrúa, 2003.
POLO BERNAL, Efraín, *Breviario de garantías constitucionales*. México, Porrúa, 1993.
PONCE DE LEÓN ARMENTA, Luis, *La nueva jurisprudencia agraria sistematizada*. México, Porrúa, 1998.
QUINTANA ROLDÁN, Carlos F. y Norma D. Sabido Peniche, *Derechos humanos*. México, Porrúa, 2001.
RABASA, Emilio, *El artículo 14 y el juicio constitucional*. México, Porrúa, 1993.
RADBRUCH, Gustav, *Introducción a la filosofía del derecho*. México, FCE, 2000.
ROJAS CABALLERO, Ariel, *Las garantías individuales en México, su interpretación por el Poder Judicial de la Federación*. México, Porrúa, 2002.
SÁNCHEZ AGESTA, Luis, *Curso de derecho constitucional comparado*. Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1988.
SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, *Historia del derecho mexicano*. México, Porrúa, 2002.
SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, *Los principios generales del derecho en México. Un ensayo histórico.* México, Miguel Ángel Porrúa, 1999.
SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y Faustino José Martínez Martínez, *Apuntes para la historia del juicio de amparo*. México, Porrúa, 2002.
TENA RAMÍREZ, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*. México, Porrúa, 1998.
The Declaration of Independence and the Constitution of the United States of America. Washington, D. C., Cato Institute, 2000.
TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *Manual de historia del derecho español*. Madrid, Tecnos, 1992.
TRUYOL Y SERRA, Antonio, *Los derechos humanos*. Madrid, Tecnos, 2000.
VIGO, Rodolfo L., *Integración de la ley. Artículo 16 del Código Civil*. Buenos Aires, Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1978.
VIÑAS, Antonio, *Teoría del derecho y experiencia jurídica romana*. Madrid, Dykinson, 2002.
WITT, Elder, *La Suprema Corte de Justicia y los derechos individuales*. Trad. de Ana Isabel Stellino. México, Gernika, 1995.
ZAMORA-PIERCE, Jesús, *Garantías y proceso penal*. México, Porrúa, 1998.
ZUMAQUERO, José Manuel, *Legislación básica. Textos de derechos humanos*. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1998.

La seguridad jurídica. Los derechos humanos en la jurisprudencia mexicana, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se terminó de imprimir en octubre de 2004 en los talleres de OFFSET UNIVERSAL, S. A., Calle 2, núm. 113, Col. Granjas San Antonio, C. P. 09070, México, D. F. El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones de esta Comisión Nacional. El tiraje consta de 2,000 ejemplares.